

Katu Arkonada / Paula Klachko

DESDE ABAJO DESDE ARRIBA

De la resistencia a los gobiernos populares:
escenarios y horizontes del cambio de época
en América Latina

DESDE ABAJO DESDE ARRIBA

De la resistencia a los gobiernos populares: escenarios
y horizontes del cambio de época en América Latina

Katu Arkonada
Paula Klachko



Ediciones MippCI

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

Final Bulevar Panteón, Torre Ministerio

del Poder Popular para la Comunicación y la Información

Parroquia Altamira, Caracas-Venezuela.

Teléfonos (0212) 8028314-8028315

Rif: G-20003090-9

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Jorge Rodríguez

Vicepresidente para la Comunicación y Cultura.

Estela Ríos

Viceministra de Planificación Comunicacional

Gustavo Cedeño

Director General de Contenidos

Kelvin Malavé

Dirección de Publicaciones

Edición y corrección de textos

Michel Bonnefoy, María Ron, Ángela Villarreal, Ricardo Romero,

María Aguilar

Diseño y diagramación

Luis Manuel Alfonso

Depósito Legal: 978-980-227-355-3

ISBN: DC2017002653

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela

Julio, 2018

A los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez,
arquitectos del cambio de época en Nuestramérica

A Atilio Borón, referente, compañero y amigo,
además de impulsor de este proyecto conjunto

A todas las mujeres y hombres que luchan por la liberación nacional y social de sus pueblos bajo un horizonte anticapitalista, antiimperialista y anticolonial

Prólogo

Este libro de Katu Arkonada y Paula Klachko aborda de manera sistemática el examen de un fascinante período de la historia reciente de América Latina. Más concretamente, el que se abre con el ascenso de Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela y que con sus avatares –tensiones, avances y estancamientos- llega hasta nuestros días. Se trata, por lo tanto, de una obra que examina la génesis y el desenvolvimiento de un proceso histórico único, tal y como se manifestara en cada uno de los países que protagonizan el llamado “ciclo progresista” latinoamericano. Un trabajo de síntesis, necesario y por eso largamente esperado por la militancia social y por el mundo académico, y en la cual se anudan los rasgos definitorios de este luminoso fragmento de nuestra historia. Etapa en la cual se produjeron significativas transformaciones en el mapa sociopolítico regional y en las relaciones entre nuestros países y la metrópolis imperial. Pasar revista a esa experiencia, analizar sus logros y sus asignaturas pendientes; evaluar sus aciertos –que pese a sus limitaciones en todos los casos exceden sus errores- y diagnosticar sus insuficiencias; en una palabra, examinar los legados de este cambio epocal es la tarea que se han propuesto los autores en este trabajo, todo ello precedido por una sugerente revisión de la teoría marxista de la reforma y la revolución.

Es a causa de esto que me siento honrado con la invitación que me hicieran para escribir unas pocas líneas a modo de breve introducción a la edición argentina de su obra. Como es bien sabido, América Latina se asomó al amanecer del siglo XXI grávida de

esperanzas. La década de los noventas había sido el paroxismo de la distopía neoliberal; en ese momento se llegó a la apoteosis de la pesadilla del mercado total. Carlos Saúl Menem, Alberto Fujimori, Ricardo Lagos, Fernando Henrique Cardoso, Carlos Salinas de Gortari y otros radicalizaron la obra destructiva del neoliberalismo, barrieron los últimos vestigios del desarrollismo y culminaron la restructuración regresiva del capitalismo que las dictaduras de los años setenta habían dejada inconclusa, salvo en el caso de Chile. En el plano internacional, la desintegración de la Unión Soviética parecía anunciar, con el estrépito de su derrumbe, el advenimiento de lo que algunos intelectuales y estrategas del imperio se abalanzaron en llamar el nuevo siglo americano, torpe ilusión que apenas si llegaría a durar una década. Mientras, las izquierdas europeas desertaban de sus viejas convicciones, y con falso realismo –en realidad vergonzosa capitulación- socialdemócratas y comunistas por igual abrazaban con fervor el nuevo credo. Los primeros daban nacimiento a una fórmula engañosa, “la tercera vía” que más pronto que tarde demostró ser apenas un burdo maquillaje de la primera; los eurocomunistas, por su parte, en un acto de suprema ignominia abandonaban armas y pertrechos y se convertían en fanáticos del neoliberalismo. El triunfo de esta ideología fue exaltado en el publicitado texto de Francis Fukuyama en donde no sólo se entonaban los himnos fúnebres a la supuesta desaparición de las ideologías sino que, en un alarde de ignorancia, también se anunciaría nada menos que el fin de la historia. Su veredicto era inapelable: en los noventas se había plasmado el triunfo de los mercados y la democracia liberal, conclusión esta que sólo pudo adquirir una cierta credibilidad debido a la profunda crisis “intelectual y moral” del capitalismo contemporáneo, misma que hacía digerible para vastos sectores de las sociedades contemporáneas disparates que, en otro momento histórico, hubieran provocado generalizado sarcasmo.

Pero los hechos son porfiados y la dialéctica de la historia siguió su curso, indiferente a las manipulaciones discursivas urdididas por la industria cultural del capitalismo. Ya había signos premonitorios de que, al menos en Latinoamérica, el paraíso neoliberal estaba mucho más lejos de lo que se pensaba. En 1989 el Caracazo había lanzado una dura advertencia: los pueblos no asistirían de brazos cruzados a su propio holocausto, y lucharían con todas sus fuerzas. El 1º de enero de 1994 los indígenas zapatistas se alzarían en armas en contra del siniestro proyecto de convertir a México -¡nada menos que a México!- en un protectorado norteamericano. Ambos acontecimientos: el Caracazo y la insurrección zapatista reverberaron como un relámpago por toda la dilatada geografía latinoamericana. En los años siguientes, el voluminoso ejército industrial de reserva creado por las políticas neoliberales de Menem en la Argentina reinventó una forma de lucha novedosa en lo organizativo, basista por su activismo y de arraigo territorial: los cortes de rutas y calles para protestar contra la opresión y explotación de que era objeto. Simultáneamente, en Brasil avanzaba la organización de las masas campesinas con el MST, los "sin tierra", al paso que el ascenso de las luchas de clase precipitaba el crecimiento del sindicalismo obrero y aceleraba la germinación de lo que, poco tiempo después, florecería como el mayor partido de masas de la izquierda en todo Occidente: el PT. Un hecho fundamental daba pie y nutría a todas estas movilizaciones: el ejemplo de Cuba, la resistencia de esa isla transitando con enormes sacrificios -pero sin ceder un palmo- el aciago "período especial" desatado con la caída de la URSS y haciendo caso omiso a los cantos de sirena de los publicistas del capital -cuyo principal tenor fue Felipe González, ya convertido en un vulgar lobista de las empresas españolas- que le recomendaban a Fidel arriar definitivamente las banderas del socialismo y la revolución y "amigarse" con los mercados globales. Si la

URSS no pudo, decían estos bien recompensados traficantes de ideología, ¿cómo podría una pequeña isla del Caribe mantener en alto aquellas venerables banderas? No hace falta demasiado esfuerzo para imaginar el impacto devastador que una eventual capitulación de Cuba habría tenido sobre los movimientos sociales y las fuerzas políticas de izquierda en América Latina. Sus luchas se habrían convertido en estúpidos disparos a la luna una vez demostrada la inviabilidad de la construcción del socialismo en la isla y, por extensión, en toda la región. Por eso nuestra deuda con la Revolución Cubana es inmensa: al haber mantenido encendida la llama de la revolución en medio del vendaval del neoliberalismo prestó un servicio de inigualable importancia a la causa de la emancipación de nuestros pueblos. Otra hubiera sido la historia si Cuba sucumbía. Pero la isla de Martí se mantuvo firme y supo capear el temporal.

Por eso, al concluir la década de los noventas toda América Latina se puso en tensión, como si hubiera recibido una descarga eléctrica que diseminó por doquier la resistencia ante el holocausto neoliberal. Las guerras del agua y del gas convueven al mundo andino, sobre todo Bolivia y Perú; las masas campesinas indígenas se movilizan y acosan a los gobiernos de la región. Los obreros y empleados toman las calles y las rutas, y la resistencia se extiende y profundiza en casi todos los países. En Diciembre de 1998 Hugo Chávez Frías conquista la presidencia de Venezuela y, un mes después, jura sobre la "moribunda Constitución" de la Cuarta República dar inicio a un proyecto transformador que más pronto que tarde se extendería por Nuestramérica. Bolívar, olvidado por casi dos siglos, reaparece con la fuerza de una tromba de la mano de Chávez, y se reinstala la extraordinaria actualidad de sus ideas y de su proyecto emancipador. Junto a Bolívar reinicia su larga marcha por toda la región el legado martiano, cultivado con singular esmero por la Revolución Cubana.

Fiel reflejo del nuevo clima ideológico y político imperante en Latinoamérica, a comienzos de siglo nace en Porto Alegre el Foro Social Mundial, una iniciativa extraordinaria que en pocos años se transformó en un punto de referencia para los movimientos sociales de los cinco continentes y colocó a Latinoamérica en la vanguardia de las luchas antiimperialistas a nivel global. Fue en ese marco que Chávez Frías le presta un servicio enorme a la revolución reinstalando el tema de la actualidad del socialismo en el discurso público latinoamericano. En Diciembre del 2001 se produciría el catastrófico derrumbe del experimento neoliberal en la Argentina, arrojando a las calles y plazas del país a multitudes en protesta contra la "eutanasia de los pobres" que estaba llevando a la práctica el gobierno de la Alianza, el desquicio económico y social del neoliberalismo y la brutal expropiación de los pequeños ahorristas sufrida a mano de los banqueros con la complicidad del gobierno de turno. En su apogeo, los días 19 y 20 de Diciembre, el levantamiento social precipitado por el desfalco general producido por la convertibilidad (aquella absurda e insostenible paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense) adquirió tonalidades preinsurreccionales y provocó el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa. La arrolladora movilización popular fue el desenlace de una profunda crisis política de larga gestación y merced a la cual en pocos días cinco presidentes transitaron por la Casa Rosada en un vano intento por estabilizar la situación ante una ciudadanía que coreaba con furia la consigna "¡que se vayan todos!". Inequívocas señales de la inminencia de los nuevos tiempos y del cruento fracaso del proyecto neoliberal que ni redistribuyó ingresos (como aseguraba la "teoría del derrame"), ni estimuló el crecimiento económico o la consolidación de la democracia. Hizo exactamente todo lo contrario: reconcentró la riqueza, paralizó el crecimiento y debilitó la legitimidad democrática. De ahí su estrepitoso derrumbe.

Los dramáticos acontecimientos de la Argentina tuvieron un inesperado reflejo en Brasil: sus clases dominantes contemplaron horrorizadas la revuelta plebeya escenificada en el país vecino y los miembros más sagaces del bloque en el poder cayeron rápidamente en la cuenta de que un desplome análogo tendría en Brasil consecuencias muchísimo más graves, y tal vez irreversibles. Ante esa perspectiva obraron con perversa astucia y optaron por levantar el veto o el bloqueo mediático a que habían sometido en tres oportunidades anteriores a la candidatura moderada del PT y su candidato, Luiz Inacio "Lula" da Silva. Poco después este ganaría la presidencia del Brasil y al año siguiente sería Néstor Kirchner quien haría lo propio en la Argentina.

Un nuevo ciclo político-ideológico se abría paso en el continente, favorecido por una constelación de circunstancias en el terreno internacional que se combinaban virtuosamente con los procesos endógenos de la región. En efecto, la rebeldía y el ardor de las luchas populares encontraron en el alza de los precios de las commodities latinoamericanas y la atención que Estados Unidos y sus lugartenientes europeos le dedicaban a Medio Oriente y a Asia Central (especialmente Iraq y Afganistán) fueron factores que facilitaron su capacidad transformadora. No los explicaban, porque esos determinantes internacionales también operaron sobre otros países sin que su resultado hubiera sido un ciclo de gobiernos progresistas o de izquierda. Ahí están los casos de Perú o Colombia, que demuestran que sin la movilización y lucha de las clases populares el "viento de cola" de la economía mundial por sí solo no podía producir los mismos resultados logrados en el núcleo duro del bolivarianismo -es decir, Venezuela, Bolivia y Ecuador- o en las expresiones más moderadas de los nuevos tiempos, como en Argentina, Brasil y Uruguay.

Con la victoria de Lula, la influencia que Brasil proyectaba sobre toda la región reverberó con inusitada intensidad. El auge de

la lucha de masas que caracterizó a los primeros años de nuestro siglo se materializó, poco después, en sendas victorias de la izquierda o del progresismo en Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Este rediseño del mapa sociopolítico de la región tendría un papel decisivo en lograr la derrota del ALCA en Mar del Plata, en Noviembre del 2005, haciendo naufragar nada menos que al principal proyecto estratégico de Washington para América Latina para el siglo veintiuno. Este nuevo clima político e ideológico marcaría con rasgos indelebles a la región hasta promediar la segunda década del nuevo siglo, cuando una combinación de diversas circunstancias tanto endógenas como exógenas dio origen primero a una ralentización de la marcha ascendente de las luchas sociales y luego a su detención y relativo estancamiento. Sin este decisivo impulso "desde abajo" y acosados por las restricciones de la crisis general del capitalismo y el desplome de los precios de las commodities los gobiernos progresistas fueron forzados a adoptar políticas más moderadas. Ciertas elucubraciones en torno al supuesto "fin del ciclo progresista", que brotan precisamente de esta situación, son objeto de cuidadoso análisis en la última parte de la obra que estamos comentando y a ella remitimos a nuestros lectores. Sólo nos permitiremos anticipar que aquella tesis carece de fundamento empírico y es más que nada una operación propagandística, parte de la "guerra psicológica" que el imperio estimula sin pausa, para producir el desarme y la desmovilización de las fuerzas sociales que impulsaron los procesos de cambio en la región.

Este libro tuvo su origen en los cursos que ambos autores dictaron en el PLED, el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, en la segunda mitad del 2015. Nos pareció que las transformaciones que alteraron la fisonomía de la región desde comienzos de siglo requería un esfuerzo de síntesis, de ordenamiento de datos y antecedentes y, a la vez,

de prospección de sus posibles encaminamientos en un sistema internacional atravesado por conflictos cada vez más violentos y sangrientos. La anhelada reanudación de la marcha ascendente del movimiento social requiere asimismo conocer los legados de todos esos años, tomar nota de sus aciertos y aprender de sus yerros. Sin este aprendizaje no habrá una fecunda recuperación de la iniciativa popular. Y esto es precisamente lo que se resume en esta obra. Muchas lecciones, que deben ser aprendidas para facilitar la continuación de un proceso que por ahora da señales de haber llegado a una meseta y, en algunos casos, como en la Argentina y Brasil, de haber comenzado un preocupante retroceso. En todo caso, conviene tener en cuenta que los gobiernos actuales de ambos países están lejos de encontrarse firmemente en control de la situación. En la Argentina los pronósticos de los avales internacionales del macrismo –Wall Street, la prensa financiera internacional, los grandes bancos- no dejan de señalar las enormes dificultades económicas que atribulan a la Casa Rosada y que han provocado la cautela de los inversionistas extranjeros que han abierto un compás de espera por lo menos hasta las próximas elecciones de medio término del 2017. Algunos de ellos, inclusive, estiman que no habría que descartar una aplastante derrota del macrismo, con lo cual sería altamente probable que todo volviera a fojas cero. En Brasil el gobierno de Michel Temer está surcado por denuncias de corrupción que inculpan al propio Presidente, según lo delatará nada menos que Marcelo Odebrecht, CEO de la más importante empresa de construcciones civiles del Brasil. En ese escenario, y pese al blindaje del poder judicial que se le otorga a Temer, como en la Argentina se hace lo propio con el presidente Mauricio Macri involucrado en las filtraciones de los Panamá Papers, lo que puede predecirse a futuro es tan solo una marcada incertidumbre, algo muy lejos de ser el comienzo de un “nuevo ciclo” de signo derechista.

Dicho lo anterior quisiera concluir este prólogo señalando la importancia de dos asuntos, que surgen de la lectura de esta obra y que ameritan una seria discusión en el seno de las fuerzas populares y para la cual los aportes hechos por nuestros autores constituyen un fecundo punto de partida. Uno, la subestimación en la que incurrieron las más diversas (y encontradas) corrientes de la izquierda y el pensamiento crítico de las enormes dificultades que se interponen a la construcción de un orden no sólo posneoliberal sino también poscapitalista. Lo que los datos de la experiencia demuestran irrefutablemente es que la sola tarea de dejar atrás la gravosa herencia del neoliberalismo constituye casi una hazaña. Precisamente por eso, nada pudo ser más dañino que la alegre y complaciente celebración de la presunta llegada del posneoliberalismo a nuestras playas, tarea en la cual sobresalieron algunos publicistas de los anteriores gobiernos de la Argentina y el Brasil. En su afán propagandista aquellos preferían ignorar que la liberalización financiera y la desregulación de los mercados, así como las privatizaciones, conservaron su vigencia en lo que nuestros autores denominan "el segundo anillo" de los gobiernos progresistas: Argentina, Brasil y Uruguay, lejos aún de las promisorias aguas del posneoliberalismo. Así como Marx y Engels, y después Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo subestimaron la resiliencia del capitalismo como sistema y su formidable capacidad para absorber enormes desafíos, el pensamiento crítico latinoamericano y las fuerzas de izquierda fueron también ellas víctimas de la misma ilusión. Este reconocimiento de ninguna manera es una concesión derrotista o una exhortación a abandonar la tarea de la revolución ante la supuesta inexpugnabilidad del sistema sino que pretende enfatizar la necesidad de mejorar nuestro conocimiento del capitalismo como sistema mundial y en sus diversas concreciones nacionales. Quien no conoce no puede cambiar lo desconocido. Por eso recordaba Lenin que "nada hay más práctico que una

buenas teorías". La tarea, por supuesto, es mucho más dura de lo que se pensaba porque el ataque a una ciudadela capitalista en la periferia -digamos Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela- no sólo es repelido por una vigorosa, multifacética y policiasista coalición interna sino que pone en funcionamiento las redes globales de defensa del sistema con Washington a la cabeza, a quien se le suman las normas e instituciones internacionales (capitalistas hasta la médula) que regulan el funcionamiento de la economía mundial y que acuden rápidamente a socorrer a la fortaleza sitiada por las fuerzas anticapitalistas. El caso de los "fondos buitre" en Argentina ilustra con extraordinaria nitidez los nefastos alcances de este perverso entramado capitalista mundial que arrasa la soberanía de algunos Estados nacionales sometidos a un chantaje imposible de ignorar; el papel del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al penalizar a los bancos que viabilizan el comercio exterior de Cuba es otro ejemplo de lo mismo, así como las reglas de la OMC, la perniciosa influencia del CIADI del Banco Mundial o las regulaciones no-arancelarias que descaradamente protegen las economías de los gobiernos autoproclamados como voceros de una economía mundial regida por la libertad de comercio. Si a lo anterior le sumamos, para seguir con esta metáfora gramsciana de las trincheras, fortificaciones y casamatas, el crucial papel de los medios de comunicación, controlados por la burguesía imperial y sus aliados locales (que han creado una suerte de "Plan Cóndor de la Información" para desaparecer a la verdad) así como su victoria en la batalla de ideas comprobaremos que la superación del capitalismo es una tarea bastante más complicada de lo pensado. Este es uno de los temas sobre los cuales podemos aprender a partir de la lectura de este libro.

La segunda y última observación tiene que ver con el supuesto "fin de ciclo" del progresismo y la izquierda en América Latina. Tal como se demuestra en los capítulos finales de este libro, lo menos

que se puede decir es que se trata de una conclusión prematura y poco fundamentada. Decíamos más arriba que bajo el peso de la crisis general del capitalismo y el derrumbe de los precios de las exportaciones latinoamericanas, algunas orientaciones de la política económica de esos gobiernos han experimentado un giro hacia una cierta ortodoxia y la prudencia fiscal en algunas áreas muy específicas. El caso de Brasil bajo el segundo gobierno de Dilma ilustra claramente lo que venimos diciendo: el giro abrupto hacia el neoliberalismo al comienzo de su segundo mandato (con la designación del "chicago boy" Joaquim Levy en el crucial Ministerio de Hacienda) no hizo sino acelerar el debilitamiento de un gobierno que, producto de sus propios errores y limitaciones ideológicas, desmovilizó a su base social, esterilizó al PT y adoptó las orientaciones económicas de sus adversarios. El triste desenlace sufrido por la Presidenta brasileña nada tiene de casual o accidental, sino que es producto de profundos desaciertos que comenzaron al promediar los primeros años del gobierno de Lula y que terminaron por producir esa ruptura entre representantes y representados que Gramsci tantas veces llamara la atención en sus escritos carcelarios. El derrumbe de los precios del petróleo ha perjudicado seriamente a la economía venezolana pero no es un dato menor que la inversión social, las Misiones bolivarianas, no ha experimentado, hasta ahora, una reducción de sus partidas presupuestarias y que la legislación protectora de los derechos de los trabajadores ha sido fortalecida en lugar de haberse recortado, como ocurriera en Europa y, para seguir con una sugerente comparación, en el Brasil. Ergo, la idea de que todos esos gobiernos progresistas ya han caído por entero en las fauces del neoliberalismo es errónea. Distinta ha sido la historia en el caso de la Argentina, pues con el triunfo de Mauricio Macri el neoliberalismo duro se ha encaramado una vez más a las alturas del Estado. Pero, aún así subsisten las preguntas cruciales de cuya

respuesta dependerá si se puede o no hablar, con rigurosidad, de un fin de ciclo. Hasta ahora, el único país en el cual la coalición progresista o de izquierda fue derrotada es la Argentina, y por un escasísimo margen. Siguen en el gobierno las fuerzas que obtuvieron la presidencia en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay y, en Centroamérica, el sandinismo y el Farabundo Martí en El Salvador. Y si bien en casi todos estos países, con la posible excepción de Bolivia y Venezuela, se ha producido una desmovilización de las fuerzas que sostuvieron esos proyectos desde lo social, lo cierto es que, por ahora, las fundamentales políticas de inclusión promovidas por esos gobiernos no han sido abandonadas. Y aún cuando los gobiernos "postprogresistas" lo intenten habrá que ver si estas intenciones restauradoras son coronadas con el éxito. En este sentido, el caso argentino se convierte en un laboratorio importantísimo para extraer algunas conclusiones acerca del fin o la continuación del ciclo progresista abierto a comienzos de siglo. Por otra parte sería importante examinar con cuidado las transformaciones operadas en la conciencia social y la ideología de las clases y capas subalternas. Podría hipotetizarse que más que la redistribución de bienes materiales, el legado más significativo de estos años ha sido un profundo cambio en la conciencia de las clases y capas populares, acompañando la expansión de los derechos ciudadanos y la construcción de Estados democráticos basados en su activo protagonismo. Seguramente es más sencillo cancelar avances económicos y reconcentrar los ingresos que abolir nuevos derechos recientemente conquistados y desciudadanizar a capas y grupos sociales que con estos procesos adquirieron por primera vez su condición de miembros de la comunidad política. Por otra parte, no estaría demás interrogarse si las condiciones internacionales facilitarían un retorno al neoliberalismo del pasado, es decir, al tipo de ordenamiento hemisférico que esta parte del mundo conocía cuando se produjo el derrumbe

de la Unión Soviética y los estrategas norteamericanos se engañaban con "un nuevo siglo americano". La respuesta es negativa, todo lo cual nos conduce a preguntarnos si sería correcto postular un "fin de ciclo" a partir del sólo análisis del momento económico de una formación social. A la luz del marxismo tal iniciativa no nos parece persuasiva ni razonable, pero son cuestiones abiertas que ameritan un examen minucioso para el cual este libro ofrece un promisorio punto de partida, razón por la cual nos permitimos recomendarlo sin reservas.

Atilio Borón

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2016

I. Elementos teóricos para la interpretación de los procesos de rebelión popular desde la perspectiva del materialismo histórico

En este primer capítulo¹ presentaremos un breve repaso sobre algunos de los ejes centrales en torno de los cuales se erige el cuerpo conceptual del materialismo histórico utilizado, con matices, por quienes abordamos la investigación de los procesos de rebelión social desde esa perspectiva. Dichos nudos conceptuales han sido objeto de debates entre distintos autores marxistas a la luz de las interpretaciones de diversos hechos históricos, y revisar cómo fueron utilizados para esos contextos nos es útil para intentar aplicarlos y complejizarlos en el análisis de los movimientos y las luchas sociales en los procesos políticos progresistas y de izquierda en América Latina. Es desde los propios movimientos sociales y políticos que se retoman esas discusiones y maneras de interpretación históricas, sobre las cuales intentan elaborar sus estrategias y tácticas. Nos remitimos a la acumulación de experiencia y lucha teórica en la historia de las luchas populares en el capitalismo, sistema que aun con sus grandes cambios sigue rigiendo el destino de la

1 Debemos hacer una aclaración respecto de este capítulo: si bien hemos adoptado para la confección del libro un lenguaje que, aun con las limitaciones del idioma, incluye una perspectiva de género, en esta sección, dado que utilizamos numerosas citas de autores clásicos que según la visión dominante de su época se referían solo al género masculino como generalizador de la humanidad, o tal vez debido a las traducciones, hemos decidido respetar ese formato para no falsear las citas o referencias.

humanidad a pesar de que algunos autores y corrientes hayan pretendido negarlo. También daremos una mirada a los debates sobre otras corrientes.

En primer lugar, es importante destacar que, a diferencia de otros enfoques, el abordaje de la investigación social desde la perspectiva teórica del materialismo histórico se centra en la observación y análisis de los enfrentamientos sociales más que en el sistema institucional, su resultante; pues, como señala Nicolás Iñigo Carrera (2008), el sujeto colectivo de la historia son las clases, fracciones y alianzas sociales que actúan y cuyas formas de organización para actuar, en cada momento histórico, están vinculadas con los grados de conciencia que tienen de sí, de las otras clases y de las relaciones entre ellas; grados de conciencia que hacen al momento que transitan en su constitución como clases sociales. Esta es la clave y punto de partida de nuestra perspectiva: el estudio de los enfrentamientos sociales, dado que vivimos en sociedades profundamente divididas en clases, fundamentalmente dos grupos humanos diferenciados: uno (minoritario) vive a expensas del otro; ambos compuestos, a su vez, por diversas fracciones. Ello no significa que las demandas, motivaciones y metas que se proponen o expresan en las luchas manifiesten directamente su condición de clase o tengan contenidos socioeconómicos, dado que, como individuos y como clase o fracciones de ella, estamos atravesados por múltiples relaciones sociales y de poder.

Clase en sí o clase para sí

Desmenuzando la cuestión, comenzemos por plantear que las clases sociales se constituyen como tales en el enfrentamiento con otras, pues como explican Carlos Marx y Federico Engels «los diferentes individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase» (1975: 60-1).

«La dominación del capital ha creado a esta masa [de trabajadores] una situación común, intereses comunes. Así pues esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero aún no es una clase para sí. En la lucha [...] se constituye como clase para sí» (Marx, 1974: 257). Así, la clase no se constituye solo por la sumatoria de los individuos que ocupan la misma posición y función en las relaciones de producción, sino que es en el enfrentamiento entre las clases sociales que estas se tornan clases para sí mismas y no para su antagonista.

En distintos momentos históricos, grupos que remiten a fracciones de clases sociales o a alianzas de clases, se organizan para llevar a cabo enfrentamientos sociales, y los modos de organización varían con la forma que toma la lucha y su contenido. Si en los diferentes ciclos históricos las luchas atraviesan, no de manera lineal, sino más bien contradictoria, una escala que va de lo más espontáneo a lo más sistemático, lo mismo ocurre con las formas de organización. Desde las más elementales, transitorias y espontáneas, a medida que se desarrolla la confrontación, se van constituyendo más duraderas, estables, y sistemáticas, con las cuales el grado de conciencia tiene relación directa, porque toda forma nueva de lucha, que trae aparejada consigo nuevos peligros y nuevos sacrificios, «desorganiza», indefectiblemente, las organizaciones no preparadas para ella (Lenin, 2000b).

No podemos pensar las clases sociales sin definir el concepto de «pueblo». Partimos de definirlo en el capitalismo, en tanto categoría política, como el conglomerado de clases y fracciones oprimidas y explotadas, surcado también por contradicciones en su seno, como explicaba Mao Zedong, pues se compone de diversas fracciones de distintas clases sociales. Fidel Castro lo define así en *La Historia me absolverá*:

Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa; la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo, cuando crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, hasta la última gota de sangre. (2007: 34-5)

A continuación, Fidel enumera detalladamente cuáles capas y fracciones sociales componen el pueblo —en referencia a la sociedad cubana— mencionando a las y los trabajadores sin empleo, obreros del campo, industriales y braceros, agricultores pequeños, maestros y profesores, pequeños comerciantes y profesionales jóvenes: médicos, ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, pintores, escultores, etcétera.

Para constituirse como pueblo en lucha, como decía el Comandante, estas capas y fracciones sociales deben creer suficientemente en sí mismas, es decir: construir confianza en sus propias fuerzas. La acumulación de fuerza del pueblo implica la experimentación de formas de lucha y organización para tomar decisiones colectivas en torno a la realización de los intereses populares en detrimento de la clase dominante, lo que supone el enfrentamiento.

Eric Hobsbawm ha afirmado que en los momentos de conflicto pueden observarse, en un tiempo relativamente corto, cómo se expresan los distintos grupos sociales que interactúan en una sociedad en un momento dado de su desarrollo, quedando a la luz, expresados en la confrontación, los intereses antagónicos no solo entre los distintos grupos sino en el interior mismo de cada clase social. Por lo tanto, debemos comenzar por observar esa misma lucha y las organizaciones que surgen en su seno, y

no por lo que resulta de ese proceso: las formas institucionales que asumen el resultado de la lucha (sindicatos, partidos, las mismas alianzas políticas). Aquí hay que tener en cuenta que algunas instituciones ya cristalizadas fueron consecuencia de las luchas sociales y políticas del pasado. Pues, como sostenía Rosa Luxemburgo en diversos escritos, la organización emerge de la lucha, y si es la adecuada, orgánica a ella, en un proceso dialéctico, a su vez, la impulsa hacia delante.

Un problema presente ya desde los debates clásicos, en relación con el tema de la organización política de la rebelión social, es si tanto las formas de organización —que elevan el nivel de efectividad y la permanencia en el tiempo— como la conciencia «política» y la ideología, provienen del «interior» mismo de las masas, fracciones o sectores movilizados, o del «exterior», de organizaciones y cuadros políticos previamente existentes que dotan a la protesta con elementos teórico-políticos y organizativos resultados de síntesis de experiencias históricas y de la dedicación «profesional» a la política.²

Lenin consideraba que las masas se movilizan «espontáneamente» en la lucha por sus derechos —ya sean laborales, sociales o políticos—, pero que la conciencia y la organización «revolucionaria socialdemócrata»³ —única forma de superar de raíz el sistema social del cual derivan las injusticias— provienen del elemento consciente que constituye el «partido»: la organización profesional. Consideraba un error creer que el

2 Véase el debate que Lenin plantea a Kautsky al respecto en el cap. 2 y 3 de *Qué hacer* (Lenin, 1960). Véase también Borón, 2004.

3 El objetivo de la socialdemocracia consiste en la transformación radical de las condiciones de vida de toda la humanidad» (Lenin, 1960: 170). Más tarde el término «socialdemocracia» remitirá a la fracción reformista de ese partido por lo que aquí debe entenderse «revolucionaria, socialista o comunista».

movimiento puramente reivindicativo/económico de las y los obreros puede elaborar por sí solo una ideología independiente. Para Lenin, todo lo que sea rendir culto a la espontaneidad del movimiento obrero, todo lo que sea aminorar el papel del elemento consciente, el papel de la socialdemocracia,⁴ significa —de manera independiente por completo de la voluntad de quien lo hace— acrecentar la influencia de la ideología burguesa entre los obreros.⁵

Criticaba a los «economicistas»⁶ por su culto a la espontaneidad, que «en lugar de apelar a los buenos dirigentes contra los malos» (53) apelan «a la multitud contra los dirigentes en general» (123), y que, por lo tanto, constituyen un «intento de hacernos retroceder en el terreno de la organización» (124).

¿Por qué el movimiento espontáneo [...] conduce [...] al predominio de la ideología burguesa? Por la sencilla razón de que la ideología burguesa es, por su origen, mucho más antigua que la ideología socialista, porque su elaboración es más completa y porque posee medios de difusión incomparablemente mayores. (56)

Y agregaba que «en la sociedad desgarrada por las contradicciones de clase nunca puede existir una ideología al margen de las clases ni por encima de las clases» (55).

El autor explicaba que la esfera de la que se pueden ex-

4 Así se llamaba el partido revolucionario ruso en aquella época.

5 Gramsci, en *Espontaneidad y dirección consciente* (2002), agrega que por otro lado «descuidar —y aún más, despreciar— los movimientos llamados espontáneos, o sea, renunciar a darles una dirección consciente, a elevarlos a un plano superior insertándolos en la política, puede a menudo tener consecuencias serias y graves».

6 Entre los «economicistas» sobresalía Eduard Bernstein, contra cuyo libro Lenin escribe su obra *¿Qué hacer?*

traer los conocimientos políticos es la de las relaciones de todas las clases y fracciones sociales con el Estado y el gobierno, es decir, la de las relaciones de todas las clases entre sí, y no de la lucha económica entre obreros y patronos. Por lo tanto, la dicotomía entre la elaboración o sistematización de la teoría socialista no tiene que ver con un afuera o un adentro en tanto pertenencia a una clase en sí, sino que, aclaraba, no es que los obreros «no participen en esa elaboración. Pero no participan como obreros, sino como teóricos del socialismo». Es el «partido» el que debe asumir la tarea de organizar la lucha política, bajo su dirección, y este debe ser una organización centralizada nacionalmente «que agrupe en un solo impulso común todas las manifestaciones de oposición política, de protesta y de indignación; una organización formada por revolucionarios profesionales y dirigida por verdaderos líderes políticos de todo el pueblo» (54). Es decir, no desde afuera de «la clase», sino desde afuera y más allá de la lucha estrictamente económica-reivindicativa.

Lenin concluye que: «1) no puede haber un movimiento revolucionario sólido sin una organización de dirigentes estable que guarde la continuidad; 2) que cuanto más vasta sea la masa que se incorpore espontáneamente a la lucha —y que constituye la base del movimiento y participa en él—, tanto más imperiosa será la necesidad de semejante organización y tanto más sólida deberá ser; 3) que dicha organización debe estar formada, en lo fundamental, por hombres [agregamos: y mujeres] que hagan de las actividades revolucionarias su profesión» (126).

Las luchas y su expresión política

Más tarde, agregará a su concepción que el «partido» es la forma superior de unión de clase de los proletarios, pero

se constituye realmente como partido revolucionario del proletariado cuando consigue «ligar a los líderes con la clase y las masas en un todo único, indisoluble», mientras tanto «no merecerá ese nombre» (Lenin, 1975b: 41).⁷

Para llevar a cabo la lucha, las y los desposeídos deben organizarse, es decir, proponerse objetivos y llevarlos a cabo: repartir tareas, coordinarlas, generar ámbitos de participación, de toma de decisiones, realizar hechos de propaganda y reclutamiento, etc., pero los objetivos que se proponen tienen relación con el tipo de intereses que prevalecen en cada momento histórico.

En la lucha de la clase obrera puede prevalecer su aspecto de «asalariados», tomar conciencia de esa situación de aparentes propietarios de una mercancía (la fuerza de trabajo), y tratar de mejorar su situación en tanto tales; o bien puede prevalecer su aspecto de expropiados de sus condiciones materiales de existencia, explotados, y tratar de eliminar la explotación. (Iñigo Carrera, 2000).

Se trata del grado de conciencia para sí y de auto-organización que pueda tener una clase o fracción social en un momento histórico determinado, dada su experiencia histórica de lucha.

Otro eje de debate teórico y político ataña a la cuestión de los conceptos (que reflejan o no órdenes diferentes de la realidad) de la «lucha económica» y la «lucha política». El aparente dilema que presenta ha desvelado a estudiosos y militantes en la década de los 90 en América Latina, cuando parecía existir una brecha difícil de salvar entre los movimientos sociales y su necesaria expresión política, orientada a producir cambios sociales más generales. En

⁷ Sería interesante constatar cuántos partidos que se proclaman como revolucionarios o representantes de la clase obrera aprobarían el test práctico de la «ligazón indisoluble» de sus líderes con las masas que dicen representar.

la década siguiente, fueron tomando expresión política muchas de esas experiencias de lucha y movimientos sociales de maneras muy disímiles en las diferentes realidades nacionales, en algunos casos como expresiones vinculadas directamente a los movimientos sociales y, en otros, mediadas por partidos políticos institucionalizados, nuevos o renovados (parcialmente).

La teórica y dirigente socialista Rosa Luxemburgo consideraba estos dos momentos de la lucha como «frentes distintos» pero que deben ser abordados en un mismo y único movimiento. Por ejemplo, señalaba que una consigna política «contra el absolutismo» no puede ser desplegada siempre bajo todas circunstancias, sino que por momentos hay un «repliegue» a la lucha económica que se diversifica en diferentes reclamos, pero es la manera de que siga viva la lucha, de lo contrario se agota en sí misma. «La lucha económica presenta continuidad, es el hilo que vincula los diferentes núcleos políticos; la lucha política es la fecundación periódica que prepara el terreno a las luchas económicas» (Luxemburgo, 1970: 64). Son complementarias. Más adelante sostendría que: «no existen dos luchas distintas de la clase obrera, una económica y otra política; existe solo una única lucha de clases que tiende simultáneamente a limitar la explotación capitalista dentro de la sociedad burguesa y a suprimir la explotación capitalista y al mismo tiempo la sociedad burguesa» (82). Serían para la autora «solo dos fases, dos grados de la lucha de emancipación de la clase obrera. La lucha sindical abraza los intereses inmediatos, la lucha socialista los intereses futuros del movimiento obrero» (111). De esta manera, el rol del partido sería el de la dirección en la lucha, como la parte más esclarecida y mejor organizada del proletariado. Pero «tomar la iniciativa y la dirección de las operaciones no consiste tampoco aquí en dar arbitrariamente órdenes sino en adaptarse lo más hábilmente posible a la situación y en mantener el contacto más estrecho con la moral de las masas» (85). De esta manera justifica

la separación de la lucha sindical y la lucha socialista por razones «técnicas», mientras que para Lenin dado que «la lucha política de la socialdemocracia es mucho más amplia y compleja que la lucha económica de los obreros contra los patronos y el gobierno» (1960: 105); en consecuencia, «la organización de un partido socialdemócrata revolucionario ha de ser inevitablemente de un género distinto que la organización de los obreros para la lucha económica» (116).

Lucha desde arriba y lucha desde abajo

Por otra parte, constituyen frentes distintos lo que Lenin denomina como «lucha desde arriba» y «lucha desde abajo». La cuestión ha sido abordada por el autor en su «Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática», donde reflexiona sobre el interés del proletariado en la revolución democrático-burguesa rusa de 1905. Salvando grandes distancias en lo que respecta a las fases de desarrollo capitalista y otras, esta cuestión reviste una especial importancia en América Latina, en la etapa que en este libro analizaremos, en la cual movimientos sociales y políticos que han desplegado importantes luchas desde abajo pasan a abordarlas también desde arriba.

Como exponía Lenin, la revolución democrática desarrollaría el programa mínimo, «pero su importancia reside en elevar la energía revolucionaria del proletariado mundial». Proponía «distinguir lógica e históricamente las grandes fases del desarrollo» (1875: 63), en las cuales se contraponen la revolución burguesa y la socialista. Pero,

¿se puede negar acaso que se entrelazan en la historia elementos aislados, particulares de una y otra revolución? ¿Acaso la época de las revoluciones democráticas en Europa no registra una serie de movimientos socialistas y de tentativas socialistas? ¿Y acaso

la futura revolución socialista en Europa no tendrá todavía mucho que hacer en el sentido democrático? (104)

Y sostiene que la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y de los campesinos es una tarea transitoria y temporal de los socialistas, pero «desentenderse de esta tarea en la época de la revolución democrática es algo francamente reaccionario» (105).

Es en este sentido que entonces el dirigente aborda lo que denomina una nueva variedad de la cuestión: la «lucha desde arriba», en relación con la participación del partido del pueblo y la clase obrera en el gobierno provisional revolucionario surgido de la revolución democrático-burguesa de 1905. Se pregunta: «¿Es admisible, y en qué condiciones, nuestra participación en dicho gobierno (acción desde arriba)? ¿Cuál debe ser nuestra acción desde abajo?». A la primera interrogante contesta que sí, mientras que los mencheviques se oponían por «principio» a ello. Los objetivos de dicha participación serían: «1) lucha implacable frente a los intentos contrarrevolucionarios, y 2) defensa de los intereses propios de la clase obrera». Considera que proponer, por principio, la acción solo «desde abajo» constituye una lucha defensiva:

La prolongada época de reacción política, que reina en Europa casi sin interrupción desde los tiempos de la Comuna de París, nos ha familiarizado demasiado con la idea de la acción solo «desde abajo», nos ha acostumbrado demasiado a considerar la lucha solo desde el punto de vista defensivo. (Lenin, 1975: 23)

Pero «se ha iniciado un período de conmociones políticas y revoluciones [...] Hay que propagar la idea de la acción desde arriba, hay que prepararse para las acciones ofensivas más energéticas» (25). Pero agrega que «en el caso de que no consigamos obrar desde arriba [...] estamos obligados a presionar desde abajo sobre el gobierno provisional revolucionario» (26). Para Lenin, plantear la oposición entre «acción desde abajo» y «acción desde

arriba» es un falso dilema, como lo es la posición anarquista que plantea la lucha «solo desde abajo y no desde arriba» (94).

La necesidad de la acción desde arriba no va en desmedro de la necesidad de mantener la independencia del partido proletario, al contrario, hace énfasis en el «carácter obligatorio de la independencia completa de clase del partido del proletariado en el presente movimiento democrático general» (52), teniendo en cuenta que aunque la revolución democrática es burguesa por su contenido económico social, representa un interés enorme para el proletariado. Es por eso, sostiene el autor, que es tarea fundamental de la organización de vanguardia del proletariado profundizarla y que, si bien no se puede saltar del marco democrático-burgués de la revolución rusa (como sostenían los populistas y anarquistas), sí se puede

ensanchar en dimensiones colosales dicho marco, podemos y debemos, en los límites del mismo, luchar por los intereses del proletariado, por la satisfacción de sus necesidades inmediatas y por las condiciones de preparación de sus fuerzas para la victoria completa futura. (57)

En este sentido, la lucha por los intereses inmediatos (la limitación de la opresión y la explotación) de la clase obrera prepara el terreno para la lucha por sus intereses históricos (la superación de la opresión y la explotación).

La crítica de los mencheviques por la participación en el gobierno provisional apunta al «peligro de que la socialdemocracia se encuentre con las manos atadas en la lucha contra la política inconsiguiente de la burguesía, de que se diluya en la democracia burguesa» (59). A lo que Lenin responde que reconoce que «este peligro existe realmente», pero se debe tomar ese camino para aproximarse a los objetivos del proletariado.

De lo contrario, priorizar la «autonomía» de este sin conseguir los objetivos, implicaría realmente «atarse de manos». Estos debates y construcciones conceptuales son útiles para analizar las formas de lucha y organización en la historia más reciente de los países latinoamericanos, específicamente esta cuestión de la «autonomía» tan discutida, que, al igual que todos los referidos a la liberación de las y los oprimidos, no es nueva, dado que continuamos bajo el mismo sistema, aun con los cambios que ha atravesado. «La cuestión no consiste tampoco en saber si tales o cuales grupos socialdemócratas conservarán su autonomía formal, su fisonomía propia, su independencia con respecto a la democracia burguesa en todo el transcurso de la revolución» (60). Porque se puede proclamar dicha «independencia» y también mantenerla formalmente, y sin embargo,

el resultado político definitivo de la revolución puede ser que, a pesar de la «independencia» formal [...] como partido, de hecho no sea independiente, no se halle con fuerzas para imprimir a la marcha de los acontecimientos el sello de su independencia proletaria, se vea tan débil que, en el conjunto, en fin de cuentas, en el balance definitivo, su dilución en la democracia burguesa sea, no obstante, un hecho histórico. (61)

Lenin afirma que la única manera de no encontrarse con las manos atadas es llevar la revolución democrática hasta las últimas consecuencias, lo que solo puede hacer el proletariado, dado que el avance y desarrollo de la democracia en los distintos ámbitos de la vida terminan atentando contra el orden burgués.⁸ Y «solo en este caso no se diluirá en la democracia

8 La contradicción o incompatibilidad entre la profundización democrática y el capitalismo fue ampliamente desarrollada por Ellen Meiksins Wood, (2000) y por Atilio A. Borón (1997: 6) y Luciano Gruppi (1978).

burguesa, sino que imprimirá a toda la revolución su sello proletario-campesino» (Lenin, 1975: 68). Así explica que no es la burguesía la que debe estar al frente de la revolución democrática sino el proletariado y los campesinos (69).

Para Lenin, la necesidad de «dirección», al igual que el Estado, o, como diría Engels, la «autoridad», solo puede disolverse si se superan las condiciones que le dieron origen, es decir, bajo el socialismo

revive inevitablemente mucho de la democracia «primitiva», pues por primera vez en la historia de las sociedades civilizadas la masa de la población se eleva para intervenir por cuenta propia no solo en votaciones y en elecciones, sino también en la labor diaria de la administración. Bajo el socialismo, todos intervenirán por turno en la dirección y se habituarán rápidamente a que ninguno dirija. (1966: 145)

Así, el despliegue de determinada forma de lucha y su organización como ámbito de toma de decisiones, de donde surge la dirección que adopta la lucha, puede ser más restringida o más amplia, con modos de delegación o representación más desarrollados (más vertical) o menos desarrollados (más horizontal), transitoria o permanente, en este último caso puede cambiar su forma en el tiempo, por ejemplo, transformarse en partido o sindicato, u otro tipo de organización. Estos aspectos pueden variar entre los grados más espontáneos a los más sistemáticos. Y frecuentemente, como se puede observar en la historia reciente de Nuestramérica, los grados de sistematicidad que adquieren las luchas, los movimientos sociales y sus organizaciones están asociados a modos de delegación y representación más desarrollados.

Su forma está ligada al contenido, por lo que no se debe caer en el fetichismo de las formas, sino que en relación con

cada momento histórico, las relaciones de fuerza políticas, al contenido, las metas y los sujetos de la lucha, se constituyen diversas formas de organización, con sus modalidades de funcionamiento, participación, reglas internas, liderazgos, e identidad. Así como se modifican históricamente las formas de lucha en relación con la disposición objetiva y subjetiva de fuerzas, también se van modificando sus formas de organización⁹ Es frecuente, en el análisis, absolutizar, deshistorizar o tomar como valores eternos e inmutables distintos aspectos del problema de la organización y de los movimientos sociales, como por ejemplo su estructura. O calificar como efímeras o novedosas las características que asumen en momentos de ascenso de las luchas, pero que, al hurgar en las experiencias históricas muestran también continuidades y acumulación. El intento de romper esos lazos, festejando supuestas novedades descubiertas por las y los académicos o por la intelectualidad posmoderna, quita fuerza a los movimientos en lucha.

Pero cuando hablamos de organización podemos estar refiriéndonos a momentos distintos que se alcanzan en el proceso: 1) el que surge en y para los enfrentamientos que va librando un grupo, fracción, clase o alianza social y desaparece terminado el enfrentamiento; 2) el que trasciende los momentos de enfrentamiento, adquiere permanencia y cristaliza en formas estables; y 3) el que preexiste a las confrontaciones y que participa en ellas en relación con la defensa de los intereses económicos (sindicato, cámaras, multisectoriales), o políticos (partidos), y que emerge como producto de los dos procesos anteriores. Su movimiento his-

9 En este sentido Lenin plantea que «el contenido nuevo se abre paso a través de toda clase de formas y que nuestro deber de comunistas consiste en adueñarnos de todas ellas, en aprender a completar con el máximo de rapidez unas con otras, en sustituirlas unas por otras, en adaptar nuestra táctica a todo cambio de este género, suscitado por una clase que no sea la nuestra o por unos esfuerzos que no sean los nuestros». (1975: 114).

tórico es dialéctico y no lineal. Puede darse el fenómeno de que una forma suceda a la otra, o no. Históricamente, las formas de organización surgidas en las luchas han cristalizado en ocasiones como sindicatos o partidos, y muchas veces se han incorporado al sistema institucional. Y con frecuencia se encuentran en el origen de las protestas y enfrentamientos sociales.

Las fases moleculares del proceso de formación de un movimiento histórico colectivo

Se trata de estudiar y conocer lo que Gramsci denomina como las fases moleculares del proceso de formación de un movimiento histórico colectivo. El autor dice que el análisis del problema de la formación de una voluntad colectiva depende en forma inmediata de la proposición clásica del marxismo de que «la sociedad no se plantea problemas para cuya solución no existan ya las premisas materiales». Para ello se debe investigar cómo se organizan las voluntades colectivas permanentes y de qué modo se proponen fines concretos inmediatos y mediados, es decir, una línea de acción colectiva.¹⁰

Asimismo, el problema se enmarca en lo que Gramsci plantea como el momento de la relación de fuerzas políticas: «la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes grupos sociales» (1997: 99).

10 «Se podría estudiar en concreto la formación de un movimiento histórico colectivo, analizándolo en todas sus fases moleculares, lo que habitualmente no se hace porque tornaría pesado el análisis. Se toman en cambio las corrientes de opinión ya constituidas en torno a un grupo o a una personalidad dominante. Es el problema que modernamente se expresa en términos de partido o de coaliciones de partidos afines: cómo se inicia la constitución de un partido, de qué modo se desarrolla su fuerza organizada y su influencia social, etc. Se trata de un proceso molecular, minucioso, de análisis extremo, capilar, cuya documentación está constituida por una cantidad interminable de libros y folletos, de artículos de revistas y de periódicos, de conversaciones y de debates orales que se repiten infinidad de veces y que en su conjunto gigantesco representan este trabajo del cual nace una voluntad colectiva con cierto grado de homogeneidad, con el grado necesario y suficiente para determinar una acción coordinada y simultánea en el tiempo y en el espacio geográfico en el que se verifica el hecho histórico» (Gramsci, 1997: 99).

Y aclara que «es el problema de las relaciones entre estructura y superestructura el que es necesario plantear exactamente y resolver para llegar a un análisis justo de las fuerzas que operan en la historia de un período determinado y definir su relación» (52).

Gramsci señala que es importante distinguir entre movimientos orgánicos relativamente permanentes, de los de coyuntura, que se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales, los cuales dependen también de movimientos orgánicos, pero cuyo significado no es de gran importancia histórica y «dan lugar a una crítica política mezquina, cotidiana, que se dirige a los pequeños grupos dirigentes y a las personalidades que tienen la responsabilidad inmediata del poder» (53). En cambio, los fenómenos orgánicos «dan lugar a la crítica histórico-social que se dirige a los grandes agrupamientos, más allá de las personas inmediatamente responsables y del personal dirigente». Si en un período histórico tiene lugar una crisis que se prolonga por años, significa que en la estructura han madurado contradicciones irreconciliables que las fuerzas políticas conservadoras se esfuerzan por superar dentro de ciertos límites. Esos esfuerzos permanentes y perseverantes «forman el terreno ocasional sobre el cual se organizan las fuerzas antagónicas que tienden a demostrar [...] que existen ya las condiciones necesarias y suficientes para que determinadas tareas puedan, y por consiguiente deban, ser resueltas ya históricamente». El autor nos muestra el error frecuente en el análisis histórico-político, de no saber encontrar la relación justa entre lo «orgánico» y lo «ocasional»:

Se llega así a exponer como inmediatamente activas, causas que operan en cambio de una manera mediata, o por el contrario a afirmar que las causas inmediatas son las únicas eficientes. En un caso se tiene un exceso de «economismo» o de doctrinarismo

pedante; en el otro, un exceso de «ideologismo»; en un caso se sobreestiman las causas mecánicas, en el otro se exalta el elemento voluntarista e individual. (54)

Para aproximarse al conocimiento de ese nexo dialéctico entre los dos órdenes de movimiento, el estudio de las «oleadas» revolucionarias «permite reconstruir las relaciones entre estructura y superestructura por un lado, y por el otro, entre el desarrollo del movimiento orgánico y del movimiento coyuntural de la estructura» (56).

Respecto del análisis de situación, debe emprenderse primero por el conocimiento del momento de la relación de fuerzas internacionales, para pasar luego al de las relaciones objetivas sociales, que tiene que ver con la «clase en sí», es decir, que está «estrechamente ligada a la estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los hombres», de los grupos sociales, asentados en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, cada uno de los cuales representa una función y tiene una posición determinada en la producción (56). Esta fundamental disposición de fuerzas permite estudiar si existen en la sociedad las condiciones necesarias y suficientes para su transformación, o sea, permite controlar el grado de realismo y de posibilidades de realización de las diversas ideologías que nacieron en ella misma, en el terreno de las contradicciones que generó durante su desarrollo.

El segundo momento, el de la relación de fuerzas políticas, puede ser analizado y dividido en diferentes grados que corresponden a los distintos momentos de la conciencia política colectiva. El primero y más elemental es el económico-corporativo, es decir la conciencia de «unidad homogénea del grupo profesional y el deber de organizarla, pero no se siente aún la unidad con el grupo social más vasto». Un segundo grado es el de la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros del grupo

social, pero todavía en el campo meramente económico; aunque se plantea la cuestión del Estado, se hace solo «en el terreno de lograr una igualdad político-jurídica con los grupos dominantes, ya que se reivindica el derecho a participar en la legislación y en la administración y hasta de modificarla, de reformarla, pero en los marcos fundamentales existentes». Un tercer grado es aquel en el que se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados; esta es la fase estrictamente política y señala el «pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas». En el plano de la organización este es el momento del «partido»:

Es la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en partido, se confrontan y entran en lucha, hasta que una sola de ellas, o al menos una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social; determinando además de la unidad de los fines económicos y políticos, la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo, sino sobre un plano universal y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental, sobre una serie de grupos subordinados. (57)

Aquí el Estado pasa a ser el organismo propio del grupo hegemónico para generar las condiciones para su máxima expansión, que es presentada como interés general, como desarrollo de todas las energías nacionales.

Gramsci aclara que estos momentos no aparecen en la historia consecutivamente, en orden lineal, sino que se influyen recíprocamente combinándose y escindiéndose de diversas maneras; «cada una de estas combinaciones puede ser representada por

su propia expresión organizada, económica y política» (58); el pasaje de uno al otro depende de un proceso que tiene por actores a los hombres [agregamos: y mujeres] y su voluntad y su capacidad. El tercer momento es el de la relación de fuerzas militares, «en él se pueden distinguir dos grados: uno militar en sentido estricto, o técnico-militar; y otro que puede denominarse político-militar» (59).

La organización política, entonces, es expresión de los intereses de clases sociales, fracciones de clase, o alianzas de fracciones de clase. Históricamente los grupos sociales portadores de intereses comunes se han organizado como «partidos» en el sentido amplio descrito por Gramsci, es decir, formas organización de la voluntad colectiva que constituyen la expresión de un grupo social, y que pueden presentarse bajo los nombres más diversos, aun con el nombre de anti-partido y de negación de los partidos.¹¹

De manera que para hacer la historia de estas organizaciones, no alcanza con «la mera narración de la vida interna de una organización política, cómo nace, los primeros grupos que la constituyen, las polémicas ideológicas a través de las cuales se forma su programa y su concepción del mundo y de la vida», sino que

será necesario tener en cuenta el grupo social del cual el partido en cuestión es la expresión y la parte más avanzada [...] pero este grupo no está aislado, tiene amigos, aliados, adversarios, enemigos. Solo del complejo cuadro de todo el conjunto social y estatal (y frecuentemente también con interferencias internacionales) resultará la historia de un determinado partido. (Gramsci, 1997: 31)

11 Gramsci menciona a los periódicos más importantes de Italia y a las religiones como ejemplos de partidos políticos.

Por otra parte, para estudiar las organizaciones y partidos, en sentido amplio, que expresan a grupos sociales, se debe tener en cuenta, como sostiene Marx, que «así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía más entre las frases y las figuraciones de los partidos y su organismo real y sus intereses reales, entre lo que se imaginan ser y lo que en realidad son» (1995: 44) y hacen. Y finalmente, con Gramsci, consideramos que «un partido habrá tenido mayor o menor significado y peso, justamente en la medida en que su actividad particular haya pesado más o menos en la determinación de la historia de un país» (1997: 31). El papel del historiador, aun dando a cada cosa la importancia que tiene en el cuadro general, pondrá el acento, sobre todo, en la eficiencia real del partido, en su fuerza determinante, positiva y negativa, en haber contribuido a crear un acontecimiento y también en haber impedido que otros se produjesen.¹²

Hemos repasado hasta aquí algunos de los temas, problemas y debates claves de la tradición del pensamiento crítico, reafirmando la necesidad de retornar al materialismo histórico para lograr lo que nos propusimos con este libro, que es el análisis y reflexión de los escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina que se constituye en los albores del nuevo milenio como resultado de procesos de resistencia y lucha.

12 Con respecto al ejercicio científico social apelamos al concepto de «intelectual orgánico», más allá de la conciencia que se tenga de ello, en el sentido de que «no hay historia (es decir, conocimiento de los hechos históricos reconstruidos por la capacidad pensante humana) que no esté vinculada en algún grado y de alguna manera a una militancia, esto es, a la aplicación y a la defensa de una concepción del mundo [...] Cada intelectual deberá decidir a qué intereses, y por lo tanto a qué fracciones de clase social, a qué campo, a qué bando, tendrá como referente de su actividad como intelectual, y por lo tanto, cuáles serán los problemas fundamentales que deberá plantearse y con qué instrumentos». (Iñigo Carrera, 2001: 170, 172).

La importancia de retornar al marxismo como tradición intelectual y política, que valora tanto el arma de la crítica como la crítica de las armas,¹³ se explica por un lado —como decíamos al inicio— por la vigencia de la explotación, la opresión y la sistemática destrucción de nuestro planeta, y por otro, por «la inusual capacidad que este corpus teórico ha demostrado para enriquecerse en correspondencia con el desenvolvimiento histórico de las sociedades y de las luchas por la emancipación de los explotados y oprimidos por el sistema» (Borón, 2006: 36).

Retornar al marxismo, entonces, es regresar a un determinado espacio después de haber acumulado experiencias, triunfos y derrotas; y, a veces, en algunos casos afortunados, regresar con el beneficio de una fecunda y enriquecedora asimilación de las enseñanzas de la historia. Se llega de regreso, es cierto, pero quien vuelve ya no es el mismo, así como tampoco es el mismo el sitio al cual se retorna. Porque la obra de Marx y la tradición que se remite a su nombre no flotan impávidas por encima de la historia. El marxismo, en suma, es una tradición viviente que reanima su fuego en la incesante dialéctica entre el pasado y el presente. (37)

Una vez expuestas algunas de las herramientas conceptuales y teóricas que nos permitirán abordar el estudio de la realidad social, los enfrentamientos y las relaciones de poder, analizaremos la fase actual del capitalismo, para luego pasar a las experiencias históricas de nuestro pasado reciente.

13 Parafraseando a Marx: «El arma de la crítica no puede sustituir la crítica de las armas. La fuerza material tiene que derrocarse mediante la fuerza material, pero también la teoría se convierte en fuerza material tan pronto prende en las masas». (1978: 217).

II. Conceptualización y caracterización del capitalismo actual

A pesar de los intentos por parte de algunas y algunos renombrados intelectuales de suavizar u ocultar la renovación y profundización de los mecanismos de explotación económica y extraeconómica (violencia militar, política, cultural e ideológica) del capitalismo a partir de mediados de la década de los 70, las relaciones capitalistas, al contrario de tornarse inmateriales o posmaterialistas, se han intensificado luego de la conclusión y crisis de la llamada «edad de oro», que muy bien explica Eric Hobsbawm en su libro Historia del siglo xx.¹⁴

La crisis de sobreacumulación capitalista de mediados de los 70 y, posteriormente, la derrota y retracción del campo socialista, generaron la posibilidad de la recomposición de la iniciativa y ofensiva del capital a escala planetaria. Las relaciones capitalistas avanzaron sobre esa extensa parte del mundo con la brutalidad que las caracteriza, con la mediación de la violencia como vieja y conocida partera de esas relaciones sociales de explotación — como dijera Marx —, y al tiempo que encontraron la posibilidad de crecer en extensión, de expandirse territorialmente, y avanzar en la subsunción formal y real de las relaciones de producción a lo largo del globo, han avanzado también en la otra dirección que es la profundización e intensificación en los ya históricos territorios del capital (central y periférico).

14 El autor resume las etapas del capitalismo. Este sistema tuvo una primera etapa de libre-comercio en el siglo xix, una segunda de imperialismo clásico a principios del xx y una tercera de posguerra con mayor regulación estatal. El neoliberalismo constituye la cuarta etapa del capitalismo y, agregamos, mediante la profundización del imperialismo. (Hobsbawm, 2013).

Metabolismo social del capital

István Mészáros, marxista húngaro autor de *Más allá del capital* (1995), es uno de los autores que viene estudiando la caída de la tasa de ganancia y la reestructuración productiva del capital manifestada a partir de los años 70. Mészáros define como estructural a la crisis capitalista que vivimos hoy en día, pues ni inyectando billones de dólares a las economías capitalistas, es decir, socializando su bancarrota, se logra resolver y salir de la crisis. Mészáros utiliza el concepto de «metabolismo social del capital», al producto de una tríada conformada por el capital, el trabajo asalariado y el Estado, tres elementos intrínsecamente relacionados, y no se puede superar el capitalismo sin su superación en estas tres dimensiones. El húngaro también hace la distinción entre capital y capitalismo. Este último es una de las formas posibles de realización del capital, la fase histórica donde el trabajo se subsume al capital (capitalismo pleno según Marx). Pero igual que había capital antes de la extensión del capitalismo, también lo hay en sociedades poscapitalistas, y eso hace que la crisis de hoy día no solo sea estructural, sino también global, pues el capital se ha desarrollado a una escala geopolítica planetaria.

Ese desarrollo en profundidad de las relaciones de explotación capitalista se torna más descarnado en aquellos territorios que constituyen su periferia, su reservorio de fuerza de trabajo y fuente de saqueos de bienes naturales y sociales. La profundización e intensificación de las relaciones de producción capitalistas, según sus tendencias de desarrollo ya explicadas por Marx y Engels, al tiempo que concentraron y centralizaron capital en menos manos, fueron generando la expulsión y desalojo de crecientes fracciones sociales de los espacios sociales de producción y de vida que ocupaban, generando el crecimiento del ejército industrial de reserva o de la población sobrante desde el punto de vista del

capital. Tendencia esta última que, aun con sus vaivenes localizados, muestra una continuidad y crecimiento.

El capitalismo, desde sus inicios como sistema histórico, se ha basado en la lógica de la «auto-expansión» descubierta y explicada por Marx en *El Capital*,¹⁵ o en otras palabras: capital que solo sirve para acumular más capital. Y para ello ha ido subsumiendo (formal y realmente) todas las relaciones sociales de producción y todos los procesos de producción, distribución, e intercambio. Sin embargo, en su fase más reciente, llamada por David Harvey «de acumulación por desposesión»¹⁶ y con la intención de intensificar a niveles que ponen en riesgo a la vida misma en el planeta, la reproducción ampliada de capital ha pasado a mercantilizar cada vez más todos los aspectos de la vida y el conjunto de bienes comunes que permiten el desarrollo de la humanidad, desde el agua o los bosques, hasta la salud y educación.

Esta fase de acumulación por desposesión es otra manera de denominar al modelo de acumulación capitalista neoliberal. Este, doctrinariamente, data de mediados de la década de los 40,¹⁷ pero su aplicación tiene lugar con la crisis de sobreacumulación capitalista de los 70, su desarrollo en los 80, consolidación en los 90 y comienzo de su crisis en los inicios del siglo xxi. Se relaciona con el predominio del desarrollo capitalista en profundidad más que en extensión —aunque se extiende hacia el ex bloque

15 Tema que retoma Immanuel Wallerstein (1988) en estudios recientes sobre la universalización del modo de producción capitalista.

16 Concepto acuñado por el geógrafo marxista David Harvey en «El nuevo imperialismo. Acumulación por desposesión» (2004) y en Breve historia del neoliberalismo (2007).

17 Su origen en tanto conformación ideológica tiene su piedra fundacional en el libro *Camino de servidumbre*, de Friedrich Hayek (2005), publicado por primera vez en 1944. Para profundizar sobre la génesis del neoliberalismo véase Anderson, Therborn y Borón, 2003.

socialista — y el pasaje de mayores territorios sociales y geográficos a la subsunción real más que formal de dicho desarrollo.

Del neoliberalismo primitivo a la acumulación por desposesión

Tras el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno democráticamente electo del socialista Salvador Allende en Chile, llegaron también al gobierno para hacerse cargo de la política económica del país, los «Chicago Boys», quienes venían preparándose desde hacía casi veinte años mediante programas de entrenamiento de economistas de la Universidad Católica de Chile en la Universidad de Chicago, con Milton Friedman y Arnold Harberger. Formados en los valores de la economía liberal, iniciaron un proceso de contra-reformas económicas en Chile que pasaban por reducir el gasto fiscal «aligerando» el peso del Estado, reforma tributaria y reducción de impuestos, reversión de las nacionalizaciones y privatización de la Seguridad Social, y de sectores estratégicos de la economía: abriendo la minería del cobre a la empresa privada o permitiendo el libre ingreso de inversiones privadas y divisas, y reduciendo, además, los aranceles aduaneros y los controles a la fuga de capitales. Se apostó por crecer a partir de las exportaciones en lugar de la industrialización a partir de la sustitución de importaciones que promovía la keynesiana Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas.

A partir de la década de los 80, después del experimento de los Chicago Boys en Chile y su reproducción en Argentina, de la mano del ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, Alfredo Martínez de Hoz, en 1976, los gobiernos de las potencias imperialistas de los Estados Unidos e Inglaterra, conducidos por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, comenzaron a implementar duras políticas tendientes a regular¹⁸ el capital a favor de sus frac-

18 Lo que se suele nombrar como desregulación es, en realidad, más regulación, pero a favor de los grandes capitales.

ciones más concentradas (lo que incluyó las privatizaciones de empresas y servicios públicos), para lo cual consiguieron quebrar o debilitar las organizaciones obreras que se habían gestado o fortalecido en la «edad de oro» del capital (entre 1945 y 1975).

Sin embargo, en estos territorios centrales del capitalismo las políticas concentradoras no llegaron a alcanzar la dimensión arrasadora —dado que fue y es interés estratégico para el imperialismo mantener cierta estabilidad política en su centro—¹⁹ que tomarán luego en los territorios periféricos y dependientes del capitalismo, para lo cual el imperialismo impulsó y apoyó golpes militares afines a las fracciones dominantes locales, que comenzaron de inmediato a aplicar esas políticas. En estos territorios impusieron una suerte de «solución final» no solamente contra los crecientes movimientos revolucionarios de esas latitudes, sino contra la densa red de organización social que venía desarrollándose.

Las tácticas de guerra irregular contra las fuerzas revolucionarias, guerrilleras, que desarrolló el Estado francés en contra del Movimiento de Liberación Argelino fueron adoptadas y luego generalizadas por la Escuela de las Américas (del ejército de los Estados Unidos) hacia los militares alineados con el poder concentrado en territorio latinoamericano, para implantar las más sangrientas guerras contrainsurgentes. Allanar el territorio social para la posterior intensificación de la explotación y dominación, fue la función ejercida por las dictaduras militares latinoamericanas para dar paso a la del capital financiero bajo formas democráticas, más tarde.

La ofensiva privatizadora y desreguladora (o mejor dicho, re-reguladora) aplicada en los 80 en los Estados Unidos e Inglaterra, fue consensuada a escala internacional en el llamado

19 Aunque, según Naomi Klein, la relegitimación que ganó Thatcher con la victoria por las Malvinas le permitió luego de su reelección en el 83 aplicar la «terapia de shock» experimentada en Chile. (Klein, 2008)

«Consenso de Washington»²⁰ y luego generalizada como neoliberalismo.

Según explica David Harvey (2007), el neoliberalismo es una teoría de prácticas políticas y económicas que promueve un bienestar para el ser humano a partir del libre desarrollo de sus capacidades dentro de un marco institucional caracterizado por la propiedad privada y el libre mercado. El papel del Estado se limita a promover y custodiar ese marco de «libertades». En las áreas donde no existe mercado, como podrían ser el agua, la salud, educación o el medio ambiente, es decir bienes comunes no reducidos a la condición de mercancías, el Estado tiene la obligación de crearlo y una vez creado, intervenir lo menos posible en él. El proceso de implementación del neoliberalismo acarrea un proceso de «destrucción creativa» que viene a caracterizarse como «acumulación por desposesión», en tanto reactualización del proceso de acumulación originaria descrito por Marx sobre la génesis o prehistoria del capitalismo (1989).²¹ Según Harvey (2004), la acumulación por desposesión cuenta con cuatro características principales:

1. Privatización y mercantilización. Se abren nuevos campos a la acumulación del capital en territorios que hasta el

20 Concepto acuñado en 1989 para designar las políticas económicas que desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se proponían/imponían a los países de América Latina.

21 David Harvey señala que «una revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación “primitiva” u “originaria” a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de capital resulta muy pertinente, tal como lo han señalado recientemente muchos analistas. Dado que denominar “primitivo” u “originario” a un proceso en curso parece desacertado, en adelante voy a sustituir estos términos por el concepto de «acumulación por desposesión» (2004). Más adelante retomaremos el debate sobre este concepto, pero para conocer una parte sobre los conceptos de acumulación originaria y acumulación por desposesión. (Véase Composto y Pérez Roig, 2012).

momento no estaban mercantilizados o no ofrecían rentabilidad. Los servicios públicos (agua, transporte), el llamado Estado de Bienestar (educación, vivienda social, pensiones) o instituciones públicas como la universidad o las prisiones. Todas las luchas que consiguieron obligar al capital a hacer concesiones ven cómo se retrocede ante este modelo de acumulación

2. Financiarización. En su «Breve historia del neoliberalismo», David Harvey (2007) aporta datos de cómo las transacciones financieras en los mercados internacionales pasaron de 2 300 millones de dólares en 1983 hasta los 130 000 millones en 2001.²² Los mercados financieros son uno de los baluartes de la actividad redistributiva a través del fraude, la extorsión y la manipulación del crédito y valor de las acciones. Aquí también se produce la desposesión de, por ejemplo, los fondos de pensiones, que son sometidos a procesos de especulación.

3. Gestión y manipulación de la crisis. Mediante la gestión de la crisis y de la deuda son transferidos de la periferia al centro miles de millones de dólares. El «Consenso de Washington» y la utilización de la herramienta de las élites y del imperialismo llamado Fondo Monetario Internacional para, mediante sus políticas de ajuste estructural, mantener

22 «Esta radical transformación regresiva [del neoliberalismo] fue posible por el despliegue de una estrategia sistemática de acumulación originaria ex novo, sostenida sobre la base de la violencia extraeconómica, y dirigida a la privatización de activos y servicios públicos, la mercantilización de relaciones sociales, y el despojo de bienes comunes que la clase trabajadora había conquistado tras una serie de luchas históricas. Sin embargo, esta ola de “nuevos cercamientos” no solo apuntará a recuperar aquellos ámbitos donde el capital había tenido que ceder terreno como producto de la lucha de clases, sino a lograr su extensión hacia esferas de la vida antes impensadas —como, por ejemplo, el plasma de semillas y la biodiversidad en general—, a través de novedosos dispositivos de dominación y tecnologías de producción» (Composto y Pérez Roig, 2012). Según una encuesta realizada por el Banco Internacional de Pagos (BIS, por su sigla en inglés), el intercambio de monedas en el mercado de divisas ascendía en 2013 a 5,3 billones de dólares diarios (Ayala, 2013).

el despojo del sur, son parte importante de este nivel de la acumulación por desposesión.

4. Redistribuciones estatales. Una vez implementado el neoliberalismo, el Estado redistribuye la riqueza desde las clases bajas a las altas privatizando y recortando el gasto público, o reduciendo impuestos a las élites; por ejemplo, aumentando impuestos a los salarios y reduciéndoselos a los beneficios por inversiones.

Mientras tanto, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) junto a los países del campo socialista habían constituido la encarnación de la planificación económica por parte del Estado orientada a la distribución progresiva de la riqueza socialmente producida, con lo que habían obligado a adoptar su planificación y distribución también en los territorios centrales del capitalismo, para contrarrestar, por un lado, la propia crisis del capital, pero, sobre todo, la posibilidad de expansión de la influencia del campo socialista y las ideologías obreras y revolucionarias. Frente al derrumbe de esas experiencias, en el capitalismo esa orientación ya no tuvo razón de ser. Es decir, en la medida en que existía el campo socialista, el capital permitió la creación de los llamados «Estados de Bienestar» en el centro del sistema capitalista. Una vez que termina la Guerra fría y no existe la amenaza del bloque socialista, comienza su desmontaje, que se acrecienta a partir de la crisis de 2007-2008.

Es en ese momento de la caída del «socialismo real» que se consagra el retorno del discurso ideológico de la «mano invisible» del mercado como vencedor. Ese retorno del mito del liberalismo como ideología triunfante adoptará la denominación de neoliberalismo que, además, dejará muy pronto al desnudo la visibilidad de la mano que conduce al mercado mundializado: las grandes empresas transnacionales y el imperialismo yanqui.

La intensificación del carácter mundial que toman las relaciones capitalistas de producción e intercambio, ya objetivadas en leyes-tendencias del sistema por Marx y Engels, también fue posibilitada por la nueva revolución tecnológica e informática,²³ por los tratados de libre comercio (la quasi libre circulación de capitales constituye el andamiaje básico para favorecer esta mundialización) y el fortalecimiento del agente o sujeto conductor del imperialismo que es el capital financiero. Este último definido por Lenin como la fusión del capital industrial y el capital bancario, en *El imperialismo, fase superior del capitalismo* (1973).²⁴

En Nuestra América, los proyectos políticos que establecieron la dirección económica, política y cultural de nuestras sociedades en la década de los 90 y que fueron el corolario de la etapa abierta con, o durante, los gobiernos militares (en varios de los países de la región), impusieron, previa derrota de importantes movimientos populares (vía guerra contrainsurgente, terrorismo de Estado, desaparición forzada de personas, etc.), la realización cabal del interés de las oligarquías financieras.²⁵

El ciclo de la rebelión popular de los 90 —que analizaremos en el siguiente capítulo— se inscribió así en un período contrarrevolucionario o, más precisamente, sería la última fase de dicho período, que había comenzado con la derrota de diferentes proyectos y fuerzas revolucionarias (de liberación nacional y social) a mediados de los 70 (con diferencias de años en los distintos países). Ese período contrarrevolucionario incluyó otra fase de ascenso de masas y de grandes expectativas populares durante

23 Es objeto de debate si las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen una revolución o innovación tecnológica.

24 Sobre el título de esta obra y sus implicancias políticas véase Borón, 2013.

25 Usamos el concepto de oligarquía financiera en el sentido de personificación del capital más concentrado, cualquiera sea el ramo productivo en que se inserte, y que, habitualmente abarca diversos ramos.

los 80, con el retorno, en algunos casos, a los procedimientos electorales «democráticos» y la retirada de los gobiernos militares. Expectativas que incluían no solo la democratización de la elección de autoridades mediante el sufragio, sino la de los demás aspectos de la vida y que pronto se vieron frustradas.

Nos referimos a tendencias que abarcaron nuestro subcontinente pero no se dieron en cada uno de los países necesariamente. Por ejemplo, en Nicaragua la Revolución sandinista triunfaba en 1979, cuando ya en 1973 y 1976 se habían producido los golpes de Estado militares quizá más sangrientos, como fueron los de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, y hubo otros casos y ritmos diferentes que no incluyeron gobiernos militares, como México, en donde el neoliberalismo arribó —para quedarse— de la mano del gobierno constitucional de Miguel de La Madrid (1982-1988) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) heredero, incluso, de la Revolución de 1910.

En lo que pareció haber coincidencias sincrónicas fue en la aplicación de las políticas concentradoras y centralizadoras de las oligarquías financieras locales aliadas al capital transnacional, realizadas casi a coro por los distintos gobiernos, en casi todos nuestros países. Es decir, que las fracciones más concentradas del capital lograron subordinar a todas las demás fracciones burguesas y comandar el proceso de acumulación de capital, subordinando a la vez a los cuadros políticos y sociales que se harían cargo de los gobiernos nacionales y de los principales resortes de poder.

En rigor, la década de los 90 se inició con una renovada ofensiva neoliberal que generó fuertes repliegues de la lucha de masas, y que se desarrolló como ofensiva económica (privatizaciones, ajustes presupuestarios sobre educación, salud, vivienda y políticas sociales, flexibilización laboral, regulación económica a favor de

las fracciones más concentradas), ideológico-cultural (discurso del fin de las ideologías y de la historia —de la lucha de clases— frente a la caída de las URSS y el muro de Berlín, individualismo), y política (reformas estatales neoliberales, retiro del Estado de sus funciones sociales hasta el nivel del desamparo social, y sumisión a los centros financieros internacionales).

El corazón de estas políticas en los diversos territorios nacionales fueron los mismos, y no por casualidad, sino fruto de la política emanada del Consenso de Washington y trasladada a nuestros sumisos gobiernos por las embajadas estadounidenses o las misiones periódicas de control del FMI y BM.

En algunos territorios, por ejemplo Argentina, esas políticas fueron implementadas de forma cabal, como las privatizaciones (cuasi regalos)²⁶ de la casi totalidad de servicios públicos, empresas estatales, y fuentes de recursos o bienes naturales y sociales; en cambio en otros, como Bolivia, se implementaron las «capitalizaciones» de las empresas públicas que, aunque no se privatizaban del todo, cedían el control político a las empresas transnacionales, y también la mayor parte de las «ganancias».

El discurso de la supuesta ineficacia de dichas empresas y servicios públicos —lo cual en ocasiones era verdad por los boicots y saqueos a los que eran sometidos por los gobiernos de turno— intentaba justificar una «imprescindible» modernización, solamente « posible» mediante el control del capital transnacional y su vinculación a la economía mundial. Las consecuencias sociales, aunque no son patrimonio de los gobiernos neoliberales, sino que tienen su historia de entregas y traiciones, fueron desastrosas, y empeoraron considerablemente las condiciones de vida

26 Véanse los trabajos de Daniel Azpiazu (2005) que ilustran por qué puede definirse así a las privatizaciones, la mayoría de ellas realizadas bajo el Plan Brady, con bonos devaluados de la deuda externa, con participación de las propias agencias mediadoras y con procedimientos y regulaciones hechas a la medida de las empresas transnacionales compradoras y socias de los grandes grupos económicos locales.

y de trabajo de las mayorías populares. Tomando los datos que nos ofrece un documento técnico del Banco Mundial de 1996, titulado «La pobreza y la distribución de los ingresos en América Latina» (Psacharopoulos et al., 1996), podemos observar que la pobreza extrema o absoluta no solo no bajó sino que aumentó entre 1980 y 1989 de 51,1% a 54% en Bolivia, de 34,1% a 40,9% en Brasil o de 4% a 12,6% en Venezuela.

La doctrina del shock como disciplinamiento social

Dichas políticas, como hemos dicho, pudieron ser implementadas en virtud de un fuerte proceso de disciplinamiento social. Este se enmarca en lo que Naomi Klein define como «doctrina del shock» (2008). Tal capitalismo del desastre, como lo denomina la autora, consiste en aprovechar momentos de crisis y de desastres —bien sean provocados por las personas, como una invasión militar; o por la naturaleza, como un huracán o tsunami— para desmantelar las instituciones y bienes públicos, convirtiendo así las crisis en «oportunidades de mercado».

Uno de sus principales teóricos es Milton Friedman, el ideólogo de los Chicago Boys. Por poner un ejemplo, cuando el huracán Katrina destruyó Nueva Orleans, Friedman propuso en un artículo en The Wall Street Journal que todo el dinero destinado a reconstruir las escuelas destruidas se diese en forma de cheques a las familias afectadas para que estas inscribiesen a sus hijos en escuelas privadas, que a su vez serían subvencionadas para que acogiesen a estos niños (cit. en Klein, 2008). La desaparición de las escuelas públicas ya sucedió en Chile cuando Pinochet permitió lo que Friedman llamó «tratamiento de choque económico» y se implementó el sistema de cheques escolares.

Después de treinta años de ensayo, la doctrina del shock fue implementada a todos los niveles en el Irak ocupado por los Estados Unidos. Primero se implementó la teoría militar del «Shock and

Awe» o estrategia de dominio rápido, demostraciones rápidas y contundentes de fuerza para confundir al enemigo (no hay más que revisitar el video del primer ataque militar contra Bagdad) (Youtube, 2003). Al «shock y pavor» le siguió el shock económico, privatizaciones, liberación completa del mercado, reducción del peso del Estado, impuesto de tramo fijo de 15%. Y si quedaba algún tipo de oposición a estas políticas, el shock literal en forma de torturas y electroshocks se dirigía contra cualquier tipo de resistencia. Naomi Klein, en *La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre*, explica perfectamente cuál es el papel del gobierno del Estado asignado en esta etapa del neoliberalismo:

El papel del gobierno en esta guerra sin fin ya no es el de un gestor que se ocupa de una red de contratistas, sino el de un inversor capitalista de recursos financieros sin límite que proporciona el capital inicial para la creación del complejo empresarial y después se convierte en el principal cliente de sus nuevos servicios. (2008)

De nuevo el capitalismo logra generar mercado donde antes no había, el de la reconstrucción de zonas devastadas, no importa si es por invasiones militares o desastres naturales.

Los nuevos mecanismos de disciplinamiento, que se dieron con mayor intensidad en algunos países, fueron: el impacto de las hiperinflaciones (virtual desaparición del dinero que es, ni más ni menos, la principal mediación de las relaciones sociales en el capitalismo), el miedo a la participación social y política dejadas por el terrorismo de Estado, y la creciente desocupación, pobreza y profundización de la competencia y división entre las y los trabajadores, como expresión del crecimiento del ejército industrial de reserva. A lo que hay que sumar la propia desmoralización de partes del pueblo frente a la caída del llamado socialismo real y del quiebre de vastas organizaciones políticas de izquierda en nuestros países.

Sin embargo, la fuerte memoria histórica de luchas no tardará en emerger desde lo profundo de nuestros pueblos y se irá desarrollando un proceso de resistencia, en primer lugar, a las consecuencias devastadoras de esas políticas neoliberales en la región.

Así, en un contexto de fuerte repliegue de masas, de aislamiento de las fracciones sociales del proletariado que resistían a las privatizaciones de los servicios públicos y recursos naturales,²⁷ del avance de la derecha (en varios casos de la mano de identidades políticas que habían personificado en otras épocas ideales de justicia social), de la caída de la revolución nicaragüense; en momentos en que nuestro único faro era Cuba, hace su irrupción el 1 de enero de 1994 en el sureste mexicano, desde la selva Lacandona, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln) que se constituirá en potente tracción ideológica del renacer de las resistencias y luchas sociales y la apertura de un nuevo ciclo de luchas en América Latina.

Paulatinamente, las luchas y resistencias que venían librando distintas fracciones sociales en forma aislada irán recuperando la iniciativa, tejiendo alianzas y «apareciendo» en el horizonte en diferentes puntos del territorio norteamericano a partir de la segunda mitad de la década de los 90. En general, se desarrollarán en torno a ejes defensivos y aunque —a contramano de varios discursos— continúan teniendo fuerte presencia las huelgas y hechos producidos por las y los trabajadores en activo,²⁸ muchos de los principales enfrentamientos serán protagonizados

27 Aunque volveremos sobre estos temas en próximos capítulos, aclaramos aquí que también se dieron hechos masivos, levantamientos de gente oprimida, que se han conceptualizado como motines (como el Caracazo, en 1989; y el de Santiago del Estero, Argentina, en diciembre de 1993) o revueltas por el hambre y la desesperación (saqueos en Argentina 1989-90). Véase Iñigo Carrera et al., 1995.

28 Véanse, por ejemplo, los trabajos del Programa de Investigación del Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) y de su director Nicolás Iñigo Carrera al respecto, en Argentina, país con una tradición de lucha y un proletariado importante.

por fracciones de trabajadores desocupados, campesinos y de pueblos originarios con alta disposición al combate callejero contra los instrumentos armados de los gobiernos (con disposición al enfrentamiento armado en el caso de México).²⁹

Los conflictos sociales se agudizaron en el interior o la periferia de los centros capitalistas de nuestros países, desarrollando un proceso de acumulación de fuerza y experiencia de lucha y organización de distintas fracciones sociales que componen el pueblo, que derivará o bien en la conformación de movimientos nacionales de protesta, o en procesos insurreccionales de masas en varios países, que, a su vez, alguno de ellos desembocará en gobiernos reformistas, progresistas o de izquierda, lo que analizaremos en próximos capítulos.

El imperialismo, fase superior del capitalismo

Pero veamos un poco más en profundidad cómo se reactualizan y qué caminos toman los mecanismos de dominación imperialista, teniendo en cuenta que el imperialismo es la forma que toma la ofensiva del capital a partir de finales del siglo XIX según señalara Lenin en su ya clásico estudio.

El capitalismo en la etapa neoliberal, una vez derrotado su archienemigo comunista, cambiará su hipótesis de conflicto hacia la periferia, sobre todo hacia aquellos países poseedores de recursos energéticos, básicos para la puesta en movimiento de los medios de producción transnacionalizados. Además, según algunos autores, al suavizarse la disputa interimperialista por el control de mercados y territorios, por un tiempo bajo la supremacía (indiscutida por los siguientes casi veinte años) de los Estados Unidos, se habría girado a la gestión asociada y subordinada de las principales potencias al imperialismo yanqui; al menos hasta

29 También es el caso de las experiencias ininterrumpidas de las guerrillas insurgentes en Colombia, y algunas en Perú.

la creciente multipolaridad que se profundizaría a partir de la crisis de 2008,³⁰ con el fortalecimiento de Rusia y China, cuya presencia se hará notar fuertemente en nuestra región. Por el lado de la Unión Europea continúan con su papel subordinado en su alianza con los Estados Unidos.

La política imperialista se inscribe en lo que Ellen Meiksins Wood (2005) denomina como la perspectiva de «guerra sin fin», no en el sentido de guerra constante, sino de posibilidad sin fin de la guerra, para mantener a raya a los posibles competidores de la hegemonía de los Estados Unidos. Alex Callinicos (2009) agrega que el imperialismo de «posguerra fría» conlleva a la «regionalización», antes que a la «globalización».

En América Latina, en concreto, los mecanismos imperialistas giraron en torno a las llamadas reformas neoliberales emanadas del consenso de Washington (en sus primeros momentos establecidas con el acuerdo de vastas fracciones del pueblo, sobre todo de las pequeñas y medianas burguesías, allanado el camino por los mecanismos de disciplinamiento social antes mencionados), impulsando una política de fuerte restricción y monitoreo fiscal orientado al pago de las llamadas deudas externas, la fuerte injerencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en las definiciones políticas, económicas y educativas internas, el impulso del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), y más tarde el Plan Puebla Panamá, el avance de la instalación de bases militares en territorio latinoamericano,³¹ y sus «intervenciones humanitarias», como el Plan Colombia. Políticas todas tendientes a afianzar la hegemonía

30 El cuestionamiento de la primacía de los Estados Unidos a nivel mundial, hasta por sus propios intelectuales orgánicos o dirigentes, lo pone de relevancia Atilio Borón tomando las palabras de Zbigniew Brzezinski (Borón, 2015c).

31 Sobre las nuevas bases y destacamentos militares a partir de 2009 en Colombia, Panamá, Costa Rica y Centroamérica en general, Perú, Chile y la reactivación de la IV flota que había sido desactivada en 1950, véase Seoane, Taddei y Algranati (2013: 92).

imperialista en la región,³² al tiempo que desplegaban la violencia directa en otros territorios que necesitaban subordinar por sus riquezas naturales y posición geopolítica, como en Irak.

El impulso de los Estados Unidos a la firma de tratados de libre comercio de manera bilateral y lo que pergeñaban como su coronación a escala continental —el Alca— para sellar la posición de Nuestra América como su «patio trasero», empalmaban con las imperiosas necesidades de sus empresas transnacionales de bajar costos aprovechando las «ventajas comparativas» que ofrecían cada uno de nuestros territorios. Lo que fue plasmado con éxito en México, a partir de la entrada en vigor del TLC, el 1 de enero de 1994, día del levantamiento zapatista. La desastrosa realidad del México de las maquiladoras, la narco-corrupción privada y estatal y las desapariciones forzadas de personas tiene sin duda un hito (si no su origen) en la firma de dicho acuerdo. México también puso en marcha un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en el año 2000, el mismo año que firmó uno con Israel.

Las iniciativas imperialistas locales e internacionales avanzaban, pero cada vez con más obstáculos puestos por las luchas populares, al tiempo que también se irían produciendo resquebrajamientos dentro de las clases dominantes en cada país. Estas disputas interburguesas se expresaron y profundizaron a partir de mediados de los 90 con las llamadas crisis del Tequila (México), la repercusión que generaron las crisis de Rusia y de los llamados «tigres asiáticos» —como consecuencia de la cada vez mayor dependencia externa—, en Brasil («efecto samba») y en Argentina («efecto tango»).

La crisis por arriba abrirá brechas por donde crecerán las luchas de los de abajo, que más tarde serán, en parte, acompañadas por fracciones del capital desplazadas por la oligarquía

32 Para ver en profundidad todas las estrategias imperialistas en la región, véase Borón, 2012.

financiera. De esta manera, el imperialismo deja de ser una entidad abstracta o entelequia propagandizada como pieza de museo, como pretendieron numerosos analistas y académicos, sino que parece comenzar a ser percibido de nuevo como una amenaza real y concreta por los pueblos, que produjeron hechos de rebeldía en contra de sus personificaciones, como el FMI y el BM (Cotarelo, 2008).

Como consecuencia de la nueva correlación de fuerzas y reconfiguración de las alianzas sociales, surgidas tanto a partir de las crisis y disputas interburguesas, como de las luchas y procesos insurreccionales desde abajo, el nuevo escenario en Nuestra América muestra dos grandes líneas geopolíticas: por un lado la persistencia de la ofensiva neoliberal gestionada sin mayores cuestionamientos por algunos gobiernos que han alineado a sus países a la Alianza del Pacífico. Esta, conformada actualmente por Chile, Colombia, México y Perú (y habrá que ver qué pasa con Argentina luego del cambio de gobierno nacional en diciembre de 2015), constituye el intento de reciclaje de la fracasada Alca y, a su vez, intenta levantar un muro económico frente a la creciente relación comercial de nuevas potencias mundiales, como Rusia y China (véase Arkonada, 2015), con la otra parte del escenario latinoamericano constituido por las formaciones nacionales que atraviesan procesos reformistas o revolucionarios, o que, al menos, cuestionan aristas de las políticas de aguda concentración de la riqueza, adoptando posturas más autónomas o soberanas en relación con el imperialismo estadounidense.

Dado que en este último territorio social —que, aun con sus diferencias, ha mostrado grados de mayor soberanía política, económica y cultural— la correlación de fuerzas no le permite al imperialismo apelar a las viejas tácticas contrainsurgentes, o al clásico golpe militar financiado y orquestado por la Central Intelligence Agency (CIA), acuden a «golpes blandos» o urdidos desde una

parte de la propia institucionalidad burguesa apropiada por las fracciones conservadoras locales. Cuentan con la aguda, masiva, tenaz, persistente y biopenetrante complicidad y apoyo de las corporaciones mediáticas y grupos económicos dominantes que, paradójicamente, pueden actuar libremente, gracias a las formas políticas de la democracia liberal que adoptan estos procesos de cambio (como los golpes exitosos para las respectivas oligarquías en Honduras y en Paraguay). Mucho más libremente que cuando, bajo esas mismas formas políticas, los pueblos y sus expresiones sociales y políticas protestaban o luchaban contra las medidas neoliberales en los 90 y les caían las balas de la represión policial.

Ese fomento, apoyo y financiamiento imperialistas están claramente documentado y disponible en variados trabajos, artículos, denuncias, además de los cables filtrados por Wikileaks (véase también O'Donnell, 2011; Becerra y Lacunza, 2012; Main y Beeton, 2015).

También apelan al golpe clásico, como lo han hecho en Venezuela en 2002, superado por las masas populares en defensa de su revolución, o combinados, como en Bolivia en 2008, o el golpe policial de 2010 en Ecuador. Pero también lo hacen mediante feroces boicots comerciales, desabastecimientos, comercio clandestino, fuga de capitales, corridas cambiarias, presión inflacionaria, el acoso indirecto de los llamados «fondos buitres», con los cuales intentan ahogar económicamente a pueblos en los que han perdido su hegemonía y se ha logrado grandes avances en la construcción de otro bloque histórico. Por otra parte, en los últimos tiempos apelan, además, al paramilitarismo.

Estos mecanismos imperialistas más sofisticados se reciclan permanentemente desde las usinas del poder imperial, que tiene bases insertas en parte de la propia institucionalidad local, como, por ejemplo, del poder judicial, que no se elige por el voto popular y que muestra la perpetuidad de expresiones del capital con-

centrado, y en la guerra mediática que ya hemos mencionado y que por momentos —montada en errores propios y ajenos— logra mellar el consenso de la base popular de los nuevos proyectos.

Estas tácticas, entre otras, se enmarcan en lo que el imperio ha definido como la Guerra de Cuarta Generación, que se centra en la estrategia de la guerra psicológica.³³ La clase dominante, que también ha leído a Carlos Marx y a Gramsci, además de utilizar esta estratégica arma de la crítica (que no es la crítica de la praxis revolucionaria, sino una usina de mentiras y manipulaciones), se asegura su dominio con la crítica de las armas, reflotando —valga la redundancia— la IV Flota de la Armada de los Estados Unidos³⁴ para desplegar su presencia en el Caribe y Sudamérica. A pesar, o precisamente por encontrarnos en un momento histórico de declive de la hegemonía imperial, que transita hacia una fase de dominación violenta (Arkonada, 2015b), América Latina y el Caribe, territorios estratégicos por su posición geográfica y riquezas naturales, siguen estando en la mira imperial.

El agotamiento de la alianza social que condujo la aplicación de las políticas neoliberales a principios de 2000, y el viraje de una parte de las burguesías latinoamericanas hacia alianzas con partes del pueblo en los países que, dentro de este nuevo mapa norteamericano, emprendieron el cambio en el rumbo de las políticas económicas, generaron condiciones para

33 Oscar Rotundo, en octubre de 2013, antes de la intensificación del ataque de la oligarquía venezolana y sus bases sociales de la pequeña burguesía estudiantil a principios de 2014, ya señalaba que «la Guerra Psicológica Mediática es el arma estratégica dominante de la 4GW» y describe muy bien la teoría y la aplicación paso a paso de la Guerra de Cuarta Generación. Véanse también los trabajos de Silvina Romano sobre la guerra psicológica en el caso de Guatemala.

34 La IV flota fue creada en 1943 durante la II Guerra Mundial, y desactivada en 1950 para posteriormente ser puesta en marcha de nuevo en 2008, con sede en Florida, desde donde actúa el Comando Sur y del que depende. (BBC Mundo, 2008).

que la crisis capitalista de 2008 no afectara demasiado. En comparación al propio centro del sistema, el crecimiento, por el contrario, no se interrumpió —aunque disminuyó su ritmo— y las políticas redistributivas siguieron su curso. Lo que generó un sostenimiento del nivel de consumo que, sumado a la renacionalización de las empresas de servicios públicos y de los bienes comunes naturales gestionados por el Estado, dinamizaron las economías nacionales.

Sin embargo, estas economías comienzan a mostrar sus límites desde hace un par de años, sobre todo porque no se ha producido una desconexión —como aconsejaban algunos teóricos del Sur como Samir Amin (1998)— sino un desarrollo económico capitalista, con mayores grados de soberanía y más redistribución de la riqueza, con hilillos de socialismo en algunos territorios, pero que no podría, en las actuales correlaciones de fuerzas internacionales, desconectarse de un capitalismo cada vez más multipolar pero también cada vez más transnacionalizado y mundializado. Ya volveremos sobre estas cuestiones desde el punto de vista de su posibilidad como proyectos de desarrollo o sus límites infranqueables.

Dimensiones de la crisis capitalista actual

La crisis capitalista que se manifiesta abiertamente en 2008 es resultado de desequilibrios acumulados por el patrón de acumulación neoliberal de los últimos treinta años, centrado en privatizaciones, apertura y cambios en la regulación. Distintos autores coinciden en señalar que no se trata solo de una crisis coyuntural (aunque muestre una dimensión tal) sino que es sistémica. Claudio Katz (2010) explica que tal crisis tuvo y tiene tres dimensiones: la primera es coyuntural y está dada por el estallido financiero producido por la hipertrofia y el descontrol financiero. Es una crisis de sobreacumulación y especulación financiera, pero a diferencia de

otras, afecta a los centros capitalistas, generando un alto impacto recesivo. Por supuesto, como ya es historia tristemente conocida, las deudas de los grandes bancos fueron socializadas y financiadas con fondos públicos, fruto del trabajo colectivo de los pueblos. Este alivio para Wall Street posibilitó su rápida recuperación y la reorientación de las burbujas especulativas hacia, por ejemplo, las materias primas o commodities.

La segunda dimensión que refiere Katz es el trasfondo productivo de la crisis, que se traduce en un nivel de sobreproducción intenso (siempre en relación no con las necesidades humanas sino con las de reproducción del capital), fruto de la competencia ciega por el beneficio entre grandes transnacionales. La diferencia con crisis de sobreproducción anteriores es que tiene una escala global, no está restringida a un país, sino que se verifica en todo el planeta, resultado de la acción de las empresas transnacionales en el mercado mundial. La oferta se ha desgajado de la demanda y hay un sobrante de productos a escala mundial. Si bien a partir de 2009 se aumenta el gasto público para limitar la recesión y frenar la caída del PIB, no es suficiente para la reactivación del crédito, ni del consumo, ni de la inversión. Restringida esta última, además, por las políticas de ajuste —que se habían aplicado en los 90 en América Latina y que generaron efectos desastrosos de pobreza y desempleo— que impulsan, a los fines de bajar el déficit fiscal y pagarles a los banqueros acreedores de la deuda pública, que adquirieron los Estados para, a su vez, socorrer a la banca privada. Las crisis y posteriores políticas de ajuste en España y en Grecia impulsadas por la troika europea, generaría las condiciones para el surgimiento de correlatos políticos de las protestas populares que se gestaron como importantes herramientas con capacidad de disputa, como en el caso de Grecia, que lograron llegar al gobierno, aunque luego desistan de su plan anti-reformas neoliberales.

Por último, la tercera dimensión de la crisis que describe Katz,

remite a las desproporcionalidades globales que se expresan en la existencia de un polo de sobreconsumo, subahorro y subinversión en los Estados Unidos, y otro polo en China de bajo consumo, sobreahorro y sobreinversión. Lo que genera un enorme déficit comercial en los Estados Unidos y una multitud de capitales en la región asiática.

Ahora bien, como nos demuestra la experiencia histórica y la acumulación de conocimiento teórico al respecto, concluye el autor, el capitalismo solo puede salir de las crisis con ajustes que depuran empresas y desvalorizan o destruyen capitales y generan gran sufrimiento popular, y eso es lo que se ha vivido y se sigue viviendo en gran parte de Europa. La situación se agrava desde el plano de la realización de la plusvalía, con la baja del nivel del consumo-demanda ya que los bajos salarios, flexibilización, desempleo, pobreza, la estrangulan aún más, lo que a su vez se contrarresta con un mayor consumo improductivo de sectores medios.

En el plano de la valorización del capital, a medida que se generalizan las nuevas tecnologías, se agotan las plusvalías extraordinarias de algunas empresas, se agudiza la competencia, lo que impacta en la tasa de ganancia. Y en la medida en que hay procesos más automatizados de producción, disminuye la gravitación porcentual del trabajo vivo, y decrece la plusvalía en que se sustenta el beneficio capitalista (que únicamente sale del trabajo vivo). Así, explica Katz, el propio neoliberalismo ha afectado la tasa de ganancia en el largo plazo, aumentando la composición orgánica del capital. Lo que, en lo inmediato, intenta ser compensado con el aumento en la tasa de explotación.

Por último, y en esto coinciden también numerosos autores y analistas, la crisis presenta una dimensión histórica en tanto, además de sus contradicciones intrínsecas que constituyen tendencias de largo plazo, se suma en la actualidad el riesgo

mismo de la supervivencia del planeta y las especies que lo habitamos, por la destrucción sistemática y agravada que produce el capitalismo en su avance a escala mundial. Nos referimos a la crisis climática, el calentamiento global, la emisión de gases, entre otros, para lo cual se han ensayado algunos tímidos intentos de frenarlos, boicoteados sistemáticamente por la primera potencia contaminante mundial: los Estados Unidos, y algunos otros intentos mucho más genuinos —como la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra celebrada en Cochabamba, Bolivia, en abril de 2010— que se están implementando en algunos territorios, pero que no generan el impacto necesario si los gigantes intoxicadores de la vida no modifican sus prácticas, lo cual es intrínsecamente incompatible con las lógicas de acumulación y competencia capitalistas.³⁵ Y si bien la última COP21 celebrada en París entre noviembre y diciembre de 2015 fue un tímid intento para alcanzar acuerdos en torno a las emisiones de carbono a la atmósfera, estos acuerdos descansan sobre todo en compromisos voluntarios de los países. Por otro lado, las salidas neoliberales a la crisis climática como la economía verde y los bonos de carbono solo profundizan la mercantilización de la naturaleza, nuestro ambiente, y la atmósfera. En esta dimensión histórica se agregarían la crisis energética y alimentaria.³⁶

La crisis de 2008 generó oportunidades enormes de agudizar

35 Para historizar los diferentes acuerdos ensayados y boicoteados es interesante ver el último capítulo de Seoane, Taddei y Algranati, 2013.

36 Sobre la dimensión ambiental de la crisis, Katz (2010) señala que «el desastre ecológico tiene un alcance comparable a las guerras mundiales e ilustra como el capitalismo funciona generando cataclismos periódicos, que desvalorizan o destruyen el capital sobrante». Pero «la ausencia de conflagraciones inter-imperialistas ha dejado un vacío en el aniquilamiento de recursos que tradicionalmente utilizó el capital para oxigenar su reproducción», y «la reorganización destructiva del medio ambiente no aporta un remedio equivalente a la depuración de capitales sobrantes, mercancías excedentes y tecnologías obsoletas».

la concentración y centralización del capital a escala mundial, mediante la profundización de la mundialización capitalista, permitida por las innovaciones (o revoluciones) tecnológicas e informáticas, la extensión de la frontera capitalista, su desarrollo en profundidad, con el tendal de población sobrante (como ya mostrara Marx como tendencia histórica y de largo plazo del capital). Al mismo tiempo la integración de los mercados, con el altísimo grado de ensamblaje de productos y compañías, imposibilitaría cualquier salida similar a la proteccionista de la crisis de los 30.

En palabras de Klein (2009) se realizó una transferencia de proporciones incalculables, desde el sector público, de la mano del gobierno que recauda, hacia las empresas e individuos más ricos del mundo, los mismos que son responsables de la crisis.

El periodista del diario Página /12, de Buenos Aires, Tomás Lukin, cita una reciente investigación que da cuenta que la resolución de la crisis en los Estados Unidos generó una agudización a niveles históricos de la concentración de capital y su contracara de empobrecimiento:

la magnitud de la concentración del crecimiento económico fue estimada por Pavlina Tcherneva, investigadora del Levy Economics Institute del Bard College: cada 100 dólares adicionales generados luego de la crisis, 116 dólares fueron apropiados por el 10% más rico de la población. El absurdo resultado es posible porque el 90% restante de los estadounidenses registró una reducción en su nivel de ingreso. Ese proceso constituye la mayor transferencia de ingresos hacia los súper ricos de la historia norteamericana. (2015)

Lo mismo sucede en América Latina. Según una nota del diario El País (Granados, 2015), para 2019, el mercado de artículos de lujo en la región llegará a los 25 640 millones de euros, lo que significará un crecimiento de 88,4% respecto a 2014, según

datos de la consultora Euromonitor. El repunte será superior al que se tendrá en Asia, los Estados Unidos y Europa.

En medio de este panorama, se desarrollan en Nuestra América experiencias que tienden a una mayor soberanía. En un desafío histórico, se aprovechan ciertas ventajas comparativas, que nos ha otorgado nuestra tradicional, colonial y/o dependiente inserción en la división internacional del trabajo, como el aumento de los precios de las materias primas o commodities, con el correlato del hambre de millones de personas en otras latitudes. Pero al contrario de la apariencia de desacople que mostró nuestra región durante esta última crisis capitalista en curso, la hipótesis que trabajan Seoane, Taddei y Algranati (2013) señala que la crisis global del capitalismo de 2008

Se expresó regionalmente y en el sur del mundo como profundización y extensión del modelo extractivo exportador; o lo que es lo mismo, como intensificación de la acumulación por despojo en un nuevo ciclo de mercantilización y apropiación privada de los bienes naturales. Se trata así de una verdadera ofensiva extractivista como expresión regional de la crisis global.

Y ello explica, para los autores, el ciclo de crecimiento que atravesó la región a partir de 2003,³⁷ que estaría asociado a la consolidación y profundización del modelo extractivo exportador, cuyas bases habían sido sentadas en las décadas precedentes, como nueva ofensiva imperialista. Aunque en aquellos países que adoptan un esquema económico neodesarrollista o bien en lo que denominan procesos constituyentes (ambos considerados como grupo de países progresistas) utilicen esos mayores ingresos pro-

37 Según el informe de la Cepal de 2008, desde 2003 hubo seis años seguidos de incremento del PIB regional, la desocupación regional en 2008 (7,5%) había disminuido más de 3 puntos la tasa observada a comienzos de la década, y hubo también una disminución entre 2002 y 2007 de más de 9 puntos del porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza (Seoane et al., 2013).

venientes del crecimiento para redistribuir, más o menos según el caso, la riqueza, a diferencia de aquellos países que continúan por la clara senda del neoliberalismo.

Si en la conceptualización de la fase neoliberal de acumulación por desposesión, la violencia extraeconómica desempeña un papel central, y en nuestra región en particular, según los autores antes mencionados, está asociada estructuralmente al extractivismo, nos preguntamos ¿cuándo no ha sido así en la historia del capitalismo? Si bien hubo breves interregnos mediados por las correlaciones de fuerzas políticas internacionales (tal vez algunos momentos entre 1945 y 1975, con muchas excepciones), se sabe, desde que fue desentrañado en su lógica de funcionamiento con todo rigor por la corriente del materialismo histórico, que el capitalismo es desposesión y violencia.

La acumulación por desposesión se consolida en nuestra región claramente con la ofensiva neoliberal de los 90 y el modelo extractivista exportador, con sus precedentes desde mediados de los 70, sobre todo con las privatizaciones y el tremendo avance en la mercantilización de los bienes públicos y naturales. Pero no nos olvidemos que en los comienzos o consolidación de las formaciones económicas capitalistas esas altas y riesgosas inversiones para la explotación de los recursos energéticos, naturales y puesta en marcha de los servicios e infraestructuras funcionales al desarrollo capitalista, tanto en el centro (desde la revolución industrial, la extensión de los ferrocarriles, el carbón) como en la periferia (inversión de los Estados de países centrales en ferrocarriles, puertos, bancos, etc.) no podían ser realizadas sino por los Estados en tanto capitalistas colectivos.

El viraje de la dirección del desarrollo capitalista a partir de la crisis de los 70, de su desarrollo en extensión a uno predominantemente en profundidad, asociado a una fuerte mundialización, genera la necesidad de los oligopolios trans-

nacionales de avanzar directamente sobre el control de las empresas estatales vinculadas al desarrollo capitalista nacional, local, ligadas a grupos económicos concentrados locales, que antes se beneficiaban de esos recursos o de ser proveedores o contratistas de esas empresas estatales. Ello, junto al cambio de las relaciones de fuerzas políticas internacionales que se da con la caída del campo socialista, permite avanzar sobre esos recursos y bienes comunes.

Más tarde, como parte de la actual fase capitalista en nuestra región, a partir del nuevo cambio de las relaciones de fuerza políticas dentro de algunos de nuestros países, y el viraje hacia gobiernos progresistas o de izquierda, el Estado retomará nuevamente la iniciativa y avanzará sobre esos capitales privados usufructuadores de los bienes comunes. En algunos casos, lisa y llanamente, para rescatar a esas empresas de la quiebra y vaciamiento a que fueron sometidas por las transnacionales y, en otros, como eje de una nueva política estatal soberana. Y en todos los casos como fuentes de recursos para el aumento de las políticas sociales y/o de redistribución de la riqueza.

Lo que algunos autores denominan como el modelo extractivista exportador o extractivismo, se suele asociar a la primera década de este milenio, que coincide con el ascenso de varios gobiernos populares en la región. Lo que conlleva dificultades y desafíos que serán motivo de otro capítulo. De todas maneras, esta renovada ofensiva imperialista-extractivista a partir de 2003, no sería nueva si se tiene en cuenta la ofensiva del capital luego de la caída del campo socialista en los 90 con el auge del neoliberalismo y sus políticas de privatizaciones que posibilitó el enorme avance del capital privado, sobre los bienes sociales y naturales.

Por el contrario, este nuevo avance del Estado sobre los bienes comunes, aun con el capital privado aprovechando cada resqui-

cio que encuentra, nos deja planteado un debate —que abordaremos en próximos capítulos— acerca de la caracterización de los nuevos proyectos norteamericanos como capitalismo de Estado o Estados de transición.

La caracterización de la crisis capitalista actual como sistémica, empalma con el debate acerca de si nos encontramos ante la crisis del capitalismo o el capitalismo en crisis (estructural, terminal y senil según la definición de Samir Amin (2003).

El capitalismo en su fase de descomposición

Esta idea refiere a que el capitalismo, sistema que nos engloba y opriime planetariamente, se encuentra en su fase de descomposición. No solamente porque, hace tiempo, han entrado en contradicción el desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones de producción, que de ser su palanca se convirtieron en su freno (en el sentido de la potencialidad histórica que tienen de resolver los problemas de la humanidad y del planeta y no lo hacen, sino todo lo contrario) o desarrollo desquiciado, sino porque, como lo explica Nicolás Iñigo Carrera, en las últimas décadas el capitalismo ha dado muestras de la incapacidad para garantizar la reproducción de la vida de un volumen importante de la población, en condiciones consideradas socialmente «normales». El desarrollo capitalista en esta etapa destruye más relaciones productivas que las que construye y predomina la repulsión de población obrera por sobre su atracción a la producción, y no como movimiento meramente coyuntural, sino orgánico. Aunque una parte de dicha población pueda ser reincorporada cíclicamente a la actividad productiva, tendencialmente el margen es cada vez menor. Esto no debe confundirse con la noción de «exclusión del sistema» tan de moda en la academia en los años 90, ya que esta población, sobrante para el capital, actúa —aún en su heterogénea forma y en distintas escalas—

como ejército industrial de reserva que, en su conjunto, presiona al de trabajadores activos hacia la baja de salarios o diversos mecanismos que apuntan al aumento de las tasas de explotación o de extracción de plusvalía. Por eso son parte del sistema y desempeñan una función vital para la acumulación de capital.

A su vez, debe tenerse en cuenta que la descomposición puede adquirir diferentes ritmos y grados en las diversas regiones, incluso puede no haber comenzado en algunas, pero sí es ya un rasgo global del sistema.

De allí la caracterización del momento, más allá de los intentos por frenar la tendencia y paliar sus efectos, y de las ofensivas imperialistas que siempre apuntan a retardar el agotamiento del sistema, como de descomposición capitalista. La expansión del capitalismo es también su descomposición, claramente manifiesta en el crecimiento de una población sobrante para las necesidades del capital. Pero descomposición no es sinónimo de desaparición ni de caída: la descomposición de una forma de organización social remite a la dificultad de su reproducción en las relaciones que le son propias, y puede durar todavía siglos (Iñigo Carrera, 2010).

La idea de descomposición no aparece claramente en los diferentes autores, pero sí la idea de crisis como sobrepasando los niveles normales de crisis capitalistas, más bien como «crisis de la civilización dominante» o, como hemos mencionado de Samir Amin, capitalismo senil, o en referencia a la crisis, decadencia o incluso descomposición de la hegemonía imperial estadounidense hacia un ciclo de dominación en el que prima más la violencia que la seducción.³⁸

Por otra parte, la exacerbación y los ribetes catastróficos que adopta el riesgo climático y ambiental en la actualidad, a diferencia de crisis capitalistas anteriores, conlleva la posibilidad de

38 Estas conclusiones fueron fruto de un seminario interno del PIMSA durante 2013 y 2014.

la descomposición no solo del sistema capitalista sino del mundo que habitamos, y con él de la humanidad y las diversas especies de vida. En palabras de François Chesnais: «en todo caso habría que decir que ese capitalismo “agonizante” arrastra a la humanidad y la civilización en su agonía».

III. Resistencias al neoliberalismo desde el campo popular

En el capítulo anterior hemos analizado las principales características que asume el capitalismo y, particularmente, hemos revisado las formas en que se impuso la dinámica de acumulación de capital en Nuestramérica desde mediados de los años 70 y el escenario catastrófico que generó para el desarrollo de la vida de nuestros pueblos. En el presente capítulo, abordaremos las respuestas populares que se fueron generando en diversos territorios y con diversas modalidades, algunas de las cuales se constituyeron ejes aglutinadores de resistencias, a lo largo de nuestro subcontinente, y otras se desarrollaron en realidades nacionales y culturales definidas.

Debemos partir por definir ese «escenario» como una etapa o período contrarrevolucionario, abierto con la derrota de los movimientos populares y revolucionarios que años más tarde culminará en procesos insurreccionales que darán paso a las construcciones políticas nacional-populares y progresistas que tuvimos o actualmente tenemos en Nuestramérica.

En algunos de nuestros territorios, las salidas de las dictaduras militares generaron amplias expectativas que se tradujeron en el crecimiento de una militancia social, política y cultural. Una parte importante de los jóvenes de la década de los 80 pasaron al activismo en partidos políticos tradicionales o de izquierda que habían estado prohibidos y que retornaban, algunos de ellos a los gobiernos, otros a la oposición, con gran consenso popular. Asimismo, en aquellos países, como Argentina, Uruguay o Brasil,

que contaban con un importante movimiento obrero organizado —que aún habiendo sido duramente golpeado había realizado hechos de lucha en medio de la intensa represión de los gobiernos militares— este retomó su protagonismo a la par que crecían los movimientos estudiantiles universitarios y secundarios.

Otra fue la realidad en países —por ejemplo, centroamericanos— en los que, o bien se estaba desarrollando un proceso revolucionario que enfrentaba una guerra contrarrevolucionaria (es el caso de la Revolución sandinista en Nicaragua ahogada por los «contras» y el boicot económico, ambos financiados y ejercidos por los Estados Unidos), o bien la guerra civil revolucionaria continuada (el caso de El Salvador).

En este punto debemos hacer una aclaración que vale para varios capítulos: no incluimos a Cuba en estos análisis porque justamente fue el único país nuestroamericano que escapó a todos los escenarios de horror que sufrimos los pueblos desde las dictaduras militares hasta las dictaduras democráticas neoliberales. Una pequeña, pero gran isla, que en todos esos años se constituyó como único faro de luz para las resistencias populares. La realidad de Cuba, con sus virtudes y complejidades, solo puede ser analizada desde otra óptica totalmente diferente; ninguna de las caracterizaciones que hacemos para América Latina y el Caribe en esa etapa contrarrevolucionaria la incluye, solo la incluimos como impulsora de campañas de resistencia.

Hecha esta aclaración, continuamos nuestro capítulo aludiendo a que aquellas experiencias de organización, activismo y resistencias populares en los 80 fueron desactivadas en su mayoría o desarticuladas, como ya hemos relatado en el Capítulo II, por un lado por el impacto que generó la caída del campo socialista y el triunfo del capitalismo neoliberal, y por el otro, por los nuevos mecanismos de disciplinamiento social que hemos analizado.

La campaña contra la deuda externa

Pero retomemos los ejes de resistencias continentales desarrollados en la década de los 80. Uno de los que generó una importante articulación fueron las campañas contra la deuda externa, en las cuales precisamente Cuba tuvo un papel fundamental. Las deudas fueron contraídas o abultadas abruptamente por los gobiernos militares en favor de sus patrones, los grandes grupos económicos concentrados, y se destinaron, en su mayor proporción, a la especulación financiera y el fortalecimiento de la posición de estos grupos en el mercado. El peso de las deudas externas en relación con los PIB nacionales se agravó con los gobiernos surgidos de elecciones democráticas en los 80, en medio de la llamada «crisis de la deuda», y se agudizó en los 90 al asociarla a los planes de privatizaciones, las permanentes tomas de créditos en el exterior para alimentar la especulación financiera y la fuga de capitales, por esos mismos grupos económicos cada vez más concentrados (véase Basualdo, 2000; Toussaint y Zacharie, 2004; Toussaint, 2002; Jochnik y Pazmiño, 2001). El énfasis de los cuadros políticos que asumieron los gobiernos nacionales, en representación de las oligarquías, en profundizar este mecanismo de especulación financiera y dependencia económica creciente de los organismos internacionales y las potencias imperialistas, derivó en que el problema de la deuda externa se constituyera como un eje de lucha permanente para todas aquellas organizaciones y movimientos de resistencia y lucha, hasta entrados los años 2000.

En 1985, Cuba impulsó una campaña contra la deuda que tuvo como referente fundacional el Encuentro sobre la deuda externa de América Latina y el Caribe, celebrado a finales de julio y primeros de agosto de ese año en La Habana. En la clausura del encuentro, el 3 de agosto, Fidel Castro pronunció un discurso llamando a anular la deuda de todos los países del Tercer Mundo (1985). Aunque los gobiernos de Nuestramérica no se sumaron

a la campaña, sí lo hicieron organizaciones del campo popular, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos, y fue eje movilizador de las rebeliones populares de los siguientes años, y dio origen a otras campañas como la de Jubileo 2000 impulsada por las iglesias católica y protestante a favor de la condonación de la deuda de los países del Sur o la campaña «Deuda externa, ¿deuda eterna?» que nace en el Estado español. Acciones, a su vez, constitutivas del Foro Social Mundial que nació en 2001 en Porto Alegre, Brasil, en un Estado gobernado entonces por el Partido de los Trabajadores conducido por Luiz Inácio, Lula, da Silva.

Pero más allá de estas resistencias puntuales, a inicios de la década de los 90 nos encontramos con un escenario de retroceso para los pueblos y para la clase trabajadora tanto en el terreno de las relaciones de fuerza objetivas, como en el de las políticas. Desde esa nueva situación —momento muy desfavorable para el campo popular— hacia mediados de la década, se va a desarrollar un nuevo ciclo de la rebelión popular contra las políticas neoliberales y/o sus consecuencias. Este se desarrollará desde mediados de los 90 hasta el primer lustro de este milenio, con divergencias temporales en los diferentes territorios. Analizaremos algunos de los procesos de enfrentamientos sociales más destacados en esta década como expresiones de resistencia, para pasar, en el Capítulo V, a otros procesos de lucha que luego pudieron alcanzar el momento político de las relaciones de fuerza —que revisábamos con Gramsci en el Capítulo I— y construir grados de contra hegemonía disputando el gobierno y el poder.

Queremos citar a Nicolás Iñigo Carrera (2000) para establecer que cuando un ciclo de la rebelión popular (es decir, un conjunto de hechos que, aunque están en distintos puntos de la escala de las formas de lucha, corresponden a un mismo proceso histórico) se desarrolla en un período contrarrevolucionario, solo puede mostrar una forma defensiva. A su vez, dentro de los ciclos de luchas

se desarrollan momentos de ascenso y de descenso que, desde el punto de vista de la clase trabajadora y subordinada, remite no a la cantidad de hechos de protesta realizados, sino a los grados de unidad o fractura interna, y al logro de alianzas con otras fracciones sociales, o, al contrario, su aislamiento social.

Los «saqueos» en Argentina y el Caracazo en Venezuela

El inicio de la década de los 90 estuvo marcado por el repliegue de masas, momento de aislamiento de las fracciones sociales del proletariado que resistían a las políticas neoliberales. Es importante mencionar dos acontecimientos que suceden en 1989, nos referimos a los llamados «saqueos» en Argentina y al «Caracazo» en Venezuela. En los dos tienen lugar levantamientos de oprimidos, con saqueos masivos a comercios y choques con las fuerzas armadas de los gobiernos. Sin embargo, en Argentina este hecho fue previo a la aplicación de las políticas neoliberales de la mano del gobierno de Carlos Menem —y corresponde a un ciclo anterior al de los 90 en la Argentina—, mientras que en Venezuela sucedió como respuesta popular al anuncio de las políticas de ajuste pactadas por el nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez con el FMI. Mientras que el primero ha sido caracterizado como revuelta, el segundo lo fue como motín (Iñigo Carrera et al., 1995). Siguiendo la conceptualización de Lenin en *¿Qué hacer?* —que hemos visto en el Capítulo I—, los autores citados señalan que la «revuelta» se encuentra por debajo de la escala en que comienza la lucha de la clase obrera. Se presenta con un menor grado de organización y una tendencia a la dispersión de las acciones, que se caracterizan por choques entre particulares, sin llegar a focalizarse sobre las instituciones de gobierno o el Estado, mientras que el «motín» es el comienzo de la lucha, expresión de desesperación y venganza, levantamiento de gente oprimida, donde todavía prevalece el elemento espontáneo en tanto forma

embrionario de lo consciente; conlleva cierto despertar de la conciencia, en el sentido de perder la fe tradicional en la inmutabilidad del orden establecido, se comienza a sentir la necesidad de oponer resistencia colectiva y se rompe con la sumisión servil a las autoridades.³⁹

Más adelante retomaremos estos casos nacionales, jalones por la rebelión cívico-militar protagonizada por el teniente coronel del ejército venezolano Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, contra el ilegítimo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y los enfrentamientos sociales que tuvieron lugar en Argentina con elementos insurreccionales a partir de finales de 1993; procesos ambos que derivarán en cambios de rumbo político-gubernamentales.

Para concentrarnos entonces en este ciclo de la rebelión tomaremos dos casos que se constituyeron como hitos de los procesos de resistencias a las políticas neoliberales de los 90. Nos referimos al levantamiento zapatista que hizo su irrupción mediante una sublevación armada el 1 de enero de 1994, y a la experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que se había conformado una década antes.

EZLN, un ejemplo de resistencia y construcción desde abajo

Veamos un poco más en profundidad estas experiencias. Fruto de años de trabajo en las comunidades indígenas se constituyó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y se dio a conocer a la sociedad mexicana y al mundo el 1 de enero de 1994, día en que se firmaría la entrada de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

39 El 27 de febrero de 2015, en el aniversario 26 del Caracazo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que «fue una insurrección popular de toda Venezuela [...] contra el FMI, el Banco Mundial y contra el Consenso de Washington (los Estados Unidos)» (Telesur, 2015). Esta caracterización coincide con la realizada por los autores del PIMSA que hemos citado, sobre las jornadas de diciembre de 2001 en Argentina, quienes por el contrario consideraron al Caracazo como un motín.

Como su nombre expresa, es un ejército popular que plantea la liberación nacional como meta estratégica y, aunque se propone romper con ciertas tradiciones de la izquierda revolucionaria, ya en su nombre recoge esa tradición. Su inferioridad en el plano militar fue compensada, aún con importantes golpes y bajas sufridas, por su gran capacidad de desarrollar iniciativas políticas mediante las cuales consiguieron importantes bases de apoyo, tanto en México como en otros países, en un momento histórico de fuerte repliegue de masas. Lograron avances populares que obligaron al régimen institucional a reconocer sus demandas, al menos en un primer momento. Estas tomaron forma legal bajo los acuerdos de San Andrés y la Ley Cocopa (de la bicameral Comisión de Concordia y Pacificación), aunque a finales de 1996 serían desconocidas por esas mismas instituciones.

Especialmente observada, con grandes esperanzas, por las y los activistas sociales y políticos de nuestra región —que hasta ese momento solo contábamos como único resguardo de fuerza moral viva a la heroica Cuba—, esta nueva experiencia guerrillera irrumpió mientras las usinas del poder preconizaban el fin de las ideologías (Fukuyama, 1992) y de las «utopías armadas» (Castañeda, 1993). En su Primera Declaración de Guerra plantearon que su lucha era por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Y aunque elementos de socialismo tuvieron (y tienen) presencia, tanto en sus prácticas como en sus discursos y propuestas programáticas, apareció en primer plano el reclamo por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la democracia, que remiten más a la cuestión de la ciudadanía que a la de la revolución.

¡Qué paradójica manifestación del retroceso social y político para los pueblos, que supuso el neoliberalismo (al tiempo que desde los medios monopólicos de comunicación trataban de convencernos de que llegábamos a la modernidad o entrabamos al

primer mundo), que aún para poder hacer planteos democráticos y ciudadanos, en el marco de un supuesto gobierno democrático, las comunidades indígenas mexicanas tuvieron que tomar las armas! Al igual que a principios del siglo xx en que se desarrollaron levantamientos populares armados por el sufragio masculino, proceso que en México fue mucho más allá con la Revolución de 1910. Incluso en esa primera Declaración de Guerra del EZLN, pegada en las paredes de San Cristóbal de las Casas y las otras ciudades tomadas aquel enero de 1994, declaraban su guerra «en apego a la Constitución» y su contenido reafirmaba su vocación democrática y de liberación nacional. Su preocupación por aclarar que se amparaban en los principios constitucionales se observó también en sus sucesivas construcciones políticas (municipios autónomos, Aguascalientes, Juntas del Buen Gobierno, Caracoles). Según Pablo González Casanova (2001), los acuerdos de San Andrés firmados por los representantes del Poder Ejecutivo, por una comisión del Poder Legislativo (compuesta por senadores y diputados de todos los partidos políticos oficiales de México) y por el EZLN, constituyeron una de las declaraciones políticas más importantes a nivel mundial desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ellos se ampliaban cabalmente los derechos indígenas y se reconocía el derecho a la autonomía en sus gobiernos. Algunos de estos derechos conquistados y luego desconocidos por el gobierno de Zedillo y los que siguieron, serán recogidos y consagrados diez años después en los procesos constituyentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela, como por ejemplo, el reconocimiento de un Estado plurinacional. El zapatismo fue un ejemplo de lucha tomado en cada lugar donde surgían las rebeldías y contribuyó a enarbolar en alto la bandera de la dignidad de los pueblos.

MST, un ejemplo de lucha por la reforma agraria

Aunque fue el contenido democrático y el reclamo por mejores condiciones de vida lo que caracterizaba las demandas de los movimientos y organizaciones que se desarrollaron en el ciclo de la rebelión popular de los 90, también mostraron en sus prácticas y discursos elementos de otras relaciones sociales, socialistas o alternativas a las de dominación capitalista, patriarcal, racista y autoritaria.

En otras palabras, es claro que los hechos evidenciaban que la dirección o carácter que tomaba la lucha de clases en ese período (que seguramente continúa hasta la actualidad), era el de la lucha democrática, es decir, el de la aspiración a la emancipación política, llevada a su máxima expresión dentro del capitalismo: aumentar los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, el reconocimiento como ciudadanos plenos de las repúblicas latinoamericanas, bajo la comprensión de que no había condiciones ni objetivas ni subjetivas de plantearse la construcción de una alternativa socialista de poder en el corto plazo, pero sin abandonarla como estrategia de largo plazo (hablamos en términos generales dado que algunas organizaciones puntuales a lo largo de nuestro territorio sí han abandonado esa bandera).

Joao Pedro Stedile, uno de los máximos referentes del MST, señalaba en 2004 la imposibilidad de la construcción del socialismo en esa etapa, pero realzaba la urgente necesidad de reorganizar la economía volcada hacia los intereses del pueblo y la nación. Por eso, explicaba, plantean una reforma agraria de nuevo tipo, diferente de las clásicas reformas agrarias impulsadas por las burguesías industriales nacionales de los países más desarrollados que consistían en la redistribución de la tierra. En tanto que la reforma agraria de nuevo tipo supone la democratización de la tierra, pero también del capital; construir sus

propias agroindustrias cooperativizadas para cortar la dependencia con las empresas transnacionales agroindustriales, para ampliar los niveles de empleo para la juventud en el campo, desarrollar nuevas tecnologías, en contraposición a los agrotóxicos, que prioricen la producción de alimentos y trabajo. Reforma agraria que trataron de ir desarrollando en sus asentamientos. Y de esta manera, planteaba Stedile, lograr la ciudadanía plena de las masas campesinas. El nuevo proyecto de desarrollo debía basarse, según el dirigente, en la recuperación de la soberanía nacional que implicaba romper con el FMI, rediscutir los términos de la deuda externa y recuperar el papel del Estado como inducтор de las inversiones públicas, tanto en la industria de bienes de consumo de masas, como en el área de los servicios públicos de salud y educación, cuya universalización se debe garantizar (Stedile, 2003). Observamos en este programa algunos de los puntos centrales que tomarían algunos nuevos gobiernos por esos años en otros países, que expresaban nuevas correlaciones de fuerza política, como el de Néstor Kirchner en Argentina.

Como describe Eliel Machado (2008), la base social del MST de Brasil, como la del zapatismo y también la del movimiento piquetero en Argentina no estaba compuesta por aquellas fracciones proletarias que confrontan directamente con el capital, y por tanto, no constituyen el núcleo duro de la relación entre capital y trabajo. La base del MST está constituida básicamente por trabajadores rurales semiproletarios o semiasalarios. Sin embargo, aunque no pueden afectar al capital en forma directa, desafían al estado burgués al cuestionar las formas de propiedad y las políticas estatales a favor del capital agrario exportador, el agronegocio. Agrega Machado que, por lo menos en algunos países de América Latina, las y los principales protagonistas de las resistencias populares a la implementación de las políticas neoliberales fueron los sectores «marginales» de la

relación capital/trabajo y por ello se comprende por qué recaía sobre ellos toda la furia represiva del Estado burgués y de sus aparatos ideológicos.

Por otra parte, si se tiene en cuenta la función de presión que cumple el heterogéneo ejército industrial de reserva (fluctuante, latente e intermitente como lo describe Marx en el capítulo XXIII de *El capital*), de la ciudad y del campo,⁴⁰ sobre la fuerza de trabajo en actividad, como disciplinadora de estos últimos, en tanto la escasez de empleo y la sobreoferta de fuerza de trabajo agudizan la competencia entre las y los trabajadores, dividen a la clase obrera, y así permiten mantener los bajos costos salariales y la neutralización política de los asalariados; la movilización política de quienes forman parte real o potencial del ejército de reserva anula o, al menos, reduce los efectos esperados.

En momentos en que en América Latina crecía enormemente la población sobrante desde el punto de vista del capital, debido a las políticas de concentración de este, aumento de la productividad y relocalización industrial (lo que no implicó desindustrialización en términos de largo plazo histórico, sino concentración del capital industrial), la movilización y organización de estas fracciones atentó contra esa lógica, contra su función política disciplinadora. En tanto, se movilizaron y apoyaron luchas del conjunto de la clase y del pueblo y entablaron enfrentamientos en común con otras fracciones de trabajadores, entonces, en parte, esa función fue neutralizada y se fueron tejiendo procesos de unidad (no sin obstáculos y retrocesos) entre el pasivo y el activo de la fuerza de trabajo, entre los proletarios y los semiproletarios de la ciudad y del campo, y fracciones burguesas proletarizadas y empobrecidas, y algunas de la pe-

40 Según estudios del gobierno, para la política agrícola del año 2000-01, solo hay espacio para 600 000 propietarios rurales y los 4,2 millones restantes quedarán marginalizados (Machado, 2008).

queña, mediana y hasta gran burguesía que se han visto desplazadas por las políticas de concentración del capital.

La base social del MST se constituyó por una parte de población agrícola, pequeños propietarios en su mayoría, que eran desalojados del territorio social que ocupaban, por las políticas concentradoras de la tierra dirigidas por la burguesía agroindustrial. Esas contradicciones generaron «campo fértil» para la participación política contestataria, aún más que entre los trabajadores rurales más directamente afectados por la relación capital-trabajo y que constituyan sin duda una superioridad numérica. Es el semiproletariado rural, a través del MST, el sujeto que toma las posiciones de lucha más contundentes contra el sistema, con su bandera principal que es la reforma agraria bajo el control de las y los trabajadores. De todas maneras, tal como lo expresa Machado —y lo mismo decimos para el campesinado indígena zapatista y para el caso de Argentina con el importante movimiento de trabajadores desocupados—, estos sujetos que no se encuentran en la relación directa capital-trabajo, solamente pudieron modificar la relación de fuerzas políticas en la medida que se sumaron más activa y combativamente, sobre todo en los procesos insurreccionales posteriores, las fracciones proletarias que se confrontan diaria y directamente con el capital.

En Brasil, a la organización de las y los trabajadores sin tierra en el campo, se sumó en las ciudades la constitución de la Central Única de los Trabajadores (CUT) que surgió y aglutinó la lucha de las y los trabajadores metalúrgicos, docentes, bancarios y otros, de los cuales nació el Partido de los Trabajadores. Como nos relata Bernardo Mançano Fernandes (2003). En este sentido, en los 80, las luchas de estos movimientos por los derechos y por la democracia serán las banderas del PT, que se constituirá en uno de los grandes partidos políticos de Brasil, y llegaría al gobierno nacional en 2002. Con la fundación del PT se creó un

espacio para reunir los proyectos políticos de diferentes segmentos de clase, cuestión central en un país de semejantes proporciones geográficas y geopolíticas, que cuenta con un proletariado urbano desarrollado, al lado de un numeroso proletariado rural. Una estructura dual de capitalismo desarrollado en las principales concentraciones urbanas, y una de las estructuras latifundistas más concentradas del mundo, en continuo proceso de concentración al mismo tiempo que se produce el empobrecimiento y exclusión de los campesinos.

Sin embargo, Stedile (2004) consideraba que la victoria electoral del PT y la llegada de Lula al gobierno en 2002, aunque cambiaron la correlación de fuerzas, no significaron una derrota estratégica para la clase dominante y el neoliberalismo, dado que ocurre en un momento de descenso del movimiento de masas y eso le quita poder al gobierno central y lo mantiene encorsetado.

Otro de los grandes aportes del MST y del zapatismo, y que fue tomado también por el movimiento piquetero en Argentina y por otros a los que nos referiremos en posteriores capítulos, fue la práctica asamblearia, tanto para decidir los pasos de lucha en medio de los enfrentamientos (obviamente no los que implicaron acciones guerrilleras), como en la organización cotidiana de sus organizaciones. Aún con diferencias formales e ideológicas, dicha práctica estuvo presente en las históricas luchas obreras en todas partes del mundo y en Nuestramérica también, en los albores de la organización sindical a principios del siglo xx, en la ola de sindicalismo revolucionario en los 60 y 70 (aunque neutralizadas más tarde por la creciente burocratización luego de las derrotas populares), y fue parte constitutiva de las comunidades andinas originarias. Esa experiencia asamblearia es retomada y recreada en nuestra historia más reciente en los principales enfrentamientos sociales y movimientos, y defendida como parte de la estructura organizacional, aunque dentro de los esquemas de centralismo

democrático, con gran énfasis (más discursivo que real en algunos casos) en lo democrático, sin descartar el necesario centralismo que hace que existan y perduren (sin diluirse en el utópico mar del aislamiento principista) las organizaciones de lucha.

Aunque desde varias voces intelectuales se intentó romantizar las experiencias organizativas e idealizarlas, las estructuras que emergieron como más estables y duraderas muestran ese modelo de organización, el centralismo democrático, implementado por otras organizaciones revolucionarias —o que quisieron serlo— en el pasado, pero, como ya dijimos, con énfasis en las prácticas asamblearias de las bases.

Por otra parte, el corazón del zapatismo es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y así todas sus iniciativas políticas y organizativas están apoyadas en esa estructura militar que, como ellos mismos explican, «no es democrática, porque es un ejército» (EZLN, 2005), con cuadros de mando, dirigencia, comandancia, de dirección política, a diferencia de las bases de apoyo o «tropa». Pero que, a su vez, garantiza e impulsa estructuras «civiles» democráticas, como los municipios autónomos, autogobernados, pero con gobiernos al fin, en las que la regla de la revocabilidad en todo momento (al igual que en las experiencias de la Comuna de París) inmuniza contra, o al menos obstaculiza, la burocratización y desvirtuación del poder popular. Aspiran al horizontalismo como meta y está presente en el plano discursivo, pero no es la forma de organización que rige en ese movimiento de lucha.

También estas organizaciones fueron pioneras, en medio de la desesperanza y la devastación neoliberal, en retomar la práctica de la educación política popular de la mano de las concepciones de Paulo Freire y su pedagogía de la liberación. Las mismas luchas y procesos asamblearios fueron ricos ejercicios pedagógicos en los que no solo se aprendía a luchar, sino que se cuestionaba la reproducción de relaciones y roles de poder cotidianas, se constru-

yeron grados de conciencia sobre las causas de la situación de las masas empobrecidas y los modos de resolverla. También se practicó la memoria histórica levantando banderas y hechos históricos de lucha opacados por el merchandising consumista. Deconstrucción que implicó —e implica— trabajos de «hormiga» que fueron desempeñando las organizaciones en sus territorios.

Según Machado, los asentamientos del MST no se han mostrado solamente como «islas de resistencia» al neoliberalismo, sino también como espacios reales de construcción de nuevas relaciones sociales de producción, aún bajo la hegemonía burguesa. Se trata de «reductos populares de contrahegemonía» (2008). Esta idea, fruto de la lucha y con el objetivo insoslayable de extender y, paradójicamente, no quedarse como «reductos», es una de las claves que nos permiten entender la importancia política de esta construcción, más fielmente que la idea de construcción de poder popular; ya que esta refiere a procesos de disputa real de poder con dominio de territorialidad (volveremos sobre este tema en los últimos capítulos).

Según este mismo autor, en el MST tienen claro su diferencia con el control de territorio que ejercen, por ejemplo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese país, pero asimismo controlan varios millones de hectáreas en las que desarrollan heterogéneos proyectos productivos, que tienen, en su origen, la lucha y defensa colectiva, pero que van desde la producción individual con ámbitos compartidos y cooperativos hasta las cooperativas de producción colectivizada. En ese mismo espacio político y territorial conviven prácticas democráticas y de inspiración socialista con formas políticas vinculadas a la ideología burguesa. Lo viejo y lo nuevo se combinan pero con un peso mayor de lo nuevo por sobre lo viejo.

Stedile (2004) explica que la recuperación de la «ciudadanía plena» por parte de las y los campesinos en los asentamientos y

la construcción de relaciones de vida y de trabajo alternativas, se inscriben en un proceso de acumulación social, pero no pueden entenderse estos asentamientos como «islas socialistas», dado que en ellos se reproducen todas las contradicciones de la sociedad burguesa en la que vivimos. El poder es concebido en el MST como todos los espacios que existen en la sociedad donde las personas participan y pueden decidir; el Estado es un espacio de poder pero de toda la sociedad,⁴¹ en el que las y los trabajadores también tienen que disputar y para ello debatir acerca de cómo van a influenciar en el control del Estado, porque, afirma el dirigente, «tampoco creemos que la única forma sea la contienda electoral para llegar a ser gobierno, ya que ser gobierno se ha vuelto insuficiente para democratizar al Estado burgués». Y afirma que lo que se necesita es una gran acumulación de fuerzas, desde el punto de vista organizativo e ideológico, que sea capaz de aglutinar a las mayorías en torno de un proyecto de construcción de nuevas políticas e instrumentos políticos verdaderamente populares que controlen al Estado y lo transformen de Estado burgués en Estado al servicio de las mayorías.

Otro de los elementos que reivindican estos movimientos sociales es la autonomía organizativa, si bien son conscientes de que deben diferenciar bien la necesidad de ella del separatismo que enarbola (a veces bajo el eufemismo de la autonomía) la derecha que trata de rearmarse en Latinoamérica.

Stedile recalca la importancia de mantener la autonomía y la independencia organizativa de los movimientos pero en el marco de construir, entre los diversos movimientos y organizaciones populares, un proyecto político estratégico común.

41 Esto se asemeja a la concepción gramsciana acerca de las sociedades de capitalismo desarrollado en las que las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de las trincheras en la guerra moderna, de las cuales el Estado es la trinchera más avanzada.

Y si hablamos del MST, no podemos olvidar el movimiento social mundial del que la organización brasileña forma parte, la Vía Campesina, formada precisamente en 1992 y constituida en un primer congreso en 1993 a partir de diversas articulaciones internacionales de organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas migrantes con motivo de la campaña contra los quinientos años de colonialismo del Norte sobre el Sur. La Vía Campesina, y su expresión en Nuestra América, la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), se conforma como un movimiento campesino de clara oposición al neoliberalismo, mediante, sobre todo, la defensa de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto alternativo que apoya a los pueblos en su lucha contra las políticas neoliberales como aquellas que son impuestas por las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las corporaciones transnacionales del agronegocio, a través del libre comercio y de la liberalización en la agricultura. Actualmente la Vía Campesina la componen 164 organizaciones de 73 países de Asia, África, Europa, América Latina y el Caribe.

Foro Social Mundial, ¿otro mundo es posible?

Ahora bien, en este ciclo de la rebelión popular que se abre a mediados de los 90, se van gestando hechos de protesta, lucha y enfrentamientos sociales, al igual que organizaciones y movimientos sociales con reivindicaciones propias, pero sin un correlato en organización política capaz de, en palabras de Gramsci (1986), plantear todas las cuestiones en torno a las cuales hierva la lucha, no sobre un plano corporativo, sino sobre uno «universal» construyendo así hegemonía. O en términos de Rosa Luxemburgo, como hemos visto en el Capítulo I, faltaba esa fecundación de la lucha política sobre la continuidad de la lucha económica. No

es que no existieran organizaciones políticas participando, acompañando o reivindicando tales movimientos, pero, o bien eran pequeñas organizaciones residuales de partidos de izquierda de antaño, o bien nuevos reagrupamientos, mezcla de esos dirigentes con nuevas camadas de jóvenes militantes, que no lograban grandes inserciones de masas, o instrumentos políticos compuestos alrededor de figuras proyectados para la competencia electoral sin grandes planteos estratégicos.

Esta cuestión o problema, depende los puntos de vista, de escisión entre lo político y lo social, es tratada ampliamente en el Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre, que en sus primeras ediciones, 2001 a 2003, se constituye como un importante espacio articulador de los procesos de resistencia a nivel latinoamericano. Con críticas y limitaciones, la importancia de este espacio fue estratégica en lo que hace a dicha articulación y la potenciación de cada experiencia local. Ya para la realización del primer FSM se cuenta con la presencia de un gobierno popular que gravitará, primero con gran desconfianza en el activismo de izquierda por su origen militar, de manera decisiva en la recomposición de la iniciativa popular en el subcontinente: nos referimos al gobierno de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana de Venezuela.

En las primeras ediciones del Foro Social Mundial se produce una confluencia entre el movimiento político, social y la denominada «sociedad civil» representada por varias ONG progresistas a pesar de algunos problemas, como precisamente la posición de ellas en contra de la participación del EZLN, por tratarse de una «organización armada», pues las organizaciones político-militares no podían formar parte del Foro Social Mundial según su Carta de Principios.

El Foro Social Mundial se convierte durante esos primeros años en un claro frente antineoliberal, que servía, sobre todo, para la articulación de todas las organizaciones inmersas en la batalla contra el neoliberalismo, abriéndose a otros escenarios

geopolíticos como sucedió en la edición de 2004 celebrada en Mumbai, India. Probablemente, el punto culminante se produce en enero de 2005 cuando el Comandante Chávez en el Gigantinho de Porto Alegre define por primera vez el carácter de la Revolución Bolivariana como «Socialismo del siglo XXI». Poco después y en la medida en que iban llegando gobiernos posneoliberales a los distintos países de América Latina y el Caribe, llega el momento de reflujo para el Foro Social Mundial y las luchas se establecen desde otras coordenadas y parámetros, pasando el FSM a ser dominado por la «industria del foro», ONG que tratan de sobrevivir a partir de convertirse en parásitos, adueñándose y apropiándose de su cuerpo político y teórico. El foro pasa a ser bianual y deja de hacerse en las mismas fechas que el Foro Económico Mundial de Davos, de la patronal mundial, perdiendo la oportunidad de confrontación político-ideológica y de ser una expresión de la lucha de clases mundial.

Los 90: la constitución de una fuerza social de protesta

Retomando el ciclo de la rebelión de los 90, podemos decir que comienza con la dispersión de hechos de rebelión, y va tendiendo hacia luchas más sistemáticas, generando un proceso de acumulación de fuerzas y experiencia cuya manifestación fue la constitución de una fuerza social popular de protesta y oposición política. Los intentos de aplacar las protestas y luchas con la fuerza material por parte de las fuerzas armadas de los gobiernos, al igual que sus predominantes discursos sobre los rebrotos subversivos (remitiendo a las experiencias revolucionarias de los 60 y los 70, derrotadas por medio de la guerra y del terrorismo de estado) para legitimar esos ataques, solo consiguieron despertar la solidaridad de otras fracciones sociales que se iban involucrando en los conflictos.

En términos generales, en cuanto a la conciencia política colectiva que predominó en ese ciclo, los distintos movimientos so-

ciales atraviesan lo que Gramsci denomina el segundo grado de la relación de fuerzas políticas, el de la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros del grupo social, pero todavía en el campo meramente económico; aunque se plantea la cuestión del Estado, se lo hace solo «en el terreno de lograr una igualdad político-jurídica con los grupos dominantes, ya que se reivindica el derecho a participar en la legislación y en la administración y hasta de modificarla, de reformarla, pero en los marcos fundamentales existentes». Como señalábamos en el Capítulo I, Gramsci aclara que los distintos momentos o grados de la relación de fuerzas políticas no aparecen en la historia consecutivamente, en orden lineal, sino que se influyen recíprocamente combinándose y escindiéndose de diversas maneras; «cada una de estas combinaciones puede ser representada por su propia expresión organizada, económica y política», el pasaje de uno al otro depende de un proceso que tiene por actores a los hombres y mujeres y su voluntad y su capacidad. Así es evidente que el zapatismo expresa una combinación de los momentos en que prima el interés del grupo social en el campo económico, con planteos de carácter universal, al tiempo que reclama el reconocimiento y la participación en el Estado, e intenta pasar al campo de las relaciones de fuerza inmediata, o sea, militar.

También el MST expresa una combinación de los grados de la conciencia colectiva que atañen a los intereses económico-corporativos de su amplia base social con planteos que proyectan como «universales», con la reforma agraria de nuevo tipo y la transformación de las relaciones sociales de poder.

Diferente es, en Argentina, el caso de uno de los movimientos que adquirió mayor protagonismo en los enfrentamientos sociales considerados como hitos del ciclo: el de trabajadores desocupados

o movimiento piquetero.⁴² Sus reivindicaciones se relacionan prioritariamente con las urgentes necesidades de conseguir medios de vida, entre ellos, como principal, el empleo. Con lo cual se ubican en el primer grado de las relaciones de fuerza política, en el que prima la conciencia de la unidad de intereses económico-corporativos, y el deber de organizarla. Lo que no significa que carezcan de definiciones políticas, toda vez que después de los primeros enfrentamientos que protagonizan, son organizaciones políticas o político-sindicales o militantes o exmilitantes, o cuadros provenientes de sectores de la iglesia los principales impulsores de sus variadas organizaciones en los barrios pobres periféricos primero y en los principales centros urbanos después.

Por todos estos elementos expuestos, consideramos que en el ciclo de la rebelión popular de los 90, no se observa un proceso de construcción de poder popular, sino más bien, la constitución de una fuerza social de protesta, de carácter popular, ya que no se puede dar el primer proceso si el segundo no ha alcanzado algún grado de su desarrollo.

La construcción de hegemonía supone la crisis de otra hegemonía, y dentro de ella, el proceso de construcción de poder popular se realiza mediante la destrucción del poder establecido, cultural, económico, político y territorialmente. Pero es una relación de fuerzas, no de suma cero. Es un movimiento dialéctico (no lineal), que implica constitución/dispersión, construcción/destrucción, de fuerzas sociales (alianzas) que disputan la conducción (y modelos) de la sociedad. Por ello, para la disputa de poder se necesita una

42 Es necesario aclarar aquí que las y los trabajadores desocupados y luego el movimiento que los expresa han protagonizado varios de los enfrentamientos centrales del ciclo, pero no así la mayoría de los hechos de rebelión, a contramano de cierta imagen difundida en la academia, la mayor cantidad de protestas y luchas fue realizada por las y los asalariados en activo, como lo demuestran varios trabajos de Iñigo Carrera y Cotarelo mediante el análisis del relevamiento empírico. Varios de ellos pueden encontrarse en www.pimsa.secyt.gov.ar.

fuerza social y es en el ciclo de los 90 que se observa, a través de los enfrentamientos sociales, su proceso de constitución.

En todo caso lo que aquí abordamos tiene que ver con la construcción de poder popular en sus fases preliminares, cuyos elementos son la acumulación de fuerzas, de experiencia de lucha y de organización, de confianza en la propia fuerza de los oprimidos, y el aprendizaje que lleva a la conciencia de que solo con la lucha —y la organización en algún grado que ella requiere— se consiguen objetivos que remiten a intereses populares, solo enfrentando al poder establecido.

Para sintetizar, consideramos que en el llamado ciclo de la rebelión popular de los 90 (desde mediados de los 90 hasta mediados de los 2000) se desarrolla un proceso de acumulación de fuerza y experiencia de lucha y organización que va a conformar una fuerza social (alianza) de protesta a las políticas de la oligarquía financiera y sus cuadros, dentro de un período contrarrevolucionario que había comenzado con las derrotas de los distintos movimientos populares de liberación nacional o social que, con distintos ritmos, atravesaron casi toda América Latina. El ciclo de resistencias de los 90 dará fin a ese período contrarrevolucionario para dar comienzo a una nueva etapa de la lucha de clases en la que emergen fuerzas social-políticas que, aun planteando cambios dentro de los marcos del capitalismo, exigen reformas tendientes a favorecer los intereses populares. Se deberá profundizar sobre el carácter del nuevo período, pero podemos afirmar que el antí imperialismo es un elemento que lo define y que se observa en la pérdida relativa de la iniciativa de las fracciones más concentradas del capital, tal como la desplegaban en el período anterior. La muerte del ALCA en noviembre de 2005 en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata constituye el mayor revés, a nivel regional, de las iniciativas políticas imperialistas.

IV. Resistencias insurreccionales al neoliberalismo que desembocaron en gobiernos de izquierda o progresistas

Aunque en mayo de 2000 el conocido intelectual francés Alain Touraine, opinara que «la centroderecha es la única opción para América Latina» (2000), esas expresiones políticas en los gobiernos de nuestros países no hacían más que intentar salir del naufragio de la crisis capitalista de acumulación mediante salvavidas de plomo, que reforzaban las fisuras del Estado burgués por donde crecían las luchas del pueblo.

La conflictividad social se agudizaba en toda nuestra región de la mano de la sincronicidad de la aplicación de las medidas neoliberales, por un lado de ajuste sobre los salarios directos e indirectos de las y los trabajadores, y por otro de expropiación y desalojo permanente de las poblaciones rurales e indígenas, lo que no podía hacerse sin grados importantes de utilización de la violencia estatal.

Habiendo analizado en el capítulo anterior la constitución de fuerzas sociales de protesta contra las políticas de la oligarquía financiera y sus cuadros políticos, como resultado de procesos de acumulación de fuerza y experiencia de lucha y organización durante el ciclo de la rebelión popular de los 90, en el presente capítulo abordaremos los procesos insurreccionales —protagonizados por esas fuerzas social-políticas— con los que culmina dicho ciclo, dando paso a las construcciones políticas nacional-populares y progresistas que actualmente se dan en Nuestramérica.

Hemos dicho también que, como hipótesis, dichos procesos pondrán fin al período contrarrevolucionario para dar comienzo a una nueva etapa de la lucha de clases en la que las nuevas correla-

ciones de fuerzas políticas se plasman o cristalizan con el ascenso de gobiernos populares; los que, en algunos casos, aun planteando los cambios dentro de los marcos del sistema capitalista, proponen reformas tendientes a favorecer los intereses populares.

Específicamente, los casos en los que los procesos de resistencia condujeron al desarrollo de enfrentamientos sociales que tomaron la forma de insurrecciones populares fueron los de Argentina,⁴³ Bolivia, Ecuador. Este será el tema del presente capítulo. Para el Capítulo VI dejaremos, por su importancia geopolítica en el continente, el desarrollo de las resistencias al neoliberalismo en Venezuela y cómo se transforman en proyecto político electoral, junto con el papel del Comandante Chávez.

Pero antes realizaremos un análisis teórico del papel estructural y político de las capas más pauperizadas del proletariado urbano y rural que tienen una función importante en los enfrentamientos sociales que toman la forma de insurrección a partir de 2000 en Nuestramérica, junto otras fracciones de trabajadores y capas medias, así como sectores de instituciones tradicionales de la red de control social del Estado, como la Iglesia y la Policía, además de, en algunos casos, porciones de las fuerzas armadas y del empresariado. Estas capas y fracciones sociales se constituyen como pueblo en lucha en esta etapa de resistencias insurreccionales contra el neoliberalismo y/o sus consecuencias.

Al contrario de lo que espera la clase dominante (la pasividad por su débil y precaria inserción en el sistema) las y los «pobres» se activan rompiendo parcialmente la función a la que el capital los relega. Logran también la constitución de fuerza suficiente, al menos para romper los mecanismos de disciplinamiento enraizados en los cuerpos, que hemos analizado en pasados capítulos.

43 Para el caso de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, tomamos la conceptualización de insurrección espontánea que construyeron Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo como resultado de sus investigaciones.

Las y los «pobres» que se activan y organizan en las luchas, ya sea como trabajadores desocupados o precarizados (como las y los piqueteros de Argentina), o migrantes campesino-indígenas de varias generaciones (pobladores de El Alto, en Bolivia), campesinos y trabajadores rurales (por ejemplo cocaleros y comunidades campesino-indígenas en Bolivia y movimiento indígena ecuatoriano) no son los únicos protagonistas de las insurrecciones, sino que estas se producen justamente como consecuencia del alineamiento de variadas fracciones sociales. Junto a las y los trabajadores activos y sus organizaciones sindicales o vecinales (de particular importancia en el caso de Argentina o Bolivia) y las capas medias afectadas por los fraudes bancarios y los ajustes gubernamentales, las fracciones más pauperizadas de las ciudades y del campo protagonizan los enfrentamientos sociales que se constituirán en bisagras de la historia hacia un cambio de época.

Si a finales de los 80 y principios de los 90, los «pobres» habían protagonizado conflictos en su desesperación por el hambre y el desamparo social, como los «saqueos» en Argentina 89-90 o el Caracazo del 89, en la década de 2000 su protagonismo se desarrolla organizadamente expresando otros grados de conciencia. En sus organizaciones y movilizaciones manifiestan sus reivindicaciones inmediatas ligadas a estrategias políticas de más largo plazo y alcance social, con mayor o menor grado de expresión en el campo de la política. Esto lo analizaremos luego. Veamos primero, desde un análisis estructural, la posición que ocupan y la función que cumplen estas partes de la población en el capitalismo.

En primer lugar, el concepto de «pobres» remite a la población expropiada de sus condiciones materiales de existencia (es decir, que solo cuenta con su fuerza de trabajo para vender), que no logra obtener regularmente sus medios de vida bajo la forma del salario, y a una parte de pequeños propietarios que

tampoco obtienen ingresos suficientes para conseguir los medios de vida y de trabajo necesarios para su reproducción. Una masa creciente de población repelida de los espacios sociales que ocupaba y que se encuentra en una posición sobrante para las necesidades de fuerza de trabajo del capital, cumple la función de ejército de reserva, dado que en su conjunto heterogéneo, bajo distintas modalidades, ejerce presión sobre el «ejército obrero en activo», aumentando el grado de la competencia entre ellos. Como señala Nicolás Iñigo Carrera (1999), no hace falta recordar que, desde la perspectiva de Marx, la reserva no está solo formada por desocupados sino también (y mayoritariamente) por trabajadores ocupados en ramas atrasadas, en el trabajo domiciliario y en multiplicidad de tareas ejercidas, sobre una base de trabajo muy irregular, no solo por las y los asalariados, sino también por pequeñas y pequeños propietarios pauperizados y/o en proceso de proletarización. Y que, como explica Marx (en *El Capital*, capítulos 8 y 23), sus formas constantes (fluctuante, latente, intermitente), hacen referencia a las distintas modalidades en que se presenta, sumándose sus «últimos despojos»: el pauperismo.

Si con el crecimiento exponencial de los índices de desocupación y precarización del empleo y mediante la coacción económica y extraeconómica que arreciaron nuestros territorios con las políticas neoliberales se pretendía, de quienes ocupan la posición de población sobrante para las necesidades del capital, que cumplan su pasiva función de ejército de reserva, generando mayor competencia entre las y los trabajadores, y, por lo tanto, aportando a la desmovilización de las y los obreros en activo, el hecho de que esas fracciones se movilicen colectivamente por fuera de los canales institucionales destinados a su contención política y social (redes clientelistas, religiosas, etc.) e incluso, en variadas oportunidades en solidaridad con fracciones del ejército obrero

en activo, atenta (potencialmente) contra esta lógica del capital. Porque la existencia de este ejército de reserva es la condición de posibilidad de la explotación creciente de la fuerza de trabajo y del orden capitalista.

La tendencia a la caída de la tasa de ganancia genera la necesidad de aumentar la plusvalía relativa y absoluta, lo que solo es posible si se neutraliza la capacidad de rebelión de las y los obreros en activo, para lo cual es condición necesaria el ejército de reserva. La existencia de esa masa de población sobrante, heterogénea y creciente, por el mismo desarrollo del capital, que cumple esa pasiva función disciplinadora, al rebelarse puede romper esta lógica, con lo que se torna «peligrosa» para el capital.

Cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, mayor será la pluspoblación relativa o ejército industrial de reserva, lo que genera el crecimiento de la «masa de la pluspoblación consolidada o las capas obreras cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo» (Marx, 1989: c. XXIII) y el crecimiento del pauperismo oficial. Esta ley general de la acumulación capitalista descrita por Marx entraña la contradicción insalvable del sistema, que hace que cuanto mayor sea la potencia de la riqueza, mayor es la potencia de la pobreza.

Esa potencia de la pobreza se ha expresado en las insurrecciones populares en Nuestramérica.

Argentina

Comencemos por analizar el caso de Argentina, país en el que, como es admitido y conocido ya ampliamente, se han llevado a cabo de manera profunda las llamadas reformas neoliberales. Es mediante estas políticas que la oligarquía financiera logra romper las trabas que el agotamiento del desarrollo capitalista en extensión le presentaba, virando la dirección del desarrollo hacia uno predominantemente en profundidad. Existen divergencias

entre quienes consideran que ello significó la desindustrialización del país y quienes señalan que, más allá de los altibajos del ciclo capitalista, lo que se desarrolló fue un proceso de concentración y centralización del capital, acompañado de un corrimiento en la centralidad de ramas productivas y una creciente participación de capitales extranjeros altamente concentrados que finalmente lograron controlar buena parte de la economía.⁴⁴

Teniendo en cuenta que Argentina fue y es uno de los países con mayor desarrollo capitalista (dependiente) de la región, el impacto de la implementación de esas políticas sobre la estructura social fue considerable y modificó el terreno sobre el que se desplegaron los hechos de rebelión de los sujetos afectados por esas políticas. Los rasgos del capitalismo argentino desde mediados de la década de los 70, es decir, desde que comienza el período contrarrevolucionario, son la proletarización y crecimiento del pauperismo para la mayoría de la población, con el consiguiente crecimiento de la riqueza centralizada y concentrada en menos manos.

El capital concentrado utilizó la identidad nacional y popular del peronismo (alianza bajo la cual los trabajadores en la década de los 40 vieron realizada su estrategia de incorporarse al sistema social vigente en las mejores condiciones posibles) (Iñigo Carrera, 1993) que representaba —al menos hasta ese momento— la «idea inherente»⁴⁵ de justicia social, para contener al pueblo en el proyecto de rearticulación de los intereses de

44 Los trabajos que defienden la tesis de la desindustrialización son mayoritarios. Véase sobre todo los ya clásicos realizados por el área de economía y tecnología de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Argentina). Por ejemplo, Basualdo, 2000. De las otras posturas véase, por ejemplo, Dachevsky, 2011.

45 George Rudé (1981: 34), distingue entre ideas inherentes e ideas derivadas presentes en las protestas o luchas sociales. El primero sería el elemento tradicional, «inherente», una especie de «leche materna ideológica», basada en la experiencia directa, la tradición oral o memoria colectiva. Y el segundo elemento es el cúmulo de ideas y creencias que «derivan» o se toman prestadas de los demás, que suelen presentarse como un sistema más estructurado de ideas políticas o religiosas.

las distintas fracciones del bloque dominante, llevando a cabo las políticas económicas más antipopulares y regresivas. De esta manera, el Partido Justicialista (PJ) en la década de los 90 deviene expresión de una alianza política entre las capas más pobres con la oligarquía financiera y las fracciones más concentradas de la burguesía local, lograda gracias a su identidad «peronista», pero expresando los intereses de estas últimas.

Entre 1991 y 1994 la economía argentina crece a una tasa de 8% anual, con un aumento de la inversión de 21% y un aumento de la productividad del trabajo, de la producción y de la riqueza indicado por el crecimiento de 30% del PIB (Producto Interno Bruto) en cuatro años. Desde el bloque dominante se apela ideológicamente a lo que denominan «teoría del derrame», es decir, que primero tenían que aumentar esos indicadores, hacer «crecer la torta» para luego distribuirla, con lo cual la riqueza terminaría derramándose hacia abajo. Ahora bien, proporcional al crecimiento de los indicadores macroeconómicos, al contrario de lo que sostiene la «teoría del derrame», es el descenso de los indicadores sociales, es decir, el incremento de la pobreza, de la desocupación y la reducción del ingreso de las grandes mayorías a niveles inéditos en la historia nacional. Se «derrama» la miseria. En 1995, cuando se produce el quiebre del ciclo capitalista con la llamada crisis del Tequila, la desocupación para el total del país alcanza a 18,5% de la población económicamente activa. Así ya en los 90 el disciplinamiento social se ejerce mediante el crecimiento exponencial de los niveles de desocupación, inéditos en la historia argentina.

Dados los diversos mecanismos de disciplinamiento social (que hemos descrito en el Capítulo II), las luchas de las y los trabajadores contra las privatizaciones de TODOS los recursos y empresas estatales a principios de los 90 se desarrollaron en un marco de aislamiento social, y por lo tanto fueron derrotadas. Las organi-

zaciones sindicales más importantes no desplegaron las medidas necesarias para impedirlo, y, en algunas ocasiones, varias de ellas formaron parte del proceso privatizador. Otras emprendieron la resistencia; pero, sin contar con apoyo de otras fracciones del pueblo, fueron derrotadas.

Esto coincide, como hemos analizado en capítulos anteriores, con el retroceso de las luchas del campo popular a nivel mundial y con el aparente triunfo capitalista frente a la caída del llamado socialismo real, que implicó una fuerte ofensiva a nivel ideológico que sin duda impactó en cada realidad nacional.

De esta manera, luego de las revueltas del hambre o «saqueos» de 1989-90 —que, como hemos visto, no alcanzan a constituirse en lucha, sino que son la expresión de la desesperación por el hambre en el contexto de las hiperinflaciones— y la lucha aislada de los obreros afectados por las privatizaciones, se asiste a un momento de repliegue de masas hasta fines de 1993.⁴⁶ Durante estos años los indicadores macroeconómicos arrojaban saldos positivos y se propagandizaban ideológicamente como «la entrada al primer mundo», mientras se acentuaba aceleradamente la regresión de los indicadores de las condiciones de vida de las mayorías.

Pero el 16 de diciembre de 1993 se produce un hecho que marcará un punto de inflexión en la dinámica del conflicto social: el «motín» de Santiago del Estero.⁴⁷ A partir de allí, comienza un nuevo ciclo de protesta de la clase obrera, en el que las luchas de los trabajadores y el pueblo comienzan a lograr grados de articulación, de organización y de sistematicidad que marcan una

46 Se realizan movilizaciones y luchas, como por ejemplo, la llamada «Plaza del No», la huelga de los trabajadores telefónicos en 1990, el corte de ruta en Sierra Grande en 1991, la huelga ferroviaria de ese mismo año y la de los obreros de Somisa en 1992, pero en forma aislada.

47 Levantamiento popular en el que se queman las sedes de los tres poderes del Estado en respuesta popular a una ley de ajuste salarial y despidos de trabajadores estatales. Véase Cotarelo, 1999.

tendencia a la conformación de un movimiento contra las políticas impulsadas por la oligarquía financiera desde el gobierno del Estado. En esa articulación, como señala Iñigo Carrera (2002), las huelgas generales aparecen cumpliendo un papel importante, a la vez que en el motín y más aún en los «cortes de ruta» aparecen elementos que embrionariamente (espontáneamente), pueden constituir una oposición al régimen político vigente. También debe tenerse en cuenta que aparece un resquebrajamiento en el interior del bloque dominante desde mediados de los 90, que irá incrementándose hasta hacerse visible con la salida de la convertibilidad en 2001.

Casi paralelamente, el 1º de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ocupaba militarmente las principales ciudades del estado de Chiapas en México y daba a conocer al mundo su Declaración de Guerra al Ejército Mexicano.

El ciclo de la rebelión de los 90 atraviesa los siguientes momentos de ascenso y descenso⁴⁸ de las luchas de los trabajadores. El ascenso y el descenso hacen referencia, no a la cantidad de luchas, sino a los grados de unidad o fractura internos, y los grados de alianza o aislamiento con otras fracciones sociales:

El primer momento ascendente se desarrolla desde diciembre de 1993 hasta agosto de 1997: comienza con el «motín» de Santiago del Estero hasta la huelga general de agosto de 1996 y los cortes de rutas de abril-junio de 1997. Luego del «Santigazo», sucede una serie de conflictos en el interior del país que presentan elementos de «motín»,⁴⁹ al igual que una importante ola de huelgas generales que articulan nacionalmente las luchas

48 Tomamos esta definición de los momentos de ascenso y descenso de los ciclos de lucha desde el punto de vista de la clase obrera, de Iñigo Carrera, 2000.

49 Como el ataque a las sedes de gobiernos provinciales y municipales y residencias de dirigentes políticos en La Rioja (1993), Jujuy (1994), Salta (1994), San Juan (1995), Córdoba (1995), entre otras.

y las potencian en los casos en que se une la totalidad de la clase obrera. Como en 1996, año en que se llevaron a cabo tres huelgas generales convocadas por todos los nucleamientos sindicales. En ese mismo año, y en 1997, se desarrollan hechos que hemos conceptualizado como «toma y defensa con barricada de una posición» (Klachko, 2002), en Cutral Có/Plaza Huincul (provincia del Neuquén), provincia de Jujuy, provincia de Salta y Cruz del Eje (provincia de Córdoba), en los que las y los principales protagonistas son jóvenes trabajadores desocupados que constituyen la personificación de «piqueteros» y articulan el conjunto de sus poblaciones en los enfrentamientos. Es cuando se alcanza el grado mayor de unidad de la clase obrera (en este momento) y de alianza con fracciones y capas de otras clases sociales. Este momento ascendente termina con la huelga general de agosto de 1997 que, si bien se lleva a cabo con gran cantidad de cortes de ruta, ya no es realizada por el conjunto del movimiento obrero. A partir de esos hechos de 1997, comienza un momento descendente de las luchas sociales, en el que los cuestionamientos a los efectos de las políticas implementadas por la oligarquía financiera que han emergido en las protestas, son canalizados hacia el proceso electoral, en el que despierta expectativas de cambio la alianza entre Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente para un País Solidario (Frepaso). Se incrementan en este lapso las acciones protagonizadas por la pequeña burguesía y disminuyen las de los asalariados. En este momento, las acciones tienden a ser dispersas y por reivindicaciones inmediatas de cada sujeto aislado; no hay huelgas generales en 1998 y solo una en 1999 convocada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) —que aglutina principalmente a trabajadores estatales y docentes—, de menor alcance que las que habían sido convocadas por las distintas centrales sindicales en conjunto.

El momento de ascenso se reinicia a partir de los enfrentamientos sociales en el puente General Belgrano en la provincia de Corrientes en diciembre de 1999 (protagonizado por trabajadores estatales que construyen la personificación de «autoconvocados») (Klachko, 2002), y continúa con las tomas de las localidades de Tartagal-Mosconi (provincia de Salta), en 2000 y 2001 y la emergencia del llamado «movimiento piquetero» (de trabajadores desocupados), en el gran Buenos Aires y extensión nacional. En dos años se producen ocho huelgas generales en las que puede observarse mayor grado de unidad y menor aislamiento de los trabajadores, lo mismo que en las tres «jornadas de lucha piqueteras» de 2001. El momento más alto de este proceso de enfrentamiento social lo constituyen las luchas de la semana del 12 al 20 de diciembre de 2001, que culminan en la «insurrección espontánea» del 19 y 20 de ese mes, que contiene en su seno y, a la vez, supera, todas las formas de rebelión (revuelta del hambre, motín, manifestación, toma o barricada, huelga) presentes a lo largo de todo el ciclo histórico, participan la totalidad de las fracciones sociales activadas durante esos años, como así también las formas de organización, y se produce a escala nacional (Iñigo Carrera, 2002).

A pesar del discurso que recorrió el mundo y también a Argentina, que afirmaba la pérdida de protagonismo de la clase obrera, si se analiza la totalidad de los hechos de rebelión entre 1994 y 2001, fueron los trabajadores asalariados los principales protagonistas en cuanto a la cantidad. Del total de 7 743 hechos de rebelión registrados en esos años en la base de datos del PIMSA, 53,3% fueron realizados por asalariados (trabajadores ocupados y desocupados). Es decir, que la mayoría de los conflictos tiene una base socioeconómica, a contramano de ciertos discursos académicos y políticos sobre los nuevos movimientos sociales que se descentrarían de la

cuestión socioeconómica para ser de base sociocultural (Iñigo Carrera, 2010).

La insurrección de diciembre de 2001 es el momento donde queda abiertamente expresada la crisis política, económica y de hegemonía que había comenzado a desarrollarse por arriba⁵⁰ desde el año 1995, con el quiebre en el bloque dominante, y «desde abajo» ya desde el motín de Santiago del Estero, pero que, por sobre todo, se expresa en la última fase ascendente de este ciclo del proceso de rebelión. La crisis de representación política se expresa institucionalmente unos meses antes de la insurrección espontánea, en las elecciones legislativas de octubre de 2001, cuando una proporción importante (42%) de ciudadanos habilitados para votar no lo hicieron, votaron en blanco o anularon su voto. Se popularizó este hecho como el «voto bronca».

A partir de diciembre de 2001, se profundiza la crisis político-co-institucional y de representación con la caída del presidente De la Rúa y la política económica de la «convertibilidad», y durante 2002, momento de mayor cantidad de acciones de protesta, también se expresa un cambio en la relación de fuerzas dentro de la clase dominante, que posibilita el proceso de lucha del pueblo. La combinación de las disputas interburguesas y la agudización de las luchas populares da lugar a nuevas alianzas sociales.

Como señala Gramsci (1997), en cierto momento de su vida histórica los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales, pues ya

no son reconocidos como expresión propia de su clase, o de una fracción de ella [...] Y el contenido es la crisis de hegemonía

50 Aquí es necesario aclarar la diferencia entre la expresión “desde arriba” y “por arriba”, ya que ésta última remite a la lucha en las alturas, al interior de la clase o bloque dominante. En cambio, cuando nos referimos a la lucha “desde arriba” nos referimos a la lucha del pueblo, o de partes del pueblo, desde o en los gobiernos, que complementa a la lucha “desde abajo”.

de la clase dirigente, que se produce o bien porque dicha clase fracasó en alguna gran empresa política para la cual requirió o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas [...], o bien porque vastas masas [...] pasaron de golpe de la pasividad a una cierta actividad y plantearon reivindicaciones que en su caótico conjunto constituyen una revolución. Se habla de «crisis de autoridad» y esto es justamente la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto.

A partir de este proceso de rebelión y las nuevas alianzas sociales y realineamientos de fracciones de la clase burguesa y proletaria, es que las fracciones que se beneficiaban abiertamente de las llamadas «políticas neoliberales» pierden la iniciativa política tal como la habían retenido (y con creces) desde principios de los 90. Eso le confiere un carácter de crisis de hegemonía al proceso de rebelión, que no implica que se haya disputado desde «abajo», pero en esa disputa interburguesa emergen los intereses de fracciones sociales que forman parte del pueblo, que estaban anulados mediante los mecanismos de disciplinamiento que ya mencionamos, y genera la necesidad de reestructurar las distintas herramientas políticas oficiales del sistema institucional, desgastadas luego de que sus cuadros políticos se encolumnaran detrás de la oligarquía financiera. La «lucha en las alturas» obliga a convocar a fracciones «de abajo» y se constituye una nueva alianza en el gobierno.

El ciclo de la rebelión popular concluye con los hechos del 26 de junio de 2002 en que son asesinados por las fuerzas policiales dos militantes de organizaciones piqueteras, del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Posteriormente a estos hechos el presidente Duhalde convoca a elecciones presidenciales.

Como afirmamos en el capítulo anterior en relación con la dinámica de las luchas en gran parte de Nuestra América, en el proceso de la rebelión popular en este ciclo histórico en Argentina, desde el motín conocido como «Santiagazo» en diciembre

de 1993 hasta diciembre de 2001 / junio de 2002. Se ha ido pasando de luchas y formas de organización espontáneas a otras más sistemáticas, y en este sentido, las organizaciones populares que se gestan como estables a fines de la década emergen de la experiencia acumulada a lo largo de este ciclo. Debemos destacar el hilo de continuidad y el rol de articulación que desempeñan las luchas de los trabajadores ocupados y algunas de sus organizaciones sindicales.

Esto lleva a sostener que los enfrentamientos sociales que se desarrollaron en los 90 y sus formas de organización no constituyen hechos aislados o fragmentados, como consideraban algunos analistas, sino que se produce una acumulación de experiencia de lucha y organización entre uno y otro (Klachko, 2008).

Bolivia

En Bolivia las reformas estructurales neoliberales parecen tener una fecha de nacimiento bastante exacta, distintos autores coinciden en mencionar el Decreto Supremo 21 060, firmado por Víctor Paz Estenssoro el 29 de agosto de 1985. El corazón de estas políticas en los diversos territorios nacionales es el mismo, y no es —a esta altura lo sabemos— casualidad, sino fruto de la política emanada del Consenso de Washington y bajada a nuestros sumisos gobiernos por las embajadas yanquis o las misiones periódicas de control del FMI y BM. A diferencia de las privatizaciones (cuasi regalos) de Argentina, en Bolivia se implementaron las «capitalizaciones» de las empresas públicas que, aunque no se privatizaban del todo, cedían el control político de ellas a las empresas transnacionales, como también la mayor parte de las «ganancias». El discurso de la supuesta ineficacia de dichas empresas y servicios públicos (lo cual en ocasiones era verdad gracias al boicot y saqueamiento al que eran sometidos por los gobiernos de turno) justificaba una «im-

prescindible» modernización solamente «posible» mediante el control del capital transnacional y su vinculación a la economía mundial. Las consecuencias sociales, aunque no son patrimonio de los gobiernos neoliberales, sino que tienen su historia de entregas y traiciones, empeoran considerablemente: solamente el departamento de La Paz mostraba, en 2002, 50,9% de pobres (Mamani, 2003).

Como antecedente significativo de las luchas sociales recientes en Bolivia, en 1990 tiene lugar un importante momento con la Marcha por el Territorio y la Dignidad en la que indígenas de tierras bajas se movilizan a la sede de gobierno. La idea de dignidad se retomará con el zapatismo, en los enfrentamientos sociales de los 90 en Argentina y en otros territorios.

Otro importante antecedente fue la lucha del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), en Bolivia, entre mediados de los 80 y de los 90, en la que confluyen indianismo y marxismo, o sea, recogiendo los aportes de las experiencias organizativas ancestrales de los pueblos aymaras y quechuas, de los campesinos y sindicalistas, junto a la sistematización y aportes teóricos del marxismo-leninismo clásico y latinoamericano. Este proyecto de insurgencia armada (del cual formó parte el actual Vicepresidente), se centra en la reivindicación de un Estado indígena, que retoma modos de organización socio-comunitarios socialistas, y cuestiona —con las armas de la crítica y la crítica de las armas— las políticas neoliberales que ya se estaban implementando, por ejemplo con las privatizaciones.⁵¹

A partir de 2000 comienza un ciclo de profundización de las resistencias y ascenso de las luchas, que dejan de darse en forma aislada. Los levantamientos indígenas del altiplano y valle norte de La Paz, de Achacachi y Omasuyos de 2000 y 2001, de

51 Los principales miembros del EGTK fueron apresados en 1992, y se agotó la experiencia a partir de ese momento. Véase Escárzaga, 2015.

los cocaleros contra los planes estadounidenses de erradicación de la hoja de coca y la Guerra del Agua en Cochabamba, en 2000, constituyen los hitos que dan comienzo al ciclo de luchas que desembocará, en 2005, con el ascenso de los movimientos sociales al gobierno de Bolivia. Las jornadas insurreccionales de septiembre-octubre de 2003 en Bolivia, concentradas en el Altiplano norte y en El Alto y la ciudad de La Paz, aparecen como el resultado de un proceso de acumulación de los movimientos sociales desatados en abril de 2000.

La Guerra del Agua, que retoma las modalidades de lucha indígena, se desarrolla en la región de Cochabamba, contra la privatización de ese bien común que no constituye solamente un elemento vital sino también el insumo básico de su producción material. En dicha revuelta urbana fueron confluendo, en primer lugar, los sindicatos agrarios y los comités de regantes, y luego la Federación de fabriles y otras organizaciones regionales. Pero uno de los saltos cualitativos, además de la firme disposición a la lucha que los lleva a la victoria (la multinacional Aguas del Tunari es obligada a retirarse), es la constitución de un ámbito de organización unificado, que respeta y responde a las asambleas populares realizadas en medio del enfrentamiento y a las organizaciones de base. Así se forma la Coordinadora del Agua y de la Vida como resultado de la rebelión. Estos y algunos otros elementos le van otorgando un cariz que, si bien se ancla en la problemática local, se proyecta en la dimensión política nacional. Es en este conflicto que emerge la consigna por la Asamblea Constituyente.

A este cuadro de situación hay que sumarle que una parte del brazo armado del Estado, la policía, también se encuentra en conflicto, como describe Tania Aillón Gómez (2003). La gravedad de la situación es tal, que el motín policial del 8 de abril termina comandando el desacato al estado de sitio dictado el mismo día por el gobierno ante la magnitud de la movilización

social (la «Guerra del Agua» en Cochabamba, los bloqueos campesinos de caminos, y paros cívicos en las ciudades de Oruro, Potosí y Sucre). Y acá debemos evaluar, como indicador del alto grado de disposición popular al enfrentamiento a los desacatos a los estados de sitio que dictan los gobiernos «democráticos», tal como sucedía también en Argentina, en diciembre de 2001,⁵² en países con historias de dictaduras teñidas de sangre.

En 2002, se realiza la marcha de los Pueblos de Tierras Bajas por la Asamblea Constituyente, por la soberanía popular, el territorio y los recursos naturales. Se expresan ejes políticos que incluyen intereses populares generales y, además, las marchas permiten confluir a los 34 pueblos indígenas.

Las respuestas de las burguesías y sus gobiernos insisten en más de lo mismo (en Bolivia y en casi todas las regiones, a excepción de Venezuela y tengamos en cuenta que para 2003 ya se produce el giro político en Argentina): ajuste sobre los salarios y condiciones de vida de las y los trabajadores para pagar las deudas externas y crecientes cuotas de violencia contra las crecientes luchas.

Frente a ello, en octubre de 2003, se desata la llamada Guerra del Gas que se constituye como insurrección popular. En tanto popular, de alcance nacional, es espontánea, pero desempeñan un papel fundamental las organizaciones barriales denominadas «juntas vecinales», sobre todo de la ciudad de El Alto; las organizaciones sindicales, campesino-indígenas están presentes solidarizándose, pero no conducen el hecho. A diferencia de la Guerra del Agua de 2000, no hay coordinación general (aunque esta había sido localizada), sino confluencia espontánea en una movilización de carácter cada

52 En la movilización de masas del 19 de diciembre a la noche rumbo a la Plaza de Mayo en Buenos Aires, en abierto desafío al estado de sitio ordenado por el gobierno nacional, la multitud cantaba: «qué boludos, qué boludos, al estado de sitio se lo meten en el culo».

vez más nacional: contra el gobierno y por la renuncia del presidente, contra la venta del gas por Chile y por su nacionalización, a las que se suman las reivindicaciones de cada fracción social y política, así como la oposición al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En esos días de octubre las fuerzas represivas enviadas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada producen alrededor de setenta y cinco muertos del campo popular que, lejos de amedrentar a la población y aquietarla, generan una activación mayor entre las filas del pueblo, trabajadores y capas medias.

Las consignas son cada vez más políticas y se apunta al «gringo vendepatria» (el presidente Sánchez de Lozada). En este clima que abarca al país entero, en El Alto, ciudad más densamente poblada del departamento de La Paz, y estratégicamente ubicada al lado de la capital, la población y sus juntas vecinales preparan la toma directa de los barrios mediante trincheras y fogatas.

A partir de los días 8 y 9 de octubre las fuerzas armadas provocan varios muertos por día del campo del pueblo, lo que genera más bronca y participación.

Los mineros, con su ya tradicional fuerza simbólica asentada en el lugar estratégico de la producción en el que se ubican, habían arribado desde Huanuni el día anterior. Y, como relata Mamani Ramírez (2003), en ese momento se juntan dos fuerzas: los mineros y los indígenas urbanos y rurales del lugar, dos fracciones del proletariado que son las que han constituido el sujeto de la rebelión históricamente en Bolivia.

Al igual que en Argentina y otros territorios que atraviesan una fase de ascenso del movimiento popular, la represión no aísla sino que suma a masas de población a participar en las calles. La solidaridad trasciende el miedo. Se suman estudiantes y capas medias.

El Alto se constituye en una ciudad tomada totalmente por su población, pese a la militarización. Se construyen trincheras

de guerra en el medio de las calles asfaltadas, se muestra un gran nivel de organización de la población que se alterna entre el abastecimiento de las trincheras, el enfrentamiento a las fuerzas armadas y velar a los muertos. Todas las acciones son coordinadas desde las juntas vecinales.

El lunes 13 caen otros veinticinco muertos en El Alto y La Paz y se suman a las luchas otras ciudades como Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Santa Cruz. Ya para este momento comienza a quebrarse el gobierno nacional mediante declaraciones del vicepresidente de desacuerdo con el uso de la violencia militar y la renuncia de varios funcionarios.

Los sujetos de la lucha son mineros, gremialistas, indígenas y campesinos, maestros, intelectuales y, fundamentalmente, los ayamaras alteños. Pero el sujeto que va a ir articulando el movimiento de lucha en lucha será el movimiento indígena-campesino.

Finalmente, frente a la nacionalización del conflicto, el desmembramiento del gobierno, el fracaso de la intervención de la policía militar y la cantidad de muertos, renuncia Sánchez de Lozada a la presidencia, y huye a los Estados Unidos.

Así se evidencia esa acumulación de experiencia de lucha y organización que se da a lo largo del ciclo de la rebelión que comienza en 2000 en Bolivia.

La consigna de la defensa del gas se constituyó como el ariete que unificó y nacionalizó la lucha y que empalmó con los planteos de emancipación locales, nacionales, indígenas, populares, antineoliberales y antiimperialistas que se venían (re)gestando en dicho ciclo.

La recuperación de la soberanía nacional se torna el paraguas en el que caben los reclamos de soberanía de los diversos pueblos o naciones que conforman la sociedad boliviana.

Una vez asumido el gobierno de quien era vicepresidente, Carlos Mesa, se exige la extradición de «los asesinos», que se los

«castigue por crímenes de lesa humanidad», que Mesa cumpla sus promesas de un referéndum «vinculante» sobre la exportación del gas, la modificación de la Ley de hidrocarburos y la revisión de las privatizaciones, y de una Asamblea Constituyente para decidir qué país quieren refundar las y los bolivianos.

Si bien la lucha articuló a los sujetos populares mencionados con sectores empresariales que habían visto afectados sus intereses por las políticas a favor de las transnacionales, fue el movimiento popular el que dirigió esa lucha que excedía ampliamente los reclamos corporativos e inmediatos, y que se dirige a una reforma del sistema. Se plantea que los recursos bolivianos sean para los trabajadores y el pueblo. Pero esa dirección del movimiento popular no se da a través de sus principales organizaciones sociales, sindicales o políticas — Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Central Obrera Boliviana (COB), Movimiento Al Socialismo (MAS). Están presentes, pero no son sus dirigentes quienes están a la cabeza del enfrentamiento, sino que se desarrolla espontáneamente bajo la dirección de ese sujeto popular unificado en la acción (Econoticiasbolivia.com, 2003). Desde la COB, realizan una autocrítica:

Los que nos consideramos revolucionarios no nos podemos mentir. Ningún líder ni ningún partido político dirigió este levantamiento popular. Ni Evo (Morales) ni Felipe (Quispe) ni nosotros encabezamos la rebelión. Este conflicto, lamentablemente, no tuvo una dirección unitaria. Los trabajadores bolivianos, desde abajo, fueron los que echaron a patadas del poder al asesino de «Goni» (Gonzalo Sánchez de Lozada). Fueron las masas enfurecidas las que le dieron un sopapo al imperialismo norteamericano. Nadie, individual y partidariamente, se puede adjudicar el liderazgo de este conflicto. Nadie.

Según Álvaro García Linera, se constituye «un sujeto plural que tiene como centro principal de movilización el indígena campesino».

Es una multitud en la que no hay un liderazgo previo, el liderazgo va surgiendo de la propia lucha. Y entonces hoy tocó a los regantes, y después de un momento le tocará a los cocaleros, y después en otro momento le tocará a los aymaras urbanos, luego le tocará a los aymaras rurales, y luego capaz le tocará a los sindicalistas de la COB, no es un liderazgo único, homogéneo, va surgiendo de las propias transacciones, luchas, acuerdos y capacidades de movilización en camino. (Klachko, 2015)

Como en cada conflicto en territorio boliviano afloran, emergen y se entrelazan los reclamos de los pueblos originarios entroncados en la lucha por la tierra y por el reconocimiento de sus sistemas de autogobierno, se incorpora lo indígena como eje articulador a un amplio movimiento social y a una lucha de liberación nacional.

La lucha de clases atraviesa el momento político de las relaciones de fuerza, dado que se logra constituir una fuerza social política popular, que lleva las demandas democráticas hasta el límite de lo que el capitalismo dependiente y subdesarrollado puede dar, reclamando la democratización política, social, cultural y económica. Tanto el retroceso de las políticas gubernamentales de 2003 respecto del gas, como la victoria de 2000 que logra echar a la multinacional del agua, constituyen fuertes elementos de antiimperialismo. La lucha de clases en 2003 en Bolivia no pasa por su fase corporativa sino política.

La cultura organizacional indígena comunitaria y la cultura de lucha nacional y popular constituyen en Bolivia la «leche materna ideológica» (Rudé, 1981) que vuelve a nutrir cada levantamiento popular.

Por otra parte, en Bolivia se desarrolló un proceso de construcción de hegemonía mediado por la red de organizaciones sociales, indígenas, sindicales y el surgimiento de organizaciones políticas, centralmente el MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos), que recogerá las politizadas demandas emergentes logrando articularlas en un proyecto político de alcance nacional y perfil electoral (elemento este último importante en el marco de la falta de una fuerza social política revolucionaria). En este proceso desempeña una función central la construcción del liderazgo de Evo Morales, que logra tejer una articulación entre las distintas fracciones sociales «escuchando» las demandas centrales que emergen en las luchas de calles: nacionalización y Asamblea constituyente, según el testimonio de García Linera.

De esta manera, en Bolivia las nuevas expresiones políticas ligadas directamente a los movimientos sociales de resistencia contra las políticas neoliberales de ajuste y privatización (guerra del agua y del gas) e imperialistas (la intrusión de la DEA para la erradicación de la hoja de coca en la región del Chapare), ligadas a experiencias organizativas más viejas, fueron confluviendo en el MAS.

En septiembre de 2004, se conforma el Pacto de Unidad que será la fuerza central del MAS. Está integrado, principalmente por cinco organizaciones nacionales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CS-CIB), Confederación Nacional de Mujeres Campesina Indígena Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» (CNMCOB-BS), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Como nos cuenta García Linera alrededor de este núcleo central se articularán cooperativistas, fabriles, mineros, vecinos y los demás sectores movilizados.

El MAS se constituye con las banderas de la oposición al neoliberalismo y la defensa de la soberanía y la dignidad nacionales. Y la reivindicación de una Asamblea Popular Constituyente, como dijo Evo Morales, entendida como la materialización de una «nueva correlación de fuerzas».

El MAS logrará articular, mediante ese programa democrático, al sujeto popular —pueblo sencillo y trabajador, con los empresarios nacionales o «patrióticos»— como bloque antagónico al orden establecido.

Ecuador

Volviendo la mirada a Ecuador, empecemos por decir que desde 1997 a 2005, es decir en ocho años, tuvo ocho presidentes. Todos los electos por votación popular desde 1996 fueron expulsados. Y especialmente tres de ellos, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, fueron derrocados por insurrecciones populares. La insurrección de «los forajidos» de abril de 2005 expresó cabalmente el desgaste del régimen institucional político y la crisis económica que, como ya hemos relatado para los otros países, desde la clase dominante y sus cuadros políticos en el gobierno eran sistemáticamente descargadas sobre los hombros de las y los trabajadores. Como expresan Ana María Larrea y Pablo Ospina en su texto (2006) sobre la rebelión de los forajidos, el cambio de presidentes no significó una reformulación de las políticas públicas o un viraje al modelo de desarrollo vigente, por el contrario, los nuevos inquilinos de Carondelet aceleraron las reformas neoliberales impulsadas por el FMI.

Aquí el movimiento indígena fue la columna vertebral de todos los procesos de lucha, movimiento organizado con sus memorias de luchas ancestrales, sus reivindicaciones particulares de reconocimiento de sus culturas y derechos negados por siglos de racismo y discriminación, al tiempo que fueron capaces de articular propues-

tas políticas de cambio social y político general. Su disposición a la disputa de poder, al igual que en el caso de Bolivia, los llevó a desarrollar una herramienta política para la intervención electoral, al tiempo que desplegaban gran capacidad de movilización.

Algunos momentos importantes de la constitución del movimiento indígena como sujeto político, son la constitución de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) en 1986, que dirige el levantamiento popular en 1990, la creación del Movimiento Pachakutik para la participación electoral de 1996, la destitución de Bucaram en 1997, la Asamblea Constituyente de 1998 y la insurrección contra Mahuad que lo expulsa del gobierno en 2000, el triunfo electoral en alianza con Lucio Gutiérrez a fines de 2002 y, junto a las capas medias urbanas, la destitución también por medio de la insurrección de este último en 2005.

Se puede establecer un paralelismo entre la conformación del Movimiento Pachakutik en Ecuador y la del MAS-IPSP y, en menor medida, el Movimiento Pachakutik, en Bolivia como instrumentos políticos elaborados desde los movimientos sociales que protagonizan hechos de masas. Logran disputar porciones de poder con mayor o menor éxito en ambos casos.

Pablo Dávalos (2003) rescataba el eje de la plurinacionalidad, como aquel que, en constante redefinición, articula intereses indígenas con los de toda la nación, lo cual conlleva su viraje a actor político. El pasaje del reclamo por la pluriethnicidad al de la plurinacionalidad logra acumular y nacionalizar demandas de diversas fracciones del pueblo y se materializa en la exigencia de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Como en cada rincón de los Andes, la lucha por la tierra tiene la historia de organización de los pueblos. En el caso reciente de Ecuador, la movilización del campesinado indígena estuvo ligada a la desestructuración del sistema de haciendas. Su fuerte estructuración como movimiento social se debe también a la presencia

de líderes formados en los antiguos partidos de izquierda y de las comunidades eclesiales de base. También el mayor impulso organizativo en el movimiento piquetero de Argentina tuvo que ver con el trabajo de estos referentes, al igual que en el MST de Brasil, de los zapatistas, y, nos atrevemos a decir, que en todos los movimientos sociales de nuestra historia reciente están presentes, organizando activamente, referentes de organizaciones revolucionarias, sindicales, sociales e incluso de un minoritario sector eclesiástico de las décadas anteriores (muchos de ellos sobrevivientes) aportando su experiencia y conocimiento a la organización popular y a los jóvenes que se suman con grandes cuotas de rebeldía.

La CONAIE y Pachakutik refuerzan su protagonismo con el derrocamiento de Jamil Mahuad, en alianza con un sector militar cuyo referente era Lucio Gutiérrez. Este último, durante esos procesos de lucha suscitó grandes esperanzas populares, con su discurso nacionalista y antineoliberal, como correlato de lo que estaba pasando en Venezuela, en la que un militar había asumido el gobierno nacional desde esas posturas. Gutiérrez era visto en el activismo ligado a las izquierdas nacionales de la región como otro posible Hugo Chávez.

El fenómeno del retorno de los militares nacionales y democráticos después de las sangrientas dictaduras parecía una realidad, aún con la desconfianza que generaban ambos militares por su condición de tales, en otra porción importante del activismo y en los Foros Sociales Mundiales. Hugo Chávez se encargó, a través de su contacto directo, su presencia y discursos, por ejemplo en el FSM de Porto Alegre, pero, por sobre todo, por sus políticas y posturas a favor de la unidad latinoamericana y en contra del imperio y sus personeros, de ir despejando esas desconfianzas. Pero al revés de Chávez, Gutiérrez no tardó ni un día de gobierno en comenzar a defraudar a las masas latinoamericanas y sus organizaciones populares.

En palabras de Larrea y Ospina (2006),

los electores de Gutiérrez veían en él una persona nueva que no pertenecía a los partidos políticos tradicionales, que lideró una rebelión contra el gobierno que impulsó la dolarización y concedió a los Estados Unidos la base de Manta y que, en alianza con el movimiento indígena y los movimientos sociales, ofrecía un programa de gobierno de corte «progresista». Sin embargo, el programa de gobierno del Coronel cambió radicalmente después de la primera vuelta electoral. Lejos de ser «progresista», Gutiérrez fue un dócil funcionario de la embajada norteamericana, hipotecando la soberanía del país. Su política económica fue totalmente ortodoxa y fiel a los mandatos del FMI y del Banco Mundial.

Un presidente huyendo en helicóptero desde la casa de gobierno y la consigna «que se vayan todos» era el deja vu que nos traía la historia cambiando la cara de la Rúa por la de Gutiérrez y las masas en lucha en Buenos Aires por los combates en el centro de Quito.

Ya después de la salida de Gutiérrez se produce un movimiento asambleario, similar también al que se desarrolló en 2002 en Argentina.

Vamos concluyendo estos breves párrafos que intentan disparar líneas de análisis y reflexión más que de aportar conclusiones acabadas, diciendo que, en Ecuador, es de la mano del gobierno de Rafael Correa que los cambios demandados comienzan a ser realidad, no sin contradicciones, avances y retrocesos, a partir de 2006.

El protagonismo de los pobres urbanos y rurales, con el agregado del fuerte componente indígena en los casos de Ecuador y Bolivia, que logran articular procesos insurreccionales con

las masas de trabajadores en sus diversas fracciones y organizaciones, y con su estratégica construcción política en barrios humildes que rodean las ciudades capitalistas centrales, remite a la constitución de fuerza social de carácter popular que se conforma en vastos territorios latinoamericanos enfrentando a las políticas del capital concentrado y el imperialismo en la región, de la mano de las oligarquías locales y sus cuadros políticos. Esta fuerza social (alianza) de carácter popular conducida en algunos territorios por fracciones burguesas y en otros por fracciones trabajadoras y campesinas, aunque plantean metas de reforma dentro del sistema, abren un nuevo período de la lucha de clases en Nuestra América, a partir del cual se reconfiguran las alianzas y fuerzas político-sociales, sobre las cuales reflexionaremos en los próximos capítulos.

V. La «lucha desde arriba». Avances revolucionarios o reformistas desde los gobiernos

Nos referiremos en este capítulo al pasaje de la «lucha desde abajo» —que analizábamos en los capítulos anteriores— a la «lucha desde arriba», según la definía Lenin (analizado en el Capítulo I), en una buena parte de Nuestra América. Es decir, que el curso del proceso de la lucha de clases toma un carácter más ofensivo desde el campo popular, en el que, aún en el grado de los intereses inmediatos (la limitación de la opresión y la explotación) de la clase obrera, se prepara el terreno o se generan mejores condiciones para la lucha por sus intereses históricos (la superación de la opresión y la explotación). Podemos decir que, en cierta forma, en varios de los procesos de cambio actuales en nuestra región, se retoman tareas pendientes que intentaron las revoluciones democrático-burguesas fracasadas e inconclusas de mitad del siglo xx en América Latina.

Aunque la revolución democrática es burguesa por su contenido económico-social, representa un interés enorme para las clases trabajadoras, pues dado que estos procesos de cambio (como todos en la historia), son protagonizados y desplegados por alianzas de distintas fracciones de diferentes clases sociales, el avance y profundidad que puedan tener dependen del empuje del campo popular, de los explotados y los oprimidos. Como explica Borón (1997), el desarrollo de la democracia en los distintos ámbitos de la vida termina atentando contra el propio orden burgués, por lo tanto, es la propia burguesía la

que pone límites a los desarrollos democráticos y son las clases trabajadoras las únicas que pueden romper esos límites.

Con diferentes características, ritmos e intensidades en gran parte de nuestro territorio latinoamericano, el resultado de los ciclos de lucha que se desarrollan hasta mediados de la década de 2000, es la conformación de fuerzas social-políticas (alianzas de fracciones de distintas clases sociales) de carácter popular, anti-neoliberal, nacionales, con fuertes elementos de antiimperialismo.

Lo que se refleja en todos esos procesos a través de las urnas es el cambio en la correlación de fuerzas políticas, provocado por la crisis de las clases dominantes que abre camino a las luchas populares desde abajo y desde arriba.

Esta fuerza social (alianza) de carácter popular conducida en algunos países por fracciones burguesas y en otros por fracciones trabajadoras y campesinas, aunque plantean metas de reforma dentro del sistema, abren un nuevo período de la lucha de clases en Nuestramérica, a partir del cual se vuelven a reconfigurar las alianzas y fuerzas político-sociales. Proceso en el que pierde iniciativa, al menos en los grados que exhibía en el período anterior, la fracción más concentrada de las oligarquías financieras locales aliadas al capital transnacional.

Las luchas desde arriba y desde abajo

Sin embargo, este pasaje a la lucha desde arriba mediante organizaciones del campo del pueblo que ocupan el gobierno de varios Estados nacionales generó también que las luchas sociales se recondujeran hacia un cauce institucional, lo que derivó en un proceso de institucionalización de la conflictividad social y de las organizaciones mismas, muchas de las cuales dotaron de cuadros a los ámbitos gubernamentales. Algunos autores señalan que se habría desarrollado un ciclo de «reflujo» entre 2005 y 2008 aproximadamente. Pero ¿puede calificarse de retroceso para los

movimientos sociales? Ese ciclo de reflujo coincidiría con el establecimiento, o continuidad en algunos casos, de esos gobiernos del «giro a la izquierda»; que, en algunos casos y en diferente grado llevaron al menos algunas de las demandas de los pueblos en sus programas de gobierno.

Por otra parte, se produjo un cambio de calidad y cantidad en las luchas «desde abajo», dado que las demandas de las masas en lucha o resistencia de los años previos, es decir, del ciclo de la rebelión de los 90 y principios de los 2000, tenían que ver con las consecuencias o directamente con las políticas neoliberales de ajuste: el achicamiento del llamado «gasto social» en educación, salud, etc.; la falta de trabajo y vivienda, el hambre, la impunidad a represores; las privatizaciones del agua, del gas, del petróleo y otras —que ya se habían producido o se estaban intentando—, la inmensa deuda externa que era prioridad sagrada para los gobiernos; las políticas del FMI, el ALCA. Si muchas de esas demandas, al menos en parte, fueron absorbidas y tuvieron cierta respuesta por parte de las nuevas alianzas gubernamentales, entonces es de esperar que la movilización en torno a esos ejes alrededor de los cuales se habían gestado algunas de las organizaciones (los piqueteros en Argentina por trabajo y contra el hambre, los cocaleros y la guerra del agua y el gas, solo por mencionar algunos ejemplos), disminuyan en cantidad y cambien en calidad. Sin embargo, se abre paso a las luchas desde arriba y, en los años sucesivos, crecerán en cantidad las de las y los asalariados, y asumirán un carácter más ofensivo en sus demandas.

Si tomamos el ejemplo de Bolivia podemos ver, como decíamos en el capítulo anterior, cómo Evo Morales y el MAS no fueron los principales protagonistas de la Guerra del Agua en Cochabamba o la Guerra del Gas en El Alto, pero sí los únicos capaces de construir un proyecto político y un programa electoral donde cupieran todas las demandas insatisfechas de los sectores popula-

res y clases subalternas. De hecho, las principales demandas de la Guerra del Gas se articularon en torno a la llamada «Agenda de octubre», que contenía dos reivindicaciones principales, la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.

Pues bien, esa agenda fue cumplida el primer año de gobierno del MAS en Bolivia. Tras la victoria de Evo Morales en diciembre de 2005 y su toma de posesión en enero de 2006, es el 1 de mayo de ese mismo año, cuando el Ejército boliviano, al servicio del pueblo, toma el control de los campos petroleros y gasíferos y se decreta la nacionalización de los hidrocarburos; y el 6 de agosto de 2006, en el aniversario del nacimiento de Bolivia como República (6 de agosto de 1825), se instala la Asamblea Constituyente que tras los años del empate catastrófico —como los denomina García Linera— en Bolivia y la disputa con las élites políticas, económicas y mediáticas, sobre todo del oriente del país, iba a parir una nueva Constitución política del Estado, que se aprobaría en referéndum popular en enero de 2009.

Si la lucha de clases toma un cauce institucional porque hay una fuerza social-política de carácter popular que ocupa el gobierno del Estado, aún en los casos que tiene conducción burguesa pero expresa o incorpora la realización de algunos intereses populares (dando giros de 180° respecto de los gobiernos anteriores, cuyas medidas iban en detrimento del pueblo), la disputa pasa a centrarse, entonces, en la lucha institucional. En esas condiciones, la acumulación de fuerzas populares puede seguir su curso, siempre y cuando la disposición a ello por parte de las masas y las organizaciones no claudique. Lo que se confirma en variados momentos de la historia reciente de nuestros países en que la lucha excede a las instituciones y se libra en las calles con los gobiernos populares formando parte o dirigiendo un bando en los enfrentamientos, o cuando, en algunos casos, las masas populares salen a las calles contra los intentos de golpes de Es-

tado a sus gobiernos populares. Dado que, como las mismas organizaciones reconocen, no es suficiente tomar el gobierno para tomar el poder y no hay lucha popular desde arriba sin lucha popular desde abajo.

Si los cambios hacia gobiernos progresistas y de izquierda que estamos analizando se dan en el marco de las instituciones, por dentro del sistema, ello es porque han encontrado brechas abiertas con la crisis de representación y las disputas dentro del bloque dominante que dirigía las políticas neoliberales. Pero si queremos cambiar la historia, los pueblos latinoamericanos deberemos ser capaces de defender y agrandar esas brechas hasta generar un salto cualitativo, porque, como bien decían Marx y Lenin, no se trata de tomar el poder del Estado burgués, sino de destruir esa vieja maquinaria al servicio de —y funcional a— la reproducción hegemónica de esa dominación, y construir otro Estado que proyecte sobre la sociedad en su conjunto una nueva hegemonía: la de la clase obrera y del pueblo, hasta que seamos capaces de acabar con las clases.

Uno de los aportes fundamentales de los procesos progresistas, de izquierda o nacional-populares, aún con sus diferentes ritmos e intensidades —más reformistas o más revolucionarios—, es recuperar el Estado para asumir un rol fundamental y protagonista en las transformaciones sociales y económicas. Un Estado entendido no como algo estático, fruto de una correlación de clases en disputa por el poder, ni tampoco como el centro desde donde la burguesía define las políticas sobre la base de sus prioridades e intereses, sino como una construcción histórica y geográfica fruto de la interrelación de diferentes estrategias políticas y económicas sobre la cual se construye el poder estatal.⁵³ Esta interpretación estratégica y relacional parte de las de Marx sobre el capital

53 Para el tratamiento de la cuestión del Estado y del poder no de manera estática y cosificada, sino en su dinámica relacional, véase García Linera, 2015.

como una relación social y se sustenta en las tesis desarrolladas durante el siglo XX por marxistas de la talla de Antonio Gramsci y Nikos Poulantzas que concebían al Estado igualmente como una relación social, yendo más allá y profundizando en las contradicciones y relaciones entre este y las estructuras de clase (lo que Bob Jessop (2008), denomina selectividad estratégica), tema de máxima actualidad ya teorizado por Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, donde el Estado sigue siendo el principal interlocutor de las demandas sociales y económicas. Un Estado en transición para la construcción de un escenario posneoliberal en una buena parte de América Latina y el Caribe.

Ahora bien, ello abre una serie de debates respecto de si son esas transiciones las que estamos viviendo en América Latina, qué países y qué Estados las atraviesan y de qué modo, en el marco de las revoluciones pacíficas, de contenido democrático burgués, o procesos reformistas que estamos atravesando, si en aquellos países que conforman los destacamentos más avanzados (Venezuela, Bolivia y Ecuador) hay condiciones objetivas y subjetivas para plantearse la destrucción del Estado burgués, cuánto se ha avanzado en ello y en los grados de construcción de poder popular, cuáles son las posibles vías de desarrollo de esas sociedades hacia proyectos poscapitalistas, solo por mencionar algunos ejes que están en debate y debemos seguir profundizando y que retomaremos en próximos capítulos.

Entre esas nuevas experiencias de los gobiernos del giro a la izquierda podemos diferenciar entre un núcleo duro bolivariano (Venezuela, Bolivia y Ecuador) y un segundo anillo progresista que acompaña con algunas reformas y que actúa de amortiguador de los golpes del imperialismo hacia los primeros (Argentina hasta diciembre de 2015, Brasil, Uruguay, y las derrotadas experiencias de Paraguay y Honduras).

Los procesos de ascenso de las masas populares en relación con la ocupación de espacios gubernamentales desde donde disputar poder y mejorar la correlación de fuerzas a favor del pueblo se presentan con importantes contradicciones, como la fractura de los movimientos obreros e indígena-campesinos frente a los conflictos internos a los que haremos referencia en posteriores capítulos. Pero, históricamente cuando se desarrollan los enfrentamientos sociales y la sociedad se divide en bandos, las y los trabajadores y el pueblo también se dividen y quedan partes de ellos en los distintos bandos.

Lo que se debe observar para ver el carácter de clase de cada fuerza social política que se enfrenta, es qué fracción logra imponer sus intereses como hegemónicos, y en qué medida se incorporan y realizan los intereses populares inmediatos o históricos. Y en estos tiempos, en los que venimos saliendo de un gran período contrarrevolucionario, son los intereses políticos y económicos inmediatos los que se han expresado fundamentalmente en las luchas de las masas populares, y que han sido recogidos por los gobiernos progresistas y de izquierda. Lo que da lugar entonces a revoluciones culturales, democráticas, o ciudadanas, en el marco del sistema capitalista (con algunos gérmenes de los de relaciones sociales alternativas). En esta línea, Álvaro García Linera se remitía a la necesidad del desarrollo del capitalismo andino-amazónico, y Néstor Kirchner a un desarrollo capitalista «en serio». Aunque en Bolivia han virado en los últimos años a hablar del socialismo comunitario del Vivir Bien.

Las alianzas populares que han llegado al gobierno están conducidas por fracciones burguesas o acaudilladas por fracciones del pueblo. Es decir que, por ahora, el esquema es de desarrollo capitalista, aunque de carácter mucho más inclusivo que aquel otro que combatieron, porque son las condiciones y relaciones de fuerzas sociales objetivas y también subjetivas las

que lo posibilitan. Y ello constituye otro debate: qué tipo de desarrollo podemos proponernos y realistamente alcanzar en esta etapa histórica, teniendo en cuenta nuestros lastres y cadenas históricas, para poder plantearnos después un salto verdadero hacia otro tipo de sociedad que construya el «reino» de la libertad y salga del de la necesidad.

Proyectos como el de Ecuador radicalizan la ciudadanía, es decir, intentan ensanchar ese grado máximo de emancipación en el capitalismo que es la emancipación política —como sosténía Marx en *La cuestión judía (1844)*—, al tiempo que se impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas, condiciones necesarias para poder plantearse la profundización de las transformaciones hacia procesos revolucionarios; de la revolución ciudadana al socialismo, única manera de lograr lo que se plantean: el «buen vivir» para el pueblo. Pero es en esos marcos de las correlaciones de fuerzas objetivas y subjetivas que existe la necesidad de llevar a cabo la revolución democrático-burguesa, porque todavía no se plantea la expropiación de la propiedad privada y el fin de las relaciones de explotación que llevan a la alienación humana, pero que solo pueden ser llevadas a cabo, en su máxima expresión, por las y los trabajadores y el pueblo con sus organizaciones, y a escala planetaria.

En Ecuador, con la Revolución Ciudadana, en Venezuela con la concepción del Socialismo del Siglo XXI o el Sumak Kawsay o socialismo comunitario de Bolivia (concepciones permanentemente intercambiadas y retomadas en los tres territorios), se ensayan formas estatales de transición en las que se procura el desarrollo capitalista con mayor redistribución de la riqueza hacia los pueblos, mejores condiciones para las masas trabajadoras, y soberanía en el plano internacional, con formas mixtas y de diversificación de la propiedad. Es decir, que se van implementando o experimentando formas colectivas o cooperativas de propiedad,

todavía reducidas o localizadas en sectores marginales de la producción o en experiencias comunales en el campo, propiedad estatal sobre todo en la administración de los recursos energéticos y servicios públicos, con la continuidad de propiedad privada en los núcleos centrales de la producción.

Si bien, las luchas se canalizan hacia el sistema institucional, hemos visto que cuando se trata de defender las conquistas o al gobierno popular, las masas encaran movilizaciones callejeras inmensas con gran disposición al enfrentamiento.

Caracterización de los diferentes gobiernos progresistas

Visto lo anterior —y si bien cualquier caracterización es susceptible de matices y distintos tonos de grises— queremos caracterizar los diferentes gobiernos progresistas, de izquierda o nacional-populares de Nuestra América en dos anillos.

En el primero situaríamos a los que más han avanzado en la profundización de un horizonte posneoliberal, el llamado núcleo bolivariano: Venezuela, Bolivia y Ecuador, quienes junto con Cuba, comparten pertenencia a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y un mayor grado de radicalización de los procesos de cambio, además de haber cristalizado las transformaciones políticas, sociales y económicas en nuevas Constituciones fruto de Asambleas Constituyentes, que dieron paso a una refundación del Estado. Vamos a estudiar estos tres procesos de manera exhaustiva en los próximos capítulos, por lo que no nos detendremos en este momento.

Alrededor de ese núcleo duro del cambio de época en América Latina y el Caribe gravita una serie de países que se agrupan en un segundo anillo progresista. En él podemos encontrar a Argentina —hasta el reciente cambio de gobierno nacional—, Brasil y Uruguay, además de, con matices, Chile; también serían parte de este segundo grupo los nuevos gobiernos de izquierda de Centroamérica, como Nicaragua y El Salvador.

Estos gobiernos comparten, en general, las características del regreso del Estado a la redistribución de la riqueza, aunque siempre sin un cuestionamiento claro al modo de acumulación capitalista; y se diferencian de los del núcleo duro bolivariano donde tanto el MAS-IPSP en Bolivia, como Alianza País en Ecuador o el Movimiento V República (MVR, después Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) en Venezuela, fueron instrumentos políticos creados desde las mayorías populares ante la crisis de representación y legitimidad en la que el neoliberalismo sumió todo el sistema de partidos, incluidos los viejos partidos de izquierda. En ese sentido y frente a una también importante crisis de representación política, en este segundo anillo progresista también se ha logrado sobreponer esos anquilosados instrumentos políticos que condujeron la salida de las dictaduras militares, pero que continuaron la dictadura del capital bajo formas democráticas. Fueron o bien una parte de esos tradicionales instrumentos políticos reciclados (caso del peronismo en Argentina), o partidos de izquierda clásica, en solitario (caso del PT en Brasil), o en forma de coalición de partidos (Frente Amplio de Uruguay) o las viejas guerrillas reconvertidas (FSLN en Nicaragua o FMLN de El Salvador), los que han accedido al gobierno de sus países.

Podemos afirmar que los modelos económicos de este segundo anillo progresista, a diferencia del núcleo duro bolivariano, donde hay un intento —más o menos logrado según los casos— de generar transiciones al socialismo, apuntan a un capitalismo de Estado donde, a diferencia del neoliberalismo, se apuesta por una redistribución de la riqueza para sacar de la pobreza a amplias capas de la población y redinamizar el mercado interno.

Brasil fue el primer país, después de Venezuela, donde llegó el cambio de época en América Latina. Tras tres candidaturas fallidas (1989, 1994 y 1998), Lula da Silva gana, en

octubre de 2002, las elecciones presidenciales derrotando a José Serra, delfín del expresidente Fernando Henrique Cardoso.⁵⁴ Lula, obrero metalúrgico y uno de los principales dirigentes sindicales durante la dictadura militar, era el candidato del Partido de los Trabajadores.

El PT nació a inicios de los 80 como una confluencia de organizaciones sindicales y partidos de izquierda, y aunque sin asumirse directamente como marxista, sí contenía en su programa original una crítica a la socialdemocracia: «Las corrientes socialdemócratas no presentan hoy ninguna perspectiva real de superación histórica del capitalismo imperialista».

Sin embargo, podríamos afirmar que los ocho años de gobierno de Lula y los cuatro inmediatamente posteriores de Dilma Rousseff, la exjefa de gabinete de Lula, se pueden calificar como de política socialdemócrata, aunque algunos autores como Atilio Borón llegan a hablar de «posibilismo conservador» (2004b), y otros como Franck Gaudichaud (Bechtold-Rognon, 2010) los definen como de la búsqueda de la «estabilidad macroeconómica y los intereses del capital, muy por encima de las reformas sociales prometida».

Pero lo que es innegable es que el PT, gobernando el país más grande de América Latina, con más de 200 millones de habitantes, consiguió poner en marcha una serie de medidas sociales que sacaron de la pobreza a 40 millones de brasileñas y brasileños. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la extrema pobreza bajó de 10,7% en 2005, ya con el programa Bolsa Familia implementado, a 6,1% en 2011, una vez que Lula deja el gobierno. Y la pobreza bajó en esos mismos años de 36,4% a 20,9%. Todo ello se tradujo en

54 Otrora intelectual constructor de las teorías de la dependencia, quien luego pediría que se olvide todo lo que había escrito, e implementaría las reformas neoliberales desde la presidencia del Brasil.

la mejora de otros indicadores sociales, como, por ejemplo, el de mortalidad infantil, que pasó, en los mismos años, de 23,5 a 12,3 por cada mil nacimientos (CEPAL, 2014).

El siguiente gobierno progresista, o en este caso más probablemente podríamos hablar de nacional popular, será el de Néstor Kirchner en 2003; surgido desde ese movimiento nacional que atraviesa la historia y «marca la cancha» política argentina desde 1945: el peronismo. Fruto de la acumulación política de la resistencia, de las luchas del ciclo de la rebelión popular de los 90, y de la profunda crisis de hegemonía expresada en esas luchas y también en las urnas, Kirchner supo leer el cambio de época también en Argentina y se presenta como candidato en las elecciones anticipadas convocadas por el entonces presidente provisario Eduardo Duhalde.

Sus inicios son ambiguos pues se constituye como el candidato del peronismo, que en ese entonces comandaba en los hechos el duhaldismo, que expresaba los intereses de los grupos concentrados, con un perfil más productivista y que por ello había impulsado, como salida a la crisis de 2001, la devaluación del peso para hacer más competitivas sus exportaciones, en detrimento de la otra fracción de la cúpula de la burguesía más directamente encarnada por el capital transnacional dueño de las privatizadas empresas estatales y recursos naturales y estratégicos, que por ello pugnaban por la continuidad de la convertibilidad que les permitía fugar en dólares a sus casas matrices la recaudación por servicios. Ello se correspondía con un discurso anti FMI del presidente saliente, del cual Kirchner era el candidato. Pero no bien asumió la presidencia, con muy bajo nivel de legitimidad, ya que gana las elecciones con solo 22% de los votos (por el abandono del expresidente Menem en la segunda vuelta electoral), se despegó rápidamente de su antecesor, mediante varias decisiones políticas y económicas. Desde recibir a los familiares de Darío

Santillán y Maximiliano Kosteki, militantes populares asesinados, en junio de 2002, por la policía provincial, siguiendo órdenes del gobierno nacional y provincial; el ya histórico pedido de perdón por parte del Estado nacional por los atroces crímenes cometidos por la última dictadura militar; hasta la renegociación, con importantes quitas, de la deuda externa que se había convertido desde hacía treinta años en el karma supuestamente infranqueable y obstáculo de cualquier proyecto de soberanía nacional. En lo sustancial, Kirchner orientará las políticas del Estado a la reactivación económica centrada en el mercado interno, la obra pública, la extensión de políticas destinadas a paliar o revertir amplias problemáticas sociales y la extensión de los subsidios a trabajadores desocupados sobre los que intentará que deriven en emprendimientos productivos.

Estas y otras medidas impulsaron la actividad económica, como lo indica el crecimiento del PIB a tasas de alrededor de 9% anual durante cinco años seguidos,⁵⁵ y la reducción de la pobreza y la desocupación (recordemos que durante la presidencia de Menem, que había utilizado también la identidad peronista para aplicar políticas absolutamente antipopulares, también había crecido el PIB a 8% anual durante los primeros años, pero aquella vez, por el contrario, con el aumento de la desocupación y la pobreza). Esta vez, a partir de 2003, se implementaron políticas activas desde el gobierno del Estado para alentar el consumo interno además de las exportaciones, por lo cual las políticas represivas y de reducción del costo laboral del gobierno de Duhalde quedan relegadas.

Dos de las medidas centrales que toma el nuevo gobierno serán la restitución de los convenios colectivos de trabajo median-

55 Si se tiene en cuenta el lapso de 2003 a 2013 se puede afirmar que «a partir del primer gobierno kirchnerista, en 2003, se inició una década de crecimiento que se constituyó en la expansión ininterrumpida más pronunciada de la historia argentina, en tanto el PIB aumentó a una tasa anual de 6,5% entre 2003-2013». (Barrera y Manzanelli, 2015)

te negociaciones paritarias; y la extensión de las jubilaciones a trabajadores sin aportes.

Con el nuevo gobierno nacional y en vinculación con la lucha popular, cambia la correlación de fuerzas dentro del bloque dominante, lo que lleva a la implementación de cambios en las políticas estatales y se logra recomponer el sistema institucional legitimado por el voto popular. El cambio de alianzas sociales y políticas incluye el realineamiento dentro del llamado «movimiento piquetero», y algunas organizaciones pasan a integrar la alianza social en el gobierno, y otras permanecen en la oposición (aunque continuarán los realineamientos). Lo mismo sucederá con el movimiento obrero organizado que terminará partiéndose en función del apoyo o no al gobierno, cuestión que irá variando. También se constituye como oposición al nuevo gobierno una parte de la oligarquía financiera que antes había logrado expresar y realizar cabalmente sus intereses sobre todo mediante el gobierno de Carlos Menem. En cambio, otra parte del empresariado y los grupos concentrados se alinean con el gobierno pero también irán variando sus posiciones de acuerdo con las decisiones políticas.

Así, para 2008, el gobierno de Cristina Fernández (esposa de Néstor Kirchner) deberá atravesar una crisis política derivada de un enfrentamiento social, que parte al país en dos, desatado por el intento gubernamental de cobrar impuestos (retenciones) a las exportaciones agrícolas, sobre todo de soja.⁵⁶ Claramente, a partir de allí los grandes terratenientes y empresarios del campo (capital financiero, ya que está aliado a la burguesía bancaria, industrial y comercial, nacional y transnacional) adoptarán una oposición muy activa, utilizando incluso instrumentos de lucha que

56 Las retenciones fueron aplicadas a todos los exportadores sin diferenciar a los grandes propietarios y comercializadores de los medianos y pequeños, lo que más tarde fue reconocido como un error que posibilitó su unidad, inédita en el país, en la llamada «mesa de enlace» que unía entre otras, a la oligárquica Sociedad Rural con la Federación Agraria Argentina, su histórica enemiga.

unos años atrás usaban las fracciones más radicalizadas de las y los trabajadores, como los cortes de rutas.

Esta cuestión no es menor ya que ha atravesado históricamente los diversos o posibles proyectos de desarrollo de las burguesías latinoamericanas. Decíamos al principio que en varios de los procesos de cambio actuales en nuestra región se estaban retomando, desde los Estados, tareas pendientes de las revoluciones democrático-burguesas fracasadas e inconclusas, de mitad del siglo XX, y ahora agregamos que en varios de ellos se repiten las mismas trabas que entonces. Es decir, que si bien se retoman los esfuerzos industrialistas basados en la recomposición del mercado interno y se sientan las bases para lograr mayores grados de autonomía nacional respecto del capital financiero internacional, aún no se cortan las amarras de una de las mayores trabas de esas revoluciones democrática-burguesas del pasado, a saber, en palabras de Atilio Borón (2003), las bases materiales del dominio de los «junkers» criollos, la sacrosanta inviolabilidad del sector agrario.⁵⁷ Cuando intentaron hacerlo como en 2008, debieron dar marcha atrás.

A pesar de que fracasó esa medida, se avanzó en la redistribución de la riqueza mediante políticas sociales, una de las cuales fue la Asignación Universal por Hijo, en 2009. Inmediatamente después también se avanzó en la reestatización de algunas empresas y servicios básicos y estratégicos como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Aerolíneas Argentinas y más tarde serán los ferrocarriles.

En términos económicos, en los doce años de gobiernos kirchneristas, el hecho de mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares, redistribuyendo en parte el excedente nacional

57 Para el tema de las revoluciones democrático-burguesas y sus posibilidades históricas en América Latina, así como las trabas impuestas por las oligarquías terratenientes, existen múltiples trabajos y debates, muchos de ellos enmarcados en las teorías de la dependencia. Véase, por ejemplo, Quijano, 2000: 239-42; y Cuevas, 1977.

no significó una merma en las tendencias de concentración y centralización de la riqueza, ni de los procesos de extranjerización impulsados con fuerza en las décadas anteriores.⁵⁸ En cuanto a la industrialización, entre 2002 y 2007, «la recomposición de la tasa de ganancia y el incremento de la rentabilidad relativa de las inversiones productivas se tradujo en una aguda recuperación de los sectores productores de bienes que traccionaron a la economía en su conjunto entre los años 2002 y 2007», que luego transitará por «un período de desaceleramiento y posterior estancamiento en el nivel de actividad, producto tanto de limitantes internas como por el impacto de la crisis internacional» (Arceo, González y Mendizábal, 2010b).

Por último, citamos otro trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) sobre la aparente paradoja entre la importante mejoría que se registró en los niveles de pobreza, indigencia, desocupación, salarios y la participación de los asalariados en el ingreso, con un estancamiento de esta última a partir de 2010: el comportamiento de la distribución del ingreso indica que existió una recuperación de la participación de los trabajadores hasta 2009, cuando arribó al 40,4%, pero a partir de ese momento se estancó en torno del 39-40% del ingreso nacional [...] Esa contradicción es solo aparente porque si bien el nivel de la ocupación y del salario constituyen variables fundamentales para determinar la participación de los asalariados en el ingreso, hay otra que es igualmente trascendente que consiste en el ritmo del crecimiento económico y específicamente de la productividad del trabajo. De allí, que la evolución de la relación entre la productividad y el nivel general de los salarios

58 Aunque «en el período de crecimiento 2003-2007 las firmas de capital nacional tuvieron un aumento mayor que las empresas con participación extranjera, tanto en términos de valor de producción, como de valor agregado y creación de puestos de trabajo». (Arceo, González y Mendizábal, 2010).

exprese la trayectoria de la participación de los asalariados. (Barra y Manzanelli, 2015: 21-2)

Por otra parte, «este estancamiento distributivo estuvo estrechamente vinculado con el veto que impusieron los sectores oligopólicos al avance de la participación de los asalariados mediante la imposición de un proceso de creciente inflación» (22).

También en el Cono Sur, el Frente Amplio gobierna Uruguay ininterrumpidamente desde 2004, primero con Tabaré Vázquez, a quien siguió el antiguo tupamaro Pepe Mujica, para ser relevado de nuevo por Vázquez. El Frente Amplio es una coalición de partidos políticos donde se inscribe el antiguo Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que se fusionó en el Movimiento de Participación Política (MPP), junto al Partido Socialista y el Comunista, entre otros muchos partidos de izquierda. El Frente Amplio tiene un sistema de primarias para escoger sus candidatos, que trata de guardar equilibrios entre los diferentes partidos que lo componen. Actualmente (2015) el Frente Amplio mantiene la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, además de gobernar la intendencia de Montevideo.

En Chile el escenario se complejiza pues el sistema económico neoliberal y el político, hijo de la dictadura de Pinochet, se mantiene, incluso a pesar del gobierno de una coalición de centro-izquierda, la Concertación primero, redefinida actualmente como Nueva Mayoría.

Esta fue creada, en 1988, como «Concertación de partidos por el No» para agrupar para el referéndum a todas las fuerzas de centro-izquierda que mantenían una postura contraria a la continuidad de la dictadura de Pinochet. El referéndum, celebrado el 5 de octubre de 1988, perdido por la propia dictadura, sirvió para posicionar políticamente a una Concertación que agrupaba al Partido Demócrata-Cristiano (DC), el Partido Por la Democracia (PPD), el Radical Socialdemócrata (PRSD) y el Socialista (PS), entre otros.

Posteriormente, para las elecciones en las que ganó su segundo mandato Michelle Bachelet, en 2013, la Concertación dio paso a la Nueva Mayoría, que sumaba a organizaciones como el Partido Comunista de Chile (PC) o el Movimiento Amplio Social (MAS). Bajo esta fórmula de la Nueva Mayoría fue electa Bachelet en segunda vuelta con 62% de los votos.

Por su parte, Centroamérica ha conocido, en los últimos años, victorias de las antiguas guerrillas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.

El FSLN había sido creado en 1961 como homenaje y referencia a Augusto Sandino, que entre 1927 y 1933 había llevado adelante una guerra de guerrillas contra el imperialismo estadounidense en Nicaragua. En 1979, mediante la vía insurreccional, logran derrotar la dictadura de Anastasio Somoza e imponer un gobierno revolucionario que duró hasta 1990 cuando pierden las elecciones a manos de la neoliberal Violeta Chamorro y una coalición de partidos de derecha impulsada y financiada por los Estados Unidos, luego de un baño de sangre y ahogamiento económico también financiados por el imperio.

Pero tras dieciséis años de gobiernos de derecha que dejaron un país con 60% de la población en situación de pobreza, el FSLN gana las elecciones en 2006 y convierte de nuevo al comandante Daniel Ortega en presidente, cargo que revalidaría en 2011 con 62% de los votos.

Para lograr estos porcentajes de votación y adhesión popular, el FSLN tuvo que hacer algunas concesiones y pactos interclásistas con la burguesía nicaragüense y con la Iglesia. Si en la campaña de 2006 el lema de los sandinistas era «Unida, Nicaragua triunfa» y el candidato a vicepresidente fue Jaime Morales Carazo, un excontra agente de la CIA, desde el triunfo de 2011 se profundizó el pacto con la Iglesia y el

carácter de la revolución, definida como «cristiana, solidaria y socialista».

Mientras tanto, en su vecino centroamericano El Salvador, se había constituido el FMLN, también en 1980, para coordinar las diferentes fuerzas y organizaciones guerrilleras que entre 1980 y 1992 pelearon contra la dictadura militar.

Tras la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec (México), el FMLN obtuvo el estatus de partido político y en 2009, con un candidato presidencial «externo», el periodista Mauricio Funes, ganó la presidencia con 51% de los votos. El vicepresidente de Funes era Salvador Sánchez Cerén, el excomandante guerrillero Leónel, quien fue el candidato presidencial del FMLN en las elecciones de 2014, cuando ganó, en segunda vuelta, con más de 50% de los votos válidos. Así se convierte en presidente de El Salvador un antiguo comandante guerrillero que mantenía la esencia del FMLN.

Si bien Nicaragua y El Salvador son parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), y en El Salvador rige el dólar como moneda oficial, en los últimos años los dos han virado hacia la izquierda, pasando a formar parte del cambio de época en América Latina y el Caribe. Nicaragua incluso entró a formar parte de la ALBA en 2007, pocos meses después de la victoria del FSLN.

Y si bien podemos decir que los países mencionados componen el segundo anillo progresista, que rodea el núcleo duro bolivariano conformado por Venezuela, Bolivia y Ecuador, hay un país que lleva a cabo un proceso revolucionario desde 1959 sin el que sería imposible pensar este cambio de época en América Latina, nos referimos a la Revolución cubana.

Como ya es parte del folclore latinoamericano, nombramos a Cuba como el faro que alumbró la senda de las resistencias y luchas populares. Pero si bien en el ciclo de la rebelión de los 90 se constituía como el único faro con su poderosa moral, es a partir

de los virajes que analizamos que podrá comenzar a recibir luz también de su entorno sureño. La activa solidaridad que estableció el comandante Chávez con la Isla desde su asunción, y que continuaron los otros países que forman parte de estos dos anillos, significó un gran respaldo para su combate principal contra el imperio que la tiene sitiada (bloqueada) comercialmente hace más de cincuenta años, en lo que constituye el mayor sitio de la historia. Siempre intentaron ahogar en pobreza lo que no consiguieron ahogar en sangre, aunque lo intentaron. La fortaleza del pueblo cubano reside en su conciencia. Soportar un desarrollo escaso y deficiente de sus fuerzas productivas en el marco mundial de la nueva y poderosa revolución tecnológica que atraviesa como nunca antes y con inusitada rapidez las fronteras temporo-espaciales, con la propaganda intensa y sobreabundante en recursos acerca de todas sus carencias materiales y de infamias hacia la dirigencia de la revolución, solo puede ser posible (y solo puede ser comprendido) si se considera la fuerza moral del pueblo cubano que defiende su revolución, aun planteando imprescindibles cambios en un mundo que no se corrió a la izquierda, sino todo lo contrario: vio fracasar la enorme experiencia del campo socialista y el fortalecimiento del capitalismo en su cara más salvaje. Sin embargo, no sin numerosas dificultades, se constituyeron en bandera de lucha y causa de los pueblos del mundo.

A partir del giro latinoamericano, Cuba ya no estará sola. Finalmente el voto casi unánime (salvo los Estados Unidos e Israel) que se venía expresando año tras año en la ONU, a favor de levantar el bloqueo capitalista, tuvo que ser escuchado por el gobierno del imperio (fruta jugosa del Caribe que quisieran exprimir los capitales vinculados al imperialismo norteamericano, o sea, casi todos los monopolios, y no podían) y se tramita en nuestros días, tras la vergonzosa Cumbre de las Américas, última para los Estados Unidos y digna para los pueblos americanos.

El Foro de Sao Paulo como expresión del cambio de época

Y si hablamos de cambio de época en Nuestra América, probablemente un espacio que define perfectamente este cambio de época es el Foro de Sao Paulo (FSP), fundado en 1990, a partir del Encuentro de Partidos y Organizaciones Políticas de Izquierda de América Latina y el Caribe, auspiciado por el Partido de los Trabajadores (PT) y otras fuerzas de izquierda latinoamericanas y caribeñas. En el momento de su fundación, pocos meses después de la caída del muro de Berlín y en medio de la implementación del modelo neoliberal en América Latina y el Caribe, solo el Partido Comunista de Cuba gobernaba entre todos los miembros del FSP. Hoy en día, son doce países de Nuestra América gobernados por partidos políticos pertenecientes al Foro de Sao Paulo, aunque no pudieramos colocar en estos momentos al Partido Nacionalista de Perú de Ollanta Humala, entre las fuerzas progresistas, nacional-populares y/o de izquierda del continente.

El Foro de Sao Paulo es, en última instancia, un reflejo de la realidad política latinoamericana, de los avances y problemas, de éxitos y tropiezos de la izquierda que se ha convertido en gobierno o aquella que representa a la oposición progresista más importante. Los documentos que contienen las agendas, los puntos de discusión y los acuerdos del Foro, conforman una radiografía comprensible de la evolución histórica del pensamiento de la izquierda en los últimos veinticinco años.

El FSP, a su vez, es un muestrario de la variedad de las izquierdas y un ejemplo de unidad en la diversidad. A pesar de las diferencias, representa la unidad de los partidos progresistas, populares y de izquierda, sin unanimidad doctrinaria o programática, sino reconociendo la existencia de diferentes historias nacionales y particulares. Se coincide en que la izquierda no puede ser una sola y menos a nivel regional, continental. Las izquierdas de América Latina solo pueden unirse en la diversi-

dad y como parte de ella, se reconoce la existencia de distintas estrategias nacionales y continentales.

El Foro es también una tribuna para exponer, denunciar o informar sobre las luchas de la izquierda latinoamericana, una plataforma que sirve sobre todo para expresar y pedir la solidaridad con las diversas e innumerables causas. Movimientos, luchas, acciones y problemas del movimiento progresista de América Latina. Muchas veces estas denuncias encuentran respuesta unificada y práctica. A pesar de las limitaciones, los partidos saben que el Foro es el principal espacio para ofrecer y dar solidaridad.

Podríamos decir que el Foro de São Paulo hasta hoy ha atravesado tres etapas, que son las de la izquierda latinoamericana y caribeña en estos últimos veinticinco años. La primera estuvo caracterizada por la resistencia y el enfrentamiento al neoliberalismo y la búsqueda de alternativas. La segunda dominada por la victoria de los partidos vinculados al Foro en las elecciones de gobiernos nacionales. La tercera, en que nos encontramos, marcada por la crisis internacional del capitalismo y el deterioro de la hegemonía estadounidense, pero también por el contraataque del imperialismo y de la derecha en América Latina y el Caribe. La función que le cabe hoy se constituye entonces como estratégica en cuanto la supervivencia de las experiencias de transformación o reforma social que hoy tenemos en Nuestra América, y depende de la activa solidaridad y acción de los pueblos y sus organizaciones.

VI. Venezuela como vanguardia del giro a la izquierda latinoamericano

Hemos tratado en el capítulo anterior el carácter de gobiernos en disputa que asumen las nuevas experiencias latinoamericanas que intentan atravesar caminos posneoliberales, con mayor o menor éxito. En el presente abordaremos el caso de aquella experiencia que abrió la senda del cambio en Nuestra América y que también se configurará como gobierno en disputa, pero que tiene su eje más a la izquierda, al igual que Bolivia y Ecuador, que los de aquellos países que constituyen el segundo anillo progresista en la región, en los que conviven en el gobierno proyectos de izquierda y de centroizquierda.

En la Venezuela bolivariana, el eje de disputa al interior de la revolución bolivariana, de su gobierno y sus movimientos y partido se ha dado entre 1999 y 2015 entre posiciones de centroizquierda y de izquierda. La victoria de la derecha en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 modifica la correlación de fuerzas a favor de la opositora Mesa de Unidad (MUD) en la Asamblea Nacional, pero mientras se terminan estas líneas ni siquiera han tomado posesión las y los nuevos diputados, por lo que es muy pronto para definir el rumbo de Venezuela en los próximos años, aunque sí podemos analizar lo sucedido durante los dieciséis años de revolución bolivariana.

Queremos comenzar estas líneas reflexionando sobre ejes que consideramos centrales a tener en cuenta para el análisis de situación y relaciones de fuerzas por la que atraviesa esta experiencia, a partir de que comienzan a consolidarse en el gobierno del Estado, y que ponemos aquí a modo de disparar debates, muchos de

los cuales ya se vienen dando y que, además, tienen historia en los procesos revolucionarios del pasado.

A finales de 2004, la Revolución bolivariana proclamó su carácter antí imperialista y definió su proyecto político como de socialismo del siglo *xxi*. Como expresaba el comandante Hugo Chávez (2012), en el importante documento «Golpe de timón», las y los venezolanos no quieren permanecer en el ámbito del capitalismo, y se proponen construir y cimentar las bases del socialismo bolivariano del siglo *xxi* «para desmontar el inhumano, depredador y belicista sistema de acumulación capitalista». Para trascender la lógica del capital que lo sustenta, define, es determinante el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos.

Solamente basándonos en estas definiciones, podríamos decir que dichos cambios y posicionamientos estratégicos remiten a lo que, en términos gramscianos, se denominan movimientos orgánicos de la sociedad, mientras que las propias limitaciones, disputas y obstáculos a que somete la oposición de derecha a los países moderados, los repliega al ámbito de los movimientos coyunturales que refieren a la «mezquina crítica» de la vida cotidiana, del corto plazo, con algunos valientes pasos en dirección estratégica. El «Programa del Candidato de la Patria, comandante Hugo Chávez» (que se ha convertido en el «Plan de la Patria. Programa de gobierno bolivariano 2013-2019» (2012)), aborda aquellos elementos que deben transformarse en ese movimiento orgánico de la sociedad venezolana para la construcción del socialismo, y en ese sentido las transformaciones y avances en Venezuela serán más irreversibles que en los países progresistas moderados.

En el caso de la Venezuela bolivariana son enormes —aunque no suficientes— los avances en materia social, económica política y cultural en relación con el calamitoso escenario anterior para las masas populares.

Venezuela en cifras

Veamos algunos de los principales indicadores sociales que, de manera más amplia se pueden encontrar en el reciente «Venezuela en cifras» (Gobierno de Venezuela, 2015).

Dos formas de medición de pobreza han sido históricas en Venezuela, por ingreso y por necesidades básicas satisfechas. En ambas, la reducción sustancial es la constante del cambio de modelo revolucionario. La pobreza por ingreso se ha reducido en más de cuatro veces; independientemente del comportamiento de la inflación, lo que muestra las políticas de protección al pueblo por parte de la revolución versus el modelo neoliberal del final de la IV República. De casi 50% de la población venezolana bajo pobreza que dejó como herencia el neoliberalismo, actualmente tenemos un porcentaje menor a 15%. Asimismo, la pobreza estructural alcanzó el valor histórico de 5,4% para 2014, pese a la guerra económica. Este índice mide las condiciones estructurales de vida de la población, más allá de las coyunturales

Si miramos el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que formula el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), podemos observar como Venezuela crece de 0,677 en el año 2000 a 0,764 en 2013.

Tanto la reducción de la pobreza como el aumento en el Índice de Desarrollo Humano tienen una traslación directa en otros indicadores sociales, como el aumento de la esperanza de vida al nacer, que pasa de 72 años en 1998 a 75 en 2014.

La FAO de Naciones Unidas también coloca a Venezuela en el cuarto lugar entre los países con menor desnutrición infantil del mundo, con 3,4% (2015).

Otros dos elementos fundamentales para asegurar el bienestar de la población son la salud y la educación. La inversión pública en salud entre 1999 y 2013 se incrementó en 59% y en educación lo hizo en 39%.

Otro dato más: en 1998, la cantidad de pensionados apenas alcanzaba 387 007, y se incrementó a 2 565 725 en 2014. De la población con derecho a pensión —mujeres de 55 años o más y hombres de 60 años o más— en 1998 apenas 19,6% tenía el beneficio, y para el año 2014 la cobertura aumentó a 72,6%.

Actualmente, la inversión social en la República Bolivariana de Venezuela alcanza 60% del PIB, algo que probablemente no invierte ningún otro país del mundo, garantizando que las bases materiales del proceso sean sólidas para, a partir de ahí, poder irradiar la revolución a otros ámbitos de la vida, la ampliación de los márgenes de la democracia, la construcción del poder popular, y la de hegemonía en el ámbito cultural.

La audacia política que caracterizó ese proceso tempranamente —mientras en las otras geografías de Nuestra América se jugaba la partida de la peor cara neoliberal— constituyó a Venezuela en la vanguardia de los cambios, que siguen profundizándose, y que, a nuestro entender, marcan, junto a la defensa de otros gobiernos populares, la batalla principal de estos tiempos.

Referencias ideológicas y expresiones políticas

A diferencia de otros procesos, Venezuela no contaba previamente con movimientos populares de tan marcada presencia y protagonismo social y político como, por ejemplo, los movimientos campesino-indígenas en Ecuador y Bolivia, y, más bien, la organización popular fue permanentemente incentivada e impulsada desde el gobierno chavista a partir de 1999. Pero al igual que en otros procesos gubernamentales de giro a la izquierda en América Latina, desde las primeras y más importantes pulseadas ganadas a la derecha, y cierta consolidación de los gobiernos, emergen contradicciones en el seno del pueblo. Una vez derrotados los cuadros políticos de las burguesías, concentradas en los gobiernos del Estado, los cambios van dando lugar al pase a primer

plano de las contradicciones internas, (secundarias respecto del conflicto principal), y siempre acicateadas y aprovechadas por las fuerzas de derecha.

Durante la larga noche neoliberal, la referencia política de la resistencia y la insurrección fue el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, fundado por el teniente Hugo Chávez Frías, quien, ya como teniente coronel, impulsa la rebelión cívico-militar que en forma de golpe de Estado se produjo en 1992, contra el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, pero a la vez triunfó y el «por ahora» pronunciado por Chávez antes de ser encarcelado permitió abrir una ventana de posibilidad por la que se coló el Movimiento V República, creado también por él en 1997, un año antes de ganar por primera vez las elecciones presidenciales en Venezuela. El MVR se disolvió en 2007 para integrarse en el Partido Socialista Unidos de Venezuela, la fuerza política que articula los ideales de la Revolución bolivariana y chavista.

Si el campo popular bolivariano ha tenido al MBR-200, MVR y PSUV como principales referentes políticos, siempre también con influencia de las guerrillas y el Partido Comunista, sus referentes ideológicos, la génesis del proyecto político la podemos encontrar en el llamado Árbol de las tres raíces, en el que además de las viejas tradiciones ideológicas de la izquierda, se suman la influencia de los próceres Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, mentor de Bolívar.

Crítica y autocrítica

Uno de los ejes más importantes de disputa dentro del campo popular bolivariano es la propia autocrítica dentro del chavismo. En los últimos años se ha recrudecido, incluso dentro del PSUV, y se han exigido rectificaciones en el proceso revolucionario. Se apunta a la falta de eficacia, y la corrupción en algunos ámbitos y programas de gobierno, a la burocratización aun en el ámbito

partidario, al verticalismo, personalismo, ausencia de construcción y dirección colectivas, y de espacios de debate que, según sugieren las variadas voces y críticas, redundan en el debilitamiento del proceso y el alejamiento de las bases sociales.

Ya el comandante Hugo Chávez recogió el guante de estas críticas, por ejemplo en su documento «Golpe de timón» en el que criticó la falta de profundización y extensión territorial de la experiencia de las comunas, consideradas estratégicas para la transición al socialismo. También Nicolás Maduro, en su discurso de campaña de «llevar el gobierno a la calle», expresaba su preocupación por reconectarse con la base social, con el pueblo venezolano, en forma directa, aunque no por la vía de apertura o modificación de las estructuras partidarias.

El propio Maduro, en agosto de 2014 y durante la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, instituido por el comandante Chávez y que entrega anualmente la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, hizo una profunda reflexión en torno a la necesidad de la crítica y autocrítica: «La crítica y la autocrítica no es una moda sino un método pedagógico para estar aprendiendo, sacando lecciones e ir corrigiendo los caminos para hacer revolución».

De un lado, las críticas al centralismo (veremos que lo mismo se replica en Bolivia y Ecuador) y, por otro, la necesidad de una organización política fuerte con capacidad de respuesta rápida, tanto para implementar programas o políticas de gobierno que implican altos niveles de confrontación con las fuerzas conservadoras, como para el enfrentamiento directo con esas fuerzas en la batalla electoral y otras que sin duda surgirán. Dos polos de una compleja realidad organizacional que ha atravesado todos los movimientos revolucionarios, y que la coyuntura —y no la teoría— hace cambiar: puede tornarse más importante la centralización que la democratización o viceversa. Pero no son caras

excluyentes, sino que conforman la misma dialéctica, con muchas combinaciones posibles y formatos. La no reificación de la organización popular, ni de la forma partido, sino su adaptación a cada coyuntura, hace la esencia revolucionaria de los procesos.

Edgardo Lander, en un texto de 2007, valoraba la promoción de la organización popular por parte del gobierno de Venezuela, resaltando las tensiones que generaba la participación popular, legitimada y también legalizada por la reforma de la Constitución. Las misiones (forma que adopta la política social directa) pudieron revitalizar esa participación sorteando las burocracias enquistadas en los aparatos estatales, y mejoraron la calidad de las condiciones de vida populares. Contribuyeron a crear o fortalecer una gran diversidad de procesos organizativos populares en todo el país. Pero, según el autor, generaron también en ellos grados de dependencia de las iniciativas y el financiamiento públicos.

Aun pudiendo haber problemas burocráticos en el desarrollo de las misiones bolivarianas, lo cierto es que haber llegado al gobierno mediante la vía electoral con la herencia de un Estado colonial y neoliberal que no ha sido derrumbado, sino solamente construido sobre sus ruinas, hace más necesario, en determinados momentos, crear un Estado paralelo como forma de redistribuir rápidamente la riqueza negada durante tantos años al pueblo, y en manos de unas pocas élites políticas y económicas.

Las misiones sirvieron para acelerar y multiplicar el radio de acción de los planes sociales del gobierno revolucionario en Venezuela. Las primeras de ellas, Misión Robinson, y Barrio Adentro, consiguieron convertir a Venezuela en un país libre de analfabetismo o llevar médicos, cubanos en su mayoría, a los barrios más populares donde nunca habían visto un médico y mucho menos un consultorio. Barrio Adentro colocó un médico, formado en salud integral, por cada 250 familias, en su mayoría de los sectores populares.

No se puede negar que las misiones en Venezuela, más allá de convertirse en un Estado paralelo en muchos casos, para llegar donde la institucionalidad estatal no llega, han democratizado el acceso a la riqueza y a los servicios básicos. En 2015, los programas sociales ideados por el comandante Chávez contaban con un presupuesto de 34.000 millones de bolívares, representando 4,58% del PIB venezolano.

En algunas de esas experiencias se encuentran presentes el clientelismo y el paternalismo, y en otras se ha logrado gestar niveles mayores de autonomía y democratización de las propias instancias públicas. Ya volveremos, en el Capítulo 9, sobre algunas experiencias de gestión comunitaria que constituyen gémenes de socialismo, así como sobre los Consejos Comunales que constituyen una institucionalidad paralela.

Realmente, el proceso resultó movilizador y democrático, de definición de las necesidades, por parte de las propias comunidades, y fomentó la cultura de participación. Para el gobierno venezolano ha sido más fácil crear nuevas estructuras y modalidades de gestión que reformar las preexistentes en el Estado; aunque hubo algunas tensiones con organizaciones sociales de existencia previa en las comunidades.

Sin embargo, con la decisión de crear el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), instrumento para la construcción del Socialismo del siglo XXI, comienzan a generarse tensiones en torno a la creciente centralización de las decisiones políticas; al tiempo que también se planteaba «la explosión revolucionaria del poder comunal, los consejos comunales» y se definía el poder popular como el más poderoso de los motores para el impulso del Socialismo del siglo XXI. Cinco años más tarde, el Comandante escribiría, en el ya citado documento «Golpe de timón», que eran totalmente insuficientes la cantidad de comunas existentes, a la vez que las ponía en el corazón de la construcción del so-

cialismo, como también consideraba necesario, por parte de los funcionarios, acercarse, mezclarse, vivir con el pueblo. Instaba a los funcionarios a recuperar el ejemplo del Che sin citarlo.

En 2007, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información consideraba que

tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado comunal, y el viejo Estado burgués, que todavía vive, que está vivo y coleando, tenemos que irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando al Estado comunal, el Estado socialista, el Estado bolivariano; un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución. (Lander, 2007)

Son varias y variadas las agrupaciones políticas dentro del campo popular del chavismo, que reclaman la construcción de una dirección política colectiva de los procesos de cambio. Una de las voces que lo expresan es la del sociólogo y exministro para las comunas, Reinaldo Ituriza López, quien en su «Carta abierta a quienes militan en el campo popular y revolucionario» (2011), así como en otros de sus tantos escritos, critica muy fuertemente la pretensión de la burocracia partidista de monopolizar la política revolucionaria, que en nombre de un discurso sobre el socialismo cada vez más vaciado de contenido, clausura el debate democrático, la posibilidad de ejercer la crítica constructiva, y pretende cerrarla en la conducción de la lógica de aparato vanguardista iluminado, centrando la cuestión en falsos dilemas con espontaneístas, anarcoides, desviados o pequeñoburgueses, tal como estiman a los que hacen críticas desde dentro del chavismo. Y considera que, al revés de lo que supuestamente buscan, debilitan la revolución bolivariana. Ve con buenos ojos la conformación del Gran Polo Patriótico como una oportunidad para reflexionar y debatir sobre cómo debe ser la organización revolucionaria

bolivariana; es decir, cómo construir una dirección colectiva, cuál es el sujeto de la revolución, el asunto del Estado (destrucción, transición, construcción) y el socialismo. Evidentemente, estas críticas fueron escuchadas desde el gobierno, porque luego fue nombrado Ministro, y es actualmente el máximo responsable del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

El Gran Polo Patriótico es una coalición de partidos políticos y movimientos sociales, donde además del PSUV encontramos al Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Tupamaro, Patria para Todos (PPT) y una serie de organizaciones sociales determinantes en la elección presidencial de 2013, que sumaron más de un millón de votos a los obtenidos por el PSUV, permitiendo a Nicolás Maduro convertirse en presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, también se escucharon parecidas líneas de autocrítica de quienes eran blancos de la crítica interna del bolivarianismo. Así, en enero 2011, el comandante Chávez, en sus «líneas estratégicas de acción política» (PSUV, 2011), se refería a las propias desviaciones internas que los alejaron de sus bases sociales, errores que hacen a la «cultura política capitalista» dominante en la sociedad y también permeada dentro del Partido: burocratismo, sectarismo, nepotismo, oportunismo. Decían de sí mismos que de acentuarse este tipo de comportamiento, el PSUV podría terminar convertido en un partido/iglesia, una suerte de «guía de las masas incultas», que considera a sus militantes y a las diversas formas de organización popular como simples correas de trasmisión de la línea indiscutible de los nuevos «sacerdotes». De seguirse este camino, estas prácticas debilitarían la base social de apoyo a la revolución bolivariana. Y proponían convertir la maquinaria partidaria en un partido-movimiento al servicio de las luchas del pueblo: «las circunstancias en que se desenvuelve la revolución bolivariana, pacífica y democrática, hacen necesaria

la existencia de un partido que asegure la movilización electoral, pero, principalmente, la formación ideológica, la coherencia y la sincronización de las acciones populares (ofensivas y defensivas). Estas líneas fueron reafirmadas en el Documento organizativo aprobado por el III Congreso del PSUV (2014), realizado a finales de julio de 2014.

La revolución bolivariana es pacífica, pero no desarmada, repitió innumerables veces el comandante Chávez, aunque lo de pacífica es más un deseo que una realidad, porque el enemigo está imponiendo, mediante variadas tácticas, un cerco económico y mediático, que en cualquier momento puede tornarse militar (ya hay presencia de paramilitares de extrema derecha provenientes de Colombia). Es decir, que como en otros tantos procesos revolucionarios del pasado, no hay que descartar que las agresiones imperialistas, sumadas al terrorismo mediático, puedan desembocar en una guerra civil. Aunque en los casi quince años de chavismo en Venezuela, a diferencia de las elecciones anteriores en las democracias formales y restringidas, cada contienda electoral, como bien señala Iturriiza (2011), significa una verdadera confrontación, por la vía pacífica, de dos modelos antagónicos, lo que supone un proceso de agitación, movilización y participación popular que termina fortaleciendo a la revolución.

Los bolivarianos se proponen reconectarse con las bases mediante las Bases de Patrullas y Círculos de Luchas Populares y del Buen Vivir que

deben surgir de la articulación del partido con los movimientos sociales y organizaciones populares. Y que pueden servir como instrumentos para organizar y movilizar a las comunidades en torno a problemas específicos, en la búsqueda de su solución colectiva. (Iturriiza, 2011)

Solo hemos mencionado algunas líneas políticas de debate en el proceso revolucionario de Venezuela, que es inmensamente rico y es nuestro libro abierto de la historia. La Venezuela bolivariana ha cumplido —por lo menos hasta el momento actual— un papel fundamental, de vanguardia, en la nueva etapa latinoamericana, marcando el rumbo de la autodeterminación y del progreso económico, social y político de América Latina; y frustrando el proyecto restaurador y colonialista.

El propio Borón entrevistado a mediados de 2014 por Katu Arkonada para *Le Monde Diplomatique*, hacía un paralelismo con la batalla de Stalingrado:

Por eso es que debemos subrayar la importancia de los procesos de los países bolivarianos como yo les llamo, que han logrado avances muy significativos en ese terreno, y junto con ello progresos muy importantes en materia de redistribución de ingresos, combate a la pobreza y autonomía frente a los grandes poderes del sistema internacional. No podemos ignorar tampoco que Rafael Correa en Ecuador logró que se fueran los estadounidenses de la Base de Manta, auditó la deuda externa, abandonó el CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial] y desahució el TIAR [Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca]. Por no hablar de un Evo Morales expulsando a embajadores de Estados Unidos, USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] y la DEA [Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos], abandonando el CIADI, recuperando el patrimonio nacional y renegociando los contratos petroleros, es decir, rebrandando un grado de soberanía que nosotros, por ejemplo, hemos perdido en Argentina, Uruguay, Brasil o Chile.

Lo mismo puede decirse del caso de Venezuela y los grandes avances logrados por la revolución bolivariana. No es casuali-

dad por tanto que los procesos de cambio en general, y Venezuela en particular, estén en la mira del imperio, y por eso debemos tener claro que la batalla de Venezuela es nuestro Stalingrado. Si Venezuela sucumbe ante la brutal contraofensiva de los Estados Unidos, que trata de aplicar en este país el modelo de «cambio de régimen» puesto en práctica en Ucrania y antes en Libia, el resto de los procesos de cambio en curso en el continente, no importa si muy radicales o muy moderados, terminará por correr la misma suerte. (Arkonada, 2014)

Es apasionante y complejo el análisis de las relaciones entre movimientos sociales y gobiernos progresistas. Algunos autores utilizan la noción de cooptación para referirse al alineamiento de gran parte de organizaciones populares o parte de movimientos sociales con los gobiernos de nuevo signo en varios de nuestros países. Sin embargo, la institucionalización de las luchas, organizaciones y movimientos sociales —en tanto esos gobiernos dieron cauce institucional a gran parte de sus demandas sociales y políticas—, no significa la desmovilización y, mucho menos, la claudicación de las metas que les dieron origen. Lo demuestran, entre otras cuestiones, el hecho de salir a enfrentar en la calle a la reacción o la derecha (contra los golpes cívico-militares o institucionales, contra las movilizaciones de las federaciones empresariales y patronales, contra lockouts).

Así como Venezuela tomó la vanguardia de la construcción de gobiernos populares desde 1999, también asistimos en ese territorio, en abril de 2002, al primer intento de golpe de Estado, liso y llanamente, y por suerte fracasado por obra de la gran movilización popular en defensa de la revolución bolivariana y su comandante. No fue el caso, más tarde, de Paraguay y Honduras en los que los golpes institucionales de las derechas conservadoras tuvieron éxito y las esperanzas de cambios en esos dos países,

largamente castigados, rápidamente se frustraron sin dejar crecer lo nuevo lo suficiente como para echar raíces.

Enseguida de la derrota del golpe en Venezuela por la voluntad popular, el poder concentrado (federaciones patronales, oligopólios de la comunicación, con apoyo de la aristocracia obrera de la CTV —Central de Trabajadores Venezolanos— y con importante apoyo de los Estados Unidos) intentó otra jugada, esta vez con el lockout petrolero que duró casi dos meses (desde finales de 2002) que tampoco logró derrotar al chavismo y sus bases populares, a pesar del profundo boicot a la economía nacional que provocó desabastecimientos en todas las áreas. El pueblo se movilizó todos los días contra las manifestaciones de los antichavistas que estaban apoyados las veinticuatro horas por los canales de TV, que trasmítian en vivo las protestas, mientras que durante el golpe de abril habían reemplazado los noticieros por dibujitos animados.

Anécdotas aparte, frente a la intensa acción de la derecha y el poder económico más concentrado que logran captar el descontento de pequeñas burguesías y porciones acomodadas de trabajadores (que actualmente se están volviendo a desplegar con intensidad), destacamos la febril respuesta popular y la firme decisión y voluntad de la alianza de gobierno y la comandancia de sus líderes de no negociar ni claudicar en ningún aspecto, aun enfrentando graves crisis. Esta voluntad política gubernamental no se observó en otros procesos que también contaban con importante apoyo popular. Nos referimos a Paraguay y su presidente derrocado, Fernando Lugo, que no convoca a enfrentar el golpismo en las calles. También, salvando las distancias, nos remite a un caso de otro período histórico en Argentina, cuando el presidente Raúl Alfonsín, que asume con el retorno de las elecciones democráticas, luego de haber impulsado históricos juicios a los comandantes protagonistas del golpe militar de 1976, y ejecutores del plan genocida de las altas burguesías, impulsa, frente a

algunos levantamientos de cuadros intermedios de las Fuerzas Armadas que no querían ser juzgados por los crímenes cometidos, las leyes de «obediencia debida» y «punto final» que les otorga perdón y los exime de enjuiciamiento, a pesar de contar con enormes contingentes populares movilizados hacia la Plaza de Mayo en apoyo de su gobierno, y que exigían justicia.

Estas situaciones son permanentemente reintentadas por las derechas y cierta base social pequeñoburguesa que logran reclutar; por eso no es posible analizar estos procesos desde cierta lectura romántica de los discursos del «contra o antipoder» que niegan la dimensión de potencial paso a la relación de fuerzas político-militares, y rechazan los planteos en términos de luchas abiertas y descarnadas contra enemigos definidos, como analizaremos en el próximo capítulo cuando tratemos el caso de Bolivia.

Porque la realidad que estamos analizando nos dice otra cosa: que la política en un mundo caracterizado por la dominación fraticida del capitalismo y el imperialismo es una realidad de aguda confrontación, y hemos visto a menudo en la historia que las experiencias de profundización democrática, y mucho más las revolucionarias, aunque sea por cauces pacíficos, se enfrentan a enemigos muy poderosos. ¿Hasta cuándo nos dejarán ganar elecciones?

Golpe de timón

En cualquier caso, la hoja de ruta para la revolución bolivariana y chavista está marcada en el documento «Golpe de timón». El 7 de octubre de 2012, luego de conocerse la victoria del Candidato de la Patria con 56% de los votos, el presidente Hugo Chávez Frías anunció desde el balcón del pueblo que un nuevo ciclo empezaba el mismo 8 de octubre. Pocos días después se llevó a cabo el primer consejo de ministros de este nuevo ciclo, en el cual el comandante hizo un llamado a la crítica y la autocrítica, a multiplicar la eficiencia,

fortalecer el poder comunal y desarrollar el Sistema Nacional de Medios Públicos, entre otros temas de la construcción del socialismo. Pero sobre todo, el horizonte de la revolución sería el Plan de la Patria, convertido en Ley bajo la forma de Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 2013-2019.

El Plan de la Patria define cinco grandes objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales:

1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado reconquistado después de doscientos años: la independencia nacional.
2. Continuar construyendo el Socialismo bolivariano del siglo xxi en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la «mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad», para el pueblo venezolano.
3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América.
4. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.
5. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

El legado de Chávez

No podemos terminar este capítulo sin escribir unas líneas sobre el legado que el comandante Chávez ha dejado en Venezuela y Nuestra América, legado más importante, si cabe, a partir

de la derrota del chavismo en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015.

En primer lugar, Chávez, con el apoyo imprescindible de Fidel, abrió la puerta del cambio de época en la región, transformando el Consenso de Washington en un Consenso Posneoliberal con rasgos bolivarianos. Nos demostró que no había tal fin de la historia y que había posibilidad de construir un proyecto de izquierda y nacional-popular desde y para las mayorías populares. Además, no tuvo miedo en nombrar su proyecto político, en la medida en que la revolución bolivariana se iba profundizando y radicalizando, como de Socialismo del siglo xxi.

Chávez amplió y ensanchó, mientras iba construyendo ese proyecto político, los límites de la democracia, al mismo tiempo que iba fortaleciendo la construcción del poder popular. No podemos dejar de mencionar su impulso pionero en dejar atrás moribundas constituciones escritas por unas élites políticas y económicas, para poner en marcha asambleas constituyentes del pueblo y para el pueblo, que nos dejan como legado un nuevo constitucionalismo repleto de derechos para los que nunca los tuvieron, para los nadie.

En el ámbito económico democratizó el consumo y redistribuyó como nunca antes la riqueza, sacando a millones de personas de la pobreza, dejando establecidas reformas y caminos necesarios para una transformación de la estructura productiva y las relaciones sociales de producción. En palabras de Alfredo Serrano (2014):

La economía para Hugo Chávez ha de ser una economía humanista, nacionalista, desarrollista, bolivariana, antineoliberal, poscapitalista y socialista del siglo xxi. Es una economía que concede gran importancia a la transición, a la búsqueda continua para transitar virtuosamente de un estadio a otro. Es por todo ello, por toda la complejidad y heterogeneidad constitutiva de

su pensamiento económico, que el chavismo ha logrado erigirse también en una identidad económica. Se trata de un pensamiento económico ocupado por afrontar todas las tensiones existentes entre lo táctico y lo estratégico, entre las urgencias coyunturales (las necesidades del ahora) y las transformaciones estructurales (los desafíos del mañana).

En este repaso telegráfico del legado del comandante Chávez hay que mencionar su geopolítica bolivariana, su apuesta por la integración latinoamericana, que lo convirtió en uno de los principales arquitectos de la derrota del ALCA, así como de la creación del ALBA, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Todo ello, complementado con una mirada Sur-Sur, impulsando el nacimiento del nuevo mundo multipolar, y dotando a su diplomacia de una relación preferencial con China, Rusia, India e Irán, entre otros actores emergentes.

La muerte de Chávez nos remite a otro debate fundamental para la izquierda latinoamericana y caribeña, el de los liderazgos. Hombres y mujeres de la talla del Comandante surgen cada muchos años; la combinación de teoría y praxis que lleva a la liberación de los pueblos es una condensación de cientos de años de luchas anticoloniales y decenas de años de luchas anti-neoliberales, la cristalización de todo un pueblo, especialmente de los más humildes, eternamente marginados del Estado y del acceso a la ciudadanía plena. Pero cuando esos líderes mueren, su ausencia se hace inmensa, y deja al descubierto la necesidad, en el proyecto de izquierda latinoamericano y caribeño, de los liderazgos colectivos, de las construcciones colectivas, a partir de un proceso profundo de politización de toda la sociedad y de formación política de cuadros.

El amplísimo legado político e ideológico de Chávez nos ayuda a pensar en los desafíos de un nuevo proyecto de democracia

y de socialismo, que ensanche los márgenes del posneoliberal construido hasta ahora y que trate de avanzar, como lo ha venido haciendo Venezuela desde 1999, aun con sus tensiones y contradicciones, hacia un horizonte poscapitalista sustentado en el antimperialismo y anticolonialismo, valores que tan dentro de sí llevaba el comandante Chávez.

VII. Bolivia como expresión de la potencia emancipadora de los movimientos sociales y pueblos indígenas

En capítulos anteriores hemos dicho que luego de los procesos insurreccionales en Bolivia contra las políticas neoliberales, el MAS había logrado articular al sujeto popular —pueblo sencillo y trabajador, que en el caso boliviano adopta la forma del movimiento indígena, originario y campesino, en conjunción con sectores de las clases medias y un pequeño sector de la burguesía nacional— como bloque antagónico al orden establecido, mediante un programa democrático, de desarrollo con soberanía que tendía a completar las tareas pendientes de la revolución democrático burguesa de 1952. Este programa se articulaba en la Agenda de Octubre, surgida del dramático octubre negro que dejó decenas de muertos y centenares de heridos en 2003, en El Alto en defensa del gas y la soberanía boliviana. La Agenda de Octubre comprendía dos reivindicaciones principales: nacionalización de los recursos naturales y convocatoria de una Asamblea Constituyente para refundar el país.

La pregunta que queremos formular en este capítulo es cómo el proceso de cambios sociales, políticos y económicos en Bolivia pasa a tener un carácter revolucionario socialista. ¿Se ha logrado trascender los límites de la democracia burguesa? ¿O cómo se proponen lograrlo?

Para responder esta pregunta es necesario dilucidar quiénes conducen el proceso pues todos los proyectos revolucionarios, aun con características diferentes, siempre han sido llevados adelante por una alianza de fracciones de distintas clases sociales, lo que

denominamos fuerza social-política. Y, como ya hemos definido en el primer capítulo, el carácter de clase de esa fuerza (los intereses que priman y aglutinan y son capaces de organizar a la voluntad popular y nacional en un proyecto hegemónico de largo plazo) estará dado por la fracción que conduce esa alianza, que logra universalizar su visión del mundo, de la política y de la sociedad como visión del conjunto, que en el caso de un proceso revolucionario nacional-popular y proletario⁵⁹ es el de las amplias mayorías.

Cuando el núcleo duro logra imponer, en un ejercicio en el que prima la seducción y construcción cultural, su interés como de toda la nación, es cuando se completa la construcción de hegemonía.

Gramsci explica que «la estructura y la superestructura forman un “bloque histórico”, o sea que el conjunto complejo, contradictorio y discordante de las superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción» (1975: 48). Así en Bolivia las clases subalternas llevaron a cabo una lucha contrahegemónica para transformar las relaciones entre estructura y superestructura, y conformaron un nuevo bloque histórico. Por primera vez en el país, las ideas de la clase dominante no son las ideas dominantes de este momento histórico y es por ello que podemos hablar de una revolución política, pues se produce un recambio de élites políticas.

La conformación de un nuevo sujeto político y bloque histórico

En ese nuevo bloque histórico es clave el nuevo sujeto político, que en el caso boliviano tiene un núcleo duro conformado por el movimiento indígena y campesino, que es la fórmula empleada

59 Es necesario aclarar nuevamente que por proletario no debe pensarse en la imagen mitificada del obrero fabril con casco y mameluco, sino en la definición amplia que hemos trabajado en el Capítulo I, que refiere a todos aquellos que solo pueden vivir de la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario, logren o no hacerlo.

por la nueva Constitución Política del Estado para designar al sujeto, salvando además la falsa dicotomía entre clase e identidad.

Este sujeto se viene conformando desde que, en 1990, se produjo la «Primera marcha indígena por el territorio y la dignidad»; en 1995 se crea el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP); en las Guerra del Agua (2000) y Guerra del Gas (2003) se incorpora a otros sectores (clases medias, estudiantes, fabriles); para finalmente ganar, en diciembre de 2005, las elecciones presidenciales que otorgaron a Evo Morales el mérito de haber sido el presidente más votado en la historia boliviana, con más de 50% de los votos.⁶⁰

En este sentido, interpretamos que el MAS y el gobierno de Evo Morales conducen una fuerza social política (alianza de fracciones de distintas clases sociales con un núcleo duro conformado por el Movimiento indígena originario campesino) que expresa un proyecto de importantes reformas sociales, políticas y culturales, que aun planteándose un desarrollo todavía en los marcos del sistema capitalista, y por ende favoreciendo cierta acumulación de capital en ciertas fracciones, se sustenta en un amplio proceso de democratización económica, política y cultural, con elementos de socialismo, y planteándose, además, la construcción del socialismo (concretamente Socialismo Comunitario hacia el Vivir Bien), según recogen la propia tesis política del MAS-IPSP (Arkonada, 2012) y algunos de los discursos del vicepresidente Álvaro García Linera (Vicepresidencia de Bolivia, 2015). Ello sería, a mediano plazo, mediante la vía pacífica y democrática, y con la conciencia de que no se puede construir el socialismo pleno de manera aislada, menos aún en un territorio históricamente sometido a la dependencia de diversos

60 Mérito que después se vería revalidado e incluso aumentado en las presidenciales de diciembre de 2009, donde el MAS-IPSP obtuvo 64% de los votos, y octubre de 2014, con 61%.

imperios y con un lugar destacado en la división internacional del trabajo como proveedor de materias primas.

Avances del proceso de cambio

¿Puede haber una reforma cultural, es decir, una elevación civil de los estratos deprimidos de la sociedad, sin una precedente reforma económica y un cambio en la posición social y en el mundo económico? Una reforma intelectual y moral no puede dejar de estar ligada a un programa de reforma económica, o mejor, el programa de reforma económica es precisamente la manera concreta de presentarse la reforma intelectual y moral. (Gramsci, 1997: 31)

Trataremos de responder a esta pregunta que se hacía Gramsci respecto de un proceso de cambio que, como apuntábamos, comenzó en enero de 2006 con la asunción de Evo Morales como primer presidente indígena de Bolivia, pero que hunde sus raíces en las luchas contra el neoliberalismo de los 90 y los 2000.

Ya en el primer año de gobierno de Evo se cumplieron las dos principales reivindicaciones de la Agenda de Octubre, nacionalización y Asamblea Constituyente. La nacionalización de los hidrocarburos se produjo, nada es casualidad, el 1 de mayo del primer año de gobierno; y pocos meses después, el 6 de agosto, aniversario de la primera independencia boliviana en 1825, se ponía en marcha una Asamblea Constituyente que, tras meses de duro trabajo y asedio por parte de la derecha, daba forma a una nueva Constitución Política del Estado, refrendada mediante referéndum popular en enero de 2009.

La Constitución boliviana consagra las rupturas sociales e incluso epistemológicas del proceso de cambio, trazando un hori-

zonte descolonizador del Vivir Bien, que supone una ruptura con las concepciones de desarrollo del capitalismo y la modernidad. Todo ello, además, con otra mirada sobre la naturaleza, entendida esta como el conjunto de seres vivos que interactúan en un escenario de biodiversidad, incluidas las comunidades que la habitan. Si hacemos una radiografía de la nueva Constitución, nos encontramos con un esqueleto que se sintetiza en tres nuevos modelos: el de Estado —Estado Plurinacional—, uno territorial —estados autonómicos—, y uno económico, que reconoce cuatro tipos diferentes de propiedad: la privada capitalista, la estatal, la social-cooperativa y la comunitaria.

Este nuevo modelo económico de economía plural, sumado a la nacionalización de los recursos naturales, principalmente del gas boliviano, lo que ha permitido a Bolivia mejorar sus indicadores sociales.

Si tomamos como referente la exposición realizada por el ministro de Economía de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, en el seminario Marx Vive realizado en La Paz el 10 de septiembre de 2015, podemos observar cómo la inversión pública en Bolivia se ha incrementado desde 629 millones de dólares en 2005, a 6.179 millones en 2015, o sea, se ha multiplicado por diez, convirtiendo a Bolivia en el país de la región que más porcentaje de su PIB (17,4%) destina a ese rubro. Esto ha permitido reducir a la mitad la tasa de pobreza extrema, que se encontraba en 38,2% de la población boliviana, y actualmente en 17,8%. En el otro factor importante, además de la pobreza, la desigualdad, Bolivia presenta un Índice de Gini que ha bajado de 0,60 en 2005 a 0,47. Dicho de otro modo: la diferencia entre los ingresos del 10% más rico de la población y el 10% más pobre, que en 2005 era de 128 veces, actualmente se ha reducido a 42 veces. Todo ello mientras el salario nacional se incrementaba de 440 bolivianos en 2005 a 1.665 actualmente y la tasa de des-

empleo bajaba de 8,1% a 3,5% en la actualidad (Arce, 2015).

Podemos sintetizar en dos rangos las medidas impulsadas por el nuevo modelo económico boliviano. Un primer nivel de reformas parciales, inmediatas, parches de urgencia ante la catástrofe social que dejó como herencia el neoliberalismo en forma de trasferencias directas condicionadas, los famosos bonos, que benefician ya a 4.644.471 personas, 44,9% de la población boliviana. En este nivel no se espera a crecer para redistribuir, contrariamente a lo que pedía la «teoría del derrame neoliberal», sino que se crece en la medida en que se redistribuye la riqueza obtenida por la nacionalización de los hidrocarburos, y amplios sectores y capas de la población van dejando atrás su situación de pobreza y adquiriendo capacidad de consumo. El segundo nivel consiste en un proceso de industrialización para el que se están invirtiendo centenares de millones de dólares a fin de que los recursos naturales, el gas o el litio, se industrialicen en Bolivia y salgan al mercado internacional como productos con valor agregado y ya no como commodities. Dos ejemplos de esta política a mediano y largo plazo son la inversión de 700 millones de dólares en la Planta separadora de líquidos Gran Chaco «Carlos Villegas» (Sandi, 2015); la de 925 millones en una planta de carbonato de litio en las inmediaciones del Salar de Uyuni (Quispe, 2015); y la construcción del primer complejo petroquímico de propileno-polipropileno en la región del Chaco, que demandará una inversión de hasta 2 000 millones de dólares (El Periódico de la Energía, 2015).

Si bien las transformaciones económicas son la base material del proceso, podemos situar en el mismo nivel de transformación los cambios en los órdenes simbólico y cultural. En el caso boliviano, ha tenido gran impacto democratizador y descolonizador la figura del indio pobre (y orgulloso de serlo), sin estudios acabados y luchador incansable, que llega a la presidencia de una

nación cuya cultura dominante era racista y colonialista. Desde una postura de humildad y honestidad se diferencia claramente de la vieja élite política.

Según Álvaro García Linera (2010), Evo Morales en la presidencia pero también las personas originarias que asumen puestos como legisladores o ministros y ministras, muestran una importancia estratégica en cuanto a que Bolivia, que siempre ha sido un país de mayoría indígena, por primera vez después de Manco Inca, después de 450 años, tiene un líder, una autoridad indígena, como siempre debió haber sido. Ello intensificó la confrontación con los poderosos pues «ninguna clase dominante ni ningún bloque de poder puede aceptar que, de la noche a la mañana, quien era su sirviente o empleado ahora sea su legislador o su ministro».

Guerra de posiciones, empate catastrófico y punto de bifurcación

Hemos titulado este capítulo en referencia a los cambios políticos acaecidos en Bolivia en la última década como expresión de la potencia de los movimientos sociales y de la lucha de clases.

Tal como sosteníamos para el caso venezolano, también en Bolivia se ha producido una institucionalización parcial de las luchas, organizaciones y movimientos sociales, en tanto el gobierno ha dado cauce institucional a los procesos insurreccionales y sus metas así como a gran parte de las demandas sociales y políticas de diversas fracciones del pueblo. Esto no significa, en principio, la desmovilización y, mucho menos, la claudicación de las metas que les dieron origen. Lo demuestra no solo el hecho de que salen a enfrentar la reacción o la derecha (contra los golpes cívico-militares o institucionales, contra las movilizaciones de las federaciones empresariales y patronales), sino también que se movilizan de manera contundente cuando su mismo gobierno toma medidas que consideran impopulares, como se pudo observar

en diciembre de 2010 cuando se decretó un aumento del precio del combustible, que al estar actualmente subvencionado provoca una pérdida de cientos de millones de dólares por contrabando fronterizo a Perú o Brasil, además de subvencionar el agronegocio cruceño. Sin embargo, a pesar de tener la «razón política», el gobierno dio marcha atrás y el presidente Evo Morales retiró el impopular decreto ante la movilización del pueblo boliviano.

Una vez asumido el mandato, la primera lección que aprendieron las y los compañeros del MAS era que llegar al gobierno no significaba tener el poder. El gobierno era solo una parte del entramado institucional que significa un Estado, pero además tenía enfrente al poder mediático, y sobre todo al económico. Comenzó entonces una guerra de posiciones al más puro estilo gramsciano.

Según Gramsci (1986),

en la política subsiste la guerra de movimientos mientras se trata de conquistar posiciones no defensivas, y por consiguiente, no son movilizados todos los recursos de la hegemonía y del Estado; pero cuando, por una u otra razón, estas posiciones han perdido su valor y solo las que son decisivas tienen importancia, se pasa a la guerra de posiciones, compleja, difícil, en la que se exigen cualidades excepcionales de paciencia y de espíritu inventivo.

Entre 2006 y 2008 se produjo en Bolivia lo que el vicepresidente Álvaro García Linera ha definido como empate catastrófico: dos bloques enfrentados, con capacidad de fuego (poder) pareja, que derivó en una guerra táctica de posiciones, donde cada paso de avance procuraba, a la vez, erosionar el poder del bando contrario, que a veces también obligaba a retroceder y asegurar posiciones.

La victoria de Evo Morales y el MAS provocó —sobre todo en la denominada «Media Luna» que incluye los departamentos de

Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija— las reacciones de los dueños del poder, mediante planes de especulación y desabastecimiento de carne, aceite, azúcar y otros alimentos. Luego de que Evo reforzara aún más su hegemonía con 67% de los votos a su favor en el referéndum revocatorio de agosto de 2008, los gobiernos de esta región que encarnan la derecha conservadora, representante de la burguesía agroindustrial y latifundista, desplegaron una estrategia para derrotar al gobierno por la vía del separatismo. Convocaron a un «paro cívico» por tiempo indeterminado, con bloqueo de rutas y tomas de sedes institucionales del gobierno nacional ubicadas en esos territorios, así como obstrucciones a los gasoductos y plantas gasíferas. Los prefectos de esos departamentos lideraban las acciones. Se incluyeron atentados contra la sede del Consulado de la República Bolivariana de Venezuela y la jefatura de la misión médica cubana en Santa Cruz, y el intento de organizar su propia fuerza militar y paramilitar. Por los medios, se hacían declaraciones con alto grado de racismo hacia los indígenas, que tuvieron un punto culminante cuando, en mayo de 2008, campesinos e indígenas de Sucre, que llegaban a la capital a recibir ambulancias por parte del presidente Evo, fueron emboscados y, como si fueran un rebaño, llevados a la plaza principal de Sucre entre golpes, insultos y vejaciones, para a continuación ser desnudados mientras los escupían y les hacían besar la bandera de Santa Cruz.

Estas acciones reaccionarias contaron con el apoyo de la Embajada estadounidense, por lo que el presidente Evo expulsó al entonces embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg y a la agencia de combate a las drogas de los Estados Unidos, la DEA. Más tarde, en 2013, expulsará a la agencia estadounidense de «asistencia internacional», USAID, por injerencia en la política interna y fomentar la división del movimiento indígena.

En el marco de las acciones separatistas de 2008, el 11 de septiembre se produce la matanza de veinte campesinos que

marchaban en apoyo a Evo Morales; masacre efectuada por órdenes del prefecto opositor de Pando, Leopoldo Fernández, quien luego sería detenido por estos hechos, una vez que el gobierno decreta el estado de sitio y manda el ejército al Departamento del norte del país. Frente a estos hechos se movilizan miles de indígenas y campesinos hacia Santa Cruz, en defensa del proceso de cambio encabezado por el gobierno nacional, para recuperar sus instituciones y terminar con el intento de golpe. Observamos cómo las masas populares toman como propias la defensa de las instituciones estatales conducidas por un gobierno que consideran propio. Son parte de la misma fuerza social-política que ahora conduce el país y se enfrenta a estos grandes poderes.

Es de destacar, en el contexto de cambios progresistas en el cono sur, la defensa por la entonces recién constituida Unión de Naciones Sudamericanas —UNASUR— del proceso democrático y el gobierno de Evo Morales. Este apoyo se tornó crucial en ese contexto, aunque más tarde no logró impedir, aunque sí repudiar, los golpes en Honduras y Paraguay. Desde UNASUR se conformó una comisión para investigar la masacre de Pando, y se emitió un informe que consideraba el asesinato de los campesinos como un crimen de lesa humanidad (CIPCA, 2008).

Este es el momento clave del proceso boliviano, el punto de bifurcación o momento jacobino de la revolución. En palabras de Álvaro García Linera (2011),

la lucha por el poder se acercaba al momento de su resolución bélica o última, en la medida en que, en última instancia, el poder del Estado es coerción. A esto es lo que denominamos «punto de bifurcación», o momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho años atrás, se resuelve ya sea mediante una restauración del viejo poder estatal o bien mediante la consolida-

ción del nuevo bloque de poder popular. Es el momento de inicio del nuevo orden estatal de manera autoproductiva. Y todo ello mediante el despliegue, medición o confrontación de fuerza desnuda de los dos bloques polarizados. El punto de bifurcación es el momento excepcional, corto de duración, primario pero decisivo, en que el «príncipe» abandona el lenguaje de la seducción y se impone por sus tácticas bélicas de coerción. Entonces, ya era cuestión de tiempo la llegada de ese día de fuerza y nosotros, entre mayo y septiembre de 2008, nos preparamos para ese momento. Fue un momento bélico o potencialmente bélico. La derecha golpista realizó sus consultas e inició gradualmente la conformación de pequeños poderes regionales que desconocían al gobierno. Nosotros entendemos esa señal y nos desplegamos en una estrategia envolvente, como la llaman los militares. Tanto por el lado de los mecanismos coercitivos del Estado como por la vía de la movilización social.

El gobierno boliviano por fin tiene una correlación de fuerzas favorable y golpea militarmente a la derecha golpista, encarcelando a uno de sus líderes y sacando a los movimientos sociales, sindicatos campesinos y pueblos indígenas a las calles a defender el proceso de cambio. Esta primera victoria militar viene seguida de dos importantísimas victorias políticas pocos meses después, la aprobación con 61% de los votos de la Constitución Política, del Estado en enero de 2009, y la victoria, con 64% de los votos, de Evo Morales, en diciembre de ese mismo año.

Las tensiones creativas de la revolución⁶¹

Una vez derrotada, política y militarmente, la derecha boliviana, se va dando paso en el proceso de cambio a las contradic-

61

Este apartado ha sido confeccionado a partir de García Linera, 2011.

ciones internas, secundarias (respecto del conflicto principal), y siempre acicateadas y aprovechadas por las fuerzas de derecha.

El propio vicepresidente Álvaro García Linera ha señalado de manera certera las contradicciones secundarias, es decir, en palabras de Mao Zedong, en el seno del pueblo, que constituyen el principal desafío para el proceso de cambio. García Linera relata que, hasta 2009, momento de la reelección de Evo Morales como presidente, Bolivia vivió un conflicto fundamental que contrapuso al pueblo boliviano y al imperio estadounidense y sus aliados de la burguesía local, apegados al neoliberalismo. Pero a partir de dicha elección, si bien se atenuaron esas amenazas externas, surgieron nuevas contradicciones en el seno del bloque nacional popular, entre los diferentes sectores que conducen el proceso de cambio, relativas a las modalidades de su liderazgo. La claridad con la que se exponen estas líneas de contradicciones internas nos sirven para pensar las tensiones y desafíos que atraviesan a todos los gobiernos populares.

La primera contradicción se refiere a la relación entre Estado y movimientos sociales, a la necesaria rapidez de la resolución de necesidades materiales que el pueblo demanda al gobierno; que se contrapone a la necesidad del tiempo que llevan los procesos de debate, análisis y toma de decisiones por parte de las organizaciones sociales indígenas, obreras, campesinas y populares que componen el gobierno. Necesidad de eficiencia y verticalismo frente a necesidad de democracia horizontal en un gobierno de movimientos sociales.

La segunda contradicción interna o «tensión creativa», como las denomina el Vicepresidente, es la de flexibilidad hegemónica frente a firmeza en el núcleo social. Esta tensión remite a la necesaria construcción y profundización de la hegemonía indígena y popular. Es decir, a la necesidad de amplitud del proceso revolucionario

—que deriva de la creciente incorporación de diferentes grupos sociales y de la búsqueda de alianzas amplias— y, a la vez, la necesidad de consolidar la dirección indígena, campesina, obrera y popular, que garantiza la orientación política. La hegemonía del bloque nacional-revolucionario exige la cohesión de las clases trabajadoras. También implica la proyección de su liderazgo (histórico, material, pedagógico y moral) al resto de la población, a fin de asegurar su apoyo. Y ello exige que el conjunto de la sociedad considere que su situación progresá cuando las clases trabajadoras dirigen el país. Esta necesidad obliga a un poder de izquierda tener en cuenta una parte de las necesidades de sus adversarios. Lo que solo puede hacerse mediante la construcción de hegemonía, desde la flexibilidad, pero también desde la firmeza, sin hacer tantas concesiones que el núcleo duro abandone la causa.

La tercera tensión es la del interés general frente a los intereses particulares y corporativos, y se desarrolla desde que comenzó el segundo mandato de Evo, en 2010, marcada según el Vicepresidente, por la movilización declinante, que se caracteriza por la tensión en el seno del bloque social popular entre el interés de la mayoría y los intereses particulares y corporativos, que comienzan a aparecer cuando ya no hay un enemigo común que enfrentar. Superar esta contradicción daría por resultado reforzar el alcance universal del proyecto. Si, por el contrario, triunfara el particularismo corporativo, la pérdida de dinamismo de la revolución marcaría el punto de partida de una restauración conservadora.

La cuarta contradicción creativa, y a la vez principal desafío del proceso de cambio, emana de la oposición entre la necesidad de transformar las materias primas (la industrialización) y la del respeto a la naturaleza, el «vivir bien». Aquí se pondera la dependencia tecnológica, ya que, señala García Linera, prescindir de las empresas extranjeras implicaría poder dominar las tecnologías de que disponen, vinculadas con la extracción y la transformación de las

materias primas. No es el caso. No puede haber una nacionalización total de los recursos y bienes naturales sin una fase de industrialización. Se diferencia de los procesos de nacionalización de la década de los 50, en los que el capitalismo de Estado colocó a las grandes empresas al servicio de clientes particulares: burocracia, grupos patronales, grandes terratenientes, etc. «En cambio, la utilización de los excedentes generados por la industrialización que promueve hoy Bolivia prioriza el valor de uso, no el valor de cambio: satisfacer necesidades antes que ganancias». El excedente resultante de la industrialización ofrece al Estado la posibilidad de poner en cuestión la lógica capitalista de la apropiación privada. Aquí agregamos que ello conlleva un costo ambiental, pero mucho menor en relación con la depredación capitalista. En definitiva, lo que está en juego hoy es cómo conjugar el derecho al desarrollo, a sacar a amplias capas de la población de la miseria a la que las sometió el neoliberalismo, mientras se mantiene un equilibrio con los derechos de la Madre Tierra.

En los últimos años, se dieron en Bolivia varios momentos en los que se han combinado, de alguna manera, la tercera y cuarta de las tensiones

Intensas disputas en este sentido —entre fracciones populares por sus intereses inmediatos— ya se habían dado no bien asumió Evo Morales como presidente; por ejemplo, con el terrible enfrentamiento entre trabajadores y cooperativistas mineros en Huanuni, en octubre de 2006, que dejaron el terrible saldo de dieciséis muertos.

Pero estos enfrentamientos internos se agudizan, sobre todo contra el gobierno popular, a partir de la segunda asunción de Evo Morales. En ese sentido, se observa el desarrollo de las pujas salariales y la primera huelga general por aumento salarial, en mayo de 2010. La derecha, por supuesto, estimula todo tipo de protestas y conflictos poniendo a su servicio sus medios concentrados de comunicación. Y también el mismo presidente ha

denunciado los intentos de USAID de intervenir para promover el conflicto social.

Otro ejemplo lo constituye la huelga de los trabajadores mineros conducida por la COB, también en mayo de 2013, en la que se disputaba el excedente acumulado por el Estado entre fracciones populares, ya que el aumento que pedían para su jubilación iba en detrimento de la posibilidad de jubilarse de fracciones más pauperizadas del entramado social. Sin embargo, tras un intenso conflicto que duró dieciséis días, con movilizaciones populares de apoyo a Evo, lo que no había sucedido frente al «gasolinazo», logran negociar, acordar y finalmente aceptar la propuesta del gobierno; lo que muestra que el pueblo está dividido frente a algunas cuestiones, pero que el evismo tiene pueblo, base social. Aún más importante: en noviembre de ese mismo año, luego del que el gobierno emitiera un decreto que ordenaba al Estado y a las empresas privadas pagar a sus trabajadores un doble aguinaldo cada vez que el crecimiento económico anual superara 4,5% del PIB, la COB tomó la decisión de, en palabras de su secretario ejecutivo, el minero Juan Carlos Trujillo, «hacer una alianza estratégica de la COB con el gobierno central para fortalecer la unidad de los trabajadores y no aceptar que la derecha nuevamente retorne al país» (La Patria, 2013). Este reencuentro entre la COB y el gobierno posibilitó el apoyo de la Central Obrera al MAS en las elecciones generales de 2014.

Pero uno de los conflictos más importantes que desgastó al gobierno de Evo Morales y el MAS, sobre todo en el ámbito internacional, es la disputa por la construcción de la carretera que atravesaría el territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure —TIPNIS— a partir del cual una parte de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano) y la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), representativos de los pueblos indígenas, pasan a la oposición de la mano

de varias ONG, de la derecha boliviana y, nuevamente, de la embajada de los Estados Unidos.⁶²

Álvaro García Linera (2013) expresa bien la necesidad estratégica del trazado de la carretera para el desarrollo de la Amazonía boliviana. No solo para los grandes proyectos productivos sino para la cotidianidad de los pobladores que a veces deben caminar días enteros para curar sus afecciones en hospitales, para educarse, o para intercambiar productos.

Finalmente, lo que estaba en juego tácitamente en el conflicto del TIPNIS era romper con la falsa idea colonial del Buen Indígena (similar al Buen Salvaje de Rousseau) pues, como señala René Zavaleta, son los históricamente marginados por el Estado, los que más demandan al Estado. Una vez hecha la consulta entre las comunidades del TIPNIS se demostró que, en su gran mayoría —55 de 69—, demandaban la carretera, y se decidió levantar la intangibilidad sobre el territorio (Informe TIPNIS, 2012).

Este conflicto se ubica también en el centro de la cuarta tensión señalada por el vicepresidente boliviano y remite a lo que Atilio Borón define como «pachamamismo vs. extractivismo» (2012) y el complejo equilibrio que requiere el desarrollo (que debatiremos en siguientes capítulos) y la armonía con la naturaleza.

Los detractores del modelo de desarrollo, y que cuestionan su noción misma, sostienen que el gobierno intenta un capitalismo de Estado basado en la extracción de materias primas, sobre todo minería, petróleo y gas. Y que los movimientos sociales que gobiernan se han subordinado totalmente a una política desarrollista y extractivista que favorece a las grandes empresas transnacionales exportadoras de soja, grandes mineras, etc. En cambio, ya hemos citado a García Linera defendiendo la nece-

62 El propio presidente Evo Morales demostró con registros telefónicos las relaciones entre dirigentes de la marcha y un funcionario de la embajada estadounidense en Bolivia. Véase *Los Tiempos*, 2011.

sidad de ese desarrollo, pero explicando que no es a favor de esos grandes capitales, sino que los mecanismos de control y nacionalización implementados aprovechan la tecnología de esos capitales para ir generando la propia base tecnológica e industrial a favor de la redistribución del excedente, en función de las necesidades sociales. Así, esa alianza transitoria sería necesaria para generar la base material de la transición al socialismo.

Otra de las críticas desde algunas organizaciones, ONG, e intelectuales ligados a ellos, sostiene que se ha producido —igual crítica se da en Venezuela, Ecuador y Argentina— una centralización del poder en la toma de decisiones, que iría a contramano de lo establecido en la nueva Constitución sobre la construcción de un Estado plurinacional. Este último implica la articulación de diferentes horizontes emancipatorios, la profundización de un régimen democrático que trascienda los límites de la democracia representativa, asentada en la división de mayorías y minorías, hacia una democracia participativa, directa y comunitaria.

Ahora bien, estos planteos, así en abstracto, suenan bien, justos y democráticos, socializadores. Pero se asemejan a una visión abstracta de las relaciones de fuerza y de poder internacional —que según Gramsci son las primeras que hay que analizar para llegar, luego del análisis de relaciones de fuerzas objetivas, al de las fuerzas políticas— que plantean las posiciones —en cierta forma ya superadas— de John Holloway (2002), Antonio Negri y Michael Hardt (2002), y los llamados autonomistas, que terminaban en la no confrontación con el poder real y el repliegue hacia construcciones idílicas, muy pequeñas experiencias de laboratorios que debían conservarse desde toda prioridad. En esa dirección terminaron por ser conservadoras y no extensibles para resolver la realidad de millones de trabajadores y pobres de América Latina. Dichas posturas criticaban la «antigua política» de los «antiguos» movimientos revolucionarios

o de izquierda. Raúl Zibechi (2003) afirmaba que esta «antigua» política se basaba en la concepción de esta como guerra, planteando amigos y enemigos, luchas, estrategias, tácticas, todo perteneciente a la terminología bélica, digna de piezas de museo, para dar paso a políticas de la libertad, emancipación, democracia, autonomía, etc...

Sin embargo, como comenzábamos a analizar en el capítulo anterior, la realidad nos dice otra cosa: que la política, en un mundo caracterizado por la dominación fraternicida del capitalismo y el imperialismo, sí es de guerra. Que el capitalismo en el que vivimos y contra el que luchamos, y la clase dominante planetaria y sus lacayos locales, nos plantean la lucha, a veces a muerte, en todos los escenarios y, cuando pueden, la guerra también. Aunque ahora no hay condiciones ni de uno ni de otro lado para plantear la lucha armada tal como sucedió en los 70, no por eso deja de ser cruel y virulenta. Sabemos que echan mano a golpes institucionales, económicos, ideológicos, cuando no directamente militares. Intentan infiltrarse en las demandas democráticas y genuinas de partes del pueblo para agudizar las diferencias con quienes conducen los procesos de cambio.

De manera que establecer la democracia y autonomía de las comunidades por encima de la decisión centralizada y la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas (condiciones estructurales para la transición al socialismo), implicaría abandonar ese ámbito centralizado de poder que es el gobierno del Estado —aunque no el único ni el más poderoso— a la clase dominante y sus cuadros políticos de la derecha. Lo cual sería un verdadero paso atrás para los pueblos de todos los colores y nacionalidades, de Bolivia y de América Latina. Ello no significa que no sea indispensable profundizar también los espacios democráticos de participación y decisión popular al lado de los ámbitos centralizados, y no en contradicción, como decíamos más arriba,

reflexionando sobre el caso de Venezuela. Entonces, si la política es la continuidad de la guerra por otros medios (y viceversa), las trincheras en todos los frentes y la necesidad de un Estado Mayor Conjunto es indispensable para librar esa guerra política.

VIII. La Revolución Ciudadana en Ecuador

Ecuador es uno de los países que venimos clasificando como parte del núcleo duro del cambio de época norteamericano, a favor de los pueblos. En esta «hora de los pueblos», este país y su revolución ciudadana, bajo el comando de la Alianza País y de Rafael Correa, se han propuesto como horizonte construir el socialismo del Buen Vivir entendido este como una idea movilizadora según se recoge en su Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que propone una hoja de ruta a partir de la soberanía y la ampliación de los derechos ciudadanos.

Hemos visto que el horizonte de la emancipación política ciudadana es el máximo al que se puede aspirar dentro de los marcos del capitalismo, pero eso no lleva automáticamente al socialismo, tanto más cuanto ese mismo proceso de emancipación política y de ampliación de la ciudadanía social, económica y política pronto encuentra la férrea oposición del poder capitalista y sus distintas herramientas partidarias, mediáticas, culturales, institucionales o militares para frenar esos avances democráticos que atentan contra la necesaria disciplina social que necesita la dinámica de acumulación de capital y maximización de ganancias.

Es así de la mayor importancia ponderar los avances realizados en esos escenarios de profundo enfrentamiento social y no en los ideales que nos proponemos los que aspiramos a construir sociedades justas y libertarias. Y es en este marco que pueden comprenderse los contundentes ataques de la oligarquía ecuatoriana y sus bases sociales e instrumentos partidarios (es importante aclarar que entendemos la noción de partido en el sentido amplio

que propone Gramsci⁶³ ante cualquier intento de afectar mínimamente sus intereses, como es el caso del proyecto de reformar las leyes de Herencia y Plusvalía⁶⁴ que en 2015 fueron la base para el despliegue del ataque de las derechas y de confundidos actores supuestamente pertenecientes al campo popular.

Hemos dicho que la construcción sólida y concreta de pasos hacia un horizonte de emancipación que exceda el marco dominante de relaciones sociales capitalistas no es posible en el terreno local y de manera aislada, pues el acecho mediático, político-militar y económico que practican permanentemente las oligarquías locales, en complicidad o como lacayos del imperialismo, complica en extremo cada paso dado, con lo cual el estado de transición se torna crónico, permanente. Así, tanto la Revolución bolivariana de Venezuela, como la Revolución Cultural y Democrática del Estado Plurinacional de Bolivia, y la Revolución Ciudadana del Ecuador constituyen Estados de transición —cuyo carácter será tema de los próximos capítulos— que se

63 «Un movimiento o tendencia de opiniones se transforma en partido, es decir en fuerza política eficiente desde el punto de vista del ejercicio del poder gubernativo» en la medida en que posee «(habiéndolos preparado en su interior) dirigentes de distinta capacidad y en la medida en que esos dirigentes hayan adquirido una determinada preparación». Utilizaremos las dos nociones de Gramsci sobre partido en sentido amplio, orgánico, y en sentido restringido, fracción. Esta última refiere a organismos que han sido dados por el desarrollo histórico, en el sentido de un elemento de sociedad complejo en el cual comienza a concretarse una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción. En sentido restringido, el partido tiene para Gramsci tres elementos: el primero compuesto por hombres comunes que participan, el segundo es el elemento de cohesión principal que centraliza, organiza y disciplina, y el tercero es un elemento medio, que articula el primero y el segundo, que los pone en contacto, no solo "físico" sino moral e intelectual. Y en sentido amplio cada partido orgánico es la expresión de un grupo social y nada más que de un solo grupo social. (Gramsci, 1997: 12, 15, 29, 30, 33, 34, 94).

64 La Ley de Plusvalía pretendía cortar fuentes ilegítimas de acumulación de capitales, provenientes sobre todo de la especulación con el suelo una vez que determinados terrenos se valorizaban por la inversión que realizaba el Estado (obras públicas, asfalto, saneamiento, etc.). El ejemplo más claro es el de los terrenos que rodean la sede de la Unasur en Ecuador, que sextuplicaron su precio y el Estado los tuvo que comprar para dejarlos como espacios verdes y garantizar que no se especulara con ellos.

desarrollan en medio de un escenario de agudo enfrentamiento social y lucha de clases.

Si hablamos de lucha de clases desde un análisis marxista, es importante determinar quién es el sujeto social del cambio y de la revolución ciudadana; sujeto que ha ido transformándose desde el inicio de la resistencia contra el neoliberalismo hasta el momento histórico actual, pero que sin duda comienza a conformarse con las luchas del movimiento indígena.

Movimiento Indígena Ecuatoriano (MIE)

No es posible repasar en este espacio la larga memoria del movimiento indígena ecuatoriano. Es una historia de quinientos años de luchas, resistencias y levantamientos, pero también de penetración cultural del capitalismo, especialmente del multiculturalismo en cuanto expresión posmoderna del capitalismo en ese ámbito.

Comenzamos este breve repaso histórico en 1944, cuando la líder indígena Dolores Cacuango funda la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), y se convierte en su primera Secretaria General. En la FEI se mezclan, por primera vez, reivindicaciones de clase con demandas en torno a cuestiones como la tierra o la cultura, especialmente centradas en la lengua kichwa.

Pero nuestro propósito es centrarnos en la historia del movimiento indígena desde 1986, año en que se constituye la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), hasta el año 2008, cuando es aprobada la nueva Constitución Política del Ecuador tras una Asamblea Constituyente.

Los 80 son años duros para América Latina; después de décadas de dictaduras y con una izquierda débil, se impone la doctrina neoliberal impulsada por el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las clases populares son golpeadas duramente, y el neoliberalismo trae aparejado el

multiculturalismo⁶⁵ como práctica integracionista para hacer más fácil la asimilación de los pueblos indígenas, bajo un supuesto respeto a las diferencias, siempre que no cuestionaran el modelo de Estado y sobre todo el modelo económico del neoliberalismo. Aunque en Ecuador la doctrina neoliberal comenzó tímidamente en 1988 con el gobierno de Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática,⁶⁶ fue implementada de manera efectiva por Sixto Duran Ballén, en 1992. Es en ese contexto global cuando, en 1986, nace la CONAIE, como resultado del primer Congreso del Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE), que coordinaba, a su vez, las dos grandes matrices regionales, la Ecuador Runacunapac Riccharimui (ECUA-RUNARI), que agrupaba desde 1972 a las nacionalidades kichwa de la sierra, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), fundada en 1980. La zona era de menor peso poblacional, pero con una importante extensión territorial, así como variedad lingüística.

A la hora del análisis en torno al Movimiento Indígena Ecuatoriano, es importante señalar la gran diversidad y riqueza lingüística y cultural de sus 14 nacionalidades y 19 pueblos, que hablan 14 idiomas, incluyendo el castellano.

Ya en los 90, la toma de conciencia de los pueblos originarios se produce mediante una combinación de la memoria larga, focalizada en los actos de resistencia en torno a la conmemoración, en 1992, de los quinientos años de ocupación colonial

65 En palabras del cubano Aurelio Alonso (2009) reseñando un trabajo del sociólogo y antropólogo dominicano-mexicano Héctor Díaz-Polanco: «El multiculturalismo se nos muestra como una expresión sublimada del liberalismo en la medida en que deja incólume el primado del individuo sobre lo colectivo y la postergación de la igualdad a favor de la libertad». Para profundizar en la crítica al multiculturalismo, véase Díaz-Polanco (2007; 2015).

66 Durante su mandato se promulgaron algunas leyes y medidas que favorecían la flexibilización laboral.

occidental, y de la memoria corta, debido a los resultados de una invisibilización de las demandas indígenas y de la aplicación de políticas neoliberales, que golpeaban a las clases populares con dureza. No es casualidad que en 1990 en Bolivia se diera la primera «Marcha por el Territorio y la Dignidad» convocada por los pueblos indígenas del oriente boliviano, o que el 1 de enero de 1994 los indígenas zapatistas liderados por el EZLN se levantarán en armas en la selva Lacandona de Chiapas, mientras ya en 1996 en Bolivia se daba la segunda «Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas».

Mientras tanto, en Ecuador la década comienza con el primer levantamiento indígena, en junio de 1990, que, bajo el liderazgo de la CONAIE, se plantea una agenda de reivindicaciones de dieciséis puntos. El punto 7 formula, por primera vez, el reconocimiento de la plurinacionalidad. Si bien el debate sobre esta provenía de las décadas de los 70 y los 80, es en este levantamiento donde se plasma en un programa político de demandas al Estado. La propuesta consistía en un modelo de economía mixta, así como en una crítica al carácter colonial y excluyente del Estado ecuatoriano, lo que permitía conjugar demandas propias del movimiento indígena, con las de clase.

A este levantamiento se le suman, en 1992, una marcha desde la Amazonía hasta Quito, organizada por la CONFENIAE, en defensa de su territorio, así como las movilizaciones por el reconocimiento de los quinientos años de resistencia que denunciaban el carácter colonial del Estado. Las movilizaciones continuaron, y en 1994 se produce el segundo levantamiento indígena nacional contra la reforma a la Ley Agraria promovida por Sixto Durán, de carácter fuertemente neoliberal.

Los años 1995 y 1996 son importantes para el movimiento indígena ecuatoriano, pues se conforma el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), fruto de la

articulación de Pachakutik en la Sierra, Unidad Plurinacional de la Amazonía, y el movimiento urbano Nuevo País. El MUPP-NP se presenta a las elecciones locales de 1996, y logra una importante representación tanto a nivel de municipios y juntas parroquiales, como en el Congreso Nacional.

En 1997 hay un nuevo levantamiento indígena, que tuvo un papel importante en la caída de Abdalá Bucaram, presidente de la República.

Y así llegamos a la Asamblea Constituyente de 1998, en la que el movimiento indígena logra colocar cuatro asambleístas y en donde se introduce, por primera vez, en la Constitución los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, además de ratificar el Convenio 169 de la OIT.

Durante los años siguientes continúan las movilizaciones y levantamientos contra los sucesivos presidentes, Jamil Mahuad y Gustavo Noboa. Es necesario detenernos en enero de 2000, pues el 9 de ese mes el presidente Mahuad anuncia la dolarización como parte de su paquete neoliberal y de salvataje bancario, y el 21 de enero Mahuad es destituido tras una marcha de la CONAIE que toma las calles de Quito. Es sustituido por un triunvirato fugaz conformado por Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, el coronel Lucio Gutiérrez, y Carlos Solórzano representando a la sociedad civil. El triunvirato dura tan solo un día, pues el 22 de enero asume como presidente de la República el hasta entonces vicepresidente, Gustavo Noboa.

Mientras tanto, Pachakutik formaliza en 2002 una alianza con el Partido Sociedad Patriótica, del exmilitar Lucio Gutiérrez, quien gana las elecciones de noviembre de ese año. La CONAIE participa durante ocho meses de 2003 del gobierno de Lucio Gutiérrez, con cuatro ministros en el Ejecutivo, entre ellos sus dirigentes históricos Nina Pacari como ministra de Relaciones Exteriores, y Luis Macas como ministro de Agricultura. Hemos tratado ya en el

Capítulo IV cómo la CONAIE y Pachakutik refuerzan su protagonismo con el derrocamiento de Jamil Mahuad, en alianza con un sector militar cuyo referente era Lucio Gutiérrez. Y cómo este último, durante esos procesos de lucha, suscitó grandes esperanzas populares, con su discurso nacionalista y antineoliberal, banderas que pronto trajo al llegar a la presidencia. El momento culminante de este proceso de resistencia y lucha del pueblo ecuatoriano y sus organizaciones lo constituyó la Rebelión de los forajidos, que también hemos visto en el Capítulo IV.

Luego de las movilizaciones que desembocan en la caída de Lucio Gutiérrez y de la sucesión de su vicepresidente, en noviembre de 2006 Rafael Correa y su movimiento Alianza País ganan las elecciones presidenciales frente a Álvaro Noboa, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), de derecha. La victoria de Correa ocurre en la segunda vuelta electoral con el apoyo de la CONAIE y el movimiento indígena, así como de varios sectores de izquierda y organizaciones sociales. Ello da paso al cambio de época también en Ecuador.

Asamblea Constituyente y nueva Constitución en Ecuador

Del 30 de noviembre del 2007 al 25 de julio de 2008, en Montecristi, provincia de Manabí, sesionó la Asamblea Constituyente, que dio a luz a una nueva Constitución, la número 20 de la historia de Ecuador.

Ciento treinta asambleístas fueron escogidos por votación popular, con Alberto Acosta, ministro de Energía y Minas en el primer gobierno de Correa, de presidente de la Asamblea Constituyente, sustituido en la recta final por Fernando Cordero tras la dimisión de Acosta por discrepancias con Rafael Correa.

La Constitución fue aprobada por 94 asambleístas el 24 de julio para después ser aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 2008 con 63,93% de los votos.

La Constitución ecuatoriana tiene numerosos avances en cuanto a la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo ecuatoriano, además de consagrar, mediante una ruptura epistemológica, los derechos de la naturaleza en sus artículos 71 a 74.

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.⁶⁷

Nos interesa subrayar un proceso que, de forma casi paralela a la Asamblea Constituyente, se puso en marcha en Ecuador, referente a la recuperación de la soberanía ecuatoriana, en este caso en el ámbito económico: el proceso de auditoría de la deuda externa.

En 2007 el presidente de la República, Rafael Correa, dispuso mediante el Decreto 472 un análisis de la deuda pú-

67 Aunque en un primer momento la Constitución ecuatoriana avanzó más que la boliviana en la consagración de los derechos de la naturaleza, en Bolivia se dio un salto importante con la promulgación en 2012 de la «Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien» que define de esta manera la Madre Tierra: «Es el sistema vivo dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen». (2012)

blica ecuatoriana para la que fue conformada una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC). Una vez presentados los resultados, Correa afirmó que no pagaría los tramos de deuda externa considerados ilegítimos por el informe del CAIC, y declaró una moratoria en el pago señalando que se proponía

no solo sancionar a los culpables sino también no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda ilegal y hacer responsables con sus bienes a quienes habían montado la operación [...] a los prestamistas que la indujeron compulsivamente, amarraron y coimearon con jugosas comisiones [...] con títulos espiruos. (La Nación, 2008)

No necesitamos más que un dato para comprender el alcance de la deuda ilegitima dejada por los gobiernos neoliberales. En 2005, el gobierno ecuatoriano asignaba 40% de su presupuesto al pago de los intereses de la deuda, mientras que solo dedicaba 15% a inversión en salud y educación. Como señala Carlos Játiva (2015), embajador de Ecuador en París en aquella época, mediante esta decisión «la deuda de Ecuador descendió de 17 475 millones de dólares en 2008 a 13 686 millones en mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3 789 millones de dólares».

Se calcula que el no pago de la deuda ilegitima supuso para Ecuador una cantidad de 7 000 millones de dólares, que pudo ser invertida en políticas sociales (Correa, 2011).

Esta combinación de la auditoría de la deuda y de una nueva Constitución que consagraba una serie de derechos sociales, permitió recuperar y profundizar la soberanía ecuatoriana y lograr unas mejoras que se traducen en indicadores sociales de la Revolución Ciudadana (Senplades, 2012).

Por citar algunos de los más reseñables: la pobreza se redujo 12 puntos de 2006 a 2012, de 37,6% de la población a 25,3%, mientras que la extrema pobreza pasó de 16,9% a 9,4%. Al tiempo que bajaba la pobreza se reducía la desigualdad, entre 2006 y 2011, de 0,54 a 0,47 —medida en el Índice de Gini—; la relación de ingresos entre el 10% de la población más rico y el 10% más pobre cayó 10 puntos, de 27,7 a 17,8.

La inversión en educación pública pasó de 90 millones de dólares en 2006 a 763 en 2011, mientras que solo de 2008 a 2011 la inversión por habitante en salud se duplicó: de 118 a 223 dólares.

Finalizamos con un dato que da cuenta de la mejora de la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, especialmente de sus sectores populares. En enero de 2007, el ingreso promedio familiar cubría 69,9% de la canasta básica, mientras que para junio de 2012 ya alcanzaba 93%, hecho logrado a partir del aumento del salario básico: de 199 a 329 USD entre 2006 y 2011 (actualmente se encuentra en 354 USD).

Recuperación de la soberanía

Si la auditoría de la deuda supuso una recuperación de la soberanía económica del Ecuador, que se pudo traducir en la mejora de las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, no podemos dejar de repasar cuatro elementos simbolizan la recuperación de su soberanía política. En primer lugar, la recuperación de la Base Militar de Manta (Eloy Alfaro) que había sido entregada a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1999 por el gobierno de Jamil Mahuad bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico en el área andina.

Manta, en la costa ecuatoriana, era un enclave muy importante para las operaciones del Plan Colombia, y a la colonización terrestre se unían el permiso a los aviones estadounidenses para sobre-

volar libremente el espacio aéreo ecuatoriano, una base terrestre de telecomunicaciones, e inmunidad diplomática para el personal de la base aérea, consumando así la entrega de la soberanía territorial que convertía a Ecuador en una plataforma para las operaciones de contrainsurgencia de los Estados Unidos en la región.

En 2009, Rafael Correa ordenó no renovar el convenio, y las tropas estadounidenses tuvieron que abandonar la base, y el país, en septiembre. Uno de los desencadenantes de la decisión fue la Operación Fénix⁶⁸ bajo la cual el ejército colombiano bombardeó un campamento guerrillero en suelo ecuatoriano en el que murieron el comandante de las FARC-EP Raúl Reyes y diecisiete guerrilleros, además de cinco civiles de nacionalidades ecuatoriana y mexicana.

En segundo lugar, la batalla política que Ecuador ha dado contra la transnacional estadounidense Chevron, que entre 1964 y 1990 operó en Ecuador mediante su filial petrolera Texaco causando daños ambientales en la Amazonía al contaminar cinco millones de metros cúbicos de tierra, y mediante el relleno en fosas abiertas en torno a 64 millones de litros de petróleo y 71 millones de litros de residuos sin tratamiento ambiental, afectar, según se calcula, a treinta mil indígenas y campesinos ecuatorianos.

El gobierno ecuatoriano emprendió la campaña «La mano sucia de Chevron»⁶⁹ para denunciar este imperialismo ambiental y consiguió dos victorias en los tribunales: se condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares de compensación, y la Corte Suprema de Justicia de Canadá dictaminó, en septiembre de 2015, que las víctimas del terrorismo ambiental de Chevron tenían derecho a reclamar una indemnización.

68 Para conocer más detalles sobre estos hechos, véase López y Vallejo (2009).

69 Esta campaña inicia después de la demanda colectiva interpuesta por comunidades amazónicas de la región de Sucumbíos en primer lugar en un tribunal de Nueva York (1993), demanda trasladada posteriormente (2003) a la justicia ecuatoriana.

Los otros dos elementos que profundizan la línea de ampliación de soberanía son, por un lado, la decisión del gobierno ecuatoriano de acoger la Secretaría general de la UNASUR, en una clara apuesta por profundizar el proceso de integración política sudamericana, y latinoamericana; y, por otro, ofrecer asilo diplomático a Julian Assange —fundador de WikiLeaks— tras la persecución que este ha sufrido por parte de los Estados Unidos después que su organización comenzara a filtrar cables diplomáticos confidenciales estadounidenses que demostraban el espionaje imperialista que la potencia del Norte ejerce no ya con sus enemigos, sino con sus aliados y en su propio país. Actualmente, Assange se encuentra refugiado, desde junio de 2012, en la embajada de Ecuador en Londres sin que las autoridades británicas le concedan el salvoconducto para poder abandonarla.

Tensiones internas

Todos estos avances y la experiencia ganada en el terreno de la lucha contra las políticas de la oligarquía financiera consolidaron una amplia base social para la revolución ciudadana, cuestión nada fácil de lograr, no solo por la división en las filas del pueblo —a la que nos incitan históricamente las instituciones del poder—, sino por las propias frustraciones del campo popular ecuatoriano que había logrado construcciones y alianzas sociales y políticas, después de mucho esfuerzo y lucha, a finales de los 90 —como relatamos en el Capítulo IV— que pronto traicionaron al movimiento popular; especialmente en la experiencia en torno a la presidencia de Lucio Gutiérrez.

Con el campo popular aún dividido —por ejemplo, una buena parte del movimiento indígena que representa la CONAIE y su brazo político Pachakutik se han posicionado en contra del gobierno—, todavía la Revolución ciudadana logra una amplia base

popular construida sobre los avances concretos en las condiciones de vida y en los grados de soberanía política y económicas adquiridas, y que demuestran su fuerza en cada combate a que lo somete el poder concentrado. Aunque también hubo momentos en los que tuvo que retroceder frente al poder de convencimiento de las corporaciones mediáticas sobre una parte de su propia base social, como fue el reciente caso de las leyes de Plusvalía y Herencia.

Veamos cómo se desarrollan, para el caso de Ecuador, las contradicciones internas, o secundarias, en el seno del pueblo. Como dijimos, algunos desencuentros generados en el campo del pueblo aparecen desde el principio. Los movimientos indígenas, principales protagonistas de la resistencia al neoliberalismo, el grueso de la estructura organizativa de la CONAIE y de Pachakutik, en el proceso electoral de 2006, apoyó a su principal dirigente del momento, Luis Macas, en la primera vuelta. Luego, en la segunda ronda e igualmente en el referéndum sobre la nueva Constitución, la mayoría de las organizaciones indígenas apoyó (críticamente) a Alianza País y a Rafael Correa. Al mismo tiempo, algunas organizaciones indígenas no pertenecientes a la CONAIE, como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), y algunos dirigentes locales y figuras nacionales del movimiento, decidieron sumarse, como también algunos dirigentes de Pachakutik.

Al iniciar su mandato en 2007, Correa despliega una fuerte disputa con la partidocracia liberal, con los medios monopólicos de comunicación, con las fracciones más concentradas de capital, con el capital bancario y con la élite guayaquileña. La Asamblea Constituyente, y todo su proceso de constitución, reforma y referéndum, movilizó enormemente al pueblo ecuatoriano y lo puso a debatir política y modelos de sociedad. Asimismo, el importante giro se observa en la política exterior del gobierno de Rafael Correa, que fortalece todas las instancias concretas de unidad latinoamericana, se alinea con Venezuela y enfrenta a los

Estados Unidos en sus iniciativas imperialistas, a pesar de que es el principal socio comercial del Ecuador.

Por las mismas razones de desarrollo de la base material de la «revolución ciudadana» que veíamos para el caso boliviano, se continúa con las políticas agroexportadoras y mineras, y ello dibuja el campo de la profundización de las contradicciones internas entre «extractivistas» y «ambientalistas», que han convivido y se han disputado dentro del mismo gobierno ecuatoriano. Por ejemplo, está el caso de la decisión de no explotar el campo petrolero ITT (Ishpingo-Tambococha Tiputini), ubicado en el parque nacional Yasuní, una de las reservas de la biosfera más importantes del planeta. Esta iniciativa de no explotación de importantes reservas petroleras en una zona de gran biodiversidad, ha sido desactivada recientemente por la presidencia ecuatoriana, ya que semejante renuncia a los ingresos estatales generados por la explotación del campo petrolero debía ser compensada por «la comunidad internacional» —en la que tienen predominancia los países ricos responsables principales de la contaminación planetaria— y del objetivo inicial de recaudar 3 600 millones de dólares —cifra cercana a la mitad del valor de los 800 millones de barriles de petróleo que no extraerían— en un período de doce años, entre los países del Norte causantes del desastre climático, solo se recaudó 0,37% de lo previsto. Al no haberse logrado el objetivo, que era una posibilidad cierta de generar una transición a un modelo posextractivista, Rafael Correa argumentó que, a pesar de ser la decisión más dura de sus años de gobierno, su obligación era sacar a su pueblo de la pobreza, por lo que se necesitaba el dinero de la explotación del Yasuní.

Algunos analistas señalan al debate en torno a la propiedad de la tierra y su productividad como una de las principales razones del distanciamiento político entre el Movimiento Indígena ecuatoriano y la Revolución Ciudadana.

Para el gobierno de Correa, el problema de la concentración en latifundios o su división de tierras en pequeñas parcelas es un dilema falso, el problema es un latifundio en manos de un solo patrón, pero ese mismo latifundio manejado por cientos de dueños permite una elevada productividad a diferencia de esa misma tierra dividida en cientos de parcelas de baja productividad.⁷⁰

Esta cuestión remite a la tendencia, ya explicada y visualizada con claridad por Marx en su época, de la concentración y monopolización en el capitalismo, que es intrínseca al sistema. Alguna ley podrá demorarla, obstaculizarla un tanto, pero no evitarla, porque es el corazón del sistema. Los capitales pequeños y medianos se desvanecen en cada crisis, y los saltos en concentración y monopolización son irreversibles. Aunque surjan nuevas actividades productivas en las que se hacen lugar nuevos y/o pequeños capitales, luego seguirán esa misma tendencia. Pero esa tendencia, explicaban Marx y Engels, es necesaria para un futuro socialista. El comunismo no implica volver a la pequeña propiedad privada, individual, ni mucho menos su defensa, sino que es la colectivización de la gran propiedad, de las fuerzas productivas concentradas y desarrolladas bajo la forma de la cooperación y no de la explotación, y al servicio de las necesidades humanas y no de las ganancias de unos pocos.

En un mundo poblado por miles de millones de personas, se necesita realmente elevados índices de productividad. Entonces son las grandes unidades productivas (en todas las ramas industriales, de producción, distribución y consumo) concentradas, pero bajo control obrero y popular en todos sus aspectos, las que

70 Con este libro ya finalizado, el 7 de enero de 2016 la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, por 98 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones, la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Esta Ley tiene como objetivo garantizar la redistribución de la tierra productiva, el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y la legitimidad del uso y usufructo en estos territorios. Véase <http://slideshare.net/SegundaVicepresidenciaAsamblea/ley-de-tierras>.

podrán abastecer, alimentar y responder a las necesidades de todas las poblaciones del planeta de manera pareja; con formas de trabajo no alienado, en las que la dirección colectiva de los procesos de trabajo decidan qué, cómo, cuánto y para qué se produce, se distribuye y consume, y no el consumo dilapidador y ecocida de los países del norte, que convive con la pobreza extrema de varias poblaciones del sur. Estos procesos de largo plazo implicarán grandes enfrentamientos humanos, porque ya sabemos que ningún capital concentrado, ni sus Estados, cederá sus privilegios pacíficamente. Y no significa que en la actual coyuntura no debamos defender la pequeña propiedad campesina, industrial o comercial, en contra de los grandes monopolios capitalistas que degluten personas y naturaleza sin obstáculos morales ni planificaciones que vayan más allá de sus propias ganancias. Pero en procesos de transición de gobiernos que necesitan dar respuestas a sociedades empobrecidas en su conjunto, la productividad y socialización es un tema que abordar; el cual no podrá ser resuelto si no se cuestiona la gran propiedad privada sobre los medios de producción estratégicos, en primer lugar la tierra, además de socializar las estatales o privadas improductivas o de gran extensión, es necesaria la inversión en tecnologías para aprovechar la socialización y colectivización productiva. En el MST de Brasil se plantean este problema de los límites de la pequeña unidad productiva y ensayan diversos mecanismos de colectivización en sus asentamientos.

Rafael Correa ubica como uno de los principales peligros de la Revolución Ciudadana esas contradicciones internas, resultado de lo que denomina izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil, parafraseando el texto de Lenin, Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, escrito en 1920, en el que alertaba contra los peligros internos de dogmatismo y sectarismo que se desenvolvían en las filas revolucionarias, que conducían al aislamiento, y

afirmaba la necesidad de ampliar la base de adhesión a la causa revolucionaria de las más amplias masas.

Estas tensiones internas del bloque popular se ven muchas veces atravesadas por los propios intereses de la derecha, nacional e internacional, y del imperialismo, que permanentemente busca las grietas por donde ensanchar las contradicciones, para su propio beneficio.

En los últimos tiempos podemos señalar dos escenarios que han sido aprovechados por la derecha y el imperialismo para tratar de tumbar el gobierno de Rafael Correa: el fallido golpe de Estado en 2010, y las recientes (junio de 2015) movilizaciones contra los proyectos de ley de Herencia y Plusvalía inmobiliaria presentados por el oficialismo.

El 30 de septiembre de 2010 una revuelta policial contra una ley salarial se transformó en uno de los incidentes más graves cuando Correa, que se había lastimado una pierna recién operada, fue llevado al hospital de la Policía Nacional y se intentó retenerlo, lo que desató una serie de disturbios y protestas entre sus partidarios y la policía, que dejó un saldo de cientos de heridos y varios muertos entre la Policía y el Ejército. Los gobiernos de Venezuela y Bolivia acusaron a los Estados Unidos como instigadores del motín policial. En 2014, un tribunal condenó a seis policías a doce años de prisión por intento de magnicidio.

En junio de 2015, el Ejecutivo ecuatoriano presentó dos propuestas que buscaban una redistribución de la riqueza gravando las herencias de las rentas más altas y la plusvalía obtenida por ventas inmobiliarias producto de la especulación o revalorizaciones ligadas a la inversión pública. A pesar de que se calculaba que estas leyes solo iban a afectar a 2% de la población con altos ingresos, la clase media ecuatoriana, impulsada por los partidos de derecha, salió a la calle a protestar mediante movilizaciones masivas que obligaron al gobierno de Rafael Correa a retirar ambas propuestas de ley.

Todos estos cuestionamientos y contradicciones internas que generan, en diversos grados, rupturas de partes de las fuerzas nacionales, democráticas y populares que ocupan varios de los gobiernos latinoamericanos ¿indican la crisis de estas fuerzas y de estos procesos de cambios? ¿Pueden ser resueltas sin cuestionar el orden vigente? Pero de profundizarse la crisis de esas fuerzas ¿hay otras con conducción revolucionaria para tomar las riendas de los gobiernos? ¿O más bien es la fuerza social-política del gran capital la que puede ocupar los gobiernos de los Estados sobre la base a una lenta, pero no desdeñable, recomposición de sus bases sociales?

Las posturas de las organizaciones y movimientos sociales dependen del país; oscilan entre aquellos que tiran para avanzar más porque creen que las condiciones lo permiten, y los que creen que lo que se está avanzando es lo máximo posible en esta coyuntura, porque cada vez que se avanza la reacción del establishment es más fuerte. La apuesta por seguir profundizando, y radicalizando, los procesos, debe ser la base de construcción del poder popular, y el horizonte del movimiento social, pero desde la responsabilidad compartida de que es necesario gobernar, gestionar un Estado y, por lo tanto, una cierta dosis de pragmatismo en la medida en que sin perder el horizonte, cada día hay que diseñar políticas públicas para alimentar a la población e ir, paulatinamente, sacándola de la pobreza, pues como referíamos en el capítulo anterior, según Gramsci no hay reforma cultural posible, y mucho menos revolución, sin reforma económica precedente, que, al mismo tiempo, es como se presenta la reforma intelectual y moral.

IX. Las luchas desde abajo y a la izquierda. La construcción de poder popular y su relación con el Estado

El concepto de construcción de poder popular se retoma en las experiencias del ciclo de la rebelión de los 90. Hacia sus finales, cuando se generalizan las luchas y crecen o se consolidan los procesos organizativos en distintos frentes, se reanuda el debate acerca del poder, y se pone de moda en los movimientos y organizaciones populares hablar de la construcción de poder popular, simplificando el problema para referirse a casi todas las nobles y loables acciones cotidianas, solidaridades, y construcciones de relaciones sociales alternativas y localizadas de las organizaciones, en sus respectivos frentes.

Sin embargo, entre quienes afirmaban la construcción desde abajo como única vía de generación de poder diluían la verdadera esencia de la cuestión, dejando así el verdadero poder en manos de la clase dominante. No vamos a ahondar en estos debates, sólo diremos que en los movimientos y organizaciones sociales de abajo esta cuestión surgía como respuesta, reformulación o autocrítica de la estrategia de la «toma del poder» del Estado de algunas de las organizaciones revolucionarias de los 70. Intentaban diferenciarse tanto de las concepciones de la toma del poder como de aquellas de negación del poder —como las expresadas por John Holloway mediante la idea de «cambiar el mundo sin tomar el poder»— y para ello utilizaron este concepto de «construcción de poder popular».

En parte, también influyó una cierta jerga puesta de moda desde las ONG, emanada desde el norte imperial, acerca del «em-

poderamiento». Este concepto fue adoptado por algunas agrupaciones populares, sobre todo por el movimiento de mujeres.

De la construcción de una fuerza social de protesta a la de poder popular

Habíamos dicho que en el ciclo de la rebelión popular de los 90 no se observa un proceso de «construcción de poder popular», sino más bien la constitución de una fuerza social de protesta, de carácter popular, que tiene que ver con las fases preliminares del proceso, cuyos elementos son la acumulación de fuerzas, de experiencia de lucha y de organización; de confianza en la propia fuerza de los oprimidos y el aprendizaje que lleva a la conciencia de que sólo con la lucha y la organización para enfrentar al poder establecido se consiguen objetivos que remiten a intereses populares; pero no es todavía poder popular.

Sin embargo, luego del cierre de esos ciclos de la rebelión popular en Nuestra América, con los momentos insurreccionales y la apertura de una nueva etapa en la lucha de clases, a partir de mediados de la década de 2000 se ha pasado efectivamente, en algunos territorios y en diferentes grados, a la construcción de poder popular, de la mano de la «lucha desde arriba», al gobierno del Estado y la disputa del poder por parte de esa fuerza social de protesta gestada contra las políticas de la oligarquía financiera.

La construcción de poder popular en esos territorios se nutre de todas las diversas confrontaciones, experiencias organizativas y comunitarias.

Los grados de construcción de poder popular suponen grados de destrucción del poder establecido cultural, económica, política y territorialmente. Pero como hemos visto antes es un proceso y una relación de fuerzas no de suma cero. Es un movimiento dialéctico (no lineal) que implica constitución/dispersión, construcción/destrucción, de fuerzas sociales (alianzas) que disputan la

conducción (y modelos) de la sociedad. Por ello para la disputa de poder se necesita una fuerza social articulada y es en el ciclo de los 90 que se observa a través de los enfrentamientos sociales el proceso de su constitución.

Muchos de estos elementos obedecen a procesos que se inician mucho antes de la conformación de los gobiernos populares. Entonces, ¿cuándo se puede hablar de real construcción de poder popular? Sobre todo teniendo en cuenta que nos referimos a transformaciones políticas que ocurren dentro de las instituciones, procesos de transición o de reformas, revoluciones democráticas, culturales, ciudadanas y pacíficas, y no procesos revolucionarios como fue el caso de Cuba. ¿La construcción de embriones de poder socialista puede darse sólo en sociedades donde claramente hubo revolución socialista? ¿O también puede acaecer en aquellas que potencialmente atraviesan una vía pacífica al socialismo, como algunos de los casos que nos atañen? No pretendemos contestar estas preguntas, sino analizar elementos que puedan contribuir al debate, y, por qué no, estimular investigaciones al respecto.

Al menos los casos del MST de Brasil y los ayllus en Bolivia ya existían como procesos de construcción de relaciones sociales alternativas, al mismo tiempo que se llevaba a cabo la resistencia contra el neoliberalismo. Entonces, ¿cuándo se puede hablar de poder popular y disputa del poder?, puesto que debemos diferenciar la construcción de espacios de lucha, y fuerza social-política de la construcción de poder popular, que tiene su fundamento en el control de cierto territorio social, político, económico, cultural y militar, y en la construcción de contrahegemonía.

El poder dual

La noción de poder popular remite a la de «doble poder» definida y debatida históricamente por los y las teóricos y dirigentes de las revoluciones socialistas, y que también ha sido profundizada

por el dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), de Argentina de los años 70, Mario Roberto Santucho, quien hablaba de la necesidad de un «doble poder» para que exista una situación revolucionaria. En su texto *Poder burgués y poder revolucionario* (1974), este teórico y dirigente, explicaba que la construcción de poderes locales revolucionarios implica el ejercicio popular del autogobierno, de la autogestión que encare colectiva, solidaria y autónomamente la resolución de todos los problemas y temas de la vida cotidiana, con lo cual daba enorme importancia a la construcción desde abajo del poder popular, pero «teniendo como objetivo central la construcción de sólidas fuerzas revolucionarias políticas y militares».

La construcción de poder popular o doble poder indicaba el dirigente, está indisolublemente ligada a una situación revolucionaria, la cual remiteía a los grados de descomposición de la burguesía y al poderío de las fuerzas del pueblo, con la existencia de un partido revolucionario. La disputa se manifiesta en el surgimiento de órganos y formas de poder revolucionario a nivel local y nacional, que coexisten en oposición al poder burgués. Pueden ocurrir insurrecciones parciales que establezcan el poder revolucionario en una región o en una provincia, como una zona liberada. Esto es inseparable del desarrollo de fuerzas armadas populares, por lo que puede haber zonas de guerrilla o en disputa para pasar después a bases de apoyo o áreas completamente liberadas, y extenderse nacionalmente hasta el momento de la insurrección general. Los órganos de poder popular no pueden subsistir sin una fuerza material que los respalde, sin un ejército revolucionario capaz de rechazar el ataque de las fuerzas armadas contrarrevolucionarias.

El dirigente alerta acerca de que estas fundamentales orientaciones del marxismo leninismo no deben ser tomadas como un esquema simplista, sino como un poderoso arsenal teórico resultado de decenas de años de experiencias, que debemos tener como punto

de referencia para la formulación de las líneas políticas, sin olvidar que cada revolución tiene sus particularidades y que el marxismo leninismo cobra vida y utilidad cuando es aplicado creativamente a la situación concreta de un proceso revolucionario determinado. Si esta advertencia es fundamental para quienes tienen responsabilidad de delinear estrategias político-militares revolucionarias, lo es mucho más para quienes tratamos de comprender y vislumbrar algunas tendencias de la historia.

El poder dual puede desarrollarse de forma desigual en los distintos puntos de un país; es decir, que surjan localmente formas y órganos de poder obrero y popular, permanentes o transitorios, coexistiendo con el poder capitalista, enfrentándolo constantemente bajo el formidable impulso de la movilización de masas y luego extenderse a nivel nacional.

En esa lucha popular, que siempre es desigual, decía el comandante Santucho, lo importante es la acumulación de fuerzas: que todas las que se dan en distintos tiempo y lugar y con fortaleza y alcance diferentes, den siempre por resultado un aumento de la vitalidad de todo el pueblo, que se vaya acumulando, hasta el momento que sea oportuno lanzar el ataque final, en todo el país y con todas las fuerzas disponibles, para llevar el triunfo de la revolución armada obrera y popular. Como él mismo advirtió, no intentemos aplicar este «esquema» de manera lineal para nuestra actualidad latinoamericana, con sus procesos reformistas y revoluciones pacíficas, tan diferente de aquella de los 70. Tomemos los conceptos fundamentales que nos sirvan para comprenderla.

El poder dual y sus órganos embrionarios de poder popular pueden desarrollarse sobre la base de una fuerza social política revolucionaria con su brazo militar, su vanguardia (tome la forma que tome bajo las distintas circunstancias y necesidades históricas), sus organizaciones de masas con disposición al combate y orientadas a la conciencia revolucionaria.

Ahora bien, intentando aplicar la teoría sin caer en esquematismos ni simplificaciones, ¿cómo podemos encarar el tema en los procesos actuales en buena parte de Latinoamérica en la que gobiernos populares, de distinto signo, emergen como resultado de la acumulación de fuerzas y luchas de los pueblos en un contexto en el que nuestras sociedades se encuentran divididas en fuerzas social-políticas que se enfrentan, y en las cuales esos gobiernos populares forman parte del bando que confronta al capital más concentrado y ligado a los intereses imperialistas, aunque, como veíamos, atravesados por intensas contradicciones internas que pueden hacer vacilar los resultados de los enfrentamientos principales?

El análisis de esta importante y extensa problemática amerita una profunda investigación científica. En este capítulo, sin ser exhaustivos en cuanto a pretender abarcar toda su complejidad, abordaremos algunos elementos para aproximarnos a la problemática de la construcción de poder popular, y, más que todo, abriremos nuevas preguntas que puedan ser tomadas y desentrañadas colectivamente por quienes estamos interesados en comprender y apoyar desde la lucha teórica o desde la praxis política los procesos revolucionarios en Nuestra América.

Teniendo en cuenta que debemos vislumbrar grados de construcción de poder popular, en el sentido de avances hacia una sociedad post capitalista o socialista, se trata de indagar sobre gérmenes o embriones de socialismo en estos territorios en los que se libra la lucha de los pueblos «desde abajo» y «desde arriba». Por eso hay que diferenciar algunas bellas experiencias aisladas, autogestionarias, de aquellos procesos integrales que, con matices y diversidades, implican el paso de la calidad a la cantidad y viceversa y, por lo tanto, constituyen el cambio social. Ya que, como explica Gramsci, calidad y cantidad son dos caras de la misma moneda. Un hermoso proyecto territorial o temático, pero sin posibilidad de extensión al resto de la sociedad —para

lo cual se necesita de los grandes medios de comunicación, las fuerzas del desarrollo de la industria motriz y energética, vías de transporte, entre otras,— no se puede lograr sin entablar la lucha general y por lo tanto disputar los grandes aparatos de dominio: El Estado, las Fuerzas Armadas, los medios de producción, transporte, tierras, recursos y bienes comunes naturales y energéticos.

Los conductores de los procesos de cambio han puesto de relieve el problema de la construcción de poder popular. Correa en una nota que le hizo Ignacio Ramonet (2013), decía que «no se trata de superar el neoliberalismo, se trata, sencillamente, de cambiar de sistema. Y ese cambio exige la modificación de la relación de poder. Ir hacia un poder popular». Evo Morales, en una entrevista realizada por el colectivo Amauta en 2008, sostenía:

Hay que recordar que el poder es del pueblo, no del gobierno del MAS ni de Evo Morales. Hemos llegado al gobierno, pero no tenemos el poder todavía. Estamos en un proceso en el cual hay que pensar cómo construir el poder del pueblo; yo creo en las fuerzas sociales». (Kohan y Hagman, 2008)

Y Chávez en su documento «Golpe de timón» (2012) cita una frase de István Mészáros, acerca del tema que nos ocupa:

[E]l patrón de medición de los logros socialistas es: hasta qué grado las medidas y políticas adoptadas contribuyen activamente a la constitución y consolidación bien arraigada de un modo sustancialmente democrático, de control social y autogestión general.

Los organismos políticos y económicos autogestionarios que se desarrollan en torno a las luchas populares en distintos lugares y tiempos van marcando una acumulación no solamente a nivel nacional, sino también regional. En lo político, conviviendo

con la lógica de la guerra política y la necesidad de un Estado Mayor (como hacíamos referencia en el capítulo pasado), y en lo económico, conviviendo con la conducción capitalista de importantes medios de producción. Esto último se evalúa como necesario para inyectar tecnología y capital para el desarrollo de fuerzas productivas que de otra manera dejarían de funcionar.

Por otra parte, citamos las tesis de Marx acerca de que

Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo nacen cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización. (2001)

La construcción del poder popular en Venezuela

Empecemos por aquel territorio que más destacamientos de vanguardia presenta en cuanto a la construcción de poder popular y gérmenes de socialismo, en la actualidad, más allá de la trágica situación en que intentan sumirla desde el imperio y sus empleados locales, gratuitos o a sueldo, que es Venezuela.

Una de las experiencias en este sentido que se implementaron desde que asumió Chávez como presidente (diciembre de 1998), fue la de la creación de gerencias comunitarias en las empresas públicas del agua, destinadas a lograr, con la participación de las comunidades organizadas, la gestión democrática en ellas. Mesas técnicas y consejos comunitarios evalúan, deciden, controlan y se organizan en cooperativas, para dar respuestas a los problemas, al tiempo que crean fuentes de trabajo digno. La

apropiación comunitaria de la decisión estratégica del sistema hidráulico de cuencas y distribución de aguas dibujó un camino que se iría ampliando en la Venezuela del nuevo milenio.

En el ámbito político se entablaron diferentes vías de participación y de implementación de las políticas públicas, amplificadas con el despliegue de las misiones. Sobre todo aquellas que, aún impulsadas por el gobierno como políticas de Estado, suponen la creación de una institucionalidad paralela que apuntaría a suprimir el viejo Estado y generar un nueva forma estatal socialista. Nos referimos a los Consejos Comunales y a las Comunas a que hemos hecho referencia en el capítulo sobre la Revolución bolivariana. También se desarrollan ámbitos de participación que se abren desde el partido de gobierno, como las Bases de Patrullas y Círculos de Luchas Populares y del Buen Vivir. Como describe Melisa Suárez (2015): «En Venezuela el proyecto socialista avanza hacia la construcción del Estado Comunal. Actualmente existen 45.327 Consejos Comunales y 1.389 Comunas registradas, siendo estas consideradas las células para la reconfiguración del territorio venezolano y parir el nuevo Estado».⁷¹

Las intenciones del gobierno chavista tendían a integrar a las diversas experiencias comunitarias y de organización social, que iban tomando en sus manos los asuntos de la comunidad, a estos Consejos Comunales como órganos del poder popular, de dirección colectiva del proceso revolucionario. Pero se han presentado dificultades permanentemente y también avances en los miles de Consejos Comunales que se han creado, y que, hemos visto, en octubre de 2012 el comandante consideraba totalmente insuficientes y estratégicamente importantes, ya que serían la prefiguración del Estado socialista.

71 La cantidad de comunas y consejos comunales continuó su crecimiento como los muestran los datos más actualizados en la nota 88 del epílogo de este libro.

Claramente la concepción de los Consejos Comunales y las Comunas como embriones de socialismo y como construcción de poder popular se refleja en la Ley Orgánica de Comunas (2012) que establece como su finalidad desarrollar y consolidar el Estado comunal como expresión del Poder Popular y soporte para la construcción de la sociedad socialista, conformar el autogobierno para el ejercicio directo de funciones en la formulación, ejecución y control de la gestión pública e impulsar el desarrollo y consolidación de la propiedad social (Lanz Rodríguez, 2012). Establece la propiedad social como base del modelo productivo socialista y la eliminación de la división social del trabajo. Se propone que el modelo productivo responda primordialmente a las necesidades humanas y esté menos subordinado a la reproducción del capital. El Estado comunal debe articular las diversas formas de propiedad presentes en la transición (estatal, mixta, privada, social, comunal), pero priorizando en cada contexto la economía comunal.

Estas y tantas otras leyes han conformado una base legítima y legal de superación de la alienación capitalista, orientada a la superación de la división social del trabajo, de las jerarquías, de la división entre el saber y el hacer, o trabajo manual y trabajo intelectual y de la apropiación privada del excedente, entre otros elementos.

Los enormes avances están plagados de dificultades, consecuencia de la tan arraigada cultura de competencia egoísta capitalista, que todas y todos llevamos dentro durante siglos. Chávez y los cuadros dirigentes eran y son perfectamente conscientes de que sin un crecimiento, integración, interconexión, extensión y profundización de las experiencias y elementos de poder popular, no hay transición al socialismo. Esta necesidad estratégica de desarrollo y extensión del modelo productivo socialista es expresada por Chávez en la idea de «punto y círculo»: un núcleo y su onda expansiva. Propone escoger puntos con desarrollo producti-

vo socialista y generar una red de impacto de más de veinte kilómetros a la redonda, desarrollando emprendimientos productivos complementarios entre industria y producción agrícola, injertando propiedad social asociada a pequeños productores de cada región. Pero resalta la importancia de «injertar» la propiedad social, y multiplicar estos puntos y círculos como una red que vaya como una gigantesca telaraña cubriendo el territorio de lo nuevo. «Si no fuera así, esto estaría condenado al fracaso; esto sería absorbido por el sistema viejo; se lo traga, es una gigantesca ameba, es un monstruo el capitalismo» (Chávez, 2012).

Esto se relaciona con lo que decíamos antes acerca de valiosas experiencias que se dan o terminan de manera aislada, y de esa forma no golpean al capitalismo que, por el contrario, las deglute, las absorbe o las deja ser como nichos aceptados que satisfacen determinadas necesidades de alguna porción de población. Como sucede, por ejemplo, con las comunidades hippies o comunales en Europa, y también aquí, que están circunscritas y conviven con todos los horrores del capitalismo, dejando librado al interés individual de aquellas y aquellos que tienen la posibilidad y la información necesaria para acercarse y vivir en esos bellos guetos. La única manera de que estas revoluciones pacíficas cambien la vida de los pueblos es ir extendiendo y multiplicando «como una red» estas experiencias.

Según estimaciones de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), que representa a los principales productores de Venezuela, el gobierno de Chávez en sus trece años de mandato, expropió 1.440 empresas, galpones y tierras. Los cinco sectores económicos donde hubo un mayor número de expropiaciones, según esa investigación, fueron: construcción, agroindustrial, petrolero, comercial y alimentario. Frente a esta realidad que seguramente los espanta, destacaron sin embargo como positivo que el gobierno fue responsable al pagar las expropiaciones (El Economista, 2013).

Pero la estatización o nacionalización, por sí sola, no dice nada sobre el avance de la producción socialista, y la modificación del trabajo alienado. No olvidemos que la ola privatizadora se dio con los gobiernos «democráticos» de los 90, y no durante las sangrientas dictaduras militares que los precedieron, que no tuvieron nada de populares. Ni tampoco por denominarlas «empresas o fábricas socialistas» se hacen socialistas. Más bien en ese documento, Golpe de timón, ya Hugo Chávez hacía esa distinción y una autocrítica.

En esa importante cantidad de expropiaciones se encuentra una rica historia en cada caso, pero todas a su manera, directa o indirectamente, son fruto de la lucha. Es el ejemplo de Vivex, empresa que fabrica vidrios parabrisas para la industria automotriz, ubicada en el estado de Anzoátegui, cuyos trabajadores mantuvieron ocupada la planta más de dos años, pidiendo su nacionalización.

En 2008 se habían producido importantes pasos en las expropiaciones, como la nacionalización de las cementeras Cemex, Holcim y Lafarge, de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), de la empresa Lácteos Los Andes, y del transporte interno de combustibles y de las minas de oro Las Cristinas. Pero en diciembre de ese año, el presidente Chávez expresamente convoca a los trabajadores a ocupar aquellas empresas que tenían problemas para pagarles salarios y beneficios.

Vivex se nacionaliza en junio de 2011. Las y los trabajadores conforman un Consejo de fábrica, no sin obstáculos de parte tanto de las empresas privadas como de funcionarios estaduales chavistas. Cuando lo quieren organizar, así como una estructura socialista de administración, las transnacionales automotrices a las cuales les venden su producción, no lo admiten y exigen el cumplimiento del código comercial de tener una estructura jerárquica y gerencial. Para lo cual las y los trabajadores arman una fachada formal para poder firmar los acuerdos comerciales, pero que debe

someter cada paso a la asamblea de los trabajadores, máximo organismo de poder y decisión de la fábrica. Se establece que la asamblea general tendrá el poder de elegir y revocar a los voceros del Consejo de fábrica, y que ninguno de estos puede tener un salario por encima del de un trabajador calificado aprobado en asamblea general.

En septiembre de 2010 se realiza en Caracas el Encuentro Nacional sobre Control Obrero y Modelo de Gestión Socialista de las empresas, organizado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE). Allí las y los trabajadores valoran como un enorme avance los procesos de nacionalización de las empresas, que impulsa la lucha de los trabajadores por organizarse, intentar tomar las riendas de sus empresas y constituir sindicatos y Consejos de trabajadores revolucionarios. Identificaban dos grandes problemas: uno, el aislamiento de estas empresas nacionalizadas en medio de una economía que sigue siendo capitalista (lo que se traduce en sabotaje económico por parte de los empresarios privados y los burocratas, y ausencia de un plan para vincular económica y políticamente a todas estas empresas y extender el control de los trabajadores al conjunto de la economía). Y dos, la existencia al frente de estas empresas de gerentes designados por el Estado que, en lugar de someterse a las decisiones de las asambleas de trabajadores —tal como había exigido en numerosas ocasiones el presidente Chávez— actúan al margen y contra la voluntad y necesidades del conjunto de los trabajadores, reproduciendo muchos de los métodos y prácticas de los viejos gerentes capitalistas. Incluso el burocratismo va penetrando en la actuación de algunos trabajadores que cumplen funciones directivas. Los delegados al Encuentro consideraron que el burocratismo constituye el más grave peligro para la revolución ya que siembra la desmoralización en las propias filas revolucionarias.

Los trabajadores toman y discuten las experiencias históricas de la Revolución rusa y de la organización de los Consejos de Trabajadores en Milán (Italia) en 1919 para aplicarlas a la Revolución venezolana. Discuten también cómo debe organizarse el control obrero vinculándose a los Consejos Comunales y el establecimiento de las Comunas Socialistas. Toman, al igual que distintos referentes revolucionarios del presente, como lo hace el presidente boliviano en diversas ocasiones, el lema inculcado desde el levantamiento zapatista de mandar obedeciendo. En este caso, obedeciendo a la asamblea de los trabajadores.

El presidente Chávez llama a una cogestión revolucionaria entre el Estado y los trabajadores, y ello se ve reflejado —en distintos grados en las diversas experiencias— con los destacamentos revolucionarios de los trabajadores, como aquellos enrolados en Freteco (Frente Revolucionario de Trabajadores de Empresas en Cogestión y Ocupadas), posicionándose a favor de una profundización del control obrero y un paulatino abandono de las gerencias estatales, pero aún reconociendo las fórmulas complejas que implementar en las administraciones que contemplen la productividad y eficacia que puedan asegurar condiciones de vida digna a los mismos trabajadores.

Otra experiencia importante es la de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz, en la cual los trabajadores atraviesan una intensa lucha, que incluso es reprimida por el gobernador chavista, luego de la cual, en abril de 2008, Chávez renacionaliza la empresa, propiedad de la multinacional ítalo-argentina Techint, y expulsa del gobierno al Ministro de Trabajo. Allí se intenta mediante la conformación de mesas de trabajo, la organización del control obrero de la fábrica.

Chávez daba gran impulso a la organización del control obrero, pero en sintonía con la gestión estatal, proponiendo la cogestión revolucionaria, que, como vimos, es criticada por las y los

trabajadores, por la «burocratización» de los gerentes estatales. Pero al mismo tiempo y, seguramente consciente de que era un proceso que iba a crecer plagado de contradicciones porque apunta al corazón del sistema capitalista, Chávez proponía fortalecer esas experiencias. Por ejemplo, en mayo de 2006 en su programa de TV, Aló, Presidente, realizado desde la expropiada Invepal (Industria Venezolana Endógena de Papel), presenta un modelo organizativo para las empresas en cogestión basado en la asamblea de trabajadores como máximo órgano de decisión, y coordinaciones y equipos de trabajo por áreas, con capacidad para elegir y revocar a sus voceros, supeditados a la asamblea general de trabajadores.

No casualmente los dos Encuentros Latinoamericanos de Empresas Recuperadas por Trabajadores se realizaron en Venezuela (en octubre de 2005 y junio de 2009). Las y los trabajadores que allí debaten son conscientes de la oportunidad histórica que vive América Latina, que ellos ayudaron y ayudan a construir, y expresan que es en Venezuela y en Bolivia donde se está construyendo socialismo, y que muchos gobiernos actuales no son los representantes de los intereses de las y los trabajadores, pero «se presenta una coyuntura favorable para construir propuestas, debatir y poner letra en los temas que nos interesan como trabajadores» (Convocatoria, 2009).

El 18 de marzo de 2013 se redacta el Manifiesto de los Colectivos y Movimientos de Trabajadoras y Trabajadores para el Pueblo Bolivariano en una asamblea realizada en la fábrica recuperadora de tubería petrolera para uso estructural, Kariña SA, en el estado de Anzoátegui, en el que se convoca al «I Congreso de Trabajadoras y Trabajadores: balance y desafíos del control obrero y los Consejos de trabajadores y trabajadoras en la construcción del socialismo» a realizarse en Ciudad Guayana en junio. Las y los trabajadores, conscientes de que dentro del proceso de

construcción del socialismo bolivariano persiste la estructura del Estado burgués, que mantiene un sector burocrático conspirador, aliado al capital multinacional, el cual ha arremetido contra los derechos de la clase trabajadora y en general contra la Patria, establecen claramente los senderos por los que tienen que avanzar en la extensión del control obrero y la construcción del socialismo y los grandes obstáculos y desafíos que enfrentan. Declaran todo su apoyo al presidente Nicolás Maduro, así como su profundo dolor por la muerte del gran comandante.

El proceso de estos embriones de socialismo en las fuerzas productivas presenta grandes dificultades, avances y retrocesos. Por ejemplo, en mayo de 2013, el presidente Nicolás Maduro reconoce el fracaso del control obrero en las empresas siderúrgicas de Guayana, en donde considera que «nunca existió ni control, ni obrero», dado que fue concebido «de manera voluntaria» y reconoce que empresas de tanta importancia para el país «deben dirigirse, conducirse correctamente para que sean productivas» (2013).

Se crean diferentes instancias de articulación entre las empresas expropiadas, nacionalizadas y creadas por los trabajadores y el Estado venezolano, como la Corporación de Industrias Intermedias, de Venezuela Sociedad Anónima (Corpivensa) que agrupa las diferentes fábricas de producción y distribución socialistas y que apunta a desarrollar la planificación estratégica integrada para impulsar la soberanía industrial y productiva del país, con independencia tecnológica, en el marco de la economía socialista a través del desarrollo y coordinación de las actividades industriales del Estado y de las empresas mixtas que operan en el sector manufacturero, en este caso no petrolero, para satisfacer las necesidades del pueblo y construir el nuevo aparato productivo socialista, en el marco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).

Otra de las aristas que irrita al imperialismo son los convenios que se establecen entre estas diversas empresas socialistas, de cooperación y transferencia tecnológica, con países como China, principal competidor del imperio, y el satanizado Irán. También se establecen importantes acuerdos con Argentina. Al igual que lo hacen Bolivia y Ecuador, orientan el intercambio hacia esos y otros países, como Vietnam.

El proceso se profundizó a partir del anuncio de Chávez, tras ganar por amplia mayoría las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, de que iba a nacionalizar empresas de «sectores estratégicos» como el petrolero, el eléctrico, el telefónico y el alimentario. Así, las nacionalizaciones en las diferentes formas que adoptan, son fruto de la decisión política de la construcción de modelos alternativos productivos orientados a la construcción del socialismo bolivariano. A diferencia de las experiencias en Argentina, tanto de nacionalizaciones como de empresas y fábricas recuperadas, que obedecen a problemas irresolubles por parte de las patronales (tal vez una excepción sea la renacionalización del sistema de jubilaciones y pensiones —Afip—), en Venezuela, aunque incluyen los casos de aquellas empresas que presentan problemas para afrontar su continuidad y cumplimiento de los acuerdos laborales y salariales, están orientadas también hacia empresas que se consideran estratégicas.

En el listado de nacionalizaciones efectuadas por el Gobierno venezolano se puede observar que muchas de esas empresas no son marginales, sino que afectan al corazón productivo de las diversas ramas (sólo a manera de ejemplo mencionamos las cementeras y Cargill). A las nacionalizaciones y expropiaciones hay que sumarles las empresas creadas por el Estado venezolano como la automotriz Venirauto (junto a capitales de Irán), la Venezolana de Industrias Tecnológicas (VIT), para la producción de las «computadoras bolivarianas» de capital mixto (60% chino y

40% venezolano, aunque con la aspiración de capacitarse para ser netamente venezolana), Venezolana de Telecomunicaciones C.A., Vtelca, empresa estatal de telefonía celular, también con la colaboración china, que posee 15%. Estas empresas persiguen la transferencia tecnológica de vanguardia, la independencia tecnológica y la promoción del software libre.

Continúan escuchándose variadas críticas y autocríticas del desmembramiento o falta de profundización de la coordinación nacional de este entramado productivo y el avance necesario sobre otras ramas, así como los obstáculos y contradicciones en muchas de estas empresas, algunas de las cuales trabajan varios años con pérdidas.⁷² Pero es innegable el avance hacia la socialización del complejo productivo en ese país, siempre —como decíamos en anteriores capítulos— teniendo en cuenta el escenario previo, que era el de un país de alta renta petrolera acumulada y disfrutada —o derrochada— por una reducida porción de población, mientras la inmensa mayoría estaba sumida en la miseria.

Según las definiciones de Nicolás Maduro (2013), en Venezuela existen tres grandes zonas económicas: una capitalista, que incluye un sector burgués que fomenta el sabotaje del país, pero también otros que están dispuestos a desarrollar las fuerzas productivas; una zona mixta, que ha nacido al calor de la Revolución, como las cooperativas y el capital mixto (en estas dos zonas es fundamental el papel del gobierno, con la Constitución, las leyes, para dirigir, para gobernar). La tercera gran zona es la socialista, donde hay varios grandes motores, como Cantv, las industrias básicas, la petrolera, la cementera, Corpoelect y otras empresas productivas del campo venezolano, agroindustria

72 Como el caso de Ferrominera, en 2013, que incluyó conflictos con los trabajadores por falta de pagos de salarios, dadas las pérdidas de la empresa que debía seguir abasteciendo a las fábricas socialistas de aluminio, acero y briqueteras para no parar la producción.

y otros conjuntos empresariales que se han impulsado bajo el plan de las 200 industrias socialistas del comandante Hugo Chávez.

Quedan por desarrollar otros casos y áreas, como la producción agrícola en la que se toma el desafío de pasar de la producción agrotóxica a la agroecológica, para lograr la soberanía alimentaria, como la expropiación de los campos de arroz, de empresas lácteas y otras, y la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista. Todos estos temas y desafíos sobre la forma de profundizar y continuar la construcción del poder popular y el socialismo en Venezuela están tratados en el documento «Plan de la Patria 2013-2019», escrito por el comandante Chávez en junio de 2012, que es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica. En este estratégico tema de la construcción de poder popular, el otro apasionante caso es el de Bolivia y aún hay otras valiosísimas experiencias, como las del MST en Brasil, al que hemos aludido en pasados capítulos, las de los municipios autónomos del EZLN, las de las fábricas recuperadas en Argentina, y las nacionalizaciones, al igual que en Uruguay. Para el caso ecuatoriano proponemos la lectura del Plan Nacional para el Buen Vivir.

Una mirada desde Bolivia

Visto desde su dimensión cultural, es innegable el cambio o revolución cultural en cada uno de los países con gobiernos progresistas. Más aún en los casos que toman la delantera en sus horizontes de transformación: Venezuela, Bolivia y Ecuador. En este último encontramos un lenguaje un poco más moderado, más «ciudadano». En sus documentos de Estado, de su Revolución Ciudadana, se habla menos de socialismo, y no se cita a los fundadores y continuadores del marxismo tan seguidamente como se hace abierta y ampliamente en Vene-

zuela, en todos los ámbitos de gobierno y sus programas, documentos y proclamas. Desde el mismo comandante Chávez hasta sus colaboradores y continuadores y en las herramientas políticas que los sustentan, en todas ellas el lenguaje es el de la Revolución.

En el caso boliviano, como mencionamos en el Capítulo VII, es drástico el cambio cultural en cuanto a los avances en la descolonización del pensamiento y su traducción en la ocupación de espacios de poder. Es muy claro el lenguaje marxista desde la Vicepresidencia y sus seminarios, y ha tomado nuevo impulso con el «Manifiesto de Isla del Sol» (Morales, 2012).

Para García Linera, la construcción de poder popular en el proceso boliviano comienza desde lo que denomina, siguiendo a Gramsci, «empate catastrófico» que se instalaría a partir de 2003, cuando los pueblos en lucha logran presencia y disputa territorial de la autoridad política en determinados territorios, el régimen de asambleas barriales, de asambleas agrarias y comunitarias; cuando la fuerza de dominación del gobierno y del Estado inicia un repliegue fragmentado de su autoridad y del gobierno, y la sociedad comienza a construir mecanismos alternativos de legitimidad, de deliberación y de toma de decisiones. Comienzan a disputarse en la sociedad boliviana, según el vicepresidente, dos proyectos de poder: el dominante y el emergente. Se constituye en una dualidad de poderes, ya que no dura unos días o un mes, como algunos enfrentamientos puntuales, sino que se prolonga por más de dos años. Es la crisis del Estado que se profundiza con lo que define como el momento de la sustitución de las élites, cuando, en el año 2006, Evo Morales asume la presidencia en un bloque que unificó los movimientos sociales, que preselecciónó comunitaria y asambleariamente a los representantes para ir al Congreso, y logra la victoria con 54% de los votos (García Linera, 2011).

Esta fuerza social-política antineoliberal conquista el gobierno, que no es el Estado. Pero es en el Estado donde se disputa una nueva correlación de fuerzas y la maquinaria estatal sirve de instrumento a las fuerzas populares.

Los procesos de nacionalización de los hidrocarburos, de la nueva Constitución y de la Asamblea Constituyente, de la nacionalización de las telecomunicaciones y de otras empresas públicas, para García Linera van a comenzar a darle una base material duradera a lo que inicialmente había sido un proceso de insurgencia y de movilización social.

Los grados de avance en la construcción de poder popular estarían dados por los procesos de descolonización política, cultural y también económica; resaltando que en Bolivia, al igual que en el resto de Nuestra América, los procesos de liberación social necesitan la liberación nacional, antiimperialista y anticolonialista. La clave para la independencia económica estaría en el necesario fortalecimiento del Estado, por encima de las multinacionales y los latifundios para potenciar a la comunidad campesina y al pequeño propietario. En principio, esto parecería contraponerse a las posiciones de Rafael Correa con respecto a la pequeña explotación agrícola que tratamos en el capítulo pasado. Pero probablemente tenga que ver con un reclamo central del movimiento que constituye el núcleo duro de la Revolución cultural y democrática boliviana: el campesinado.

Para el Vicepresidente, el poder dual vuelca la balanza a favor de la fuerza social-política popular en el enfrentamiento de 2008, al cual denomina como el punto de bifurcación o momento de confrontación desnuda, de medición de fuerzas, donde se dirime si se sigue hacia adelante o se retrocede, que se da en todos los procesos revolucionarios. Como trabajamos en el capítulo anterior, esta confrontación concluye con la victoria electoral, militar y política popular que cerrará el ciclo de la crisis estatal en Bolivia en 2008.

Allí se profundiza el poder popular y se encamina a la construcción del socialismo, con una fuerte apuesta por la liberación nacional, en primer término. Es decir, se prioriza la Revolución democrática y cultural, el fomento de la participación y protagonismo popular, la nacionalización de áreas estratégicas de la economía y el fortalecimiento del Estado, para redistribuir la riqueza y paliar siglos de pobreza y miseria.

Además, dentro de su orientación anticapitalista, se considera que un gobierno no construye socialismo; este es una obra de las masas, de las organizaciones, de los trabajadores.

El estado de transición hacia otra sociedad anticapitalista debe utilizar los medios capitalistas para la construcción de la base material del socialismo, y para ello García Linera (2012) se apoya en Lenin cuando indica que mientras el sistema de transporte y la gran industria siga en manos del proletariado, las concesiones a empresarios no son un peligro para el socialismo; al contrario, el desarrollo del capitalismo controlado y regulado por el Estado proletario es ventajoso y necesario dentro de ciertos límites —en un país atrasado, de pequeños campesinos extraordinariamente arruinados— porque puede acelerar el restablecimiento inmediato de la agricultura y el abastecimiento de las ciudades. Así, el Estado debe controlar, regular e ir absorbiendo las tecnologías, conocimientos y recursos para poder prescindir de esos capitales; es decir, cortar la dependencia.

Pero mientras tanto, asegura el Vicepresidente, se puede y se debe ir desmercantilizando selectivamente otras áreas de la economía, ciertas áreas básicas imprescindibles de la población en las que el Estado debe intervenir para introducir, no la lógica del valor de cambio si no la del valor de uso, de la utilidad, en el sentido marxista del término. Explica García Linera que eso es lo que están haciendo en Bolivia y esa posibilidad la da un Estado revolucionario y progresista. Estos elementos constituirían

pequeños hilos o gotitas de socialismo, de distribución y de justicia social que comienzan a deslizarse por la vida cotidiana. Esta revolución pacífica, cultural y democrática, que se plantea un horizonte socialista pero no en lo inmediato, va perforando la lógica del mercado que hace unos años nos vendían como invencible, todopoderosa y omnipresente.

Al contrario de lo que sostienen algunas organizaciones sociales, para el gobierno boliviano el cambio del posneoliberalismo al poscapitalismo pasaría por los crecientes márgenes de control y de excedente que pueda tener el Estado, para avanzar en actividades no mercantiles (de producción motivada por el valor de uso), para luego poder dar un paso más allá transformando la propiedad estatal en propiedad pública; es decir que ese control estatal gradualmente vaya pasando hacia la administración comunitaria de los bienes públicos. Pero la clave, en este tránsito, en este proceso de comunitarización, de socialización de la propiedad y de la administración de bienes públicos, estaría en la democratización del Estado.

Por último, el Vicepresidente expone la cuestión crucial y determinante: será la lucha, solamente la lucha, la que defina si el posneoliberalismo se quedará en una nueva forma de gestión más democrática y más amigable del capitalismo, o se convertirá en una transición hacia el socialismo, es decir hacia un nuevo modo de producción.

En el «Manifiesto de la Isla del Sol», de finales de 2012, Evo Morales propone refundar la democracia y el Estado y «empoderar» a los pobres (aunque este término no nos gusta, es un neologismo de raíz yanqui impuesto en nuestro lenguaje cotidiano, por las ONG). Ello implica pasar de la democracia representativa, en la que el poder está al servicio de los intereses de las élites y minorías, a la democracia comunal donde no existen mayorías ni minorías, sino más bien las decisiones se toman por consenso, y

donde se impone la razón y no el voto. El pueblo, por intermedio de sus organizaciones sociales y comunitarias, debe tomar el poder político construyendo nuevas formas estatales plurinacionales para el autogobierno de las masas, en el marco del «mandar obedeciendo».

Este reciente Manifiesto constituye una profunda y realista crítica a la brutalidad del capital y el imperialismo, y una máxima de orientaciones generales para la construcción del «buen vivir».

En lo económico, pone el acento en la redistribución de la riqueza y en la concentración de ingresos en el Estado, como vehículo de esa redistribución y para la industrialización, para lo cual las nacionalizaciones son estratégicas. No es un manifiesto comunista, no se avanza sobre el cuestionamiento general a la propiedad privada sobre los medios de producción, salvo en algunas áreas consideradas estratégicas: recursos naturales y servicios públicos; como sí se hace, en mayor medida, en Venezuela, ampliando el radio de lo que se considera estratégico hacia diversas ramas. Aunque también conviviendo con el gran, mediano y pequeño capital privado.

Nos hemos referido en capítulos anteriores al desarrollo de algunos ámbitos de participación y control popular en las instituciones de gobierno boliviano. Por otra parte, la presencia, desde las luchas antineoliberales, del entramado organizativo y participativo de las comunidades y ayllus, contribuye a implantar la cultura de la participación popular. Los ayllus son unidades productivas rurales basadas en la reciprocidad, cuyas autoridades, «jilicatas» o tenientes gobernadores, y «mallkus», son elegidas por las y los pobladores en asambleas comunales, y respetadas por todos y todas. Esta auto-organización se reproduce en las ciudades a las que emigran.

Las experiencias de autogestión de servicios públicos y algunos avances del control comunitario y gestión obrera constituyen

intentos, con sus avances y retrocesos, dificultades y éxitos, de afianzar la construcción de poder popular. El control estatal sobre uno de los ejes productivos e históricos fundamentales de Bolivia como son las minas, la refundación de Comibol (Corporación Minera de Bolivia) y sus proyectos mineros (Huanuni, Corocoro, Eucaliptus, Planta Piloto del Litio, entre otros), como también la nacionalización de los aeropuertos, de la producción de energía eléctrica, además de la de los hidrocarburos, y aquellos mencionados en el Capítulo VII, tributan a la soberanía boliviana que, en manos de la fuerza social-política que conduce el proceso se traduce en mejoras objetivas para los pueblos.

Según relata García Linera en la conferencia antes citada, Huanuni es una mina de estaño muy antigua y muy rica, que ha sido estatizada. El movimiento obrero minero, que tiene una gran experiencia organizativa —aunque la propiedad es del Estado— rápidamente ha asumido el control de la gestión, el nombramiento del gerente y de los ingenieros, la regulación tras inversiones y la fijación de salarios. Para el Vicepresidente, es el ejemplo más avanzado en Bolivia de autogestión obrera con un sentido revolucionario.

¿Son los procesos de construcción de poder popular germen de una sociedad socialista?

Dedicaremos unas palabras a la constitución de fuerza material como retaguardia de estos procesos de transformación, un elemento determinante en estos procesos nacionales, según las definiciones de la construcción de poder popular que proponíamos al principio; tanto el indispensable quiebre de las fuerzas armadas institucionales, ganando su apoyo a los procesos de cambio, o dispersando a los cuadros militares orgánicos de la clase dominante, como otras vías de organización militar popular que puedan gestarse.

En Venezuela, la propia Revolución Bolivariana emerge de las entrañas del ejército, y se puede observar en la actualidad un ali-

neamiento y compromiso con la defensa de la democracia y el firme acompañamiento de las Fuerzas Armadas (FF AA) al gobierno popular frente a los embates de las oligarquías. El intento de golpe de Estado de abril de 2002 no pudo consolidarse no sólo por la movilización popular, sino por la de una parte de las FF AA en apoyo del presidente constitucional cautivo, aunque una pequeña parte de la institución participó de ese golpe contra Chávez. Lo mismo sucedió en Ecuador, en 2010, ejemplificado en el comando del ejército que rescató a Correa, también secuestrado.

En 2008 se aprueba la nueva Ley Orgánica de la FAN en la cual se agrega el nombre de Bolivariana y a lo largo del proceso venezolano queda en evidencia la unidad cívico-militar sobre la que se apoya la Revolución. Como señala Julián Fernández, «la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) atraviesa una significativa transformación, mediante la cual Chávez le quitó al imperialismo y la burguesía local su hegemonía sobre el brazo armado estatal». El autor pone de manifiesto el viraje en el nuevo pensamiento militar venezolano: desde el anticomunismo al antiimperialismo; al tiempo que destaca a la Milicia Bolivariana como una herramienta «para consolidar la independencia, vinculada orgánicamente al avance del Estado Comunal y de un nuevo bloque histórico» con la conciencia plena de que «un pueblo organizado y en armas es una amenaza para el orden burgués» (Fernández, 2015: 186, 180 y 181). También, en 2013, sería anunciada, por el presidente Maduro, recogiendo una iniciativa de los trabajadores organizados, la creación de la Milicia Obrera.

En Bolivia, desde el gobierno, han implementado una política militar para adecuar las fuerzas armadas institucionales al proyecto de país. Se ha incorporado y promocionado a crecientes porciones de población indígena y mestiza y los nuevos cuadros de conducción muestran, explícitamente, su apoyo al gobierno. «Tenemos que ser anticolonialistas, antiimperialistas y anticapita-

listas porque [se] ha hecho mucho daño» declaraba el excomandante del Ejército Tito Gendarillas, aduciendo que heredaba y tomaba esa postura establecida por su antecesor, quien en 2010 declaraba al ejército como socialista, antiimperialista y anticapitalista. Y más concreto y estratégico fue el apoyo de las fuerzas armadas al gobierno boliviano frente a los intentos golpistas de la «Media Luna», en 2008. Según García Linera (2010) hubo en aquel momento un desplazamiento militar en coordinación con los movimientos sociales. Una experiencia extraordinaria, no muy común entre las Fuerzas Armadas y movimientos sociales, en una acción envolvente para aislar los núcleos de rebelión y de golpistas. Igualmente, las últimas e inéditas movilizaciones de los cuadros intermedios de las fuerzas armadas bolivianas muestran demandas democratizantes.

Hemos revisado, sin demasiada sistematicidad, algunos elementos que atañen a la construcción de poder popular y de gémenes de socialismo. Pero este tema tan estratégico amerita investigaciones científicas profundas que rebasen los objetivos y deseos plasmados en proyectos, planes, documentos y constituciones, incluso rebasando la mirada de los propios protagonistas, para analizar concreta y empíricamente cómo se han desarrollado estos procesos de construcción de poder popular en Nuestra América, sus contradicciones y formas de superarlas o no, sus matices y diferencias que nos marquen distintos caminos hacia la socialización de las relaciones humanas en un contexto de guerra política que nos impone el capital concentrado. Quedan muchos elementos que ni siquiera hemos llegado a esbozar, al igual que riquísimas experiencias concretas que no mencionamos. Preguntas que apuntan a desentrañar las contradicciones burguesas, sus grados de dispersión o rearme en los nuevos escenarios, el alcance o estancamiento en la construcción de fuerzas revolucionarias que puedan acaudillar el giro de estos procesos de cambios,

los grados de conformación de organizaciones de masas con disposición al combate, son algunos de otros tantos temas que se abren.

Aquí, más bien, nos orientamos a esbozar una reflexión general de lo estudiado en estos procesos latinoamericanos y las experiencias históricas. Partimos de la concepción dinámica para la construcción de los nuevos socialismos que nos ofrece Álvaro García Linera:

El socialismo no es una nueva civilización, no es una nueva economía, una nueva sociedad, es un campo de batalla entre lo nuevo y lo viejo, entre el capitalismo dominante, predominante y un comunitarismo insurgente. Es la vieja economía capitalista aún mayoritaria gradualmente asediada por las nuevas economías comunitarias nacientes; es la lucha entre el viejo Estado que monopoliza decisiones de la burocracia y un nuevo Estado que cada vez democratiza más decisiones en comunidades, en movimientos sociales, en la sociedad civil. (Vicepresidencia de Bolivia, 2015)

En términos generales, a partir del ascenso de los gobiernos progresistas y de izquierda en Nuestra América se han ido experimentando y profundizando experiencias de formas colectivas o cooperativas de propiedad todavía reducidas o localizadas en sectores marginales de distintas ramas de la producción, o en experiencias comunales en el campo. Se ha avanzado en la recuperación estatal, sobre todo en la administración de los recursos energéticos y servicios públicos, con la continuidad de propiedad privada en los núcleos centrales de producción. Sin embargo, en aquellos países que constituyen los destacamentos más avanzados, sobre todo en Venezuela, podemos confirmar la existencia de un camino recorrido en el proceso de construc-

ción de poder popular, en un contexto histórico muy diferente del que enmarcaba la definición del comandante Santucho; por ahora por las vías pacíficas, no sin sus obstáculos y contradicciones y los permanentes acechos del enemigo, pero ese poder dual que se ha establecido no será tan fácil deshacer o hacer retroceder aun perdiendo elecciones.

Pero ¿los procesos de construcción de poder popular son germen de una sociedad socialista? Es muy complejo contestar con exactitud qué grado de construcción alcanza el socialismo en esos países que conforman la avanzada. Sólo podemos decir que hay una orientación general de avanzar en esa dirección y se están injertando gérmenes o embriones de este. Incluso en Venezuela, donde se muestran más avances, Chávez advertía en el segundo Plan de la Patria: «No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros».

Pero como se definía más arriba, el poder dual se va desarrollando de forma desigual en los distintos puntos en los que surgen localmente formas y órganos de poder obrero y popular, permanente o transitorio, coexistiendo con el poder capitalista, enfrentándolo constantemente bajo el formidable impulso de la movilización de masas. Y aquí está la clave, no hay coexistencia pacífica con el capital que sea duradera. El acecho al avance de los pueblos es permanente, se ha agudizado en los últimos años y probablemente lo hará más. El impulso de la movilización de masas será la palanca del cambio, o el cambio no será.

X. Tensiones en el proyecto emancipador nuestroamericano

En el capítulo anterior hemos intentado reflexionar acerca de los avances concretos en aquellas sociedades que se proponen la construcción del socialismo; a tal fin, analizamos y reflexionamos sobre algunas experiencias y ejemplos de construcción de poder popular. En el presente proponemos reflexionar, de manera más general, acerca de la caracterización de los procesos de cambio, sus tiempos y condiciones, los proyectos de sociedad que están en juego, en transición y en pugna, de las propias construcciones y de los debates que se originan al calor de este intenso momento en Nuestra América. Comencemos estableciendo nuevamente que cualquier proyecto o tentativa que plantea el cambio social debe ser analizado en el contexto —que explicamos en el Capítulo II— de un capitalismo que aun cuando se desarrolla y expande, pareciera haber entrado en una fase de descomposición.

Mapa político suramericano

Retomando y resumiendo, entonces, el mapa político suramericano, este aparece hoy dividido en tres campos, con algunas nebulosas:

En primer lugar, países moderados con proyectos nacionalistas, con algunos elementos de antiimperialismo, de profundización democrática de las instituciones, de las leyes y reconocimiento avanzado de derechos políticos, culturales, de género y económicos; en otras palabras, de ampliación de la ciudadanía aunque con importantes limitaciones y algunos retrocesos. Distintos analistas los describen o bien como de «reformismo burgués» (proyecto de país

independiente y soberano con redistribución de la riqueza dentro del capitalismo), o como «neodesarrollismos». Nosotros los hemos definido como «segundo anillo progresista».

En segundo lugar, proyectos que, además de todos los avances de este primer grupo de países, manifiestan intenciones de avanzar en la senda del anticapitalismo, ensayando vías, con grandes avances y retrocesos, con numerosos obstáculos internos y externos, pero experimentando y debatiendo mejores caminos para la humanidad. A este grupo de países lo hemos definido como el «núcleo duro bolivariano».

La importancia geopolítica de los primeros como colchón y sostén de los segundos y de Cuba queda plasmada frente al tercer y antagónico grupo, expresado en la gran burguesía, en las derechas de los gobiernos y en las oposiciones, que intentan rearmarse y que, a nivel regional, que conforman la nueva Alca: la Alianza del Pacífico.⁷³

En los dos primeros grupos de países, los gobiernos populares de distinto signo emergieron como resultado de la acumulación de fuerzas y luchas de los pueblos durante el proceso de resistencia a los programas y políticas de Estado neoliberales de los 90. Los gobiernos del giro político latinoamericano de la primera década del nuevo milenio expresan no solamente esa fuerza social política (alianza de distintas fracciones de distintas clases sociales) sino también realizan sus metas que, fundamentalmente, tuvieron un contenido democrático, nacional y popular. De esa manera, han logrado constituir nuevos bloques históricos con grados de hegemonía, siempre en disputa,

73 La valoración del rol geopolítico de los países del segundo anillo progresista en tanto escudo defensor del núcleo duro bolivariano, queda demostrado, por contraste, con las primeras palabras del nuevo presidente de derecha en Argentina, Mauricio Macri, condenando la Revolución bolivariana de Venezuela. Esta valoración no ha sido compartida por una parte de la izquierda latinoamericana, que ha despreciado el papel de protección que desempeña este segundo anillo progresista.

pero logrando cierta estabilidad hasta la actualidad, superando intensos momentos de enfrentamiento social en los que los desplazados cuadros políticos de las oligarquías intentaron retomar su pérdida de iniciativa.

Venezuela se ha constituido como vanguardia en el giro político latinoamericano de los 2000, en tanto el proceso de reformas comienza cuando asume la presidencia Hugo Chávez en febrero de 1999 (casi siete años antes de que en Bolivia asumiera el gobierno popular y ocho antes que en Ecuador), y por la profundidad de los cambios experimentados.⁷⁴

De la mano de estos procesos retornan las mismas preguntas que se reactualizan en cada oleada histórica de ascenso de las luchas populares. Entre ellas, la más abarcadora remite a si hay condiciones para superar el capitalismo y profundizar el camino revolucionario o se debe y puede reconstituir países independientes con desarrollo capitalista inclusivo o redistributivo, en el marco de una fase en que el sistema, a la vez que se ha transnacionalizado completamente, ha entrado en su descomposición, lo cual —como hemos analizado— no significa su inminente final.

Ahora bien, para transitar la senda del anticapitalismo se necesita avanzar sincrónicamente al menos en tres elementos fundamentales: 1) en la construcción de ámbitos de poder popular; 2) en la superación de las relaciones sociales de producción basadas en la propiedad privada de los medios de producción; y 3) en la formación política y de conciencia de las masas trabajadoras.

74 Para los análisis que aquí emprendemos, nos hemos basado principalmente en los documentos «Golpe de timón» (Chávez, 2012) y el «Programa del candidato de la Patria. comandante Hugo Chávez» (Plan de la Patria, 2012). Ambos abordan aquellos elementos que deben transformarse en el movimiento orgánico de la sociedad venezolana para la construcción del socialismo, y deja planteado cuáles pasos deben realizarse para tornar irreversible el proceso. De Bolivia hemos tomado varios de los discursos, entrevistas o publicaciones del presidente Evo Morales (2012; 2015) y del vicepresidente Álvaro García Linera (2015).

ras y populares. Tres aspectos dialécticamente concatenados que se sustentan y potencian mutuamente.

El primer aspecto, acerca de los grados de construcción de poder popular, de la entrada a la «lucha desde arriba» al gobierno del Estado y la disputa del poder, por parte de esa fuerza social de protesta gestada contra las políticas de la oligarquía financiera, lo hemos analizado en el capítulo anterior, como proceso que ha mostrado avances, pero que no llega todavía al momento en el cual la cantidad se transforma en calidad, sino que aún se encuentra en su fase de acumulación y transición.

Veamos entonces los otros aspectos.

Propiedad privada o propiedad social.

Los caminos de la soberanía

En Venezuela y en Bolivia los gobiernos han expresado, a través de sus máximos representantes, que son conscientes de que para trascender la lógica del capital es determinante el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos (Chávez, 2012), o, en otras palabras, que para pasar del posneoliberalismo que se comienza a transitar, hacia un tipo de poscapitalismo se debe ir a la conversión de la propiedad estatal en propiedad pública y de la propiedad comunal local en propiedad comunal universal, Según García Linera (2012), en ese esquema está anidado el potencial comunista, socialista, poscapitalista de lo que hoy se viene haciendo en América Latina.

Pero ese tránsito o desarrollo no supone que están dadas las condiciones en Nuestra América para acabar con las relaciones capitalistas de producción y propiedad. Así se reconoce en la Agenda Patriótica boliviana para 2025, aunque plantean un desarrollo «sin la dictadura del mercado capitalista». En concreto, se proponen avanzar sobre ella con otras relaciones, democratizar la economía en sus diversos medios y factores de producción, mediante una fór-

mula de economía mixta. Se promueve la construcción de una economía plural articulando los sectores público, privado, cooperativo, comunitario y mixto (Morales, 2015). Y se proponen nacionalizar y estatizar todos los recursos naturales y estratégicos para ese año.

Como expresaba el comandante Hugo Chávez en el importante documento Golpe de timón, los venezolanos no quieren permanecer en el ámbito del capitalismo, y se proponen construir y cimentar las bases del socialismo bolivariano del siglo XXI «para desmontar el inhumano, depredador y belicista sistema de acumulación capitalista».

El avance del control estatal (con el gobierno del Estado en manos de una fuerza social-política de carácter popular) mediante nacionalizaciones, estatizaciones, ocupaciones de empresas⁷⁵ y expropiaciones (o reapropiaciones) de recursos naturales y estratégicos en general, de empresas de servicios públicos, así como la creación de nuevas empresas estatales, constituyen la base material para el logro de grados de soberanía y autodeterminación.

Por otra parte, las conquistas populares en materia de derechos se plasman en las nuevas constituciones, sobre todo de Bolivia y Ecuador, pero también Venezuela, en las que se ha adoptado la concepción del Buen Vivir como un horizonte alternativo al capitalismo y a la modernidad que permite una ruptura epistemológica con la concepción de desarrollo mantenida hasta el momento. En estas constituciones se legitima y legaliza el reconocimiento de la perspectiva de género, la recuperación del papel de la mujer en la sociedad, de la historia de los de abajo, de las clases subordinadas y sus luchas, así como el de los pueblos originarios con todos sus derechos, y de las y los trabajadores y pueblo en general y la incorporación de nuestra madre tierra, nuestro plane-

75 Respecto de la recuperación de empresas privadas por parte de las y los trabajadores en Bolivia, al igual que en Argentina, Uruguay y otros países, si bien no hay un impulso específico, contundente y declarado por parte de los gobiernos hacia las ocupaciones (como sí lo hizo Chávez en Venezuela), hay un apoyo gubernamental concreto una vez que las y los trabajadores avanzan en esa dirección.

ta —nuestra sustancia— como sujeto de derecho. Dichos avances no exceden aún, no pueden exceder aún, el marco capitalista.

Sin embargo, como ya hemos visto, Venezuela (como también Bolivia y Ecuador) no carece de enormes obstáculos internos y externos al proceso revolucionario. Son las tensiones de los procesos de cambio, algunas creativas, como en el caso de Bolivia, que permiten avanzar en la medida en que sean resueltas, y otras más destructivas y peligrosas para nuestros procesos.

En el caso venezolano existen disputas dentro del gobierno, entre los sectores que se inclinan por continuar con reformas sociales y económicas en la senda de un desarrollo capitalista con mayor bienestar social y redistribución del ingreso, y los que consideran que hay condiciones para profundizar los cambios revolucionarios. La tensión entre la liberación nacional y social, entre la lucha antiimperialista y anticapitalista, los tiempos de la dialéctica entre reforma y revolución, constituyen debates siempre retomados en los procesos de cambio a favor de los pueblos⁷⁶ y remiten a las nuevas contradicciones que se van generando en el campo popular.

Si bien todos los gobiernos del giro político latinoamericano, tanto moderados como revolucionarios, pueden caracterizarse, con matices, como gobiernos en disputa, el eje de esta cambia.

76 Decimos cambios «a favor de los pueblos», dado que la noción de cambio social históricamente se ha adjudicado a proyectos revolucionarios anticapitalistas. Sin embargo, también históricamente los intelectuales orgánicos de las clases dominantes arrebatan a los pueblos y a las organizaciones populares nuestros términos y construcciones conceptuales y simbólicas para sembrar confusión en las masas y pescar en río revuelto. Intentan absorber nuestras experiencias y los términos conceptuales que sintetizan largos años de luchas. En palabras de Álvaro García Linera constituyen formas graduales de subsunción real de los usos simbólicos al propio capital (Klachko, 2015). De esa manera, en estos últimos tiempos las fuerzas conservadoras y de derecha vienen utilizando la noción de «cambio», pues quieren cambiar regresivamente lo avanzado en relación con los intereses populares. Por eso, la creatividad popular debe estar siempre muy fresca y dispuesta a renovarse: hay que disputar la semántica, la memoria y los proyectos, saliendo de consignas y conceptos que, pensamos, nos pertenecían de una vez y para siempre a los pueblos.

En los más moderados del segundo anillo progresista —Argentina, Brasil, Uruguay— el proyecto de un capitalismo nacional no está en discusión. Por el contrario, parece transitarse por un momento defensivo de estos proyectos centrados en la reconstitución de amplios grados de soberanía nacional.

Encontramos otro horizonte, en cambio, en aquellos que forman parte del núcleo duro, que se plantean importantes reformas y que, aún situadas dentro del capitalismo, se plantean construir la transición al socialismo, mediante una estrategia gradual de economía plural —como la definen en Bolivia— que avanza en la socialización de la propiedad privada y la riqueza, admitiendo, también, la iniciativa e inversión privadas, pero apoyando e incentivando la economía cooperativa, comunitaria y social, y, por sobre todo, con la reapropiación por parte del Estado de los recursos estratégicos del desarrollo, como base material de los proyectos de emancipación nacional.

Estas experiencias, que se realizan con características de una transición pacífica, gradual, democrática, institucional, a través de elecciones, lo cual, junto con las concretas correlaciones de fuerza en cada situación, dificultan la inmediata y masiva expropiación, tal como se ha dado en otros procesos revolucionarios en la historia. Pero si bien no se atenta contra la propiedad privada en su conjunto, el avance en el control de los recursos estratégicos y la construcción de ámbitos de poder popular constituyen pasos en dicha transición que sitúan a las naciones en mejores condiciones, y preparan mejor el terreno para salir del capitalismo. Lo que, como ya reconocían los y las revolucionarios del pasado, sólo puede darse trascendiendo las fronteras nacionales y atacando los núcleos del poder capitalista a escala mundial.

Cada uno de los aspectos que podamos analizar en relación con los pasos concretos en dirección al socialismo estarán teñidos

del omnipresente problema —siempre evocado— de la real imposibilidad de construir el «socialismo en un sólo país», es decir, la imposibilidad de construir relaciones realmente libertarias bajo el acecho cultural, económico, político y militar del capital. De hecho nos atreveríamos a decir que hoy en día es casi imposible construir el «progresismo en un sólo país».

Lo que cuenta, en todo caso, es cómo llegar mejor preparados a esa batalla decisiva, teniendo en cuenta que el capitalismo como sistema global se encuentra en su fase de descomposición en sentido histórico y de largo plazo, y que la supervivencia de la humanidad depende de que de esa descomposición pueda emerger el socialismo y no la barbarie.

En ese sentido ¿cómo se caracterizan estas experiencias?

¿Capitalismo de Estado o estados de transición?

Si hay algo que define a los gobiernos progresistas y al nuevo rumbo que ha tomado gran parte de América Latina es la soberanía que se ha adquirido frente al imperialismo. Las nacionalizaciones de empresas estratégicas, sobre todo en aquellos países que más han avanzado en este sentido, constituyen la base material de esta soberanía y la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos.

Varios autores de la academia y referentes de algunas corrientes políticas de izquierda no consideran que esté en juego la construcción del socialismo en ninguno de estos países. Es el caso, por ejemplo, del exconstituyente y actual opositor boliviano Raúl Prada Alcoreza o el trotskista Guillermo Almeyra respecto de Bolivia, para quienes la tendencia al capitalismo de Estado es lo que prima. En palabras de este último, lo que habría en Bolivia no es un socialismo comunitario sino un régimen burgués sin burgue-

sía que lo respalde.⁷⁷ Un capitalismo de Estado, neodesarrollista y extractivista.

Sin embargo, Álvaro García Linera ha respondido a estos opositores, en reiteradas ocasiones, negando el carácter de la transición boliviana como de capitalismo de Estado, en tanto los excedentes se utilizan para necesidades sociales, y por ello constituirían valores de uso. Esta consideración podemos extenderla para los casos de los otros dos países que constituyen ese núcleo duro del cambio de época en Nuestra América: Ecuador y Venezuela. Se trataría de centralizar los recursos provenientes de las nacionalizaciones y de las empresas del Estado y crear una base industrial en el campo de los hidrocarburos, la minería, la agricultura y la electricidad, de manera de generar una riqueza sostenida y de utilizar los recursos del país para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tanto en la ciudad como en el campo.

También, como ya analizamos, ha habido algunos avances en ese sentido en los casos del segundo anillo progresista.

En el caso del núcleo duro, aunque ello no atente contra todas las relaciones sociales de producción basadas en la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo humano, constituye un paso en ese sentido, ya que, como cita Marta Harnecker que señala Lenin, «el socialismo "no es más que el monopolio capitalista de Estado puesto al servicio de todo el pueblo", y por ello deja de ser monopolio capitalista» (Lenin, 1917).

El Estado, continúa el Vicepresidente boliviano, no se comporta como un «capitalista colectivo» propio del capitalismo de Estado, sino como un redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases trabajadoras y en un potenciador de las capacidades materiales, técnicas y asociativas de los modos de producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. «En esta expan-

⁷⁷ Véanse, por ejemplo, varios artículos de estos autores en *Rebelión* y en particular en Almeyra (2012).

sión de lo comunitario agrario y urbano, depositamos nuestra esperanza de transitar por el poscapitalismo, sabiendo que también esa es una obra universal y no de un sólo país» afirma García Linera (Hernández Navarro, 2012: 2). Se podrían caracterizar, entonces, como procesos de transición con un rol protagónico del Estado hacia un horizonte socialista.

En estas transiciones se observan grados de avance en la cantidad, en relación con el pasado inmediato, pero todavía no se transforma en calidad que pueda teñir al conjunto de la sociedad del predominio concreto de otras relaciones sociales, alternativas al capitalismo.

Hemos dicho también que la construcción sólida y concreta de pasos hacia un horizonte de emancipación que exceda el marco dominante de relaciones sociales capitalistas no es posible en el terreno local y de manera aislada, pues el acecho mediático, político-militar y económico que alternan permanentemente las oligarquías locales en complicidad o como lacayos del imperialismo, complica en extremo cada paso dado, con lo cual el estado de transición se torna crónico, permanente. Así, tanto la Revolución Bolivariana de Venezuela, como la Revolución Cultural y Democrática del Estado Plurinacional de Bolivia, y la Revolución Ciudadana del Ecuador constituyen estados de transición que se desarrollan en medio de un escenario de permanente y agudo enfrentamiento social y lucha de clases.

Los modelos productivos

Frente a este panorama de construcciones sociales y políticas alternativas, que tienen en las nacionalizaciones de empresas estratégicas la base material de la soberanía, se abre el debate acerca de las opciones del o al desarrollo. Podríamos retrotraernos al punto de debatir acerca de la noción misma de desarrollo, o de la necesidad o no de tal empresa.

Si partimos de lo primero, deberíamos retomar los debates sobre las teorías de Rostow sobre el desarrollo y el subdesarrollo y las contestaciones de los teóricos de la dependencia, pero consideramos que esos debates ya fueron saldados y que hoy no se pone en duda, al menos desde el pensamiento crítico, la dependencia que genera el subdesarrollo desde el punto de vista no sólo del capitalismo, sino del estado general que adquieren las fuerzas productivas a nivel planetario, del cual no es posible (en un sentido estratégico y general) sustraerse.⁷⁸ Sólo mediante la guerra u otros medios de destrucción masiva puede ocurrir la contracción real del desarrollo desquiciado y en descomposición —como ya hemos analizado— de las fuerzas productivas bajo sus relaciones de profunda explotación; por lo tanto, ello constituiría una sustracción forzosa, como puede suceder en algunos territorios. En ese desarrollo universal de las fuerzas productivas, hoy más relocalizado y disperso aunque se beneficien de manera concentrada las élites (más numerosas en los países centrales, pero no menos poderosas y enriquecidas en los dependientes), lo que está en juego en las experiencias nacionales soberanistas tiene que ver con la dirección, modalidades, prioridades, cantidades y demás características que adopta y adoptará el desarrollo endógeno en su vinculación con el mercado mundial.

El Estado nacional para la soberanía popular se constituye en la mano visible que dirige el desarrollo de manera bien clara —aunque no sin numerosos obstáculos y contradicciones— en los estados de transición que forman ese primer núcleo duro del cambio de época latinoamericano y, de manera más ambigua, en el segundo anillo progresista o nacional y popular. Ese sinuoso ca-

78 Hay una vasta bibliografía para comprender los debates sobre las teorías del desarrollo y la dependencia. A modo de ejemplo, sugerimos la lectura de Roitman Rosenmann (2008), Borón (2008) y Barán, P. y Hobsbawm, (1963). Es importante también recurrir a los clásicos de ambas posturas como Rostow y Faletto y Cardozo (entre muchos otros documentos de la CEPAL bajo la dirección de Raúl Prebisch).

mino que debe oponer la voluntad estatal soberana al desarrollo capitalista en esta etapa —como hemos explicado en el Capítulo II—, destruye más relaciones productivas que las que construye—está plagado de obstáculos.

Si partimos, en cambio, del segundo debate, más actual, debemos analizar las discusiones que se centran en la necesidad o no del desarrollo, de la posibilidad de clausurar las vías mismas de desarrollo. Este último camino es el que emprenden algunos que podemos incluir en lo que Álvaro García Linera etiqueta, de manera acertada, como medioambientalismo colonial, ya que, bajo un pretexto idealista de protección del medio ambiente —un planteo retrogrado y conservador— pretenden congelar las relaciones de producción y de poder que aún son coloniales, lo cual los hace muy funcionales al capitalismo verde y a los intereses imperiales. Para ubicar el problema del «extractivismo» en su dimensión histórico-temporal, utilizamos las palabras de García Linera:

[E]l famoso debate sobre los extractivismos que se ha puesto de moda, en América Latina, claro, Ecuador, Venezuela, Bolivia arrastran una herencia extractivista, que en el caso de Bolivia se remonta a 1570 cuando el virrey Toledo instaura el trabajo obligatorio en el Cerro Rico de Potosí y convierte a Bolivia en un escenario productor de materias primas que se exportan a la metrópoli. (2015b)

Podemos ver que no es un problema nuevo en el que nos han metido los gobiernos populares. Esto lleva a la discusión en torno a los modelos productivos, que Atilio Borón ha resumido como el debate entre «pachamamismo vs extractivismo» (2012: caps. 6 y 7). Borón define al pachamamismo como una política radical de conservación de la naturaleza, de su práctica intangibilidad, y como el resurgimiento nostálgico de las potencialidades de una

economía familiar/campesina como opción ante las injusticias y depredaciones causadas por el agronegocio. Sin embargo, plantea, este camino conduce a nuestros países al fracaso y a un callejón sin salida frente a la presión del crecimiento demográfico. La soberanía alimentaria en lo inmediato no presenta otra alternativa que utilizar las más eficientes y productivas tecnologías agrícolas que hoy están en manos de las transnacionales.

Incluso algunos proponen directamente la «desmaterialización» de la economía y el «no desarrollo», pero parecen no advertir los niveles de hambre, desnutrición, enfermedades curables, analfabetismo, precariedad habitacional, entre otros males que nos aquejan. Se pregunta Borón ¿es compatible el «buen vivir» con la escasez y la privación? ¿Tiene sentido construir un modelo sustentable ecológicamente, pero que congele las asimetrías internacionales creadas por el imperialismo que condenan a las masas latinoamericanas a un nivel de vida radicalmente inferior al que primara en los países que se beneficiaron por siglos de despojo colonial? Luego afirma que el pachamamismo es inviable y el extractivismo es insoslayable en el corto plazo, aunque es imprescindible neutralizar sus desastrosos impactos mediante un fuerte control y fiscalización, al tiempo que se aplique una adecuada política tributaria para captar una parte creciente de esa renta, como medidas transitorias en la construcción de una sociedad alternativa.

También lo explica el ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce:

Como muchos países de América Latina, Bolivia ha sufrido un permanente saqueo de sus recursos naturales y no se ha beneficiado de eso. ¿Quiénes se han beneficiado?, las transnacionales. Entonces, como primer elemento, Bolivia decidió que aprovechando sus propios recursos naturales empezaría a crecer [...] Entonces hemos atacado a los grupos más vulnerables, los niños,

las mujeres y los ancianos con esas políticas sociales redistributivas del ingreso, y eso aumenta la calidad de vida, el consumo, la inversión de la gente; es el motorcito de la economía nacional ahora, por eso es que estamos creciendo más que otros países que todavía están apostando al crecimiento en base a las exportaciones, cuando los mercados están cayendo. (Consulado de Bolivia, 2015)

Justamente, una cosa es cuestionar el devenir destructor, depre-dador y deformante del desarrollo capitalista, aún más en su fase de descomposición —cualquier organismo puede seguir desarro-llándose aun cuando se está pudriendo—, y otra es el necesario desarrollo orientado a mejorar la vida de los pueblos y revertir el arrasamiento capitalista, subsanar sus horrores, sobre todo en los territorios dependientes y ex colonias, que pueden y deben continúar con la organización productiva vigente durante un tiempo, para no sumir en el desabastecimiento y el hambre a los pueblos que protagonizan los cambios. Desabastecimiento que, por otra parte, el poder concentrado del capital ya pone en práctica, sin ningún problema moral, por ejemplo en Venezuela.

En cambio, los gobiernos populares se proponen conservar el medioambiente, pero también socializar los derechos del acceso al agua potable, electricidad, sistema de transporte, de salud, escuelas, y tecnologías de comunicación e información. «¿Por qué se nos tiene que prohibir eso?» se pregunta el Vicepresidente boliviano, y continúa: «se quiere congelar a los bolivianos como núcleos de comunidades protectoras del medioambiente, empobrecedas». Plantea que es necesario un tipo de producción que ya no se sustente en el extractivismo de las materias primas, pero para ello se necesita un período de transición de unos años para abastecerse de esa capacidad productiva: «nos quieren pedir a nosotros, en seis años, lo que el capitalismo no ha sido capaz

de construir en quinientos». Afirma que esta creencia de que el buen vivir tendría que significar el congelamiento y suspensión del desarrollo es una interpretación falsa, ingenua, romántica y encubridora de terribles relaciones de dominación (Borón, 2011).

Nuevamente citamos las palabras del vicepresidente boliviano en la conferencia del Elap:

Esta es la farsa del medioambientalismo colonial, porque hay un medioambientalismo revolucionario, pero el medioambientalismo colonial nos quiere hacer caer en esa trampa, las condiciones de vida actual de los pueblos indígenas son idílicas y armónicas.

Que vayan a conocer a un niño durmiéndose porque no pudo desayunar bien, que entren a ver a la Amazonía, para ver cómo se muere la gente por la mordedura de una víbora porque no hay ni en cinco días una atención médica. No conocen, desde sus ONG, en las que ganan mucho dinero, se dedican a ver desde la ventana lo que pasa en el mundo, y se dedican a resolver los problemas del mundo desde donde están; no es así. Hay que acabar con el extractivismo, sí, pero simultáneamente hay que acabar con la miseria y hay que utilizar las herramientas heredadas, ¿cómo nos piden a nosotros acabar en cinco años lo que ha durado quinientos años?

Nos exigen que acabemos en seis meses lo que ha durado siglos. No, señores, no vamos a caer en esa trampa. Los procesos latinoamericanos asumen que hay que pasar a una economía del conocimiento, a una economía industrial que vincule la ciencia y la tecnología contemporánea con la ciencia y la tecnología ancestral; vamos a llegar a eso, pero lo vamos hacer creando las condiciones materiales, culturales y espirituales para ese tipo de economía y sociedad, produciendo lo que hoy tenemos, temporalmente usando el petróleo, el gas, los minerales, la agricultura; necesitamos un período de transición, un puente que cree las

condiciones técnicas, materiales y culturales de una nueva generación capaz de superar el extractivismo. (2015b)

La idea fundamental del concepto de vivir bien, explica García Linera, es que incorpora a las ideas clásicas de igualdad y justicia de los comunistas, la noción de convivencia y preservación de la naturaleza, ya presente en Marx, de humanizar la naturaleza y naturalizar al ser humano. No niega, sino que rescata la herencia de los pueblos indígenas, su manera de entender el cosmos, la vida y la comunidad, pero sin negar tampoco la necesidad de mejorar las condiciones de vida y adoptar tecnologías necesarias para satisfacer básicas y nuevas necesidades, formas de desarrollo y de producción de riqueza que hay que conquistar para lograr ese vivir bien. Ello obliga a diseñar fuerzas productivas no destructivas. Aunque ello sólo puede cabalmente realizarse a escala planetaria.

Atilio Borón afirma que, así como el «socialismo en un sólo país» tenía un carácter intrínsecamente contradictorio que lo condenaba al fracaso, ¿podrían países mucho más débiles como Bolivia y Ecuador, por sí mismos, tener éxito en sus proyectos de refundación civilizatoria, del Buen Vivir, en un corto período y en un ambiente tan desfavorable como el signado por la agresiva decadencia del poder imperial? Es obvio que puede darse importantes pasos en lo inmediato, pero la cuestión es «calcular con esperanzado realismo y sin abandonar para nada los ideales, cuánto es lo que se puede avanzar en la correlación de fuerzas que define los marcos de lo posible para gobiernos como el de Bolivia y Ecuador». Aclara el autor que es imprescindible no confundir el realismo para dar pasos firmes, con el posibilismo (derrotismo y resignación) y el utopismo (Borón, 2012).

Por otra parte, en el «Manifiesto de Isla del Sol», al igual que en numerosas intervenciones de los dirigentes de los procesos re-

volucionarios, se ha advertido que el discurso del pachamamismo puede esconder el «capitalismo verde». Incluso, agrega el Vicepresidente boliviano (Klachko, 2015), las visiones radicalizadas de medioambientalistas en Bolivia que pueden conducir a una parálisis económica, muestran un sesgo restaurador y conservador, cómplice de las relaciones de dominación, es decir, funcional a las fuerzas conservadoras que quieren que estos gobiernos progresistas se estanquen, no generen riqueza, con lo cual se produzca un malestar social como caldo de cultivo para el regreso de la derecha que, una vez en el gobierno, no tendrá problema para arrasar con la naturaleza a su modo y a su servicio. Como cita el venezolano Javier Biardeau del joven Marx, con una base técnica débil «sólo se socializa la necesidad, y la penuria provocará necesariamente competencias por los artículos necesarios que harán que se regrese al antiguo caos» (2013).

La socialización debe emprenderse desde el desarrollo de las fuerzas productivas de acuerdo con las necesidades sociales (reales y no creadas y recreadas frenéticamente desde las usinas del capitalismo para consumir) y no desde la necesidad y la penuria. Sólo un cerco tan férreo, arcaico y violento como el que le es impuesto a Cuba, reforzado a su vez por su condición insular, obliga al heroico pueblo a socializar la escasez.

En la tensión entre la preservación de la naturaleza y las necesidades humanas, no hay superación posible, sino equilibrio, que debe construirse mediante mecanismos que aseguren la reproducción de la naturaleza, recuperando viejas tradiciones e implementando nuevos conocimientos científicos, señala García Linera, y agrega que, ciertamente, en el extractivismo se condensa toda una distribución territorial colonial de la división del trabajo mundial.

De esta manera, el papel que el capitalismo, como sistema de explotación global, le otorgó a la periferia, al crear las economías dependientes y, por lo tanto, insuficientes para un desarrollo

autónomo —en complicidad con las élites locales que se enriquecen— constituye la realidad de la cual se debe partir para generar los cambios en el patrón productivo que, a su vez, generen las condiciones necesarias para salir del cuello de botella en que nos entrampa esa dependencia, que presenta variados aspectos, entre ellos el tecnológico. Su ruptura depende del grado de complementariedad que se logre constituir entre las economías norteamericanas sobre la base de proyectos alternativos de sociedades, y su integración. No puede salirse de la extracción de recursos en lo inmediato como palanca de generación de riqueza, ni se puede salir del trabajo alienado con hambre y miseria de pueblo, que implican alienación física directa. No hay socialismo con hambre.

Como hemos repetido varias veces, se debe partir de la realidad concreta, de las condiciones reales existentes y no de las que brotan de la imaginación de quienes transmiten sus ideas anti-extractivistas desde sus celulares hechos con litio.

Diferentes analistas u opinadores califican las experiencias del giro político latinoamericano —las del primer y segundo anillo, todas ellas— como neodesarrollismo y otros como neoextractivismo. Hemos abordado ese tema en el Capítulo II.

Para el economista argentino Claudio Katz,

El neo-desarrollismo propone mayor intervención estatal, políticas económicas heterodoxas, retomar la industrialización, reducir la brecha tecnológica e imitar al sudeste asiático. A diferencia del desarrollismo clásico, promueve alianzas con el agro-negocio, relativiza el deterioro de los términos de intercambio, se aleja del enfoque centro-periferia y prioriza el manejo del tipo de cambio. (2014)

Sin embargo, para el gran teórico del socialismo del siglo XXI, García Linera, el modelo económico se caracteriza como posneoliberal y de transición poscapitalista. En el caso de

Bolivia, se ha recuperado el control de los recursos naturales (gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía eléctrica) que estaban en manos extranjeras, para colocarlas en las del Estado, dirigido, por el movimiento indígena, originario campesino; en tanto que otros recursos como la tierra fiscal, el latifundio y los bosques han pasado a control de comunidades y pueblos campesinos. En cuanto a la titulación y saneamiento de tierras, 60% de ellas están tituladas y saneadas (Galindo, 2013), de un total de 64.756 383 hectáreas, de las cuales 85% se ha producido durante el proceso de cambio. «Sólo en la gestión 2014 se emitieron 137 184 títulos que beneficiaron a 244.014 personas en una superficie total de 4.161.527 hectáreas» (Inra, 2014).

En Ecuador, el «Plan Nacional para el Buen Vivir» propone una transición desde una economía primario-exportadora a otra basada en la producción de servicios ecoturísticos y de bioconocimiento «que se mide en décadas». Con lo cual habrá un período más o menos prolongado de coexistencia de la vieja organización económica —que sustenta los recursos de que dispone el Estado para su propio sostenimiento, y para financiar el costoso y complicado proceso de transición hacia una nueva economía y una nueva sociabilidad, congruente con las estipulaciones del Sumak Kawsay— con el nuevo ordenamiento económico «posextractivista».

Constituye tema urgente de los gobiernos conducir los equilibrios entre la necesidad de desarrollo y los cambios económicos, políticos y sociales necesarios para la democratización y transformación social, con el imprescindible respeto y resguardo de nuestra casa, nuestro planeta, nuestra sustancia y materia.

La inversión extranjera

En el centro del debate sobre el modelo productivo y los caminos del desarrollo se encuentra la cuestión de la inversión extranjera. Mu-

chos critican algunas medidas de estos gobiernos para incentivarla. Sin embargo, hemos visto que ello es necesario para continuar o poner en marcha ramas productivas con altos niveles tecnológicos y con histórica dependencia, si se admite que hay que estar a la altura del desarrollo de las fuerzas productivas a nivel mundial; al menos intentarlo o generar productos para el intercambio, porque no se puede volver para atrás la rueda de la historia y del desarrollo de los medios de producción y de las fuerzas productivas. ¿Los pueblos quieren vivir con computadoras y celulares? Para ello se necesitan satélites y minerales como el litio. ¿Con autos y transporte público de calidad? Es necesario explorar e invertir en energía. El conocimiento científico y el saber tecnológico son patrimonio de la humanidad, su resultado es acumulación histórica, en los cinco continentes, de sus luchas, contradicciones y treguas. De la competencia interburguesa, sí. Pero también de las y los millones de trabajadores que han encarnado esos esfuerzos productivos. En ese sentido, no podemos, como hemos dicho, sustraernos al grado de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado a nivel planetario, ni recluirnos en saberes ancestrales. Sobre el respeto a esos saberes, debemos incorporar conocimiento y tecnología, y disputarlos desde su construcción para el bienestar de los pueblos y no de la tasa de ganancia como es hasta ahora.⁷⁹ Pero siendo realistas, aunque muchos desestimen eso.

Los que hoy detentan esos saberes científicos y tecnológicos y poseen recursos de todo tipo para implementarlos son grandes empresas con apoyo de sus Estados nacionales, el entramado

79 El documento Agenda Patriótica revela otro aspecto interesante del proceso boliviano: la incorporación y fusión de saberes ancestrales, ligados a lo natural y orgánico en combinación con nuevas tecnologías. Esta recuperación e incorporación de lo natural, orgánico y espiritual no es menor, ya que la moda posmoderna «new age» lo tomó y levantó, pero despojándolo de su contenido político y social, como una posibilidad elitista de mejorar la calidad de vida sólo para unos pocos. Si bien no podemos comprobar el grado de real aplicación de estas intenciones, ya constituye un avance su reconocimiento oficial.

complejo de los protagonistas monopólicos del imperio.

Sin embargo, sobre la base de sus propias contradicciones, competencias y necesidades de permanente adquisición de ganancias, pueden ser utilizadas para nuestros proyectos, siempre y cuando el gobierno al mando de las fuerzas populares retenga el control estratégico sobre el proceso productivo en todas sus fases. En Cuba han reconocido esa necesidad hace tiempo y se han volcado a la constitución de empresas mixtas en las que el Estado retiene 51% de la propiedad y con ello asegura el control; aunque dicha iniciativa, paradójicamente, es muy reducida debido al bloqueo, que impide la entrada de capitales por parte del imperio. Justamente, la debilidad cubana no es política, sino el bajo desarrollo de sus fuerzas productivas sumada al, y profundizada por, el bloqueo. Ello ha generado la necesidad de dejar entrar y hacer reformas capitalistas que traen divisas al país, porque esa dependencia tecnológica, al igual que en los otros casos, es el histórico cuello de botella de los intentos de desarrollo nacional independiente que hemos ensayado a lo largo de la poscolonialidad. Ese es el gran obstáculo.

En Venezuela se implementó algo similar en la cuenca petrolífera de la faja del Orinoco con la creación de empresas mixtas con una participación pública mínima de 60%. En Bolivia, la cuestión es reconocida y planteada como una meta de la «Agenda Patriótica» para 2025. Para ese entonces, se afirma que se contará:

Con mayor inversión extranjera en el marco del fortalecimiento de su economía plural, habiendo logrado que los inversores extranjeros sean socios y no patrones, respetando nuestra soberanía, nuestra madre tierra, e invirtiendo las ganancias en nuestro territorio para fortalecer el vivir bien. (Morales, 2015: 12)

Pongamos un ejemplo de estímulo a las inversiones extranjeras sin enajenar la soberanía nacional: si bien el gobierno de Evo Morales ha nacionalizado unas veinte empresas, ante la necesidad estratégica de desarrollar la producción minera, que acarrea altos costos, descartó la posibilidad de nacionalizar San Cristóbal, filial minera de la empresa japonesa Sumitomo; la mayor de Bolivia, que produce a cielo abierto plata, plomo y zinc en la región andina de Potosí, removiendo a diario 150 000 toneladas de roca para procesar unas 40 000 toneladas de minerales, según datos de la empresa. Así, en julio de 2015, el vicepresidente García Linera, ante dicha compañía minera privada, expresó: «Estoy aquí para reafirmar el compromiso del gobierno de Bolivia con la empresa Sumitomo, para darle garantías. No se asusten [...] Somos socialistas, somos comunitaristas, pero ahora los necesitamos a ustedes para que trabajen para nosotros». Además, se apoyó en la experiencia de la primera revolución comunista triunfante: «El revolucionario Lenin, socialista, comunista como nosotros, planteaba la necesidad de que un gobierno revolucionario tuviera acuerdo con empresas extranjeras para producción en gran escala» (EFE, 2015).

El Estado y las formas políticas

Estos procesos que se auto conciben como una transición, llevan de esta manera una creciente presencia y fortalecimiento del Estado, lo cual nos lleva a reflexionar acerca del sistema político que ha adoptado una envoltura que no es la que se planteaban los teóricos clásicos del socialismo y los líderes revolucionarios de las experiencias pasadas: la dictadura democrática del proletariado, sino que adoptan la envoltura de la democracia liberal (burguesa) y sus formas político-institucionales; las cuales se constituyeron como un potencial que les permitió acceder al gobierno del Estado basándose en la legitimidad de esas formas en la base social

de las distintas fuerzas, imponiendo la derrota a la fuerza social-política enemiga con su aceptación de las reglas del juego. En ese sentido, posibilitó la construcción de una hegemonía a nivel nacional. Pero también se constituye en su potencial trampa, dado que la permisividad que debe darse a la libre expresión del ataque permanente cultural, ideológico, mediático, consumista, económico y, también por momentos, militar, genera permanentes frentes de batallas que en ocasiones —cada vez más recurrentes— pone a la defensiva a algunos de estos procesos, lo que estanca o traba la posibilidad del desarrollo y profundización de los aspectos centrales que mencionábamos más arriba.

Así como las fuerzas populares accedieron a los gobiernos de los Estados a través de elecciones, la inmediatez del escenario político cambiante, y permeable a las estocadas finamente elaboradas desde las usinas del poder —que tiene su centro en el norte del continente—, las tiene presas de la coyuntura; es decir, del orden que, según Gramsci, se constituye de intereses mezquinos. Así como se ganan elecciones, pueden perderse si el golpe de efecto que genera la derecha llega a ser eficaz; para lo que cuentan con demasiados medios, como hemos podido ver en el caso de las recientemente celebradas elecciones en Argentina donde un empresario, con un discurso construido por el marketing político, ha hecho olvidar a las mayorías sociales las conquistas de los doce años de gobiernos kirchneristas. Ello generaría una interrupción de estos procesos políticos, luego de los cuales no vendría la izquierda, sino las fuerzas sociales comandadas por los cuadros políticos de las oligarquías financieras que fueron desalojadas por estos mismos procesos. No es el caso actual (noviembre de 2015) de Bolivia, que cuenta con una estabilidad política y económica que no se observa en Venezuela, acechada por una brutal guerra económica y una muy preocupante dificultad de redespegue y necesaria refundación del poder revolucionario.

nario después de la muerte del gran conductor. Ni tampoco se ve en Ecuador, asediado por las fuerzas de derecha y con una parte del movimiento social, indígena y campesino en contra.

De tal manera, estas relaciones estatales (en permanente pugna con las viejas, también presentes) generan mayor democratización de todos los aspectos de la vida social, política y económica; son más permisivas; incluso democratizan, en ocasiones, formas delictivas y corruptas, al ser un Estado menos represivo, que arrastra espacios, cuadros políticos y trabajadores viciados del viejo estilo, que no logran reemplazar en su totalidad por nuevos cuadros revolucionarios, dado el tiempo que requiere su formación y la alta cantidad de ellos que se necesita. Esto constituye una debilidad que algunos críticos de adentro y de fuera hacen notar, por ejemplo, en Venezuela.

También hay quien cuestiona la centralidad que toma el Estado en estas experiencias de transformación social, en aparente contradicción con lo que debería ser la profundización de los procesos autonómicos o de poder popular paralelos. Las más radicalizadas de estas críticas remiten a una reminiscencia autonomista de los discursos de contrapoder y antipoder que tienen su auge en 2001-2002, que pierden lugar frente al ascenso de gobiernos populares,⁸⁰ en tanto se tornan idealistas en relación con la medición de fuerzas para una posible sustitución del estado nacional, en medio de la disputa principal contra el imperialismo y sus socios locales. Como si pudiera librarse una guerra —por más solapada que se encuentre— sin un Estado Mayor Conjunto, en este caso, centrado en el gobierno del Estado; o como si pudiera construirse nichos de libertad en medio de la guerra capitalista.

80 Este debate fue dado ampliamente por Borón contra las posiciones de Hardt y Negri, a quienes rebatió no sólo la existencia e importancia estratégica del Estado-nación para los capitales más concentrados y transnacionalizados, que los autores negaban, en una evaporación conceptual, sino la de tomar el poder del Estado y su fortaleza para las luchas de los pueblos. Véanse Borón (2004c) y Hardt y Negri (2002).

El Estado —afirma el comandante Chávez— debe ser diseñado de manera que la administración de[1] ingreso nacional sirva a los objetivos de apalancamiento de la nueva sociedad. Para garantizar una política nacional, popular y revolucionaria, entonces, debemos poner la renta petrolera al servicio del pueblo.

Al mismo tiempo, se deben establecer mecanismos para ejercer la nueva institucionalidad revolucionaria que garantice la participación de los pequeños y medianos productores en las decisiones en materia agropecuaria, a través de los consejos campesinos y las redes de productores y productoras libres y asociados.

Encontramos importantes similitudes con el planteo estratégico de García Linera para Bolivia, en donde se han propuesto encontrar una vía democrática a la construcción de un socialismo de raíces indígenas, lo que llaman «socialismo comunitario», en el que el rol del gobierno popular sería el de apuntalar, fomentar, respaldar, empujar; pero la obra del socialismo comunitario tendrá que ser hecha por las propias comunidades urbanas y rurales, que asumen el control de la riqueza, de su producción y de su consumo. Aunque, nuevamente apelando al evocado problema, agrega que cualquier alternativa poscapitalista es imposible a nivel local, sino que tiene que ser una obra común, continental y planetaria (2010).

En el caso de Venezuela, se trata de impulsar y consolidar una economía productiva, redistributiva, posrentista, poscapitalista, sobre la base de un amplio sustento público, social y colectivo de la propiedad sobre los medios de producción. Y en esta aparente tensión entre la necesidad de la planificación y conducción estatal —para hacer que funcione con continuidad ese núcleo central de la economía que es la producción de hidrocarburos— con la democratización creciente de ese y todos los ámbitos económicos y políticos, en los documentos se establece la necesidad de

sincronizar la planificación centralizada con la socializada. Una dialéctica conscientemente impulsada para construir el socialismo, y que empalma con el objetivo de diferenciarse de algunas experiencias socialistas del siglo XX, generando amplios espacios de participación democrática socialista. En este sentido, Chávez adopta el principio zapatista —al igual que Evo Morales— de «mandar obedeciendo» como concepción del poder para el nuevo Estado socialista, como una construcción colectiva.

García Linera afirma que las formas organizativas comunales, agrarias, sindicales, del movimiento indígena contemporáneo, con sus formas de deliberación asamblearias, de rotación tradicional de cargos, en algunos casos, de control común de medios de producción, son hoy los centros de decisión de la política y buena parte de la economía en Bolivia.

Hoy, para influir en los presupuestos del Estado, para saber la agenda gubernamental, no sirve de nada codearse con altos funcionarios del Fondo Monetario, del BID, de las embajadas norteamericanas o europeas. Hoy los circuitos del poder estatal pasan por los debates y decisiones de las asambleas indígenas, obreras y barriales. (Hernández Navarro, 2012)

Lo que considera como «la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación. “Indios en el poder”, es la frase seca y despectiva con la que las señoriales clases dominantes desplazadas anuncian la hecatombe de estos seis años».

Estas transformaciones, sin duda, generaron grados de institucionalización de la conflictividad social, de las luchas y de los movimientos sociales, proceso lógico ante gobiernos que abren las puertas del aparato estatal a esos movimientos y dan respuesta a numerosas demandas. Lo que genera un reflujo en las

dinámicas de luchas en relación con la etapa anterior en que se oponían, en su diversidad, a los gobiernos de la oligarquía financiera y sus políticas.

Además de los cauces y mecanismos legales y concretos que se da la institucionalidad revolucionaria en Bolivia para canalizar las decisiones comunitarias y plasmarlas en políticas de Estado, y no reservarlas a mero rol testimonial, hay hechos políticos trascendentales en la historia reciente de nuestros países —antes sumisos a las órdenes de los funcionarios de los centros de poder imperialistas— que ponen en evidencia la escucha al pueblo, no sin presiones y luchas por parte de esas bases populares, como fue el caso de las movilizaciones populares contra el «gasolinazo» en diciembre de 2010, frente a las cuales el gobierno responde de forma opuesta a los gobiernos neoliberales —cuya respuesta era la represión y muerte—, dando marcha atrás a la política del aumento del precio del combustible; o la consulta popular a las comunidades afectadas a causa de la crítica suscitada por el proyecto de construcción de la carretera que pasa por el Tipnis.

Al igual que los otros aspectos, la necesaria construcción de un Estado nuevo en medio del acecho capitalista y bajo las formas institucionales adoptadas, aparece bastante difícil en una sola realidad nacional. Algunos intelectuales bolivarianos y autocriticos consideran que en Venezuela se ha producido cierto «sustitucionismo»,⁸¹ que remite a la obstinada persistencia del Estado burocrático burgués corrupto, ineficiente y muchas veces boicoteador de las mismas políticas estatales, de lo cual son conscientes los dirigentes de la revolución, e incentivan desde el discurso la expansión y profundización de los ámbitos de poder popular como único antídoto. Sin embargo, es difí-

81 Se estaría produciendo cierto «sustitucionismo» cuando el Estado es ocupado por quienes hablan «en nombre de» el bloque social de los explotados y oprimidos, pero no constituyen esa clase social, sino una especie de burguesía de Estado parasitaria. (Biardeau, 2013)

cil constatar la aplicación efectiva y el avance de ese poder popular en el marco de la crisis económica y política que obliga a atender prioridades y pone al proceso a la defensiva; tal como ha sucedido en numerosos procesos revolucionarios en la historia, muchos de los cuales terminaron siendo derrotados (y aquí es importante distinguir entre derrota y fracaso). Otros se mantienen gracias a la dureza de determinadas decisiones políticas y económicas que incluyen la flexibilización o rectificación de criterios en las diferentes coyunturas nacionales e internacionales.

Todos estos elementos forman parte de un camino pacífico de transformaciones, aunque no se descuida el elemento militar en los programas. Sería necesaria esta estrategia pacífica y gradual al menos hasta que puedan desencadenarse procesos revolucionarios en los países desarrollados, que pongan en cuestión real al sistema. Pero lo central de esta estrategia es extender e irradiar experiencias socialistas e ir cercando al capitalismo. García Linera afirma que los pueblos del mundo deben apoyarse entre sí y aislar las estructuras políticas y económicas del capitalismo para alcanzar el socialismo, que en cada país tomará una forma diferente. «La revolución tiene que irradiarse, respetando las particularidades culturales de cada pueblo. La única manera de aislar al capitalismo es irradiando, expandiendo, apoyando todo proceso de lucha revolucionaria» (2010): pasar de experiencias comunitarias, socialistas, solidarias aisladas o cercadas por un mar de capitalismo, como decía Chávez en Golpe de timón, hay nudos capitalistas aislados y cercados por el tumultuoso mar de experiencias socialistas. Pero sabemos, por experiencia histórica, que difícilmente este proceso pueda darse en «paz» y no por la belicosidad de las clases populares o las fuerzas revolucionarias.

Si bien, por ahora, la correlación de fuerzas en esas naciones centrales y la prioridad militar imperial puesta en el Medio Oriente restó capacidad y decisión de intervenir militarmente en estas latitudes, como lo han hecho demasiadas veces en el

pasado, sí viene dando algunos preocupantes pasos en esa dirección en Venezuela, vanguardia del cambio de época latinoamericano, mediante, por ejemplo, el decreto del presidente Obama que declara a Venezuela «amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense»; las declaraciones del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, John Kelly, acerca de que

Si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía al punto de que necesiten desesperadamente alimentos, entonces podríamos reaccionar a eso. Y lo haríamos [...] Sólo si se nos pidiera desde organismos como la ONU y la OEA. (Prieto, 2015)

Por otra parte van inyectando dosis de violencia e incluso entran en técnicas de guerra (civil) de «baja intensidad», por ejemplo, a supuestos «estudiantes» de derecha en Venezuela, quienes protagonizaron las guarimbas a principios de 2014 que, lideradas por Leopoldo López, culminaron con un saldo luctuoso de cuarenta y tres muertos, centenares de heridos y millonarios destrozos de propiedades públicas y privadas.

Estas tácticas de guerra económica, mediante el aumento del contrabando, el desabastecimiento, el boicot mediático y las dosis de violencia afectan la fuerza moral revolucionaria de las masas y generan desafíos a la «gobernabilidad» de los procesos revolucionarios. Este término, gobernabilidad, antes era preocupación excluyente de quienes nos gobernaban: cuadros políticos de diversos partidos burgueses, organizados en sistemas electorales en el que se alternaban opciones partidarias que expresaban, con apenas matices, los intereses de las oligarquías financieras. Sin embargo en estos últimos tiempos también la gobernabilidad pasa a ser un tema de preocupación de gobiernos populares que emergen de los mismos procesos de las democracias liberales.

A diferencia de la táctica imperialista en oriente medio, en lo que consideran su patio trasero la amplia legitimidad que han adquirido los procesos democráticos luego de la salida a las dictaduras militares, el propio discurso imperialista de las supuestas «libertades democráticas» (las de la propiedad privada), y la artillería verbal que disparan todos los días los medios de comunicación al servicio del imperio, los vacunan a ellos mismos contra la posibilidad de reaccionar mediante el ataque militar directo a los gobiernos populares, aunque preparan el terreno en el caso de Venezuela.

El enemigo no tiene reparo en avanzar utilizando todos los medios a su alcance. Es por tanto crucial el fortalecimiento de la conciencia y valoración de lo alcanzado y de la necesidad de luchar por más, ampliando la base popular de los procesos revolucionarios o reformistas —incluso de aquellos que sólo plantean algunos frenos a la acumulación capitalista desenfrenada, porque desempeñan una función primordial como dique de contención de un posible retorno de la derecha recalcitrante— y defendiendo, con todo lo que ello implica, estos procesos. No puede haber profundización sin sostener lo que ya existe, al mismo tiempo que no va a poder sostenerse lo realmente existente sin una apuesta por la profundización, y en algunos casos radicalización, de los procesos.

XI. Desafíos para la construcción de un proyecto político emancipador

Aunque algunos autores agoreros del fin de ciclo progresista (Modonesi, 2015; Zibechi, 2015) aducen, entre otras cuestiones, que los últimos diez o quince años constituyeron una «década perdida», en términos de acumulación política por abajo del pueblo, la movilización cambió en cantidad y calidad, dado que varias de las demandas por las cuales se luchaba en la etapa anterior fueron atendidas, y se produjeron hechos de rebelión o lucha por parte de las fracciones y sectores opositores,⁸² o demostraciones de fuerza desde la parte mayoritaria que apoya estos gobiernos populares, en contra de intentos golpistas. Por ejemplo, festejos patrios son resignificados a la luz de los nuevos caminos emancipadores que, entre otras cosas, promovieron un importante proceso de revisión de las historias oficiales, y se hacen carne en la calle. Otro momento de intensificación de la movilización social y política lo constituyen los procesos electorales que han dejado de ser un mecanismo formal del bipartidismo neoliberal, de la democracia fósil, como la denomina Álvaro García Linera, a momentos, aunque pacíficos, de bifurcación, en que se disputa proyectos sociales contrapuestos.

Como hemos revisado en el Capítulo I, Eric Hobsbawm ha afirmado que en los momentos de conflicto puede observarse cómo se expresan los distintos grupos sociales que interactúan en una sociedad en un momento dado de su desarrollo. En la con-

82 Aunque ya se ha producido un avance en esta estrategia con las victorias de la derecha en las elecciones presidenciales de Argentina y en las legislativas de Venezuela.

frontación, quedan expresados los intereses antagónicos no sólo entre los distintos grupos sino en el interior mismo de cada clase social; es importante entonces, para intentar delinear la composición de las fuerzas social-políticas que se enfrentan en cada país y los intereses que expresan, como manifestación del desarrollo del capitalismo en cada territorio, observarlos en esos momentos de agudización del enfrentamiento social cuando parece cortarse la sociedad en, casi siempre, dos bandos en pugna. Hemos analizado ya esos momentos en Bolivia 2008, Ecuador 2010, Venezuela, con las guarimbas en febrero y marzo de 2014, y en Argentina, entre marzo y julio de 2008, mediante el llamado «conflicto del campo».

A finales de 2015 dicho enfrentamiento pasa, en varios de nuestros países, por las batallas electorales en las que aparece, como respuesta al avance de fuerzas populares, una derecha nueva o reciclada que también fue forjándose al calor de esos enfrentamientos, cuyos ejes de reorganización giran en torno a un republicanismo vacío de contenidos y propenso a la corrupción, la inseguridad, la inflación y la política cambiaria, que logró irradiarse y ampliar su base social hacia fracciones del campo del pueblo que han visto mejorados sus ingresos y condiciones de vida, y que, por ello mismo, y por falta de formación política e ideológica, adoptan un desideologizado conservadurismo fruto de sus nuevas posiciones sociales o su acceso a ciertas pautas de consumo (efímeras, por cierto, si ganara la derecha), aunque, paradójicamente, con un piso de defensa de ciertos logros y derechos adquiridos que hasta esas opciones de derecha se ven obligadas a reconocer, al menos desde el discurso.

La lucha de clases en la presente etapa se organiza en torno a contradicciones principales, cuyo eje se modifica en los tres escenarios del mapa político latinoamericano actual según relatamos a principios del capítulo anterior:

En el núcleo duro (Venezuela, Bolivia y Ecuador), el eje central de disputa está constituido por los grados de avance hacia relaciones poscapitalistas, presentan (en algunos procesos como el boliviano de manera importante) elementos, a modo de germen, de relaciones sociales anticapitalistas, por ahora más bien como destellos de avances y experimentos de posibles caminos, al lado de las relaciones capitalistas predominantes; y, lo que es más importante, se plantean la construcción de sociedades socialistas, y se reconocen como Estados en transición hacia el socialismo. Este escenario configura dos fuerzas político-sociales enfrentadas, una primera, acaudillada por fracciones populares, trabajadores y campesinos o indígena-campesinos, en alianza con sectores de capas medias, capitales locales y aun internacionales —como, por ejemplo, de origen chino—, mientras que la fuerza social que pretende reconstruir el terreno perdido de las relaciones capitalistas, y retomar la iniciativa neoliberal-oligárquica, está claramente conducida por cuadros políticos y empresarios representantes de ese sector, aunque también cuenten entre sus bases sociales con una parte minoritaria del pueblo.

Quizás el caso más contradictorio en ese sentido sea el de Ecuador, en donde una parte no desdenable del movimiento indígena-campesino efectúa acciones directas contra el gobierno popular, muchas veces, coincidiendo con iniciativas de las burguesías y sus cuadros políticos.

En segundo lugar, en aquellos países del segundo anillo progresista el escenario de lucha está caracterizado por la confrontación de dos fuerzas social-políticas con conducción burguesa, aun en las alianzas nacional-populares que claramente se enfrentan a la otra fuerza heredera de las políticas más retrógradas, en la que el interés dominante es el de la gran burguesía local concentrada, en sintonía con las transnacionales y los intereses

imperialistas. A esta última se han ligado, en algunos casos, fracciones sociales del pueblo, parte del proletariado y de la pequeña burguesía pobre o acomodada, rural o urbana, y algunas de sus expresiones políticas. El pueblo así, queda dividido entre ambas fuerzas sociales. Por fuera y a la izquierda, sobreviven y se expresan construcciones, entre las cuales consideramos genuinas aquellas que no pueden ser asimiladas por la estrategia de la derecha, porque son francamente incompatibles. En este sentido, ¿las organizaciones populares y de izquierda opositoras a los gobiernos progresistas son funcionales a la derecha o no? La respuesta podría venir de examinar si coinciden en ejes que las aglutan en las fuerzas conservadoras, incluso en los hechos de lucha en las calles. La construcción de sus organizaciones por abajo, generando conciencia crítica anticapitalista y planteando críticas concretas a los gobiernos populares no resta fuerzas a la acumulación política popular de largo plazo sólo si se mantienen firmes en ello, sin sumar consignas de la derecha, ni marchar junto al enemigo principal, y si se suman, en momentos de defensa clave —puntos de bifurcación—, a las fuerzas comandadas por los gobiernos nacionales y populares contra el enemigo común.

El tercer grupo de países que constituyen escenarios de permanencia de la hegemonía neoliberal no ha podido salir de ese bipartidismo que suponía la continuidad, sin más, de las políticas neoliberales, bajo una u otra opción partidaria. Alineados a las políticas imperialistas, la contradicción principal giraría en torno al mismo eje que en el segundo anillo progresista, pero con la alianza volcada a favor de las oligarquías, en las que las fuerzas social-políticas acaudilladas por fracciones más progresistas de las burguesías locales o intelectuales orgánicos a proyectos populares vienen experimentando retrocesos en la conformación de expresiones políticas con peso electoral (por ejemplo en los resultados de las elecciones en Colombia, en octubre de 2015).

En las fuerzas social-políticas progresistas o revolucionarias que ocupan gobiernos se expresan las mayorías populares y sus expresiones, algunas de ellas planteando críticas y luchas para inclinar la balanza hacia la profundización de las políticas favorables al pueblo, y en algunos casos hacia el socialismo, intentando su aplicación práctica más allá de los discursos; pero con la conciencia plena de que esa fuerza representa el progreso y el freno a la iniciativa más recalcitrantemente capitalista, que es la alternativa real a estos procesos. La profundización de estos caminos democráticos, que aun con sus divergencias se enmarcan en la senda capitalista del desarrollo, no puede más que conducir a crecientes contradicciones con la acumulación de capital, como ha pasado en otros momentos históricos en que se intentaron reformas o procesos de redistribución de la riqueza. La discusión política atada a la coyuntura y al análisis de la situación y las correlaciones de fuerzas políticas nos llevan, por momentos, bien a debatir cómo profundizar estos proyectos de transformación social progresista, o bien a ubicarnos a la defensiva, como en algunos procesos electorales que se están desarrollando, o frente a una intensa movilización social y política de las oposiciones, como en Ecuador, Brasil, y Venezuela. Utilizaremos una metáfora culinaria que nos remite a la cuestión de cuándo se llega al punto de ebullición para salir de la senda capitalista y tomar otro camino, que sólo puede transitarse si hay cocinada una fuerza revolucionaria que debe ser democrática, pero no puede dejar de tener conducciones centralizadas preparadas, para la guerra civil que lamentablemente le opondrán. ¿Hasta cuándo nos dejarán ganar elecciones?

¿Ahora es cuándo?

Pareciera que en Venezuela, desde hace ya un tiempo, un amplio espectro político del campo popular y chavista —desde el ala izquierda del PSUV hasta el propio Hugo Chávez en variadas intervenciones y documentos que dejara— considera que «ya es el tiempo», y que la correlación de fuerzas es favorable al socialismo. Pero también sabemos, desde Marx, Engels, Lenin, etc., y por la experiencia y demostración histórica (con Allende y muchas otras), que las vías pacíficas de transformación revolucionaria de la sociedad o de profundizaciones democráticas tocan un techo infranqueable que marca el comienzo de la guerra civil que opone el capital y sus personificaciones militares, políticas y económicas contra estas experiencias; lo que ya se viene intentando, cada vez con más asiduidad, en Venezuela.

También en Bolivia, algunos analistas que se sitúan en la oposición por la «izquierda», como Raúl Prada Alcoreza, sostienen que hay condiciones para avanzar en los contenidos y en las formas, porque la derecha más recalcitrante ha sido vencida, sobre todo con el fracaso de sus intentos separatistas. Mientras que, según él, desde el gobierno, en nombre de un supuesto realismo y pragmatismo político, consideran conveniente mantenerse en las condiciones históricas del capitalismo o una de sus variantes.

Pareciera que las masas bolivianas, venezolanas y latinoamericanas están sedientas de revolución y quieren avanzar hacia el socialismo y son los gobiernos populares los que frenan ese impulso revolucionario. Sin embargo, el análisis de la situación y correlaciones de fuerzas parece indicar otra realidad; sobre todo, cuando en noviembre de 2015 ha ganado las elecciones en Argentina un partido de derecha, que por primera vez desde hace ochenta años logra vertebrarse con base social, sin tener que salir a «golpear la puerta de los cuarteles», y cuando la derecha se anotó una impresionante victoria en las elecciones para la Asamblea Nacional en Venezuela.

De esta manera, volvemos a preguntarnos: ¿hasta cuándo nos dejarán ganar elecciones?, ¿hasta cuándo las ganaremos? Vivimos con nervios el ajustado triunfo chavista en las últimas elecciones presidenciales; luego mejoraron las perspectivas en las municipales de diciembre de 2013, y en las elecciones del 6 de diciembre de 2015 la debacle ha sido total al quedar la Asamblea en manos de la derecha por una mayoría de dos tercios, develando una crisis aguda, y profunda, en el chavismo. ¿Qué pasará con todos los avances de la construcción socialista o reformista?, ¿cómo defenderlos? Ya se ensaya la consolidación de la contrarrevolución en América Latina con la Alianza del Pacífico (una nueva ALCA), con la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y con Colombia firmando acuerdos de cooperación con la OTAN.

Chávez dice al respecto en el Programa de la Patria: «Nosotros estamos obligados a traspasar la barrera del no retorno, a hacer irreversible el tránsito hacia el socialismo». Los y las militantes, intelectuales, referentes y dirigentes sociales y políticos que en Venezuela afirman que «ahora es cuándo», lo hacen en sintonía con un proceso pacífico. Es decir, no apelan al camino cubano ni de otras revoluciones históricas, sino a la transición pacífica, en desarrollo continuo pero gradual, sin prisa pero sin pausa. Los elementos centrales para hacer irreversible la transición al socialismo, según Chávez, son: desarrollar el Poder Popular mediante la conformación de Consejos de Trabajadores y Trabajadoras en las empresas de propiedad social indirecta y directa, y desarrollar instancias de coordinación entre ellos y los consejos comunales, lo que apunta a incentivar la profundización de la participación popular en todos los ámbitos, como estratégica y única garantía de irreversibilidad de los logros sociales conquistados. Tarea que desarrollar tanto en las misiones sociales, como en los nuevos ámbitos de producción socialista, en las milicias populares para

la defensa de la revolución, en las organizaciones sociales y políticas y en los diferentes espacios comunales con orientación socialista. Es decir, que plantea la restitución del poder al pueblo, que tenía secuestrado la oligarquía, con un plan sistemático de desarrollo de institucionalidad revolucionaria paralela, e insiste en la importancia, también estratégica, de la concientización y formación política para el poder popular.

En términos de García Linera, podríamos decir que en Venezuela se ha llegado a otro punto de bifurcación (véase Arkonada 2015c), a un momento de confrontación desnuda o de medición de fuerzas, donde la política se define como un hecho de fuerza. Según Gramsci, dicha experiencia se aproxima al momento de las relaciones de fuerza militares.

¿Cuáles son los proyectos en pugna?, ¿cómo debería ser la transición a otros tipos de formación social en la actual fase capitalista de desarrollo con descomposición?

En el centro de la cuestión está en juego, cada vez más, salvar a la especie humana. Ya lo declaraba Fidel Castro en la Conferencia sobre medioambiente y desarrollo en Río de Janeiro en 1992. Y está muy presente en las constituciones y concepciones sobre el buen vivir, y en el Plan Socialista de la Patria, de Chávez.

Esa es la esencia que retoman las concepciones del buen vivir. Como relata Katu Arkonada (2013), la Constitución política del Estado boliviano aprobada en referéndum popular en enero de 2009, coloca el horizonte del vivir bien como una forma de buscar un equilibrio entre el derecho al desarrollo de un país saqueado y colonizado durante quinientos años, y los derechos de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con ella y las sociedades, en equidad y solidaridad, y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación.

En Venezuela se ha tomado la idea del buen vivir, pero con más frecuencia afirman que la alternativa es impulsar el socialismo

como única opción frente al modelo depredador e insostenible capitalista (Programa de la Patria). Según Jorge Giordani (2009) —en ese momento ministro de Planificación y Finanzas—, se debe salir del capitalismo rentista petrolero para construir el socialismo⁸³ productivo venezolano, pero existen dos grandes riesgos y dos opciones que compiten: el socialismo productivo venezolano versus el socialismo rentístico venezolano.

Para comenzar a construir la primera opción, Chávez, en el «Programa de la Patria», propone plasmar el control efectivo de las actividades conexas y estratégicas asociadas a la cadena industrial de explotación de los recursos hidrocarburíferos, es decir, de todas las cadenas productivas de gas, petróleo y minería. A la vez que considera estratégico elevar la conciencia política e ideológica del pueblo y de los trabajadores petroleros y mineros, así como también su participación activa en la defensa de los recursos naturales de la nación.

Si hasta ahora en América Latina predominan las estrategias reformistas, claramente en los países con gobiernos progresistas moderados, pero también en Bolivia, Ecuador y Venezuela, con las revoluciones democráticas, pacíficas y ciudadanas, dentro del capitalismo,⁸⁴ ¿hay, en el caso de los países que adoptan el sen-

83 Definición de socialismo en la Ley Orgánica de Comunas de Venezuela (2012): «Es un modo de relaciones sociales de producción, centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos, que permita que todas las familias y los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales».

84 La diferencia con el viejo reformismo consiste, como explica García Linera, en que la vía democrática al socialismo entendida como proceso «hace referencia a un despliegue de muchas transformaciones en las correlaciones de fuerzas en la totalidad de los espacios dentro de la estructura estatal y también por fuera de ella; aunque sus

dero del socialismo, una fuerza social-política revolucionaria que respalde una lucha armada para defender y profundizar la revolución si fuera necesario?, ¿es suficiente el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y los gérmenes de otras relaciones de producción para constituirse como la base material de otro proyecto sistemático? Esto último no puede darse en un solo país, y menos aún en los más pobres, dado que las variadas formas de dependencia aún son muy grandes. Teniendo en cuenta que se trata de países de capitalismo rentístico o extractivista, poco diversificados aún y, por lo tanto, con importantes grados de dependencia y atraso, ¿podría haber otro tipo de transición a otros tipos de formación social en la actual fase de capitalismo en descomposición?

¿Hubo en Venezuela condiciones específicas que permitieron plantearse en 2004 el tránsito al socialismo?, ¿cuáles fueron los determinantes? Si hasta ahora se avanzó gradual y lentamente, luego de la muerte de Chávez hay quienes, desde adentro, plantean que están dadas las condiciones para ir a la guerra contra el capital. Y viceversa: el capital se plantea ir a la guerra total contra la Revolución bolivariana. ¿Puede la Venezuela bolivariana plantearse, en soledad, este camino de profundizar la guerra contra el capital y contra el imperio, y construir en su interior relaciones sociales no alienadas de trabajo y de vida?

Esto puede verse dificultado por la delicada situación que plantea la «rebelión de los ricos», ya sea por la vía armada cuando encuentre la oportunidad, o mediante la movilización callejera, o la forma que toma más recientemente: la intensificación de la guerra económica. Esta última ha generado sin duda un retroceso en la

resultados difieren en el tiempo. Pero ciertamente, no se trata de una acumulación de cambios graduales al interior del Estado, tal como propugnaba el viejo reformismo» (2015: 59). Luego, el autor señala los nudos principales, los decisivos y los estructurales que requieren una «revolucionarización» de forma y contenido social para un tránsito democrático al socialismo, aportando una visión enriquecedora a la dialéctica reforma-revolución (63).

calidad de vida alcanzada por el pueblo, lo que afecta la base de legitimidad del proceso revolucionario. Sin embargo, existe conciencia popular de que no son las condiciones de miseria en que estaba sumida la mayoría de la población venezolana hasta fines de los 90.

El eterno retorno del viejo dilema: ¿socialismo en un solo país?

Pecando de repetitivos, retomamos en este apartado ese problema siempre recurrente. Para comenzar, en cuanto a la propiedad social de los medios de producción, si bien en los destacamentos más avanzados de América Latina se define la necesidad de avanzar en ese sentido, no se proclama su inmediata expropiación; excepto aquellos considerados estratégicos y básicos; sendero en el que Venezuela ha ido un poco más allá, en mayor cantidad de ramas productivas, seguida por Bolivia. Pero, en tanto aspecto central del paso a una formación social anticapitalista, solo podrá alcanzarse con la multiplicación planetaria de experiencias revolucionarias, sobre todo en los núcleos duros de la producción capitalista.

Biardeau lo expresa con todas las letras:

Hay que decirlo alto y claro: se avanza en la construcción de una transición poscapitalista paso a paso, a escala nacional, pero una radical socialización-democratización del poder social, político, económico, cultural, ideológico y militar se torna problemática si la situación regional y mundial permanece invariablemente como contexto global capitalista. (2013)

Es el retorno actualizado del dilema del socialismo en un solo país:

[E]s cierto que se avanza hacia regímenes políticos, sociales y económicos con mayor democracia y justicia social, más igualitarios sin duda; se avanza en mayor grado de independencia y autodeterminación en el contexto de la construcción de Bloques Regionales de Poder, que pueden llegar a afectar la geoestrategia imperial dominante, pero no hay que perder de vista que una revolución socialista plenamente consolidada solo es viable en el marco de una transformación estructural de alcance mundial. (Biardeau, 2013)

En las políticas venezolanas, que son vanguardia en el apuntalamiento de la unidad de la Patria Grande Latinoamericana, se evidencia la preocupación de la dirigencia gubernamental por esta cuestión. Un entendimiento muy claro de que no se concretará el tránsito al socialismo sin la extensión y multiplicación de la revolución. Así como, dentro de Venezuela, el Comandante ponía de relevancia que no hay construcción de socialismo con consejos comunales y fábricas socialistas aisladas, rodeadas por un mar de capitalismo, lo mismo comprende y expresa para la totalidad de la Venezuela revolucionaria. Pero esa transición, que obedece a un modelo de revolución democrática y pacífica, no pretende la expropiación violenta de los medios de producción capitalista, sino que propone una extensión geométrica en todos los ámbitos de la vida de las relaciones socialistas (de producción, políticas, culturales, ecológicas, recreativas) pero en convivencia con las relaciones capitalistas; arrinconarlas, a fuerza de los hechos y la vida social que debe ir reemplazándolas.

La propuesta de Chávez es avanzar en todos los frentes. Es la dialéctica entre la política y la economía, entre la necesidad y la libertad. No hay una sin la otra; no hay libertad sin resolución de la necesidad, y no hay necesidades resueltas de manera duradera,

planificada, real, estable, democrática, sin libertad de organización, expresión y poder popular. A la vez que no hay tal democracia ni poder popular sin una férrea defensa (política —no exenta de la crítica—, cultural, ideológica, militar) del proceso de cambios.

Para Biardeau, más que la construcción de una economía socialista, lo que ocurre en una «fortaleza asediada» es la construcción de una economía para soportar las condiciones de una guerra o un asedio internacional.

Es lo que ocurrió con Cuba durante años: una fortaleza que ahora cuenta con nuevos aliados. Por ello es preciso construir no solo el socialismo en una nación, sino un bloque regional de poder que permita evitar el aislamiento económico, político, tecnológico y militar, aprovechando siempre los intersticios que ofrecen las disputas de capitales a nivel internacional, como por ejemplo estableciendo alianzas comerciales con los capitales chinos y rusos.

Para este autor, sin embargo, en Venezuela «habrá quizás “gobierno popular y socialista”, pero transición anticapitalista, por ahora no se ve ni se siente. En ese marasmo ideológico-político, avanzan las fuerzas de la reacción».

Otro camino sería, para Biardeau, el trayecto de las socialdemocracias occidentales, lo cual implica negociar «los términos y alcances del gobierno socialista» con los intereses del medio capitalista, intentando construir formas de economía mixta de bienestar, sin romper con la lógica del capital. Esto último pareciera ser el recorrido de los países más moderados —que se plantean o plantearon un «capitalismo serio», como el caso de Argentina— que, de todas formas, son estratégicos en su continuidad, dado que son aliados y sostén internacional de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador (y también de Cuba). Además, si caen, los que vendrán no estarán a la izquierda, como se ha comprobado con los intentos golpistas fracasados en aquellos países,

los éxitos de golpes institucionales en Paraguay y Honduras, así como con el cambio de gobierno nacional en Argentina.

Los nuevos reformismos

Si para algunas organizaciones o dirigentes sociales y políticos populares, los gobiernos que ocupan Caracas, Quito y La Paz se convierten en enemigos que vencer —a menudo en estrecha asociación con organizaciones abierta o veladamente instrumentales de la política imperialista en la región— (Borón, 2012) mucho más lo son los gobiernos moderados a los que directamente consideran como continuadores o lo mismo que los neoliberales. Sin embargo, basta ver la virulencia con que los atacan desde las oligarquías, desde los grupos de poder más concentrados, los monopolios de la comunicación y las derechas políticas, para darse cuenta de que, al menos, no encarnan sus proyectos, y más bien los molestan y perjudican en sus cuotas de acumulación y dominación ideológica, lo que es una buena noticia para los pueblos.

A esa depreciación de los gobiernos progresistas contribuyen, de manera notoria, intelectuales, periodistas y activistas de la izquierda lightberal que constituye lo que Álvaro García Linera ha denominado recientemente como la «izquierda de cafetín»:

Es una izquierda perfumada que observa el fragor de los procesos desde el balcón, un café o desde la televisión; es una izquierda bien remunerada, es una izquierda que se horroriza del lenguaje guerrero y del olor de la plebe en las calles, le incomoda el estruendo de la batalla y el desorden de una democracia de barricada.

A estos caballeros y señoritas, la verdadera y desbordante lucha de clases plebeya e indígena les resulta incomprendible, la única revolución que conocen es la que han visto resumida en History Channel. Y por ello, la multiforme, a veces desorganizada, lucha

plebeya real por el poder, les resulta totalitaria, tiránica y autoritaria. Portadores de teorías deslactosadas, no tienen ninguna medida concreta, ni una sola propuesta práctica enraizada en el movimiento social, que pueda hacer avanzar los procesos revolucionarios; son, por tanto, los mediocres corifeos internos de la nueva ofensiva imperial, que buscan desestabilizar a los procesos y gobiernos progresistas. Su pseudo radicalismo abstracto e inoperante no apuntala ninguna movilización, ni refuerza la acción colectiva de los sectores populares, campesinos, obreros o indígenas; eso sí, su discurso aglutina el conservadurismo y el racismo de sectores acomodados que, bajo el camuflaje de un discurso pseudo izquierdista o pseudo ambientalista, buscan desprestigiar los procesos revolucionarios. Al no impulsar la movilización de las clases subalternas, ni ser alternativa de poder real, estos pseudo radicales trabajan para los restauradores del neoliberalismo, son los ideólogos del fin del relato del progresismo latinoamericano. (2015b)

Estas palabras nos remiten a aquellas de José Carlos Mariátegui, quien afirmaba oponerse radicalmente a Leopoldo Lugones pero respetándolo, y en seguida aclaraba:

Con el sector político con el que no me entenderé nunca es el otro: el del reformismo mediocre, el del socialismo domesticado, el de la democracia farisea. Además, si la revolución exige violencia, autoridad, disciplina, estoy por la violencia, por la autoridad, por la disciplina. Las acepto, en bloque, con todos sus horrores, sin reservas cobardes. (2007)

Sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de esta intelectualidad, que además no está organizada sino que lanza sus sueros venenosos al viento para ser recogidos con gusto por quienes necesitan

argumentos para destruir los procesos revolucionarios y reformistas en curso, se basa en criterios institucionalistas y liberales para organizar su crítica. Por otro lado, también está una izquierda vinculada al trotskismo, organizada en partidos (en sentido restringido según Gramsci) que desde extremos ideales que nunca fueron capaces de construir, critican la falta de rompimiento con los centros capitalistas internacionales y la no interrupción abrupta de las relaciones sociales de producción capitalistas cual globo que puede ser pinchado.

Aun así, en los procesos de cambio que se acercan más a un reformismo burgués —por las fuerzas que lo conducen y porque no se plantean como horizonte salir del capitalismo, sino construir uno más inclusivo, serio, más justo, etc.—, para las organizaciones revolucionarias se plantea el dilema de si construir «desde adentro» con todas las críticas y luchas que deban darse, o desde afuera de las alianzas que sostienen a esos gobiernos más moderados, tal como se debatía en las experiencias nacionales y populares de los años 40 y los 50. El punto es cuál de las dos posturas favorece la acumulación de fuerza para el pueblo, y la realización de sus intereses, aunque sean los más inmediatos. Es decir, cuáles alineamientos propician avanzar y afianzar las fuerzas populares que permitan en algún momento —de claudicar estos gobiernos o de sobrevenir la reacción— plantearse, hegemонizando la fuerza social política popular, el paso a la lucha anticapitalista. ¿Desde adentro de esa fuerza social política que gobierna o desde afuera? Si fuese la segunda opción, ¿cuáles alineamientos se producen objetiva y subjetivamente? ¿Afianzan el poder de la clase obrera y del pueblo? ¿Qué fracciones sociales acaudillan o dirigen esas fuerzas opositoras?

Un nuevo piso para los nuevos debates

Hemos revisado algunos elementos que remiten al tránsito de la lucha por la liberación nacional a la de liberación so-

cial. Aunque históricamente se han dado de manera imbricada y ha habido elementos de las dos, ha predominado uno u otro carácter. Actualmente se debate en algunos territorios cuál carácter debe predominar. Retornan las mismas preguntas, que se reactualizan en cada oleada histórica de ascenso de las luchas populares: si hay condiciones para superar el capitalismo o se debe y puede reconstituir países independientes con desarrollo capitalista inclusivo o redistributivo.

Hasta ahora, el mapa político latinoamericano aparecía dividiendo en esos tres campos políticos que presentábamos al principio, y en este gran partido de disputa norteamericano la balanza parecía inclinarse —en al menos dos de esos tres campos— a favor de los pueblos, aunque hemos perdido algunos jugadores, e incluso las clases dominantes, ofuscadas ante tanto pueblo protagónico, libran sus luchas también en las calles. Las clases dominantes han logrado grados de avance en la reconstitución de las representaciones políticas de la oligarquía financiera, que se expresa en mejores resultados electorales, algunas con chances de triunfar. Los resultados de las elecciones presidenciales en Argentina y de las legislativas en Venezuela, a finales de 2015, son prueba de ello.

Sin embargo, algunos elementos endógenos críticos hacen tambalear los resultados en aquellos destacamentos más avanzados del campo popular en América Latina: la imposibilidad de avanzar en la expropiación de los medios de producción, porque no lo permite la correlación de fuerzas políticas internas, y menos las internacionales, lo que obliga a la convivencia con el gran capital concentrado y monopólico dentro de los procesos de transición al socialismo. Al tiempo que la construcción de un nuevo Estado y una nueva estatalidad convive con el viejo Estado «corrupto y podrido», y lo más delicado: el modo de elegir autoridades gubernamentales, la democracia liberal y burguesa, que

es un arma de doble filo, en tanto que permitió la llegada de estas fuerzas social-políticas populares a los gobiernos de los Estados, con amplias bases de legitimidad desde dentro del sistema institucional, pero que puede tornarse la vía de su salida, si terminara prevaleciendo la contrarrevolución ideológica en la batalla de ideas que se libra en estos momentos en Nuestra América.

Pero debemos tomar conciencia histórica de que estamos en esa batalla estratégica que libró Cuba en soledad durante muchos años. Durante la oscuridad neoliberal, sumido en la tragedia de la historia, el socialismo parecía una utopía pasada o lejana. Discutíamos cómo sumar voluntades para frenar los despidos, las reducciones salariales, cómo conseguir comida para las ollas populares, cómo eludir los planes restrictivos de «modernización», según el Banco Mundial, para las universidades y la educación en general, cómo difundir la deslegitimidad de la deuda externa, entre otras cosas. Hoy estamos discutiendo cómo transitar al socialismo en importantes territorios de Nuestra América, cómo construirlo, los desafíos y problemas concretos que aparecen, cómo profundizar la unidad latinoamericana. Seamos conscientes de ello. Como afirma García Linera:

Nunca antes se había dado esta sincronicidad de gobiernos progresistas, revolucionarios y sociedades civiles despiertas. Algunos dirán, ¿tiene sus límites esto? Unos son más progresistas, otros son más revolucionarios, pero no importa, tienes un continente que se ha adelantado al mundo. Mientras en Europa y en los Estados Unidos estamos discutiendo cómo le ponemos parches a un régimen neoliberal que se cae a pedazos y que está en su proceso de degradación interna, acá estamos pensando cosas más allá [...] En términos intelectuales, las ideas más sugerentes de cómo construir una civilización que vaya más allá del capitalismo, están emergiendo de América Latina. (2012)

Si bien, sobre todo en el segundo anillo progresista, aunque también en Venezuela, hay un paso a la defensiva de estos proyectos, el debate público y social tampoco se retrotrae a cuestionar el terreno ganado por los pueblos; ciertas conquistas económicas, soberanas y sociales son asimiladas y hasta las opciones políticas de derecha se vieron obligadas a retractarse, en el discurso, de sus posiciones incluso de sus votaciones en contra de, por ejemplo las re-estatizaciones de empresas y servicios públicos, o leyes de ampliación de la ciudadanía. Estamos pensando en el ejemplo cabal de esa derecha que intenta aparecer como moderna y liberal (en su acepción política del término) que en Argentina ha logrado constituir una base social que no había tenido en otras épocas en que el partido militar era su firme expresión, y que, sin embargo ha conquistado voluntades sobre la base de una desideologización preñada, al mismo tiempo, de una defensa de esas conquistas de tal modo que sus referentes máximos deben disimular sus posiciones, esconder sus economistas, y hasta retractarse de sus votaciones en las cámaras legislativas.

En sí mismo es un gran avance conquistado por las luchas populares; de las luchas contra el hambre, la miseria y la desocupación; y de un gran desamparo y abandono social se pasa a discutir qué modelos de sociedad y desarrollo queremos. No porque haya desaparecido el hambre, pero se redujo en proporciones considerables.⁸⁵ En los ámbitos gubernamentales de algunos de nuestros países se ha pasado de festejar el fin de la historia con la absoluta frivolidad de la élite política, a debatir el marxismo en los mismos palacios de gobierno, las estrategias de transición al socialismo, el antiimperialismo. ¡A los más viejos no deja de asombrarnos!

Pero aquellas preguntas que se abren y reabren permanentemente

85 Según Ignacio Ramonet, los gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina sacaron a sesenta millones de personas de la pobreza (Granovsky, 2013).

mente para quienes nos posicionamos desde los intereses populares, solo podrán ser contestadas por la alquimia de la praxis dialéctica de la historia; es decir, de la lucha de clases. Y acerca de cuándo están dadas las condiciones para avanzar, sabemos que no hay ni destinos escritos, ni libros de recetas, sino la posibilidad y necesidad de lectura de la historia e interpretación del presente. No contamos con un observador supra humano que nos diga en qué punto estamos parados de esa serie infinita de paralelogramos de fuerzas que, explicaba Engels, dan origen a una resultante: el hecho histórico. Ni sabemos para dónde disparará el vector de la historia. Sino que, inventar, y tal vez errar, es la única opción habiendo estudiado, debatido y calculado estratégicamente las posibilidades. No censuremos ni el estudio, ni el conocimiento, ni el debate: profundicémoslo... porque el vector de la historia, aunque no lo veamos, se mueve en alguna dirección, según las luchas que se libran.

XII. ¿Fin de ciclo o reflujo del cambio de época en América Latina?

El cambio de época en América Latina y el Caribe puede ser mirado desde la memoria larga como parte de una oleada histórica que comienza en 1959 con el triunfo de la Revolución cubana. Varios autores, por ejemplo Hugo Moldiz en «América Latina y la tercera ola emancipadora» (2012), sostienen de un modo bien fundamentado este enfoque. Nosotros preferimos analizarlo como un proceso que comienza en 1998 con la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela. El triunfo de la Revolución cubana corresponde a otro ciclo histórico del capitalismo en general, de la lucha de clases y de los procesos revolucionarios que en América Latina fueron profundamente derrotados y Cuba es, precisamente, la excepción que confirma la regla. La culminación con éxito de las negociaciones de paz que se llevan a cabo —nada es casualidad— en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, que solo puede venir acompañada de la justicia social y de la participación política de la insurgencia, terminarían de cerrar ese capítulo histórico.

Entendemos que los procesos de los 2000 caben en un contexto histórico distinto, el del capitalismo en crisis, en descomposición, y en otros modos revolucionarios, que dejan de lado la insurrección armada y apuestan por la vía pacífico-electoral.

Desde este último enfoque, podríamos decir que el ciclo histórico del giro político latinoamericano progresista de la última década, o cambio de época, constituye la primera ronda de

experiencia global revolucionaria después del fracaso y caída de la URSS y el campo socialista. Si alejamos el foco de observación hacia una mirada de más largo plazo histórico, lo podemos ver como las primeras experiencias, laboratorios, ensayos, de caminos revolucionarios post URSS, que intentan sobreponerse a errores —autocríticas mediante— del campo popular, a las derrotadas y valiosísimas experiencias de los años 70 —siempre con el foco de dignidad de la Revolución cubana en pie— tomando otro camino: el del laberinto de la democracia burguesa-liberal, usándolo para acceder a los gobiernos.

El desafío actual está en cómo mantener esas sendas pacíficas que encauzaron la rebeldía popular hacia la gestión gubernamental, y que pueden abrir paso a la llegada, también pacífica, de la reacción, como lo estamos viendo hoy en Argentina o Venezuela. En este último caso se manifiesta con matices, pues hablamos de una oposición violenta con tintes racistas y fascistas, pero que utiliza, ahora sí, la vía electoral para acceder a cuotas de poder estatal.

Así, se vive hoy una disyuntiva entre la necesidad de profundizar el cambio o la restauración conservadora, tal como lo viniera advirtiendo el presidente Rafael Correa desde el año 2010. Esta disyuntiva cristaliza sobre todo en dos sucesos importantes, por no decir claves, del momento histórico: la muerte del comandante Chávez en 2013, y la derrota sufrida por el kirchnerismo en Argentina, en noviembre de 2015.

Desde 1998 nos encontrábamos inmersos en un ciclo ascendente de victorias sobre el neoliberalismo que se traducían en triunfos electorales de la izquierda y los proyectos nacional-populares por toda la región. Los avances se sucedían. La recuperación de la soberanía política y económica, que permitía el regreso del Estado a su función social, y una redistribución de la riqueza sin precedentes, a la vez que se recuperaban y aumentaban derechos sociales, tienen un valor incalculable, sobre todo

si comparamos esta realidad con lo sucedido en otras latitudes, como el sur de Europa, especialmente en Grecia.

Además de los avances conocidos del ciclo progresista, ampliamente desarrollados en este libro, es necesario subrayar la resignificación de la democracia que han realizado los procesos de cambio, modificando sus márgenes y ampliando sus límites, con el objetivo de profundizar una democracia plebeya que, por primera vez, hacía coincidir los intereses de las clases populares y mayorías sociales con los nacionales.

Sin embargo, hay que reconocerle a la nueva derecha latinoamericana un logro: haber conseguido, a su vez, resignificar la idea del cambio, con la que ganaron las elecciones en Argentina.

Argentina, punto de inflexión

Esta resignificación podemos visualizarla en un Macri convertido en gigantesco significante vacío, donde caben, más que las demandas insatisfechas de las mayorías sociales —cumplidas en su mayor parte durante la década ganada por el kirchnerismo—, las aspiraciones y anhelos de las nuevas clases medias, a las que se suman el descontento por la inflación, el cepo cambiario y la fatiga cultural por el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, como apunta el investigador del Conicet Esteban de Gori (2015).

Las mejoras en las condiciones de vida no se acompañan «naturalmente», de modo espontáneo, por un avance en la conciencia de que lo conquistado es fruto de las luchas y el reconocimiento de ellas, desde un gobierno popular; sino que, como ha sido debatiendo en América Latina para el caso de los movimientos campesinos, muchas veces ese avance en las condiciones materiales de vida es acompañado por el conservadurismo. Pues lo «natural» en nuestras sociedades capitalistas es la conciencia burguesa. Tal como citábamos en el Capítulo I, Lenin se preguntaba: «¿Por qué el movimiento espontáneo [...] conduce [...] al predominio de la ideología

burguesa?». A lo que contestaba: «Por la sencilla razón de que la ideología burguesa es, por su origen, mucho más antigua que la ideología socialista, porque su elaboración es más completa y porque posee medios de difusión incomparablemente mayores». Y agregaba: «En la sociedad desgarrada por las contradicciones de clase nunca puede existir una ideología al margen de las clases ni por encima de las clases» (1960:53, 55, 56). Esa conciencia «natural» no se desmonta porque en un momento de lucha heroica o ascenso de las masas populares contra las políticas neoliberales se haya encauzado esa rebeldía hacia el voto a propuestas políticas del pueblo, sino que requiere de un mayor y profundo trabajo de formación política de masas que pueda contrarrestar el inmenso poder de fuego de las corporaciones mediáticas, que nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones (NTIC) mediante se cuela en lo más íntimo de nuestros momentos cotidianos. No es que se no hayan realizado avances en ese sentido, pero es evidente que no en la medida necesaria.

Otro analista argentino, Alejandro Grimson, escribe que cuando la derecha se apropió de los términos «cambio» y «futuro», se consumó una derrota cultural (2015). Y Horacio González, fundador del espacio intelectual kirchnerista Carta Abierta, define la victoria de Macri como una conversión ideológica, geopolítica y cultural de amplísimas ramificaciones (2015).

El nombramiento de un operador del conflicto provocado por los patronos del campo, en 2008, como nuevo ministro de Agricultura, de un ex CEO de Shell como ministro de Energía, o de un ex bróker de JP Morgan como ministro de Hacienda, entre otros CEO en variados cargos del Estado, da cuenta de la intención de manejar el país como si fuera una empresa. Y ya sabemos que las empresas en manos de capitalistas tienen como finalidad extraer plusvalía a los trabajadores en beneficio de unas pocas élites.

Pero el triunfo de la antipolítica (o, lo que es lo mismo: la neutralización política de las masas) en Argentina nos deja otra imagen simbólica, la de Lilian Tintori, esposa del líder sedicioso venezolano Leopoldo López, festejando con Macri en Buenos Aires el triunfo electoral. Imagen que, junto con las declaraciones bravuconas de Macri pidiendo la aplicación de la «Cláusula democrática» de Mercosur a Venezuela, remite a las conexiones internacionales de esta nueva derecha, que ha encontrado en el nuevo presidente argentino un liderazgo del siglo XXI. Como sostuvo Atilio Borón, en una nota de balance (2015), podemos sintetizar la posición internacional del nuevo gobierno como un «Yes, Sir!!» al Tío Sam.

Porque errábamos caracterizando a Capriles como la nueva derecha del siglo XXI. Mirábamos a Venezuela cuando en Argentina se estaba gestando la contrarrevolución del siglo XXI, camuflada bajo miles de globos de colores.

Esta nueva derecha tiene que agradecer sus conexiones internacionales a nefastos gurús del marketing político como el venezolano J. J. Rendón y el ecuatoriano Jaime Durán Barba.

La nueva derecha, la contrarrevolución en marcha

Hoy en día, en América Latina, detrás de todo líder importante de la derecha hay un gran asesor de marketing político, que lo ayuda, no solo a construir discursos, sino a articular a las élites económicas y oligopolios mediáticos en el plano nacional, y a lograr alianzas en el plano internacional.

Esta nueva derecha construye un escenario pospolítico donde el conflicto inherente a toda forma de hacer política (supuestamente) desaparece en beneficio de la telepolítica; donde la correlación de fuerzas en el Estado desaparece en beneficio de la gestión tecnocrática; donde el pueblo que construye, aun con dificultades, la izquierda, se fragmenta e individualiza en forma

de «familias» o «ciudadanos»; en definitiva, donde la ideología da paso a la «aireología».⁸⁶

Las dos principales características de esta nueva derecha son, por un lado, el no impugnar los avances sociales conseguidos por los gobiernos progresistas —no hay un clima propicio ni en los niveles nacionales ni internacionales para tal impugnación—; y, por otro, atacar e intentar explotar las grietas y puntos débiles de los procesos de cambio, sean la llamada «inseguridad», la inflación o la corrupción.

La imposibilidad, por ahora, de impugnar esos avances sociales y algunas políticas soberanas, como la reversión inmediata de las renacionalizaciones de empresas y recursos estratégicos, expresa además cierta sedimentación en la conciencia del pueblo de que constituyen conquistas intocables que serán difíciles de revertir. Las clases dominantes lo han hecho en el pasado mediante variados mecanismos de disciplinamiento —que hemos analizado en los primeros capítulos— que les han llevado largos años aplicar, dictaduras militares genocidas mediante.

La realidad es que los dos sucesos más negativos en este cambio de época, la muerte de Chávez y la victoria de Macri, impactan profundamente en el proceso de integración regional. La muerte del Comandante provocó una ralentización del proceso de integración política, sobre todo del ALBA y de Unasur; y Macri es la punta de lanza de la desintegración regional que va a apuntalar el intento de que el Mercosur firme un tratado de libre comercio con la Unión Europea y el acercamiento del eje Atlántico a la Alianza del Pacífico.

Mientras tanto, no podemos perder de vista la permanente injerencia imperialista que, vía golpes de Estado clásicos como

86 Hay que subrayar que esta lucha ideológica que se está disputando entre modelos antagónicos para construir una nueva derecha que dispute los gobiernos de la región, no sería posible sin el apoyo a todos los niveles, pero sobre todo el económico, de los Estados Unidos.

en Honduras, parlamentarios como en Paraguay y el impeachment en Brasil, o vía revoluciones violentas de «colores», como en Venezuela, conforma una arista más del turbulento escenario que vivimos en América Latina y el Caribe.

¿Fin de ciclo? La disputa por el relato

En este escenario, nos encontramos con que intelectuales de una izquierda progre insisten sobre el fin de un ciclo progresista construido sobre «populismos de alta intensidad» (Svampa, 2015).

Esta crítica es tremadamente mecanicista. Estos académicos critican una realidad innegable como es la continuidad de las políticas extractivistas. Pero en sus análisis se les suele olvidar los quinientos años de colonialismo y treinta de neoliberalismo como origen de este modelo. En cualquier caso, su planteamiento es simple: 1) tenemos economías extractivistas, 2) hubo un «boom de las commodities», 3) se generó una redistribución parcial a partir del alto precio de los recursos naturales, 4) llegó la crisis del 2007-2008 y con ella el descenso de los precios y las importaciones/exportaciones, y 5) no se pueden mantener las tasas de redistribución y, por lo tanto, se termina el ciclo progresista.

Debemos precisar, en primer lugar, que el auge y caída del precio de las commodities fue el mismo para todos los países de América Latina y el Caribe, sin embargo hubo muchas diferencias en cómo se empleó la plusvalía obtenida en Venezuela, Bolivia o Ecuador respecto de, por ejemplo, México, Colombia o Perú.

En segundo lugar las y los teóricos «progres» analizan muy bien los problemas de la economía de extracción, y podemos coincidir en una buena parte de su diagnóstico; el problema llega a la hora de ofrecer alternativas. Si tomamos a uno de los gurús del posextractivismo, como Eduardo Gudynas, resulta que como solución al «extractivismo depredador» propone una transición al «extractivismo sensato», para después pasar al

«extractivismo indispensable» (2013). Es decir, que la salida al extractivismo es... ¡el extractivismo! Eso sí, saquemos las pancartas de «Otro extractivismo es posible» para desgastar todo lo posible a los gobiernos progresistas.

En definitiva, no hay tal «fin de ciclo» porque el proyecto de las izquierdas y los gobiernos nacional-populares en América Latina sigue vigente. La soberanía y reconquista de derechos así como la redistribución de la riqueza y la universalización de los servicios, no pueden ser impugnados ni abolidos por una derecha que tiene que esconder su proyecto promercado y pronegocios, aunque luego en la intimidad de la embajada de los Estados Unidos lo reivindiquen.⁸⁷ Es más, hasta el momento el único gobierno en este ciclo que se ha perdido a manos de la derecha mediante la vía electoral ha sido el gobierno de centro izquierda de Bachelet a manos de un Piñera que pasó sin pena ni gloria por el gobierno chileno y que luego dio paso otra vez a Bachelet (sin que eso significara un giro progresista, lamentablemente).

Sin embargo, Macri no es Piñera, ni tampoco Capriles, por muchas conexiones mafiosas que ambos comparten. Macri representa una nueva derecha mucho menos gorila, el producto mejor logrado por el imperialismo en la región, que si juega sus opciones de manera inteligente después del buen desempeño electoral, puede tener la capacidad de dar marcha atrás a parte de las conquistas del cambio de época progresista nuestroamericano. Porque ha logrado, por primera vez en casi ochenta años, vertebrar una fuerza social-política conducida por los cuadros políticos de la oligarquía argentina y las fracciones hegemónicas de la burguesía (aliadas ambas al capital monopólico transnacional, sobre todo yanqui) basada en la alianza con otras fracciones burguesas menos con-

⁸⁷ Wikileaks reveló la sentencia pronunciada por Macri en la embajada de los Estados Unidos: «Somos el primer partido promercado y pronegocios en cerca de ochenta años de historia argentina que está listo para asumir el poder» (O'Donnell, 2011)

centradas, sectores de las capas medias y parte del movimiento obrero organizado, así como algunos segmentos de la capa más pauperizada del proletariado. Es decir, que ha logrado dividir al pueblo y sumar fracciones populares a esa alianza antipopular. Ello le otorga una base de legitimidad para abrir paso, y que el capital retome la iniciativa para mejorar su tasa de plusvalía.

Es por eso que, a pesar de que tras la derrota en Argentina muchos se sumarán a las tesis del «fin del ciclo», sería mucho más adecuado ahora hablar de un empate catastrófico entre la necesidad de la izquierda y las fuerzas nacionales y populares de reactualizar su proyecto para volver a seducir a las mayorías sociales (al tiempo que se pone a la cabeza de la resistencia), y la necesidad de la nueva derecha de desarrollar exitosamente su proyecto en Argentina —que es el del imperialismo—, para desde ahí poder irradiar e implementarse en otros países de nuestra región.

En ese sentido, no debemos preocuparnos por lo que haga el enemigo, ayudado por el fuego amigo de cierta intelectualidad progresista, sino por lo que hacemos desde las izquierdas y organizaciones populares latinoamericanas y caribeñas. Y para ello el primer paso es construir un diagnóstico común basado en los avances de este cambio de época, los posibles retrocesos, las tensiones y los desafíos que tenemos por delante.

Avances

En este ámbito es donde más consenso hay pues aunque algunos analistas afirmen que «el progresismo no fue un avance» (Zibechi, 2015b), las mayorías sociales realmente han visto como el ciclo progresista permitía una irrupción plebeya en el Estado y la configuración de un horizonte nacional-popular que redistribuía y reducía las desigualdades y a la vez iba más allá de un capitalismo de Estado, pues, como no se cansa de explicar el

vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en la medida en que el excedente de los recursos naturales, que por primera vez pertenecen al pueblo, se utiliza para necesidades sociales, este constituye valor de uso.

Todo lo anterior bajo el marco de un nuevo constitucionalismo transformador en el caso de los países que conforman el «núcleo duro bolivariano», que además en el caso de Bolivia y Ecuador, impulsa una ruptura epistemológica con el capitalismo y la modernidad marcando el Buen Vivir como complemento al socialismo, y permite visualizar un horizonte poscapitalista más allá del actual escenario posneoliberal.

Sin duda, en este breve recuento no puede faltar el ámbito geopolítico. A diez años de la derrota del ALCA en Mar del Plata, la región ha avanzado en el ámbito de la integración latinoamericana y caribeña primero a nivel interno constituyendo mecanismos de integración política como el ALBA, la Unasur o la Celac; y después hacia afuera impulsando un relacionamiento Sur-Sur, donde América Latina tiene más protagonismo que nunca en el nuevo mundo multipolar.

Retrocesos

Probablemente si en algo no se ha avanzado, y supone no solo un freno que impide navegar más veloz y a más profundidad, sino un ancla que detiene el movimiento, ha sido en derrotar la hegemonía neoliberal en el ámbito cultural. Y esto es algo que incide directamente en las derrotas electorales de Argentina y Venezuela.

El escenario posneoliberal, y por tanto la posibilidad de ir más allá, no va a terminar de completarse mientras persista el american way of life. La reducción de la pobreza y de la desigualdad, —fruto de la distribución de la riqueza fruto de la recuperación de la soberanía sobre los bienes comunes naturales y sociales—, además de paliar el hambre, la desesperación y desamparo de

las masas, ha permitido democratizar el consumo y generar en millones de personas unas ansias y anhelos de consumo que no se ha sabido traducir en alternativas, más allá de descolonizar/ democratizar el acceso al mall, shopping o centro comercial. En otras palabras: hubo redistribución de ingresos sin educación política o formación ideológica crítica del capitalismo.

A lo anterior se une una pérdida de la mística que acompañó el surgimiento de nuestros procesos. La gestión no es sexy. La izquierda se construyó sobre una ética, y también una estética, de la resistencia; pero una vez que se abre el cambio, hay que mantenerlo, gestionarlo y transformarlo en políticas públicas, y eso no es tan atractivo para una buena parte de la izquierda como la resistencia en la barricada. Esa mística retornó en los momentos de agudización del enfrentamiento social, pero no se supo canalizar en la creación y fomento de más genuina organización popular.

Necesitamos reconstruir una cosmovisión nuestroamericana del momento histórico actual, que venga acompañada de una nueva mística. Construcción de nuevos imaginarios para lo que debemos impulsar los medios de comunicación contrahegemónicos. La batalla de ideas es fundamental en la construcción de nuevos imaginarios posneoliberales y poscapitalistas.

Por otra parte, son y fueron claves algunas ambigüedades que tienen que ver, por un lado, con la falta de una favorable correlación de fuerzas para poder profundizar los proyectos políticos a favor de los intereses populares, y por otro, con la falta de decisión en los momentos oportunos. Pondremos como ejemplo de esto el caso argentino, que si bien no puede ser generalizable a todas las experiencias, y menos a las del núcleo duro, sirve para graficar esas ambigüedades. Nos referimos a lo que Atilio Borón relató como:

la experiencia kirchnerista en su integralidad y con sus múltiples contradicciones: asignación universal por hijo y concentración

empresarial; extensión del régimen jubilatorio y regresividad tributaria; desarrollo científico y tecnológico (ARSAT I y II, etcétera) y sojización de la agricultura; orientación latinoamericana de la política exterior y extranjerización de la economía. (2015b).

Estas ambigüedades constituyen grandes desafíos, sobre todo para los países latinoamericanos con mayor desarrollo capitalista, aunque dependientes, en los que se viene perdiendo o se está al borde de perder los gobiernos populares. Para el caso argentino, el nuevo gobierno de derecha, mientras tenga una correlación de fuerzas favorable, intentará profundizar los segundos elementos de cada una de estas duplas contradictorias, mientras que desde el campo popular deberemos enfocarnos en defender los primeros.

Tensiones

Probablemente la principal de las tensiones que viven nuestros procesos la escenifica el debate en torno al extractivismo y al modelo de desarrollo. Podemos constatar la incapacidad de un sector de la izquierda para construir alternativas más allá de la crítica a los gobiernos progresistas, sobre todo cuando una buena parte de las luchas contra el neoliberalismo tenían que ver con solucionar o exigir la satisfacción de necesidades inmediatas, demandas cumplidas en su mayor parte. Hemos constatado asimismo la incapacidad de otro sector de la izquierda «progre» en proponer alternativas reales al extractivismo.

Podemos incluso coincidir con la visión de algunos analistas que plantean un «extractivismo transitorio posneoliberal» (Gaudichaud, 2015), pero debemos ser conscientes de que las únicas iniciativas que trataron de ir más allá, sin rehuir el debate de fondo —como la iniciativa Yasuní en Ecuador—, fracasaron por

la hipocresía imperante en este debate. Y el desafío de fondo es precisamente cómo lograr un equilibrio entre el derecho al desarrollo, a «crecer» para poder continuar combatiendo el hambre y la pobreza, y los derechos de la Madre Tierra.

Es un hecho la catástrofe ambiental y climática que padecemos, y más cuando incorporamos en la ecuación del desarrollo a China, India, y su necesidad de sacar de la pobreza a cientos de millones de personas; pero, o construimos colectivamente una nueva ecuación que incluya tanto la social como la justicia ambiental, o la humanidad está condenada a su extinción, probablemente mucho antes de que siquiera alcancemos a divisar el fin del capitalismo.

Desafíos

Para definir los desafíos del momento actual, es necesario pensar con un intelectual que, este sí, combina teoría y praxis revolucionaria desde el barro de la gestión pública-estatal. Nos referimos una vez más a Álvaro García Linera, marxista, matemático, sociólogo y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es imprescindible escuchar o leer la conferencia magistral que dictó en el Encuentro Latinoamericano Progresista, de Quito en septiembre de 2015, donde además de hacer una brillante radiografía de la izquierda «lightberal», a la que define como «de cafetín» o «deslactosada», como hemos visto, deja una crítica para los agoreros del fin del ciclo: «Al no impulsar la movilización de las clases subalternas, ni ser alternativa de poder real, estos pseudo radicales trabajan para los restauradores del neoliberalismo, son los ideólogos del fin del relato del progresismo latinoamericano» (2015b).

Poco después, en el mes de octubre, en Montevideo, García Linera introdujo cinco propuestas para contrarrestar las vulnerabilidades de los procesos progresistas (Vicepresidencia de Bolivia, 2015b). Vamos a revisarlas y tratar de ir un poco más allá, desa-

rollando estas propuestas a modo de desafíos para las izquierdas latinoamericanas y caribeñas.

La primera propuesta sería «reconocer y analizar en qué decisiones nos equivocamos». Al ser importante la autocrítica, que siempre es revolucionaria si se hace desde el compromiso y la lealtad con los procesos de cambio, necesitamos ir más allá, y no pensar solo en los errores cometidos, ni siquiera en los aciertos de esta nueva derecha del siglo XXI, sino pensar, sobre todo, en el «electorado del siglo XXI», al que debemos volver a seducir con un proyecto político renovado. Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron no ya las preguntas, sino el entrevistador y sobre todo, el público al que iban dirigidas. Este electorado, compuesto en una buena parte por clases medias e importantes segmentos de la juventud, ya ha dejado atrás el neoliberalismo en el imaginario, aunque, como hemos visto, aún nos impregna por completo el ámbito cultural. O reactualizamos el proyecto, profundizándolo y haciéndolo seductor para este electorado del siglo XXI, o esta vez sí deberemos hablar de fin de un ciclo. Las clases dominantes han tenido cierto éxito en cortar la memoria histórica de una parte importante de la sociedad, dado que parte de esa base electoral que pudieron recuperar ha sufrido en carne propia o en la de su familia, el drama del desamparo, la desocupación y el hambre, al tiempo que otra parte también ha sido partícipe en los procesos de resistencias aunque solo sea desde las estrategias de supervivencia alternativas a los mercados.

En segundo lugar, García Linera nos desafía a luchar para «mantener la unidad del bloque social que fue el constructor del proceso de democratización continental». Esto nos remite a una discusión más amplia sobre el sujeto del cambio y, yendo aún más lejos, a una trilogía necesaria: el sujeto —por muy fragmentado que esté—, el proyecto político —también a veces difuso, pero siempre con algunas certezas en cuanto a horizontes y líneas rojas

de no traspasar— y la importancia de los liderazgos —que cohesionan y articulan tanto al sujeto como a las demandas. Si uno de los tres componentes de la ecuación falla (sujeto, proyecto o líder), no hay posibilidades de llevar adelante un proyecto emancipador.

En una entrevista que le realizamos recientemente al vicepresidente de Bolivia, García Linera nos trasladaba la fórmula del éxito de la llegada al gobierno del IPSP-MAS, justamente basada en la combinación histórica de los elementos de esta ecuación, en la que Evo Morales en el proceso de construcción de su liderazgo, supo tejer alianzas articulando y sintetizando demandas:

Es un momento entre el año 2003 y 2005, son muchos líderes que corresponden a momentos distintos de condensación de esta forma multitud [...] y todos se mueven en el mismo nivel de reconocimiento. Pero ¿quiénes van destacando? Aquellos que van logrando articularse al resto y se esfuerzan por recoger el discurso y proponer discursos que articulen a los demás. Y ahí poquito a poco Evo va emergiendo. El hecho de entrar a la carrera electoral lo ayuda: hay que hacer un plan de gobierno [...] ¿Qué es lo que está en la calle? ¡Nacionalización! Plan de gobierno: voy a nacionalizar. ¿Qué más está en la calle? Asamblea Constituyente, pues plan de gobierno es: Asamblea Constituyente. Otros compañeros están haciendo su lista ¿no? Que tractores, que... y el Evo tiene la habilidad de decir: Este va a ser nuestro plan de gobierno [...] De alguna manera el Estado también le ha dado, ha sido parte de la construcción del liderazgo tan potente. Pero ¿por qué logró sobresalir? Por eso, por buscar hilar, por tejer [...] Un tejedor. Esa es la virtud de él. Entonces ahí sí juega el papel del discurso. El discurso te puede permitir quedarte en tu conglomerado o irradiarte en la medida en que hay disponibilidad colectiva. Sin disponibilidad colectiva objetiva y subjetiva, el discurso no crea nada. (Klachko, 2015)

La tercera recomendación del vicepresidente de Bolivia para contrarrestar las vulnerabilidades de nuestros procesos es la capacidad de gestión económica, unida a una cuarta, que es que esta gestión beneficie al núcleo duro de cada proceso, «a aquel que no nos va a abandonar nunca, a los más pobres, a los más humildes, a los más maltratados». Es correcta la afirmación, pero, ¿qué hacemos cuando llegamos al límite de la capacidad de redistribución dentro del capitalismo, como parece que están llegando algunos de nuestros procesos que no terminan de definir un horizonte socialista claro y, por lo tanto, se desnudan los límites, y más ante la arremetida de la derecha con su disfraz de gestores-tecnócratas? Aquí debemos tener de nuevo presente el trabajo del húngaro Mészáros sobre el «sistema del capital poscapitalista» que estuvo vigente en la Unión Soviética, al no haber podido destruir el metabolismo social del capitalismo —las dimensiones capital, trabajo y Estado—, para pensar el horizonte más allá del posneoliberalismo que hoy vive una buena parte de América Latina. Uno de los primeros pasos para profundizar la transformación de los modelos económicos debería ser una reforma del régimen impositivo/fiscal, pero ahí tenemos el ejemplo de lo sucedido en Ecuador cuando Correa intentó una reforma para que pagaran más los que más tienen, y las clases medias salieron a la calle a movilizarse en defensa del 2% más rico, en algún tipo de paradoja sociológica, porque esperan algún día ser parte de ese pequeño porcentaje.

En quinto lugar, García Linera apuesta por la «repolitización y reideologización» de la sociedad. Es de sobra conocida la fórmula «Lenin+Gramsci: derrotar e incorporar», que viene proponiendo el Vicepresidente. Y si bien en el ámbito electoral podemos tener alguna discrepancia, si hablamos de la construcción de hegemonía, no hay nada más cierto en que, simplificando, solo con Lenin nos quedamos en fuerza sin irradiación, y solo con

Gramsci en ternura sin victoria. Pero el debate teórico sobre la hegemonía va a aterrizar de manera abrupta en Argentina, donde vamos a ver cuánta irreversibilidad han construido los procesos nacional-populares durante el cambio de época en el continente. Argentina es la prueba de fuego para saber cuánto de lo conquistado durante la década ganada en derechos sociales, políticos, económicos, culturales, etc., puede ser revertido, y cuánto ya es irreversible, porque el sentido común construido, es decir, la hegemonía posneoliberal, lo ha convertido en irreversible, al menos sin volver a pasar por un holocausto social.

Incluso dejando a un lado las batallas electorales, importantes pero no fundamentales, en la medida en que el ciclo progresista no corre el riesgo de perder ningún otro gobierno de izquierda hasta las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2017 — cuando Rafael Correa no será el candidato de Alianza País—, probablemente el ámbito de la integración es la mejor síntesis del momento de turbulencias que recorre el continente.

A los avances ya descritos en el ámbito de la integración y de las relaciones Sur-Sur en la geopolítica del mundo multipolar, podemos sumar algunos retrocesos, o cuando menos no-avances, como la ralentización del ALBA, o la propia puesta en marcha del Banco del Sur; también emergen nuevas tensiones, como las que supone la Alianza del Pacífico o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP); y como desafío principal queda continuar profundizando los mecanismos de integración política regional a pesar del caballo de Troya que va a suponer la presencia de Macri en las próximas cumbres de los mecanismos de integración (Mercosur, Unasur y Celac).

Escrito entre Buenos Aires, Ciudad de México, La Paz y Bilbao, de abril a diciembre de 2015

Posfacio. Cartografía de la lucha de clases en América Latina y el Caribe: posneoliberalismo vs. capitalismo offshore

En primer lugar, es necesario recordar que en todo proceso de revolución surge también la tendencia a la contrarrevolución; esto tiene carácter objetivo. Triunfa en definitiva la corriente que logra la mayor fuerza, la que se guía por una línea y un plan más acertados, más inteligentes. Es decir, la posibilidad de predominio de la revolución o la contrarrevolución se decide en el terreno subjetivo, depende de la conducción de una y otra.

Schafik Hándal (1990)

Siempre es difícil cerrar un trabajo que se enfoca en la historia reciente y presente, pues suceden muchos hechos importantes desde que se escribe hasta que se logra su edición y publicación.

Este trabajo no es una excepción. Desde diciembre de 2015 han ocurrido sucesos excepcionales que cambian el panorama geopolítico y la cartografía de la lucha de clases en Nuestra América. Con este posfacio pretendemos abordarlos, haciendo previamente un repaso de las etapas del ciclo posneoliberal que abrió una nueva etapa en nuestra región, al tiempo que intentamos un análisis sobre los acontecimientos de los últimos meses, que nos sitúan en un punto de inflexión y marcan enormes desafíos para los pueblos. Nos referimos centralmente a los avances políticos de las fuerzas de derecha, expresados en el plano electoral y judicial que han logrado desalojar a dos gobiernos progresistas y estratégicos, dado su peso político y económico, como Argentina y Brasil, y que han ganado elecciones en Bolivia y Venezuela, modificando la correlación de fuerzas subjetivas y objetivas en la región.

Nuestra América se encuentra entonces en un punto de bifurcación, una guerra de posiciones entre las fuerzas sociales y políticas que protagonizan y conducen (o condujeron) el ciclo progresista posneoliberal, y aquellas que apuestan desesperadamente por la restauración neoliberal en forma de capitalismo offshore, un capitalismo que muestra la agudización de algunas tendencias que podrían indicar una modificación del ciclo capitalista dentro de su fase ya iniciada de descomposición.⁸⁸

El momento político nos deja una derecha que ha acumulado fuerza en el plano electoral y solo necesita ganar las elecciones (y a veces como en Brasil, ni siquiera eso), mientras que la izquierda necesita ganar, pero sobre todo estar en la calle y reactualizar el proyecto político antineoliberal.

No es momento de lamentar los reveses sufridos por la izquierda, sino de reflexionar sobre las nuevas formas de contrarrestar la ofensiva del capitalismo offshore contra los pueblos de América Latina y el Caribe, de retomar la ofensiva que nos lleve a otro momento de acumulación política y social, que abra otra etapa del ciclo progresista. Pero también es necesario ejercer la crítica y a la autocritica para rectificar a tiempo en el caso del núcleo duro del cambio de época progresista (Venezuela, Bolivia y Ecuador) y para construir algo diferente en aquellos países en los que los pueblos han pasado a la oposición y resistencia.

Para pensar el momento actual es necesario comprender las diversas etapas que ha mostrado el ciclo progresista que convirtió a América Latina y el Caribe en la única región del mundo donde se comenzó a construir una alternativa al sistema capitalista o al

88 Hemos explicado en el Capítulo 2 las características que adquiere el capitalismo en las últimas décadas, que muestran el inicio de una fase de descomposición del sistema de acumulación de capital, tendencia de largo plazo que no impide su desarrollo deforme. Se debe tomar en cuenta que descomposición no es sinónimo de desaparición, sino que remite a la dificultad de reproducción en las relaciones que son propias, proceso que puede durar todavía siglos.

menos a sus patrones de acumulación más agresivos, desarrollados por medio de las políticas neoliberales.

Fase previa, o acumulación originaria del ciclo progresista (1989-1998): las resistencias al neoliberalismo

Caía el muro de Berlín, se desintegraba el proyecto histórico de la izquierda comunista mientras las fracciones más concentradas del capital arrasaban con las conquistas históricas de las y los trabajadores y los pueblos. Sin embargo, al tiempo que nos decían que había llegado el fin de la historia y de la lucha de clases, en el Sur del mundo comenzaba a germinar una resistencia al neoliberalismo todavía embrionaria durante El Caracazo (1989) y ya más organizada en el levantamiento zapatista (1994), así como otros procesos de resistencia contra las consecuencias de las políticas neoliberales primero y de lucha contra esas mismas políticas después.

Primera fase del ciclo progresista (1998-2003): la irrupción heroica del posneoliberalismo nacional-popular

La potencia plebeya de resistencia al neoliberalismo se transforma en proyectos políticos que apuestan no ya por la resistencia, sino por la toma del poder, o al menos de los gobiernos como primer paso. Ello se da dentro de las formas constitucionales o institucionales vigentes, como parte de una estrategia que se teje dentro de un período contrarrevolucionario abierto luego de la derrota de las fuerzas revolucionarias plasmadas en las dictaduras cívico-militares de mediados de los 70.

La destrucción social del neoliberalismo y la crisis provocada por la pérdida de hegemonía de las élites políticas y económicas dejan un vacío político que es aprovechado por los proyectos nacional-populares para llegar a los gobiernos. El comandante Hugo Chávez en Venezuela (1998), Luiz Inácio, Lula, da Silva

en Brasil (2002) y Néstor Kirchner en Argentina (2003) abren el camino para el cambio de época en América Latina y el Caribe.

Al final de esta primera fase se refuerza la disposición de lucha desde abajo y desde arriba y la construcción heroica del posneoliberalismo con la derrota infligida por el pueblo de Venezuela al golpe de Estado contrarrevolucionario de abril de 2002.

Segunda fase del ciclo progresista (2004-2006): pico de acumulación política

A Chávez, Lula y Kirchner se les suman Evo Morales en Bolivia (2005) y Rafael Correa (2006), en Ecuador, al mismo tiempo que se derrotaba el proyecto imperial conocido como ALCA, en noviembre de 2005, poco después de que los gobiernos revolucionarios de Cuba y Venezuela, con Chávez y Fidel como arquitectos de la integración, impulsaran, en diciembre de 2004, el ALBA, y nacieran, también en ese período de dos años, valiosos instrumentos al servicio de la liberación de los pueblos como Telesur o la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.

Se producen algunos «golpes de timón» claves que muestran el cambio de rumbo en los escenarios políticos nacionales, como las nacionalizaciones de los hidrocarburos en Bolivia, las asambleas constituyentes en Bolivia o Ecuador, o el pedido de perdón por parte del Estado argentino por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.

Al auge del antiimperialismo en la región, se suma la afirmación del carácter socialista de la Revolución bolivariana. En este horizonte del Socialismo del siglo xxi se alinean la Revolución democrática y cultural de Bolivia y la Revolución ciudadana de Ecuador, con el socialismo comunitario y el «Buen Vivir» como horizontes de época.

Tercera fase del ciclo progresista (2007-2012): la estabilización del proyecto posneoliberal

Al núcleo duro de gobiernos progresistas se suma Centroamérica con la llegada de los sandinistas al gobierno nacional de Nicaragua (2007, aunque Daniel Ortega gana las elecciones en noviembre de 2006) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador (2009). También constituyen un avance en la correlación de fuerzas políticas favorable a los pueblos la llegada al gobierno de Fernando Lugo en Paraguay (2008) y el viraje hacia posiciones progresistas del gobierno de Manuel Zelaya en Honduras.

En esta fase son derrotados, gracias a la movilización popular, los intentos de golpe de Estado en el núcleo duro bolivariano: Bolivia (2008) y Ecuador (2010), aunque no logran ser frenados los golpes a los gobiernos populares de Honduras en 2009 (cuando se incorpora al ALBA), y Paraguay en 2012, inaugurando así la nueva estrategia de «golpes blandos» de la derecha, perpetrados desde las propias instituciones del Estado liberal.

Estas piedras en el camino de la construcción progresista y revolucionaria de Nuestra América tienen su contracara en las nuevas constituciones aprobadas en referéndum que consolidan la refundación de los Estados posneoliberales en Bolivia y Ecuador (con el antecedente de Venezuela en 1999). En los nuevos textos constitucionales se logra cristalizar el cambio en las correlaciones de fuerzas sociales y políticas a favor de los pueblos.

Al mismo tiempo, América Latina y el Caribe entran de lleno en la transición al mundo multipolar, con una presencia, cada vez mayor, de Rusia y sobre todo de China en la región, además del nacimiento, en junio de 2009, del BRIC (Brasil, Rusia, India y China, al que se sumaría Sudáfrica en abril de 2011), que contrarrestan la hegemonía yanqui en su tradicional patio trasero y generan condiciones para un desarrollo económico endógeno con mayores grados de soberanía.

Cuarta fase del ciclo progresista (2013-2016): reflujo y crisis

La muerte del comandante Chávez (marzo de 2013) abre de manera simbólica una etapa de reflujo, de crisis en el bloque nacional-popular, que se traduce en un pico de desacumulación política y social, que culmina con tres derrotas electorales para la izquierda y los proyectos nacional populares o el progresismo (de distinto signo, pero derrotas al fin y al cabo), en Argentina (octubre de 2015) —el único gobierno de izquierda y/o nacional-popular perdido en las urnas desde 1998—; Venezuela (diciembre de 2015) y Bolivia (febrero de 2016), además de un golpe político-institucional-mediático contra el gobierno brasileño de Dilma Rousseff (mayo de 2016).

Esta fase deja un debate no saldado para la izquierda, el del Estado. Decía René Zavaleta Mercado (1983), sociólogo marxista boliviano, que la historia de las masas es una historia que se hace contra el Estado. Pues este históricamente expresa las relaciones de dominación, y aunque aparenta estar por encima de los intereses de las distintas clases y ser árbitro, produce los instrumentos institucionales necesarios para la reproducción de la clase dominante. Lo mismo afirma Jorge Víaña (2006), por lo tanto todo Estado, en última instancia, niega a las masas, aunque pretenda expresarlas. Probablemente esto se ve más claro en los procesos del segundo anillo progresista, y nos ayuda a entender parcialmente lo sucedido en Argentina o Brasil.

Sin embargo, en el caso de los procesos que se han planteado cuestionar el poder de la clase dominante y al sistema mismo, el Estado se constituye como «de transición», casi como un «Leviatán a contramano», tal como lo denomina Miguel Mazzeo (2014), pues expresa nuevas correlaciones de fuerzas que permean las instituciones, modifican las reglas de juego y se proponen apuntalar la construcción de poder popular.

En la dialéctica contradictoria de las transiciones, la lógica de la inercia estatal obstaculiza, al tiempo que potencia, las experiencias populares autogestionarias. Es un Estado que se reforma a sí mismo; por ejemplo, mediante las reformas constitucionales del núcleo duro bolivariano, lo que no sucedió en ninguno de los países del segundo anillo progresista, en los cuales ese viejo monstruo y sus lógicas de arbitrio bajo envolturas sumamente democráticas favorecieron la reconstitución de la iniciativa cultural, económica, institucional, comunicacional de las fuerzas restauradoras del orden neoliberal; al tiempo que las fuerzas políticas que condujeron los gobiernos populares de este segundo anillo priorizaron la lucha desde arriba desvalorizando la auto organización popular, salvo en los momentos de agudización del enfrentamiento en que intentan apelar a la movilización de las masas. En cambio, en el primer anillo se apela constantemente a la lucha desde abajo como reaseguramiento del proceso revolucionario y como senda de construcción del socialismo.

Si bien hemos entrado en una fase de crisis del ciclo progresista, no se puede hablar de su fin. En primer y evidente lugar, porque si bien la clase dominante ha logrado desalojar del gobierno y del aparato del Estado a algunos gobiernos populares mediante elecciones (Argentina) o maniobras leguleyas y judiciales (Brasil), no han caído los gobiernos populares del núcleo duro del cambio de época progresista: Bolivia, Ecuador, y Venezuela; ni tampoco los de Nicaragua y El Salvador. Aunque hayan perdido dos procesos electorales parciales y, sobre todo en Venezuela, se hayan agudizado las contradicciones, el enfrentamiento y la polarización social, no se ha detenido la construcción revolucionaria expresada

fundamentalmente en las comunas,⁸⁹ con el apoyo del Estado revolucionario.

Además de Cuba, los tres proyectos que se plantearon ir más allá de las relaciones capitalistas en el largo plazo están en pie, lo que indica que la batalla estratégica de nuestro tiempo es la defensa de esos procesos.

La fase en la que entra el ciclo progresista se caracteriza entonces por una guerra de posiciones en la que la izquierda debe hacer un buen diagnóstico y balance del breve ciclo de derrotas electorales, del golpe de Estado en Brasil, y en general del reflujo en la capacidad de resistencia y movilización política de las fuerzas de izquierda en el continente.

Pero, ¿cuáles son las características de esta nueva etapa del ciclo progresista? ¿Cuáles delinean el capitalismo offshore del siglo xxi?

Nueva derecha: Es una derecha sin proyecto. Hasta el momento, ninguno de los gobernantes de derecha ha conseguido materializar un proyecto político anti-posneoliberal que haya cuajado. Ni Uribe en Colombia, ni Piñera en Chile, ni Peña Nieto en México. No hay proyecto, pero sí construcción del discurso aprovechando las debilidades y errores cometidos por los gobiernos de izquierda. Mauricio Macri, como gerente de la Argentina, es la gran prueba de fuego para la derecha offshore, que avanza hasta donde puede con el objetivo de maximizar la explotación del trabajo y la concentración de riqueza, y retrocede en la medida en que se mella su legitimidad y potencia electoral.

89 En la actualidad (noviembre de 2016) existen 1 646 comunas que agrupan a 46 605 consejos comunales según el contador que publica el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (<http://consulta.mpc.comunas.gob.ve/index.php>). La página web fue consultada el 16 de noviembre de 2016, pero estas cifras son modificadas permanentemente a medida que crece la cantidad de comunas y consejos comunales.

¿Por qué es nueva? Porque tiene un discurso –también testeado por encuestas y consultoras– más modernizador hacia afuera. Aunque, en el caso de Argentina, defienda a genocidas y torturadores de las dictaduras cívico-militares,⁹⁰ tiene un discurso sobre los derechos humanos. Aunque sus políticos, en su fuero interno, sean conservadores y retrógrados (como se muestra en diversas declaraciones), aceptan –o al menos no cuestionan por ahora– derechos civiles como, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario y otras. No se presentan tan abiertamente, como en el pasado, con la cruz y la espada en la mano, sino que apelan como instrumento disciplinador a la despolitización de las masas. De ahí los globitos de colores utilizados en las campañas electorales en vez de banderas y consignas.

Nueva estructura de clases sociales: Los gobiernos progresistas redistribuyeron la riqueza sin politización social (afirmación que se cumple en menor medida en el núcleo duro bolivariano, pero que también explica parte de los problemas que viven estos procesos). Las clases medias de origen popular no encontraron otra alternativa, al elevar sus niveles de renta y consumo, que el american way of life, o cultura del shopping. El ciclo progresista no logró derrotar la hegemonía del capitalismo en el plano cultural, y una vez que las clases populares alcanzan niveles de consumo que hasta hace poco pertenecían a otras clases sociales, acaban interiorizando las preferencias políticas de estas. La clase vuelve, por tanto, al centro de la disputa política en esta nueva fase del ciclo progresista, pero sin que la alternativa posneoliberal se haya transformado en una alternativa anticapitalista o socialista.

90 Los vínculos con las dictaduras cívico-militares son directos en algunos casos, como los lazos económicos de la familia empresarial de Macri, que se enriqueció como contratista del Estado junto a los grupos económicos que formaron parte de la llamada «patria financiera». Además, es visible la participación de militantes defensores de los genocidas en los actos de la nueva derecha en Argentina y entre los diputados que votaron a favor el impeachment en Brasil.

Nuevas vías de restauración hegemónica del capital o de la fuerza social-política de la oligarquía financiera: Los golpes en Honduras, Paraguay y Brasil demuestran, como afirman Flax y Romano (2016), que

el diseño institucional de nuestros sistemas políticos formalmente democráticos y representativos sigue siendo permeable a la capacidad de dominio de las minorías privilegiadas: ya no parece ni necesario ni adecuado usar la fuerza para quitarle el poder del Estado a gobiernos que resultan incómodos.

Tampoco fue necesario usar la violencia organizada o la insurrección armada del pueblo para quitarles los gobiernos a los neoliberales de los 90 y principios de los 2000. Las fuerzas social-políticas que lograron expresar los procesos de resistencias y luchas del ciclo de la rebelión de los 90 llegaron a los gobiernos por medio de los votos. Es decir, que en esos momentos de crisis orgánicas o de hegemonía, la oligarquía financiera pierde el comando de los aparatos estatales y el régimen democrático burgués permite el ascenso de gobiernos populares, así como ahora, por esa vía, llegan los gobiernos restauradores o de derecha. Nuestras revoluciones o reformas pacíficas, y por ello graduales e inconclusas, pueden verse atrapadas en la trampa de las elecciones democráticas y la libre expresión. Es el dilema de construir el socialismo dentro de las formas de un capitalismo democrático⁹¹ y a escala nacional.

91 Utilizamos el concepto de «capitalismo democrático» pues, como explicaba Atilio Borón, la expresión «democracia capitalista» es una expresión equívoca porque supone que en dicha forma estatal lo esencial es el componente democrático mientras que el carácter capitalista es apenas una tonalidad que modifica de modo accesorio el funcionamiento de la democracia. Las democracias en el capitalismo contemporáneo son «capitalismos democráticos», en donde lo esencial es el carácter capitalista de una formación social y su expresión política, y lo accesorio, prescindible, descartable es la

A los golpes tradicionales se les suman los llamados golpes suaves (que poco tienen de suaves), con la intervención imperialista norteamericana mediante ONG's que buscan impulsar «primaveras latinoamericanas», canalizando fondos de Usaïd, NED o el Departamento de Estado, en muchos casos (como el boliviano) de la mano de fundaciones de derecha como la Konrad Adenauer alemana.

Profundización del parasitismo financiero: Como muestra Jorge Beinstein, se refuerza la tendencia a la financiarización, tendencia que se venía expresando desde inicio del milenio, que muestra un estancamiento inestable entre 2009 y 2013 y, aunque luego de 2014 se desinfla, en diciembre de 2015 casi triplicaba los derivados globales de 1998.⁹² Se puede confirmar, por tanto, como están intrínsecamente ligados la profundización de la financiarización de la economía y la decadencia y descomposición del sistema en su conjunto.

Por otro lado, Beinstein agrega que «la financiarización integral de la economía hace que su contracción comprima, reduzca el espacio de desarrollo de la economía real» (Beinstein, 2016: 3). Esto afecta, sin duda, aquellos espacios a los cuales las experiencias posneoliberales destinaban parte de su producción para obtener divisas con las cuales financiar, a su vez, el desarrollo endógeno.

democracia. Lo primero, recordaba Von Hayek, es una necesidad; la democracia, en cambio, es una conveniencia, siempre y cuando no altere el funcionamiento de aquél. (Borón, 2000: 161-164).

92 «En diciembre de 1998, los derivados globales llegaban a unos 80 billones de dólares, equivalentes a 2,5 veces el Producto Bruto Global de ese año, en diciembre de 2003 alcanzaban los 200 billones de dólares (5,3 veces el PBG) y a mediados de 2008, en plena euforia financiera, saltaron a 680 billones (11 veces el PBG), la recesión de 2009 los hizo caer: para mediados de ese año habían bajado a 590 billones (9,5 veces el PBG). Se había acabado la euforia especulativa y a partir de allí las cifras nominales se estancaron o subieron muy poco reduciendo su importancia respecto del Producto Bruto Global: en diciembre de 2013 rondaban los 710 billones (9,3 veces el PBG) y luego se produjo el gran desinflado: 610 billones en diciembre de 2014 (7,9 veces el PBG) para caer en diciembre de 2015 a 490 billones (6,2 veces el PBG)» (Beinstein, 2016).

Nuevo terrorismo mediático: La guerra de cuarta generación, conducida por el imperialismo, tiene un papel crucial en esta nueva fase del ciclo progresista. En muchos casos los medios de comunicación masiva en manos privadas complementan a los partidos políticos de derecha, sustituyéndolos directamente cuando estos están muy desacreditados, cumpliendo su misma función de ariete contra los gobiernos de izquierda, construyendo matrices de opinión que rotan sobre la corrupción, narcotráfico, inseguridad ciudadana o incapacidad política como elementos centrales. Así el Estado Mayor Conjunto de la oligarquía financiera está constituido por los agentes del imperialismo y las corporaciones empresarias y mediáticas.

La lucha de clases tiene una expresión fundamental en el espacio público mediático, especialmente en las redes sociales, que se convierten en un campo de batalla como hemos podido observar durante las campañas electorales en Argentina, Venezuela y Bolivia, así como legitimando el golpe mafioso de Temer y el conjunto de la derecha en Brasil.

Ya lo dejó escrito Gene Sharp, uno de los ideólogos del golpe suave: «La naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado [...] Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas» (cit. en Telesur, 2015b). Es por ello que es imposible entender esta nueva fase del ciclo progresista sin analizar el papel de los grandes medios de comunicación como arma psicológica del capitalismo offshore. El lobo se viste con piel de cordero.

Nueva intelectualidad: De forma complementaria a los medios de comunicación, la derecha ha ido construyendo una lumpen burguesía intelectual necesaria para construir su relato, para fragmentar al pueblo y convertirlo en individuos «ciudadanos» consumidores, difuminando la lucha de clases y amortiguando las medidas de shock de la nueva derecha. Son las y los herederos del posmodernismo y el new age que suavizaron o disfrazaron el efímero triunfo

ideológico del capital luego de la caída del campo socialista con el relato sobre el fin de los grandes relatos totalizadores, valga la redundancia. Actualmente logran captar partes de la juventud con nuevas formas de rebeldía light que no apuntan a cuestionar las contradicciones ni las injusticias estructurales del sistema.

Nuevas formas de destrucción capitalista: los sujetos de la restauración neoliberal no operan u operaron solo en los países con gobiernos progresistas. Donde la izquierda es oposición se producen horrores inimaginables. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, la desaparición selectiva de militantes y referentes populares en Colombia, o el asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres son algunos entre los muchos ejemplos de las cuotas de destrucción humana, social y de bienes comunes a las que el capitalismo puede llegar con tal de mantener o elevar la tasa de ganancia. Si bien ello constituye una lucha histórica del capital –para contrarrestar la tendencia inevitable a la baja de la tasa de ganancia– el horror que producen encuentra nuevos laberintos.

Nuevas formas de desintegración y de imperialismo: Diez años después de la derrota del ALCA, la Alianza del Pacífico (AP) asoma como un peligro que busca desgastar y erosionar los instrumentos de la integración latinoamericana, peligro aún mayor que el ALCA, si cabe, en la medida en que la AP incursiona también en el ámbito de la integración política y no solo económica del libre comercio. Es una herramienta de desintegración, complementaria del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP). Ya con la presencia de los Estados Unidos, además de contar en un inicio con Chile, como doble pivote entre la AP y el TPP, busca frenar la creciente influencia geopolítica de China.

Nueva geopolítica continental: Sin embargo, hay motivos para la esperanza, el mundo multipolar ya está aquí y Nuestra América

desempeña un papel central en él. El declive de la hegemonía estadounidense, junto con el rol cada vez más ambicioso de China y Rusia en el tablero geopolítico, genera condiciones más favorables para la lucha por la independencia y la soberanía. América Latina se convierte en un referente en cuanto a zona de paz con el avance del fin del conflicto armado en Colombia. La paz con justicia social y participación política de la insurgencia no es un hecho, pero sí un horizonte visible que nos anima a seguir caminando. La rectificación de los Estados Unidos restableciendo las relaciones con Cuba, que deberían llevar a su normalización, una vez que se levante el bloqueo contra la Isla, o la entrada de Bolivia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son elementos que permiten visualizar un nuevo tablero geopolítico en el que librará esta guerra de posiciones contra el capitalismo offshore. En este sentido, la batalla estratégica pasa por defender las posiciones de avanzada conquistadas: los gobiernos revolucionarios.

¿Qué hacer?

Debemos hacernos la misma pregunta que se hacía Lenin en 1902, acerca de cuál es la estrategia que debe guiar a las izquierdas latinoamericanas y caribeñas en este momento histórico, en esta coyuntura política que nos ha tocado vivir.

Pero para ello, como nos muestra Álvaro García Linera (2016), nos es más útil el Lenin que ya había hecho la revolución y gobernado, el Lenin que en 1921 hacía autocritica y escribía: «Cometimos el error de querer emprender el paso inmediato a la producción y distribución comunistas. Es inevitable pasar de la táctica del asalto directo a la del asedio, gradualidad, rodear».

Lo cierto es que entramos en un nuevo período de luchas defensivas, y si entendemos la historia, como nos enseñó Marx, por oleadas, las revoluciones también tienen momentos ascen-

dentes y descendentes. En ese sentido, es necesario volver a acumular, política y socialmente, para una segunda oleada que necesariamente tiene que nacer desde el núcleo duro bolivariano, Bolivia, Venezuela, Cuba, Ecuador, acompañados por Nicaragua y El Salvador.

Por ello decimos una vez más que la estrategia fundamental de las luchas de los pueblos en este punto de inflexión en el que nos encontramos pasa por defender esas experiencias diversas mediante las que se desarrolla la revolución en dicho núcleo duro. Debemos tratar de crear un escudo protector para que puedan seguir creciendo las experiencias de construcción de poder popular que constituyen la revolución silenciosa y menos conocida de las bases revolucionarias, al tiempo que debemos entender que solo manteniendo los gobiernos revolucionarios pueden continuar esas construcciones, aun con todos los sacrificios que los procesos revolucionarios implican.

Volviendo a Lenin, el revolucionario ruso afirmaba que la base para la construcción del socialismo era «soviets + electricidad». En ese sentido, el programa político que debemos construir en esta nueva etapa del ciclo progresista pasa por una fórmula similar. Nuestros soviets son el poder popular, la formación política, la creación de nuevos liderazgos y de una ética revolucionaria incorruptible. Y nuestra electricidad es la eficiencia y la técnica en resolver caminos productivos alternativos a los que nos marcan los capitalismos parasitarios y dependientes, y que apunten a resolver necesidades inmediatas de nuestros pueblos, y en construir nuevas formas y medios de comunicación si queremos romper la hegemonía del capitalismo en el ámbito cultural.

Por último, retomar la senda revolucionaria de la crítica y la autocrítica constructiva, genuina y desde adentro, nos dará la fuerza para retomar la iniciativa popular, rectificando a tiempo en el núcleo duro nuestroamericano, y repensando los modos de organización y

luchas populares en aquellos territorios en los que hemos pasado a la resistencia y defensiva de nuestras históricas conquistas.

Queremos cerrar este trabajo con la esperanza de haber contribuido en algo al conocimiento y utilización del arsenal teórico-criticó de la lucha de clases, de los procesos de luchas sociales de nuestro pasado inmediato «desde abajo» y «desde arriba», a la aproximación al entendimiento de las luchas más actuales y al debate fraternal pero serio, autocriticó y riguroso acerca de dichas experiencias. No pretendemos, sobre todo en los últimos capítulos, que remiten a procesos tan actuales, definir sentencias cerradas o acabadas, sino abrir debates que refuercen espacios de lucha que hagan posible avanzar en el camino de la transformación popular emprendido, frenar la restauración neoliberal y seguir reinventando siempre renovadas vías para la liberación nacional y social de nuestros pueblos, de la Patria nuestroamericana.

Katu Arkonada y Paula Klachko

Julio 2016

Índice

Prólogo – Atilio Borón	7
I. Elementos teóricos para la interpretación de los procesos emancipadores desde la perspectiva del materialismo histórico.....	21
Clase en sí o clase para sí.....	22
Las luchas y su expresión política.....	28
Lucha desde arriba y lucha desde abajo.....	30
Las fases moleculares del proceso de formación de un movimiento histórico colectivo.....	36
II. Conceptualización y caracterización del capitalismo actual.....	44
Metabolismo social del capital.....	45
Del neoliberalismo primitivo a la acumulación por desposesión.....	47
La doctrina del shock como disciplinamiento social.....	55
El imperialismo, fase superior del capitalismo.....	58
Dimensiones de la crisis capitalista actual.....	65
El capitalismo en su fase de descomposición.....	72
III. Resistencias al neoliberalismo desde el campo popular.....	75

La campaña contra la deuda externa.....	77
Los "saqueos" en Argentina y el Caracazo en Venezuela.....	79
EZLN, un ejemplo de resistencia y construcción desde abajo.....	80
MST, un ejemplo de lucha por la reforma agraria.....	83
Foro Social Mundial, ¿otro mundo es posible?.....	91
Los 90: la constitución de una fuerza social de protesta.....	93
Resistencias insurreccionales al neoliberalismo que han desembocado en gobiernos de izquierda o progresistas. La configuración de la lucha de clases.....	97
Argentina.....	101
Bolivia.....	110
Ecuador.....	119
V. La «lucha desde arriba». Avances revolucionarios o reformistas desde los gobiernos.....	124
Las luchas desde arriba y desde abajo.....	125
Caracterización de los diferentes gobiernos progresistas.....	132
El Foro de Sao Paulo como expresión del cambio de época.....	144
Venezuela como vanguardia del giro a la izquierda latinoamericano.....	146
Venezuela en cifras.....	148
Referencias ideológicas y expresiones políticas.....	149

Crítica y autocrítica.....	150
Golpe de timón.....	160
El legado de Chávez.....	161
VII. Bolivia como expresión de la potencia emancipatoria de los movimientos sociales y pueblos indígenas.....	165
La conformación de un nuevo sujeto político y bloque histórico.....	166
Avances del proceso de cambio.....	168
Guerra de posiciones, empate catastrófico y punto de bifurcación.....	171
Las tensiones creativas de la revolución.....	176
VIII. La revolución ciudadana en Ecuador.....	184
Movimiento Indígena Ecuatoriano (MIE).....	186
Asamblea Constituyente y nueva Constitución.....	190
Recuperación de la soberanía.....	193
Tensiones internas.....	195
Las luchas desde abajo y a la izquierda y la construcción de poder popular.....	202
De la construcción de una fuerza social de protesta a la construcción de poder popular.....	203
El poder dual.....	204
La construcción del poder popular en Venezuela.....	209
Una mirada desde Bolivia.....	220
¿Son los procesos de construcción de poder popular germen de una sociedad socialista?.....	226

Tensiones en el proyecto emancipador nuestroamericano	231
Mapa político suramericano.....	231
Propiedad privada o propiedad social.	
Los caminos de la soberanía.....	234
¿Capitalismo de estado o estados de transición?.....	238
Los modelos productivos.....	240
La inversión extranjera.....	252
Desafíos para la construcción de un proyecto político emancipador.....	261
¿Ahora es cuando?	266
El eterno retorno del viejo dilema: ¿socialismo en un solo país?.....	271
Los nuevos reformismos.....	274
Un nuevo piso para los nuevos debates	276
XII. ¿Fin de ciclo o reflujo del cambio de época en América Latina?.....	281
Argentina, punto de inflexión.....	283
La nueva derecha, la contrarrevolución en marcha.....	285
¿Fin de ciclo? La disputa por el relato.....	287
Avances.....	289
Retrocesos.....	290
Tensiones.....	292
Desafíos.....	293

Posfacio. Cartografía de la lucha de clases en América Latina y el Caribe: posneoliberalismo vs. capitalismo offshore	298
Fase previa, o acumulación originaria del ciclo progresista (1989-1998): las resistencias al neoliberalismo	300
Primera fase del ciclo progresista (1998-2003): la irrupción heroica del posneoliberalismo nacional-popular	300
Segunda fase del ciclo progresista (2004-2006): pico de acumulación política	301
Tercera fase del ciclo progresista (2007-2012): la estabilización del proyecto posneoliberal	302
Cuarta fase del ciclo progresista (2013-2016): reflujo y crisis.....	303
Quinta fase del ciclo progresista (2016-): guerra de posiciones entre el posneoliberalismo y el capitalismo offshore	304
¿Qué hacer?	311
Bibliografía	321

Bibliografía

AILLÓN GÓMEZ, TANIA, (2003) «La fisura del Estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia» en Observatorio Social de América Latina (OSAL), a. IV, n. 10, enero-abril, Buenos Aires, Clacso, disponible en: <http://bit.ly/1TVd5al>.

ALMEYRA, GUILLERMO, (2012) «Gobierno, Estado, movimientos sociales y poder dual en Bolivia» en Rebelión, 13 de febrero, disponible en: www.rebelion.org/noticia.php?id=144598.

ALONSO, AURELIO, (2009), «Una pieza clave del pensamiento crítico, revolucionador y creativo» (reseña de Elogio de la diversidad: globalización, multiculturalismo y etnofagia, de Héctor Díaz-Polanco) en La Ventana, 27 de abril, disponible en: <http://bit.ly/22mi7PE>.

AMIN, SAMIR, (1998) La desconexión. Hacia un sistema mundial policéntrico [1988], Madrid, Editorial IEPALA.

AMIN, SAMIR, (2003) Más allá del capitalismo senil. Por un siglo XXI no norteamericano, Buenos Aires, Paidós.

ANDERSON, PERRY, (2003) «Neoliberalismo: un balance provvisorio» en Sader, Emir y Gentili, Pablo, (comps.), La trama del neoliberalismo, Buenos Aires, Eudeba, Clacso.

ARCEO, LUIS, (2015) «El modelo económico social comunitario productivo boliviano», en Seminario Marx Vive, 10 de septiembre, La Paz, disponible en: <http://bit.ly/22miz0b>.

ARCEO, Nicolás; GONZÁLEZ, MARIANA Y MENDIZÁBAL, NURIA, (2010), «Concentración, centralización y extranjerización. Continuidades y cambios en la post-convertibilidad» (documento de trabajo n. 6), febrero, Buenos Aires, Centro

de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), disponible en: www.centrocifra.org.ar/docs/DT%20n4.pdf.

_____, (2010b), «La recuperación industrial durante la postconvertibilidad» (documento de trabajo n. 6), julio, Buenos Aires, Cifra, disponible en: www.centrocifra.org.ar/docs/DT%20n6.pdf.

ARKONADA, KATU, (2013) «Proceso de cambio en Bolivia, avances y desafíos» en Rebelión, 18 de marzo, disponible en: www.rebelion.org/noticia.php?id=165419.

_____, (2014) «La batalla de Venezuela es nuestro Stalingrado» (entrevista a Atilio Borón) en Rebelión, 24 de junio, disponible en: www.rebelion.org/noticia.php?id=186416.

_____, (2015) «2005-2015: del entierro del ALCA al nacimiento del soft power chino en América Latina y el Caribe», en Karg, J. M. y Lewit, A., Del no al ALCA a Unasur. Diez años después de Mar del Plata, Buenos Aires, Ediciones del CCC, disponible en: <http://bit.ly/1U7daUz>.

_____, (2015b), «Estados Unidos: la hegemonía no termina de morir, la fase de dominación ya ha comenzado», en Telesur, 6 de mayo, disponible en: <http://bit.ly/1qFkGhU>.

_____, (2015c) «Venezuela, punto de bifurcación» en La Jornada, 4 de abril, México DF, disponible en: <http://bit.ly/22vRNTf>.

_____, (coord.), (2012) Transiciones hacia el Vivir Bien, o la construcción de un nuevo proyecto en el Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, Viceministerio de Cultura, disponible en: www.rebelion.org/docs/161862.pdf.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, (2012) «Ley Orgánica de las Comunas», disponible en: www.me.gob.ve/media/contenidos/2012/d_26525_323.pdf.

AYALA, DIEGO, (2013) «Forex, mercado US5.3 billones diarios» en El Economista, 12 de noviembre, disponible en: <http://bit.ly/1TGRFOk>.

AZPIAZU, DANIEL, (2005), Las privatizaciones en Argentina, Buenos Aires, Miño y Dávila.

BARÁN, PAUL Y HOBSBAWM, ERIC, (1963) Las etapas del crecimiento económico, México DF, Fondo de Cultura Económica.

BARRERA, MARIANO Y MANZANELLI, PABLO, (2015) «La naturaleza política y la trayectoria económica de los gobiernos kirchneristas» (documento de trabajo n. 14), octubre, Buenos Aires, Cifra, disponible en: https://www.cta.org.ar/IMG/pdf/dt_14.pdf.

BASUALDO, EDUARDO, (2000) Concentración y centralización del capital en Argentina durante la década del 90, Buenos Aires, Unqui.

BECERRA, MARTÍN Y LACUNZA, SEBASTIÁN, (2012), WikiMediaLeaks, Buenos Aires, Ediciones B.

BECHTOLD-ROGNON, EVELYNE, (2010) «Balance de ocho años de gobierno Lula: "un social liberalismo a la brasileña"» (entrevista a Franck Gaudichaud) en Cetri, 29 de septiembre, disponible en: <http://bit.ly/1WlLaWjY>.

BEINSTEIN, JORGE, (2016) «Alertas rojas: señales de implosión en la economía global» en ALAI, 7 de junio, disponible en: <http://www.alainet.org/es/articulo/178662>.

BIARDEAU, JAVIER, (2013) «Avanzar en programas de investigación-acción sobre los problemas de la transición al socialismo en Venezuela ¿Socialismo en un solo país?» en Aporrea, 19 de junio, disponible en: <http://bit.ly/25ioWXM>.

BORÓN, Atilio, (1997) Estado, capitalismo y democracia en América Latina, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones de UBA, disponible en: <http://bit.ly/1Y18w0a>.

_____, (2000) Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

_____, (2003) «La sociedad civil después del diluvio neoliberal» en Sader, Emir y Gentili, Pablo, comps., La trama del neoliberalismo [1999], Buenos Aires, Eudeba/Clacso.

_____, (2004) «La actualidad del ¿Qué hacer?» (Estudio introductorio) en Lenin, V. I., ¿Qué hacer?, Buenos Aires, Editorial Luxemburg.

_____, (2004b) «La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: nuevas realidades y urgentes desafíos», en OSAL, n. 13, enero-abril, Buenos Aires, Clacso, disponible en: <http://bit.ly/20Ryq5q>.

_____, (2004c), Imperio & imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri, Buenos Aires, Clacso.

_____, (2006) «Clase inaugural: por el necesario (y demorado) retorno al marxismo», en Borón, A., Amadeo, J. y González, S., La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas, Buenos Aires, Clacso.

_____, (2008) «Teoría(s) de la dependencia» en Realidad Económica, n. 238, agosto-septiembre, Buenos Aires, IADE.

_____, (2011) «Entrevista a Álvaro García Linera» (video), 29 de diciembre, disponible en: <https://vimeo.com/34349461>.

_____, (2012) América Latina en la geopolítica del imperialismo Buenos Aires, Luxemburg.

_____, (2013) «El imperialismo: ¿fase superior o “lo nuevo” del capitalismo? Breve reflexión sobre el título de la clásica obra de Lenin», 27 de septiembre, disponible en: <http://bit.ly/1TvbMeQ>.

_____, (2015) «¡Yes, Sir!», en Tercera Información, 5 de diciembre, disponible en: <http://bit.ly/1TrRQPl>.

_____, (2015b) «Argentina: un balotaje crucial para América Latina», 29 de octubre, disponible en: <http://bit.ly/1M5ZnOi>.

_____, (2015c) «Cuba y Estados Unidos: ¡ni un tanto así!» en Pled, 6 de enero, disponible en: <http://bit.ly/1Xsk4jk>.

CALLINICOS, ALEX, (2009) Imperialism and Global Political Economy, Cambridge, Polity.

CASTAÑEDA, JORGE, (1993) La utopía desarmada, México DF, Seix Barral.

CASTRO RÚZ, FIDEL, (1985) «Discurso pronunciado en la sesión de clausura del Encuentro sobre la deuda externa de América Latina y el Caribe», Palacio de las Convenciones, La Habana, 3 de agosto, disponible en: <http://bit.ly/1TrY3L6>.

_____, (1992) «Discurso en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo», Río de Janeiro, 12 de junio, disponible en: <http://bit.ly/20scv4H>.

_____, (2007) La historia me absolverá [1953], La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

CEPAL, (2014) Panorama social de América Latina 2013 disponible en: <http://bit.ly/1sNjpak>.

CIPCA, (2008) «Informe de Unasur confirma masacre en los hechos del 11 de septiembre en Porvenir-Pando» en Cipca, 4 de diciembre, disponible en: <http://bit.ly/1RJJDP5>.

COMPOSTO, CLAUDIA Y PÉREZ ROIG, DIEGO, (2012) «Presentación. Trazos de sangre y fuego: ¿continuidad de la acumulación originaria en nuestra época?» en Theomai, n. 26, julio-diciembre, pp. IXXII, disponible en: <http://bit.ly/1WyBlwc>.

CONSULADO DE BOLIVIA EN ROSARIO, (2015) «Ministro de Economía de Bolivia: “El Estado es la locomotora de la economía y no los privados”», 19 de octubre, disponible en: <http://bit.ly/1Rjh44j>.

CORREA, RAFAEL, (2011), Ecuador: de Banana Republic a la no república, Bogotá, Random House.

COTARELO, MARÍA CELIA, (1999) «El motín de Santiago del Estero. Argentina, diciembre de 1993» (documento de trabajo n. 19), Buenos Aires, Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (Pimsa), disponible en: <http://bit.ly/1Tlefmn>.

_____, (2008) «Las protestas contra el FMI y la política estadounidense en Argentina reciente (2000-2006)» en López Maya, M., Iñigo Carrera, N. y Calveiro, P., Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina, Buenos Aires, Clacso.

CUEVAS, AGUSTÍN, (1977) El desarrollo del capitalismo en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores.

CHÁVEZ, HUGO, (2012), «Golpe de timón», Caracas, Ediciones Correo del Orinoco, disponible en: <http://bit.ly/1U9Aju>.

CHESNAIS, FRANÇOIS, (2015) «Notas sobre el momento actual del capitalismo» (primera parte) en Herramienta, 7 de febrero, disponible en: <http://bit.ly/1Y1ijmU>.

DACHEVSKY, FERNANDO, (2011) «La Enfermedad Holandesa y los límites de la industria argentina», en El Aromo, n. 60, mayo-junio, disponible en: <http://bit.ly/1XN5AEf>.

DÁVALOS, PABLO, (2003), «Plurinacionalidad y poder político en el movimiento indígena ecuatoriano» en OSAL, a. III, n. 9, enero, Buenos Aires, Clacso, disponible en: <http://bit.ly/1XcY47b>.

DÍAZ-POLANCO, HÉCTOR, (2007) *Elogio de la diversidad: globalización, multiculturalismo y etnofagia*, México, DF, Siglo XXI Editores.

_____, (2015) *El jardín de las identidades. La comunidad y el poder*, México, DF, Grupo Orfila Valentini.

DE GORI, ESTEBAN, (2015) «Bastilla amarilla. El frente argentino», en Telesur, 25 de noviembre, disponible en: <http://bit.ly/1TVMRVA>.

FFE, (2015) «Bolivia descarta nacionalizar filial minera de la empresa japonesa Sumitomo», La Paz, 27 de julio, disponible en: <http://bit.ly/1VtK6Mp>.

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN), (2005) «Sexta Declaración de la Selva Lacandona», junio, disponible en: <http://bit.ly/1Uk8Z7O>.

ESCÁRZAGA, FABIOLA (2015), «El Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK), la insurgencia aymara en Bolivia», Revista Pacarina del Sur, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, disponible en: <http://goo.gl/O9d5wf>.

FAO, (2015), «Mapa del hambre», disponible en: <http://www.fao.org/3/a-i4674s.pdf>.

FERNÁNDEZ, JULIÁN (2015) «Milicia Bolivariana: ¿Independencia y Patria Socialista?» en Cuadernos de Marte, a. 6, n. 8, enero-julio, disponible en <http://goo.gl/MGDfHw>.

FLAX, SABRINA; ROMANO, SILVINA; VOLLENWEIDER, CAMILA, (2016) «Golpes Siglo XXI: Nuevas estrategias para viejos propósitos. Los casos de Honduras, Paraguay Brasil» en Celag.org, 3 de julio, disponible en <http://goo.gl/UWOCE6>.

FRIEDRICH HAYEK, (2005) Camino de servidumbre [1944], Madrid, Alianza Editorial, resumen disponible en: <http://bit.ly/1U0Fqfx>.

FUKUYAMA, FRANCIS, (1992) El fin de la Historia y el último hombre, Buenos Aires, Editorial Planeta.

GALINDO, CHRISTIAN, (2013) «El 60% de las tierras del país están tituladas y saneadas» en La Razón, 5 de mayo, La Paz, disponible en: <http://bit.ly/1UfCp6Z>.

GARCÍA LINERA, ÁLVARO, (2010) «La construcción del Estado», conferencia magistral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 9 de abril, disponible en: <http://bit.ly/1Ph8T56>.

_____, (2011) Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del proceso de cambio, La Paz, Vicepresidencia, disponible en: <http://bit.ly/22wj8on>.

_____, (2012) «Conferencia en la clausura del VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos», Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, octubre.

_____, (2013) Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, La Paz, Vicepresidencia, disponible en: <http://bit.ly/1RsVGpf>.

_____, (2015) Socialismo comunitario. Un horizonte de época, La Paz, Vicepresidencia, disponible en: <http://bit.ly/22wjk6Z>.

_____, (2015b), «El proceso boliviano en clave regional», II Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP), 29 de septiembre, Quito, disponible en: <http://bit.ly/1iU5OZv>.

_____, (2016) «Del Estado y la revolución al Estado de la revolución en Lenin», Banco Central de Bolivia, 19 de mayo, disponible en www.youtube.com/watch?v=2Elvk2NIPMk.

GAUDICHAUD, FRANCK, (2015) «¿Fin de ciclo? Los movimientos populares, la crisis de los “progresismos” gubernamentales y las alternativas ecosocialistas» en CADTM, 5 de noviembre, disponible en: <http://bit.ly/281tC2W>.

GIORDANI JORGE, (2009) La transición venezolana al socialismo, Caracas, Vadell Hermanos Editores.

GOBIERNO DE VENEZUELA, (2015) «Venezuela en cifras», mayo-julio, disponible en: <http://bit.ly/1TPavoE>.

GONZÁLEZ, HORACIO, (2015) «¿Quién ganó?» en Página/12, 24 de noviembre, Buenos Aires, disponible en: <http://bit.ly/24hXT93>.

GONZÁLEZ CASANOVA, PABLO, (2001) «El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas» en OSAL, n. 4, junio, Buenos Aires, Clacso, disponible en: <http://bit.ly/1UfHn3E>.

GRAMSCI, ANTONIO, (1975) *El materialismo histórico y la filosofía de B. Croce*, México, DF, Juan Pablos Editor.

_____, (1986) *Cuadernos de la cárcel*, t. III, México DF, Ediciones Era.

_____, (1997) *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión.

_____, (2002) «*Es spontaneidad y dirección consciente*» [Escritos políticos, 1931], en Marxists Internet Archive, disponible en: <http://bit.ly/1UfHDjb>.

GRANADOS, ÓSCAR, (2015) «*El lujo seduce a América Latina*», El País, 4 de abril, Madrid, disponible en: <http://bit.ly/1a5WehC>.

GRIMSON, ALEJANDRO, (2015) «*La pregunta por la derrota cultural*» en *Anfibio*, Buenos Aires, disponible en: <http://bit.ly/1NM49x6>.

GUDYNAS, EDUARDO, (2013) «*El nuevo extractivismo de la “izquierda” no lleva al desarrollo*» en Envío, n. 381, Managua, diciembre, disponible en: www.envio.org.ni/articulo/4779.

HÁNDAL, SCHAFIK (1990), «*PCS: 60 Años Jóvenes en la Lucha por la Democracia y el Socialismo*», disponible en www.marxists.org/espanol/handal/1990/001.htm (Texto ubicado y digitalizado por el Centro de Estudios Marxistas «Sarbelio Navarrete» (CEM) y puesto en internet por el Servicio Informativo Ecuménico y Popular (SIEP), mayo de 2009).

HARDT, MICHAEL Y NEGRI, ANTONIO, (2002) *Imperio*, Buenos Aires, Paidos.

HARVEY, DAVID, (2004) «*El nuevo imperialismo. Acumulación por desposesión*» en *Socialist Register*, Buenos Aires, Clacso.

- _____, (2007) Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal.
- HERNÁNDEZ NAVARRO, LUIS, (2012) «El pueblo boliviano vive la mayor revolución social» (entrevista a Álvaro García Linera) en La Jornada, México, DF, 7 de febrero, p. 2, disponible en: <http://bit.ly/1TjX186>.
- HOBBSBAWM, ERIC, (2013) Historia del siglo xx [1994], Buenos Aires, Crítica.
- HOLLOWAY, JOHN, (2002) Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy, Madrid, Ediciones El Viejo Topo.
- INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (2014), «Audencia pública de rendición de cuentas», disponible en: <http://goo.gl/FX81U8>.
- ÍÑIGO CARRERA, NICOLÁS, (1993) «La lucha democrática de la clase obrera en las décadas de 1930 y 1940» en Revista Crítica de Nuestro Tiempo, a. II, n. 6, Buenos Aires, julio-septiembre.
- _____, (1999), «¿Reserva o excluidos? El caso de la población aborigen y criolla en una localidad del Impenetrable chaqueño (1970-1998)» en Anuario IEHS, n. 14, pp. 517-31, disponible en: <http://bit.ly/1TQ8fxc>.
- _____, (2000) La estrategia de la clase obrera [1936], Buenos Aires, PIMSA/La Rosa Blindada.
- _____, (2001), «Qué historia y qué militancia», en Razón y Revolución, n. 7, verano, disponible en: <http://bit.ly/1TXWYCY>.
- _____, (2002) «De la revuelta del hambre a la insurrección espontánea» en América Libre, n. 19, disponible en: <http://bit.ly/1TQ8BE0>.

_____, (2008) «Algunos instrumentos para el análisis de las luchas populares en la llamada historia reciente», en López Maya, M., Iñigo Carrera, N. y Calveiro, P., *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*, Buenos Aires, Clacso.

_____, (2010) «El movimiento orgánico de la estructura de la sociedad argentina (1975-2007)», en López, M.; Figueroa, C. y Rajland, B., (eds.), *Temas y procesos de la historia reciente de América Latina*, Santiago de Chile, Arcis/Clacso.

IÑIGO CARRERA, NICOLÁS; COTARELO, M. C., GÓMEZ, E. Y KINDGARD, F., (1995), «La revuelta argentina 1989-1990» (documento de trabajo n. 4), PIMSA, disponible en: <http://bit.ly/283kUBp>.

ITURIZA LÓPEZ, REINALDO (2011) «Carta abierta a quienes militan en el campo popular y revolucionario» en *Rebelión*, 22 de noviembre, disponible en: <http://bit.ly/283ktXO>.

JÁTIVA, CARLOS, (2015) «Ecuador se negó a pagar la deuda y prosperó» en *Le Monde Diplomatique*, disponible en: <http://bit.ly/1O5xn0H>.

JESSOP, BOB, (2008), *El futuro del Estado capitalista*, Madrid, Catarata.

JOCHNIK, CHRIS Y PAZMIÑO FREIRE, PATRICIO, (2001) *Otras caras de la deuda. Propuestas para la acción*, Caracas, Nueva Sociedad/CDES.

KATZ, CLAUDIO, (2010) «Las tres dimensiones de la crisis» (partes I, II, III, IV y V), video disponible en <http://katz.lahaine.org/?cat=12>.

_____, (2014) «¿Qué es el neo-desarrollismo? (parte I): Una visión crítica. Economía» en Argenpress, 17 de julio, disponible en: <http://bit.ly/1UhntoY>.

KIACHKO, PAUJA, (2002), «La conflictividad social en Argentina de los 90. El caso de las localidades petroleras de Cutral Có y Plaza Huincul, 1996-1997», en Levy, B., (comp.), Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: lecturas políticas, Buenos Aires, Clacso.

_____, (2004), «El proceso de lucha social en Corrientes, marzo a diciembre de 1999. Los "Autoconvocados"» en Documentos y comunicaciones PIMSA 2003, n. 42, Buenos Aires.

_____, (2008), «Las formas de organización emergentes del ciclo de la rebelión popular de diciembre 1993 a junio 2002 en Argentina» en Realidad Económica, n. 234, Buenos Aires, Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, febrero-marzo.

_____, (2015) «La construcción del sujeto histórico-político en Bolivia» (entrevista a García Linera, realizada en Palacio del Quemado, La Paz, 30 de noviembre), inédita.

KLEIN, NAOMI, (2008) La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Buenos Aires, Paidós.

KOHAN, NÉSTOR Y HAGMAN, ITAI, (2008) «Entrevista con Evo Morales: Hemos llegado al gobierno pero no tenemos el poder todavía», 6 de marzo, en La Haine, disponible en: <http://bit.ly/25yx1mo>.

LANDER, EDGARDO, (2007) «El Estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela» en OSAL, a. VIII, n. 22, septiembre, Buenos Aires: Clacso, disponible en: <http://bit.ly/24j45x>

LANZ RODRÍGUEZ, CARLOS, (2012) «Modelo productivo socialista: articulación del saber y el trabajo», en Aporrea, 15 de enero, disponible en: <http://bit.ly/283AJS3>.

LARREA, ANA MARÍA Y OSPINA, PABLO, (2006), «Ecuador: La rebelión de los forajidos, abril de 2005» en Salinas, D., (coord.), *Democratización y tensiones de gobernabilidad en América Latina*, México DF, Ediciones Gernika.

LENIN, VLADIMIR I., (1960) *¿Qué hacer?* [1902], Buenos Aires, Anteo.

_____, (1966), *El Estado y la revolución*, Beijing, Editorial Beijing.

_____, (1973), *El imperialismo, fase superior del capitalismo* [1916], Moscú, Editorial Progreso.

_____, (1975), «Dos tácticas de la socialdemocracia rusa» en *Obras escogidas en doce tomos*, t. III, Moscú, Editorial Progreso.

_____, (1975b), «El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo» [1920] en *Obras escogidas*, Moscú, Editorial Progreso.

_____, (2000) «La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla» [1917], citado en Harnecker, M., «Cómo vio Lenin el socialismo en la URSS» en *Rebelión*, 6 de noviembre, disponible en: <http://bit.ly/1TK9lFw>.

_____, (2000b) «La guerra de guerrillas» [1906] en Marxist Internet Archive, disponible en: <http://bit.ly/24j4Wyd>.

LÓPEZ, HORACIO Y VALLEJO, MARGARITA, (2009) *El ataque de Colombia en territorio ecuatoriano. Detrás de las palabras y los hechos*, Buenos Aires, Ediciones del CCC.

LUCIANO GRUPPI, (1978) *El concepto de hegemonía en Gramsci* [1970], México, Ediciones de Cultura Popular.

LUKIN, TOMÁS, (2015) «Súper ricos, los únicos privilegiados», Página/12, 1 de febrero, disponible en: <http://bit.ly/16nllH>.

MACHADO, EEL, (2008), «MST e neoliberalismo: avanços, limites e contradições da luta pela terra no Brasil», en López Maya, M., Iñigo Carrera, N. y Calveiro, P., *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, disponible en: <http://bit.ly/1TQhqxR>.

MADURO, NICOLÁS, (2013) «Discurso en el Palacio de Miraflores, en el Encuentro con el Consejo de Movimientos Sociales del Gran Polo Patriótico», Caracas, 22 de mayo, disponible en: <http://bit.ly/283EBsA>.

MAIN, ALEXANDER Y BEETON, DAN, (2015) «La agresión de los Estados Unidos en Wikileaks», en Página/12, 8 de octubre, disponible en: <http://bit.ly/25Bg3bW>.

MAMANI RAMÍREZ, PABLO, (2003) «El rugir de la multitud: levantamiento de la ciudad aymara de El Alto y caída del gobierno de Sánchez de Lozada» en OSAL, a. IV, n. 12, septiembre-diciembre, Buenos Aires, Clacso, disponible en: <http://bit.ly/1sq6gDC>.

MANCANO FERNANDES, BERNARDO, (2003) «O MST e os desafios para a realização da reforma agrária no governo Lula» en OSAL, a. IV, n. 11, mayo-agosto, Buenos Aires, CLACSO, disponible en: <http://bit.ly/1XQbVyl>.

MARIÁTEGUI, JOSÉ CARLOS, (2007) «7 ensayos de interpretación de la realidad peruana», Caracas, Biblioteca Ayacucho.

MARX, CARLOS, (1974) *Miseria de la filosofía* [1847], Madrid, Ediciones Jucar.

_____, (1978) «Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel» [1844], en *Manuscritos de París. Escritos de los Anuarios Francoalemanes*, Barcelona, Crítica.

_____, (1989) *El capital* (Cap. XXIV «La acumulación originaria») [1867], México, DF, Siglo XXI Editores.

_____, (1995) *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* [1852], Montevideo, Ediciones de la Comuna.

_____, (2001) «Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política» [1859], en Marxist Internet Archives, disponible en: <http://bit.ly/1zTq7KE>.

_____, (2011) *La cuestión judía*, [1844], disponible en: <http://bit.ly/1TXMfOs>.

MARX, CARLOS Y ENGELS, FEDERICO, (1975) *La ideología alemana* [ORIG], Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos.

MAZZEO, MIGUEL, (2014) «Desde adentro, desde abajo», prólogo a Teruggi, Marco (2015) *Lo que Chávez sembró. Testimonios desde el socialismo comunal*, Buenos Aires, Ed. Sudestada.

MEIKSINS WOOD, ELLEN, (2000) *Democracia contra capitalismo*, México, D.F., Siglo XXI Editores.

_____, (2005) *Empire of Capital*, Londres, Verso.

MÉSZÁROS, ISTVÁN, (2001) *Más allá del capital* [1995], Caracas, Vadell.

MODONESI, MASSIMO, (2015) «¿Fin del ciclo o fin de la hegemonía progresista en América Latina?» en *La Jornada*, 25 de septiembre, disponible en: <http://bit.ly/1TQpXAF>.

MOLDIZ, HUGO, (2012) *América Latina y la tercera ola emancipadora*, México, DF, Ocean Sur.

MORALES, EVO, (2012) «Manifiesto de Isla del Sol. Diez mandatos para enfrentar al capitalismo y construir la cultura de la vida», diciembre, 21 de diciembre, disponible en: <http://bit.ly/1sqcbss>.

_____, (2015) «13 pilares de la Bolivia digna y soberana. Agenda Patriótica del bicentenario 2025», disponible en: <http://bit.ly/1Ufr5ls>.

O'DONNELL, SANTIAGO, (2011) Argenleaks, Buenos Aires, Sudamericana.

_____, (2011b) «Somos pro mercado» en Página/12, Buenos Aires, 21 de febrero, disponible en: <http://bit.ly/1PkYxBc>.

PRIETO, FERNANDO V., (2015) «El Comando Sur amenaza, Venezuela responde» en Notas. Periodismo Popular, 30 de octubre, disponible en: <http://bit.ly/20W5Ujp>.

PSACHAROPOULOS, GEORGE ET AL., (1996) «La pobreza y la distribución de los ingresos en América Latina», Banco Mundial, Documento técnico n. 351S, Washington DC, disponible en: <http://bit.ly/1sqbIXb>.

wPSUV, (2011) «Líneas estratégicas de acción política», en PSUV, 24 de enero, disponible en: <http://bit.ly/1Ze0lfm>.

_____, (2014) «Documento organizativo base para el debate en el III Congreso del PSUV», julio, disponible en: www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2014/06/documento_organizacion.pdf.

QUIJANO, ANÍBAL, (2000) «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», en Lander, E. (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, Buenos Aires, Clacso.

QUISPES, ALINE, (2015) «Hasta 2019 Bolivia invertirá \$US925MM en la industria del litio» en La Razón, 17 de agosto, disponible en: <http://bit.ly/1hivU9>.

RAMONET, IGNACIO, (2013) «Revolución ciudadana» en Rebelión, 5 de marzo, disponible en: <http://bit.ly/25zD1MX>.

GRANOVSKY, MARTÍN, (2013) «El balance está a favor de los neoprogresistas» [entrevista a I. Ramonet] en Página/12, Buenos Aires, 9 de junio, disponible en: <http://bit.ly/1VzTHBl>.

ROITMAN ROSENMAN, MARCOS, (2008) «El desarrollo de la sociología latinoamericana» en Pensar América Latina. El desarrollo de la sociología latinoamericana, Buenos Aires, Clacso, disponible en: <http://bit.ly/1sPTgHx>

ROTUNDO, OSCAR, (2013) «La guerra de cuarta generación» en Rebelión, 5 de octubre, disponible en: <http://bit.ly/1wkuglO>.

RUDÉ, GEORGE, (1981) Revuelta popular y conciencia de clase, Barcelona, Editorial Crítica.

SADER, EMIR Y GENTILI, PABLO, (comps.), (2003) La trama del neoliberalismo [1999], Buenos Aires, Eudeba/Clacso.

SANDÍ, RUBÉN, (2015) «Bolivia pone en marcha la planta separadora de líquidos una de las más grandes de Latinoamérica», disponible en: <http://bit.ly/1ZaVVVu0>.

SANTUCHO, MARIO ROBERTO, (1974) Poder burgués y poder revolucionario, Buenos Aires, Ediciones El Combatiente.

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (SENPLADES), (2012) «100 logros de la Revolución Ciudadana», Quito, disponible en: <http://bit.ly/1QXTikM>.

SEOANE, JOSÉ; TADDEI, EMILIO Y ALGRANATI, CLARA, (2013) Extractivismo, despojo y crisis climática, Buenos Aires, Herramienta/El Colectivo/GEAL.

SERRANO MANCILLA, ALFREDO, (2014) El pensamiento económico de Hugo Chávez, Caracas, Vadell. (Véase reseña en: <http://bit.ly/1TRTha7>)

STEDILE, JOAO PEDRO, (2004), «El MST y las disputas por las alternativas en Brasil» en OSAL, n. 13, Buenos Aires, enero-abril, disponible en: <http://bit.ly/1TM1Bmh>.

SUÁREZ, MEISA (2015) «Una nueva geometría del poder: El Estado Comunal como alternativa para el socialismo en Venezuela», Argentina, Revista del Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Córdoba.

SVAMPA, MARISTELLA, (2015) «Termina la era de las promesas andinas» en Revista N, 25 de agosto, disponible en: <http://clar.in/1Pylwmj>.

THERBORN, GORAN, (2003) «La crisis y el futuro del capitalismo» en Sader, E. y Gentili, P., (comps.), (2003) La trama del neoliberalismo [1999], Buenos Aires, Eudeba, Clacso.

TOURAIN, ALAIN, (2000) «La centroderecha es la única opción para América Latina» en Diario Clarín, Buenos Aires, 14 de mayo, disponible en: <http://clar.in/20VZtN1>.

TOUSSAINT, ERIC, (2002) La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos, San Sebastián, Gakoa.

TOUSSAINT, ERIC Y ZACHARIE, ARNAUD, (2004) Salir de la crisis, deuda y ajuste, Buenos Aires, Ediciones La Fragua.

VIAÑA, JORGE (2006), «Crisis estatal y democracia en Bolivia 2000- 2006: un estudio de fondo» en Rebelión, 21 de septiembre, disponible en www.rebelion.org/noticias/2006/9/37843.pdf.

VICEPRESIDENCIA DE BOLIVIA, (2015) «El vicepresidente habló del “socialismo comunitario del vivir bien” en el acto de posesión presidencial», La Paz, Vicepresidencia, 22 de enero, disponible en: <http://bit.ly/1TVYzQ1>.

_____, (2015b) «García Linera recomendó cinco pasos para contrarrestar la vulnerabilidad de los procesos progresistas», 30 de octubre, disponible en: <http://bit.ly/1Y5gtkY>.

WALLERSTEIN, INMANUEL, (1988) *El capitalismo histórico*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

ZAVALET MERCADO, RENÉ (1983). «Cuatro conceptos de democracia», La Paz, Juventud.

ZIBECHI, RAÚL, (2003) *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento*, La Plata, Edición Letra Libre.

_____, (2015) «Se acelera el fin del ciclo progresista» en *La Jornada*, México, DF, 30 de octubre, disponible en: <http://bit.ly/1U0sMxm>.

_____, (2015b), «Hacer balance del progresismo» en *Rebelión*, 6 de agosto, disponible en: <http://bit.ly/20W0hBv>.

Publicaciones periódicas y sitios web

Econoticiasbolivia.com, (2003) «Autocrítica: Los yerros de la rebelión del altiplano» en *Rebelión*, 20 de octubre, disponible en <http://bit.ly/1O6PTpC>.

BBC Mundo, (2008) «El regreso de la Cuarta Flota», 8 de mayo, disponible en: <http://bbc.in/1Zh4ZcO>.

La Nación, (2008) «Ecuador buscará no pagar la deuda ilegítima», 20 de noviembre, Buenos Aires, disponible en <http://bit.ly/1sr2GcB>.

La Razón, (2011) «El Gobierno acusa a EEUU de injerencia y violar la convención de Viena de 1961», 23 de agosto, La Paz, disponible en: <http://goo.gl/w0dDji>

El Economista (2013), «Hugo Chávez expropió casi 1,200 empresas en diez años», 7 de marzo de 2013, disponible en: <http://goo.gl/JSZ5uC>.

El Periódico de la Energía, (2015) «Morales y Cartes inauguran la planta de gas de Gran Chaco construida por Técnicas Reunidas», 25 de agosto, disponible en: <http://bit.ly/1t4Dvxb>.

La Patria, (2013) «COB desiste de tener partido propio y decide alianza con Evo Morales», 24 de noviembre, La Paz, disponible en: <http://bit.ly/1TM4weV>.

Los Tiempos, (2011) «El presidente acusa a indígenas del Tipnis de comunicarse con la embajada», 21 de agosto, disponible en: <http://goo.gl/lXRhVx>.

Telesur, (2015) «Maduro lideró concentración en defensa de la soberanía», 28 de febrero, disponible en <http://bit.ly/286lwF9>.

Telesur, (2015b) «Latinoamérica sigue siendo el blanco de los golpes blandos», 22 de agosto, disponible en <http://bit.ly/286lwF9>

Youtube, (2003) «Bombardeo sobre Bagdad» [21 de marzo de 2003], 9 de septiembre de 2012, disponible en: <https://youtu.be/4pigrhyMf1g>.

Documentos

«Convocatoria al II Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas por Trabajadores», Venezuela, junio de 2009.

«Informe Tipnis», (2012) disponible en <http://bit.ly/286lwF9>

«Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien», Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia, 15 de octubre de 2012, La Paz, disponible en: <http://bit.ly/1U0zxPV>.

«Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019», Asamblea Nacional de Venezuela, 11 de junio de 2012, Caracas, disponible en: <http://bit.ly/1ii5WKR>.

«Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017», Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), República de Ecuador, disponible en www.buenvivir.gob.ec.

Este libro de Katu Arkonada y Paula Klachko aborda de manera sistemática el examen de un fascinante período de la historia reciente de la región. Más concretamente, el que se abre con el ascenso de Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela y que con sus avatares —tensiones, avances y estancamientos— llega hasta nuestros días. Se trata, por lo tanto, de una obra que examina la génesis y el desenvolvimiento de un proceso histórico único, tal y como se manifestara en cada uno de los países que protagonizan el llamado «ciclo progresista» latinoamericano. Una obra de síntesis, necesaria y por eso largamente esperada por la militancia social y por el mundo académico, y en la cual se anudan los rasgos definitorios de este luminoso fragmento de nuestra historia. Etapa en la cual se produjeron significativas transformaciones en el mapa sociopolítico regional y en las relaciones entre nuestros países y la metrópolis imperial. Pasar revista a esa experiencia, analizar sus logros y sus asignaturas pendientes; evaluar sus aciertos y sus errores y examinar sus legados es la tarea que se han propuesto los autores en este trabajo, todo ello precedido por una sugerente revisión de la teoría marxista de la reforma y la revolución.

ATILIO BORÓN

Katu Arkonada (Barakaldo, 1978)

Polítólogo vasco. Ha coordinado las publicaciones *Transiciones hacia el Vivir bien* y *Un Estado muchos pueblos, la construcción de la plurinacionalidad en Bolivia y Ecuador*. Colabora habitualmente en medios de comunicación como Gara, Le Monde Diplomatique o Rebelión, además de escribir el blog "Trinchera de Ideas" en Naiz.info. Es miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.

Paula Klachko (Argentina, 1972)

Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de José C. Paz y del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es autora de la publicación: La conflictividad social en la Argentina de los 90: el caso de las localidades petroleras de Cutral Có y Plaza Huincul (1996-1997), (Clacso Argentina).



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación e Información